

Editorial

Este doceavo número del *OSAL*, que se propone abordar la realidad social latinoamericana del último cuatrimestre de 2003, comienza con un primer dossier dedicado a la rebelión indígena y popular que de septiembre a octubre recorrió Bolivia bajo el nombre de la "Guerra del Gas" y concluye con el referido a la experiencia zapatista al cumplirse, el primer día de 2004, diez años de su levantamiento. Entre uno y otro dossier el lector podrá encontrar una cronología que recoge los principales conflictos sociales y hechos políticos acontecidos en esta última parte del año en diecinueve países latinoamericanos y diferentes artículos que reflexionan sobre algunos de los más significativos de estos procesos en Uruguay, Colombia, Panamá y Haití.

Abre el dossier dedicado a las jornadas de octubre en Bolivia la contribución de Pablo Mamani Ramirez que presenta una crónica del proceso de movilizaciones, paros cívicos y salvaje represión que culminó con la revuelta de mediados de octubre y la renuncia del presidente Sánchez

de Lozada, particularmente centrada en la experiencia social vivida en la ciudad de El Alto. A partir del señalamiento del carácter de levantamiento indígena-popular que le cabe al proceso de movilización y lucha que atraviesa a esa ciudad, el autor analiza la forma en que los mecanismos de construcción social de la vida cotidiana y el entramado de sentidos urbano-indígenas sirven de referencia a la emergencia de la movilización social.

Por otra parte, Carlos Villegas Quiroga aborda con detalle la política de hidrocarburos llevada adelante particularmente por Lozada en su primer mandato (1993-1997) reseñando las características que asumió la privatización de dichos recursos naturales (que supuso la transferencia de su propiedad a manos de transnacionales en un proceso similar al vivido en Argentina y Perú) y las consecuencias que trajeron aparejadas estas políticas. A continuación Raúl Prada Alcoreza nos presenta una reflexión sobre los perfiles que asume la constitución de los movimientos sociales y populares en Bolivia, en el intenso período que se inicia en la "Guerra del Agua" (Cochabamba, abril de 2000) y alcanza su última expresión en la bautizada "Guerra del Gas" de octubre pasado. En este sentido, el autor concluye señalando que en las jornadas de octubre emerge la formación social abigarrada de la multitud, con su diversidad de rostros y sus prácticas asambleísticas, que en su construcción articula la memoria mesiánica y la política.

El texto de Silvia Escobar de Pabón se concentra en el análisis de las consecuencias económico-sociales –particularmente sobre los productores campesinos del Altiplano y la conformación de la ciudad de El Alto, epicentro de las protestas de octubre– que tuvo la aplicación del recetario liberal en Bolivia iniciado en 1985. Desde esta mirada Escobar nos presenta el conjunto y multiplicidad de demandas sociales irresueltas y pendientes que arroja el balance de la implementación de las recetas neoliberales en el país andino.

Finalmente, la contribución de Pablo Stefanoni analiza, a partir del surgimiento del movimiento cocalero, el proceso que conllevó a la constitución del llamado Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) o MAS (Movimiento al Socialismo). En su reflexión, Stefanoni resalta las características que acompañan el desarrollo de esta construcción político-social, su capacidad de agregación de un sujeto popular diverso y la tensión que la recorre entre el nacionalismo plebeyo de origen y la desactivación del antagonismo y homogeneización que podría suponer su inscripción estatal. Este dossier se acompaña de tres declaraciones elaboradas por distintas coaliciones y organizaciones sociales y políticas bolivianas a lo largo de las jornadas de octubre. Su lectura puede complementarse con aquel publicado en el número 10 de esta revista dedicado a la "revuelta de febrero" (2003). Estos artículos, así como otros textos referidos a las jornadas de octubre, se encuentran disponibles en <<http://osal.clacso.org> >

Por otra parte, el décimo aniversario de su bautismo público encuentra al movimiento zapatista poniendo en marcha las llamadas Juntas del Buen Gobierno y los Caracoles, ambos nacidos en agosto, sobre la experiencia de los municipios autónomos y los

Aguascalientes, ante un hostigamiento militar que parece incrementarse. En relación a ello incluimos en el dossier que cierra esta publicación tres contribuciones que, desde distintas perspectivas, nos presentan una mirada compleja de las riquezas, desafíos y debates que estimulan el camino iniciado por los indígenas chiapanecos.

El artículo de Ana Esther Ceceña recorre la historia del zapatismo desde sus inicios hace veinte años en las profundidades de la Selva Lacandona, la aparición pública con el levantamiento armado hace diez, hasta la fundación de sus instituciones de gobierno en 2003. En base a estos señalamientos Ceceña profundiza en los nuevos retos que afronta hoy este movimiento. La autora se interroga sobre el desafío que afronta el ejercicio de la autonomía frente a un poder cada vez más violento y sobre la potencialidad de la autogestión fuera de la territorialidad de la comunidad indígena. Concluye señalando la decisiva importancia del “mandar obedeciendo” en la experimentación concreta de una nueva cultura política que no reproduzca las relaciones de poder y que permita la construcción cotidiana de un mundo nuevo.

A continuación Armando Bartra, al tiempo que valoriza la experiencia de autonomía forjada por el zapatismo, desarrolla una visión crítica respecto de lo que entiende como la renuncia a las vías institucionales que éstos habrían formulado luego de la sanción, por los tres poderes del Estado, de una legislación que confronta con las mínimas demandas formuladas por los movimientos indígenas. En el análisis de los movimientos y protestas sociales desplegados en México a lo largo de 2003 y en su capacidad de detener, en la resolución parlamentaria, los proyectos privatizadores y de ajuste neoliberal impulsados por Fox, el autor enfatiza, en polémica con el zapatismo, la necesidad y posibilidad de que las resistencias tengan lugar desde abajo pero también desde arriba (desde fuera pero también desde dentro) de las instituciones del Estado.

Cierra el dossier la contribución de Álvaro García Linera que reflexiona sobre la significación y los aportes que se desprenden de la experiencia del movimiento zapatista destacando, entre otras cuestiones, la proyección internacional que éste dio al poder generalizante de la “indianitud” así como la reinención que hace de los modos de colaboración descentralizada de los movimientos indígenas con el resto de los movimientos y activistas sociales. El autor concluye subrayando que la idea zapatista de cambiar el mundo sin tomar el poder al tiempo que renueva los horizontes emancipatorios en términos de la reapropiación social de las funciones estatales, revela también los límites que tendría una rebelión india en medio de una sociedad mayoritariamente mestiza. Como contribución al debate acompañamos, en la sección de documentos, fragmentos de las segunda y quinta partes de la llamada “treceava estela” que, en la pluma del Subcomandante Marcos, presenta la voz zapatista explicando el nacimiento de las Juntas del Buen Gobierno y los Caracoles. Sobre ello puede consultarse también el artículo de Pablo González Casanova publicado en el OSAL N° 11.

En la parte central de la revista, el artículo que introduce a la sección Cronología del conflicto, presenta un panorama de la conflictividad social acontecida en la región analizando la significación que le cabe al proceso social vivido en Bolivia y su proyección en el continente –particularmente en el área andina–, la evolución de las políticas de “ajuste neoliberal” y las resistencias que frente a ella se desplegaron en el último tercio de 2003 y las características que asumieron la política norteamericana y los procesos de liberalización comercial, intervención y criminalización de los movimientos sociales. A continuación, inicia la lectura de los hechos de conflicto social que recorren los países del cono sur el artículo de Raúl Zibechi que nos presenta un análisis de las principales luchas sociales desplegadas recientemente en Uruguay. El autor concluye en un balance sobre los logros obtenidos por la movilización sindical señalando los desafíos que a estas organizaciones se le plantean hacia el futuro. En el caso de la región andina acompañamos un texto de Alexander Reina que analiza el triunfo del movimiento abstencionista en el referéndum convocado por el gobierno de Álvaro Uribe en Colombia como un golpe al estilo bonapartista presidencial y señala los retos que plantea el posterior triunfo electoral del Polo Democrático Independiente (uno de los impulsores de la abstención) en Bogotá y Santander.

Por último, para la región norte de Latinoamérica, incluimos dos artículos. En el primero de ellos, Marco Gandásegui analiza con detenimiento el prolongado conflicto que recorre a la sociedad panameña frente a los intentos gubernamentales de privatizar la Caja del Seguro Social y que, convocando la participación de un amplio arco social, culmina en las huelgas generales de finales de septiembre y octubre. Finalmente, con motivo de cumplirse el bicentenario de la declaración independentista de Haití –la primera de nuestro continente y particularmente relevante por su contenido antiesclavista– incluimos la contribución realizada por Suzy Castor que analiza este acontecimiento, reflexionando sobre el proceso político y social que signó la historia de este país caribeño a lo largo de los dos últimos siglos. Doblemente oportuna resulta la publicación de este texto en momentos que la sociedad haitiana atraviesa una profunda crisis social y política, signada por un nuevo ciclo de movilización protagonizado por amplios sectores sociales que, frente a la creciente y salvaje represión desatada por el gobierno, reclaman en las calles la renuncia del presidente Aristide y el cambio de la política económica neoliberal seguida por su gestión.

Con este doceavo número, la revista del OSAL y el programa homónimo del Consejo, cumplen su cuarto año de labor. En todos los sentidos la tarea realizada ha sido posible por el trabajo, la colaboración y el interés de tant@s a quienes agradecemos. Renovamos, junto a tod@s ell@s, nuestro esfuerzo en promover y contribuir a los estudios y reflexión social sobre el conflicto y los movimientos que lo protagonizan, desde la perspectiva de un necesario intercambio entre investigadores y protagonistas de estas luchas sociales y con la aspiración de contribuir a los debates sobre las alternativas de cambio planteadas en nuestras sociedades.

Análisis de casos

La Guerra del Gas en Bolivia

Pablo Mamani Ramírez **El rugir de la multitud:
levantamiento de la ciudad aymara
de El Alto y caída del gobierno
de Sánchez de Lozada**

Carlos Villegas Quiroga **Rebelión popular y los derechos
de propiedad de los hidrocarburos**

Raúl Prada Alcoreza **Perfiles del movimiento social
contemporáneo
El conflicto social y político en Bolivia**

Silvia Escobar de Pabón **Ajuste y liberalización,
las causas del conflicto social**

Pablo Stefanoni **MAS-IPSP: la emergencia
del nacionalismo plebeyo**



El rugir de la multitud¹: levantamiento de la ciudad aymara de El Alto y caída del gobierno de Sánchez de Lozada²

Pablo Mamani Ramírez*

* *Sociólogo
indígena aymara.
Candidato a Maestro
en Ciencias Sociales,
mención
en estudios étnicos
por la Facultad
Latinoamericana
de Ciencias Sociales
(FLACSO), Ecuador.*

Historia y redes sociales en la ciudad de El Alto

El Alto es parte importante de la historia de las luchas sociales y políticas de los pueblos indígenas, tanto en la colonia como en la república. En 1781 Tupaj Katari-Bartulina Sisa habían construido allí uno de los “cuarteles indígenas” para cercar La Paz (Del Valle de Siles, 1990). En 1899 los aymaras contribuyeron en la guerra federal en la conformación de una muralla humana para hacer frente al posible ingreso de las tropas constitucionales de Fernández Alonso (Condarco, 1983). En 1952 “se convierte en el escenario político para confirmar el triunfo de la Revolución Nacional” (Fernández, 1993). El espacio-territorio de la ciudad de El Alto resume así una larga historia de luchas sociales indígenas, y ahora se ha convertido nuevamente en parte de esa historia. Es una de las más importantes ciudades con características indígenas-populares aymara del país, por su constitución demográfica, social, cultural, política, lingüística, y urbanísti-

ca. En este escenario se ha empezado a tejer una nueva configuración sociopolítica desde los sentidos de una identidad indígena urbana, agigantada por la agresión municipal y estatal como la que se mostró en las movilizaciones del 15 y 16 de septiembre contra los formularios maya y paya. En esos días se observó un desdoblamiento de tejidos sociales y culturales para inmovilizar la ciudad. Y entre la primera y segunda semana de octubre este hecho se masificó. Barrio por barrio, zona por zona y distrito por distrito fue recorrido por un sentimiento de autoafirmación “propia” sobre la constitución urbana indígena de esta ciudad, basado en la construcción social de la vida cotidiana y fundamentado en amplias relaciones de parentesco, compadrazgos dispersos en el espacio urbano, amistades interbarriales (entre jóvenes y mayores), y relaciones más o menos comunes de procedencia desde los ayllus y comunidades de la gran región de los Andes. Esta construcción social se manifiesta en las acciones colectivas beligerantes, en el bloqueo de las avenidas, la toma de las calles, las multitudinarias manifestaciones, y en los discursos politizados de sus dirigentes en un proceso que la convierte en fuerza alterna al estado. Por eso el lunes 13 de octubre, después de sufrir el domingo 12 una violenta masacre por parte de las fuerzas del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada con más de 25 muertos, El Alto se moviliza de manera gigantesca hacia la ciudad de La Paz para exigir la renuncia del presidente de la república. El propósito de este artículo es mostrar el levantamiento indígena-popular de la ciudad de El Alto en contra de la venta de gas por Chile y por la renuncia de Sánchez de Lozada, desde el análisis de las identidades indígenas-populares urbanas y sus interrelaciones barriales.

Tramado cultural y levantamiento de la ciudad de El Alto

La ciudad de El Alto es uno de los centros urbanos más poblados del país. Representa al 28% del total del departamento de La Paz (INE, 2002). En el año 2001, el 81,29% de esta población se ha *autoidentificado* como indígenas, lo que señala que esta ciudad es indígena-popular (y fundamentalmente aymara) y que sufre una pobreza estructural (el departamento de La Paz tiene un 50,9% de pobres) (INE, 2002), careciendo de las necesidades más básicas como agua, salud, educación y vivienda. Ahora, ¿cómo se construye el levantamiento indígena-popular? ¿Qué tipo de estrategias se tejen y cómo se construyen las barricadas humanas, de adoquines, vidrios, piedras con quema de llantas y alambres de púa? ¿Qué significa enfrentarse a las fuerzas del estado? ¿Qué es un levantamiento indígena-popular?

El antecedente inmediato para entender el actual levantamiento de la ciudad de El Alto, es el paro cívico exitoso realizado el jueves 2 de octubre en contra de la masacre de Warisata. Después de esta experiencia o repertorio de acción se determina un nuevo paro cívico para el miércoles 8. En efecto, ese día, desde las primeras horas de la maña-

na, se observa una importante movilización desde los barrios alejados y cercanos a la ceja de El Alto para tomar las avenidas, sus plazas, barrios y así inmovilizar la ciudad, paralizándose las actividades en el comercio, la banca y el transporte. Se tejen comentarios en los distintos espacios de la vida social cotidiana urbana sobre lo que significa el nuevo paro cívico, y se comenta en las calles y en los lugares donde se realizan gigantesco bloqueos sobre la no venta del gas. Así, poco a poco, se amplía y se refuerza el tejido social basado en agrios comentarios contra el gobierno y, entre bromas y risas, se hace más sociable el levantamiento y se paraliza la ciudad por tiempo indefinido. Además, se comenta que el gobierno de Sánchez de Lozada “es un gobierno hambreador”, y que éste debe dejar el palacio. El primer día trágico de este levantamiento social es el jueves 9. En la mañana, en Ventilla, varias comunidades sufren una violenta agresión de parte de policías y militares. Hay dos heridos de gravedad. Senkata y Ventilla se convierten de pronto en verdaderos campos de batalla de piedras, gases y fusiles, en uno de los primeros actos de masacre gubernamental. Los vecinos de esta zona y de otras, gritan a viva voz: “No queremos ver al gringo vendepatria” (*El Alteño*, 2003). Así dentro de estas relaciones se gesta la toma directa de los barrios para preparar trincheras y fogatas. En algunas zonas se pone en escena la wiphala multicuadrada como señal de un posicionamiento político e identitario indígena, y hay intercambio de informaciones sobre lo que pasa entre una zona y otra a través de la gente que camina o va en bicicleta. En esa relación muchos de los que protagonizan los bloqueos, pese a no conocerse, construyen, al calor y circunstancia de las fogatas, amistades, solidaridades y hermandades significativas para crear un mayor peso en las acciones colectivas de la protesta. Las mujeres de pollera participan cargadas de sus hijos/as a través del habla en aymara o castellano y se sienten parte de una misma realidad. Y poco a poco se amplía un tramado de sentidos de pertenencia urbana de una ciudad indígena postergada desde mucho tiempo atrás.

El jueves 9, en Ventilla, hay nuevamente una violenta represión de las fuerzas del estado. Mueren un minero y un vecino. Los mineros habían arribado el día anterior procedentes de Huanuni. Y en ese momento se juntan dos fuerzas: los mineros y los indígenas urbanos y rurales del lugar. Es impresionante observar que ante la noticia de estas muertes se produce una movilización gigantesca de las zonas del sector sur de la ciudad. El camino a Oruro es tomado por los vecinos y la Avenida 6 de Marzo se ha convertido en otro escenario de guerra. Los militares y policías tienen que abrirse paso a balazos y gases lacrimógenos. En el cruce de la Avenida Bolivia se produce una avalancha humana que proviene de la zona Santiago II (barrio minero) y otros barrios aledaños para controlar la Avenida 6 de Marzo o camino a Oruro. Para el día siguiente El Alto es una ciudad totalmente tomada por los alteños, pese a la militarización y un estado de sitio de facto. Durante esos dos días se recolecta agua de las casas de la zona o Distrito II para ser enviada hacia Ventilla donde se encuentran los mineros e indígenas. Al mismo

tiempo se recolectan alimentos, particularmente en Santiago II, como parte de una efectiva forma de ampliar sentidos de solidaridad. En Kenko y barrios del lugar también hay una preocupación por enviar agua y alimentos hacia Ventilla.

Así se produce una toma directa de las calles y avenidas de la ciudad del El Alto. Hay trincheras construidas con adobe, piedras, latas y vidrios, y se observan en el paisaje de la ciudad humos negros por la quema de llantas viejas y desperdicios o basura de las calles, como si se hubiera producido un bombardeo. En todos estos espacios, antes del domingo 12, no hay policía ni ningún otro poder del estado, desplegándose una autoorganización total con acciones colectivas autónomas. Es interesante observar además cómo mujeres, niños y hombres adultos mantienen un control incluso de las pequeñas calles, aparentemente sin mucha importancia. Con esto se quiere demostrar la toma directa del territorio urbano al que pertenecen los alteños/as. Asimismo, en las noches hay muchos preparativos como para hacer frente a un eventual ingreso de las fuerzas represivas dentro de los territorios. Hasta altas horas de la noche y la madrugada del viernes 10 se mantiene este control. En ese sentido, hay una articulación sociopolítica generalizada que se manifiesta en acciones de toma directa de las calles, avenidas y plazas. Nuevamente se observa flamear las wiphalas y la bandera de Bolivia como señal de rechazo de lo que la gente ha empezado a llamar "la instauración de un gobierno chileno en La Paz". La gente se ha sumado decididamente a la movilización para tomar sus barrios y así tejer y mantener un control y autoorganización propias. Es una movilización densa que articula estrategias, sentidos y dignidades colectivas, que se manifiestan en acciones coordinadas y por turnos al interior de las familias, zonas y distritos e incluso entre las diversas organizaciones existentes en el territorio urbano de esta ciudad.

Otro de los días aún más trágicos es el sábado 11. Durante la noche en todo el sector de Senkata y avenida Bolivia hay violentos enfrentamientos entre vecinos y policías-militares y, pasado este momento, se produce una sangrienta represión a los vecinos de Santiago II, donde muere Felix Mollirecona, un niño de cinco años. Hay gran cantidad de heridos, y las ambulancias no llegan: las carretillas y bicicletas se han convertidos en ambulancias improvisadas. Incluso se había cortado la luz en toda la Avenida 6 de Marzo. Como reacción ante la agresión policial-militar los vecinos del lugar levantan la capa asfáltica para cavar zanjas de 80 cm. Hay una construcción de trincheras de guerra, que la gente ha empezado a llamar "guerra civil". Al norte de la ciudad de El Alto, en Ballivián, se producen nuevas y violentas represiones militares. El Regimiento 5 de policía de dicha zona ha sido rodeado. Allí muere otro alteño. Es la antesala de la masacre.

El domingo 12 de octubre se produce una masacre incalificable; han muerto 25 civiles y 1 soldado. En Senkata³, el gobierno, para trasladar combustible hacia la ciudad de La Paz, comete el primer acto de muerte donde pierden la vida tres personas por balas de gue-

“Es una movilización densa que articula estrategias, sentidos y dignidades colectivas, que se manifiestan en acciones coordinadas y por turnos al interior de las familias, zonas y distritos e incluso entre las diversas organizaciones existentes en el territorio urbano de esta ciudad”

rra. El hospital Corazón de Jesús se llena de heridos. La región norte de la ciudad es la que más sufre, donde se produce la mayor cantidad de muertes (*La Razón*, 2003). La decisión presidencial de oficializar la militarización de El Alto generó “la jornada más sangrienta en la historia de la joven ciudad y una de las [más] cruentas del período democrático” (*La Razón*, 2003). Ante tal magnitud de los acontecimientos se escucha y observa en las radioemisoras y en algunos canales de televisión, una cantidad impresionante de heridos y pedidos de auxilio reclamando atención médica inmediata. Se ha disparado indiscriminadamente contra la humanidad de los manifestantes. Las calles y avenidas se tiñen de sangre humana indígena-popular. Incluso han caído niños que no participaban en las movilizaciones. Hubo una arremetida militar indescriptible en las propias casas. Se ha actuado como contra un ejército regular cuando se trataba de una población desarmada. Al día siguiente se escuchan denuncias sobre que el ejército procedió como en las dictaduras militares, sin respetar a la población indefensa y fundamentalmente a los niños, ancianos y enfermos. Es una verdadera carnicería humana. Las calles, avenidas y plaza se llenan de cadáveres y de un dolor colectivo que no es fácil de expresar. Se generaliza una indignación total que se irradia rápidamente hacia otras ciudades vecinas de El Alto, como La Paz.

Hay un bullicio o rugir de la multitud (Steinberg, 1999) que reconstruye sentidos de un levantamiento general como un hecho inédito en la historia urbana de la ciudad. Se intensifican las construcciones de barricadas de fuego y adoquines en distintos lugares. Se han cavado nuevas zanjas para evitar todo movimiento de los militares-policiales motorizados, la única manera de frenar su ingreso. Se construyen campos “minados” para inmovilizar la represión y el ingreso de delincuentes, que también se aprovechan de la situación. Las juntas vecinales de cada zona se han convertido en microgobiernos territoriales, toda acción se coordina a través de estas instancias. A este conjunto de hechos lo llamamos el levantamiento de la ciudad de El Alto porque es una acción colectiva pare-



cida a los levantamientos de Achakachi y Omasuyus de 2000 y 2001, y que se enfrenta al poder establecido (pidiendo la renuncia del presidente de la república y la no exportación del gas por puertos chilenos) basándose en una variada construcción de barricadas, y mediante las wiphalas multicuadradas con la que teje y refuerza sentidos de pertenencia territorial e identitaria indígena y donde se producen liderazgos locales y gobiernos barriales. En el mismo sentido, se amplían las redes sociales y las solidaridades interbarriales y organizacionales. Es un hecho sin precedentes en la ciudad que de algún modo refleja su eslogan: “El Alto de pie, nunca de rodillas”. Esta construcción urbana de las identidades indígenas-populares se manifiesta también en la ciudad de La Paz el lunes 13. Ese día, nuevamente, se produce una sangrienta jornada en el marco del levantamiento social; según el periódico *El Diario* (2003) existen otros 25 muertos –incluso serían más– en distintas partes de El Alto y La Paz.

En este día una multitudinaria marcha baja a la ciudad de La Paz para exigir la renuncia del presidente Sánchez de Lozada. Y los barrios marginales del sur y centro de La Paz se convierten en nuevos escenario de violencia junto a la zona norte de la ciudad de El Alto. La represión se concentra particularmente en los barrios indígenas y no indígenas de Garita de Lima, plaza Eguino, San Francisco, Av. 16 de Julio y los alrededores del palacio de gobierno. En la masacre, Bolivia ha desnudado una vez más las relaciones de dominación étnicas. Las zonas residenciales se han hecho visibles socialmente como los archipiélagos físicos del poder dominante, siendo fuertemente custodiadas por efectivos militares y policiales. En uno de los medios de comunicación se da a conocer cómo los q’aras de la zona sur se preparan para un posible ingreso de los manifestantes a estas zonas (*La Prensa*, 2003). Hay una especie de psicosis social de los blanco-mestizos, quienes perciben que todo indígena y manifestante es destructor de la propiedad privada. Un imaginario que separa el mundo indígena-popular del mundo social de las élites blanco-mestizas y que

refuerza las fronteras étnicas y territoriales al interior de una misma ciudad. En este contexto, Sánchez de Lozada se dirige a la nación con un discurso televisado, y manifiesta: “yo no voy renunciar”. En el discurso del presidente se nota una abierta provocación a la multitud que exige su dimisión, y aparece como una declaración de guerra y una autorización pública de la masacre indígena-popular. Así nuevamente se visibilizan socialmente las fronteras que separan el estado de la sociedad indígena-popular, porque el discurso presidencial más que alivianar el conflicto, enardece aún más los ánimos. La gente en las calles grita: “es intolerable ver y escuchar a Sánchez de Lozada, y debe renunciar”. El gobierno en esas condiciones ha empezado a perder el control político y social, y sólo detenta el monopolio de la violencia física. A las protestas se suman otras ciudades como Oruro, Cochabamba, Sucre, Potosí y Santa Cruz. El vicepresidente de la república, Carlos Mesa, expresa su desacuerdo con las acciones de Lozada, infligiendo un duro golpe al poder político del presidente. El ministro de Economía renuncia, y el gobierno, poco a poco, se quiebra.

Mientras, en la ciudad de El Alto se habla de la necesidad de declarar a todos los fallecidos como “héroes indígena-popular”. Con lo que se han reforcado los sentidos de identidad indígena urbana aymara tanto en El Alto como en las laderas de la ciudad de La Paz. Se tejen profundamente sentidos de hermandad étnica porque muchos de los soldados que han sido trasladados de otras regiones (Tarija, Beni, Santa Cruz, etc.) han insultado a los manifestantes diciéndoles “indios de mierda”. En las radios se escuchan testimonios de la brutal actuación de los militares, lo que ha sembrado un antecedente social bastante peligroso porque se percibe que la población andina ha sido masacrada por soldados “cambas”.

Y el martes 14, la ciudad de El Alto vive una tensa calma y se entierra a los caídos en distintas zonas. Hay un dolor colectivo que enraíza profundamente la vida social urbana y rural de las regiones indígenas de Bolivia. El Alto se encuentra embanderada y la wiphala indígena con crespón negro a media asta es señal de luto e indignación. Muchos niños/niñas y mujeres han quedado sin padres y esposos. Hay más de 400 heridos. Son momentos de rabia e impotencia colectiva. La ciudad es un verdadero campo de redefinición y fortalecimiento sociopolítico indígena-popular. Hay llamamientos en las radioemisoras para que los aymaras de todas partes estén unidos y, así, poder luchar juntos. Dentro de este difícil escenario se tumban cuatro de las gigantes pasarelas construidas sobre la avenida Juan Pablo II y Río Seco, donde los militares y policías se habían apostado para controlar (y disipar) estratégicamente a los manifestantes, reconstruyendo estos lugares como una especie de panóptico para castigar los cuerpos que se movilizan en contra del poder establecido. El Alto es un territorio “minado” o de guerra porque hasta el miércoles 15 se ha extendido el cavado de zanjas, barricadas y vigilia organizadas por turnos, por zonas y cuadra en cuadra. Se han movilizad las mismas estructuras de la vida social. Muchos aportan un poco de dinero para comprar petardos, otros maderas, viejas llantas, palas y picos. El

miércoles 15, después de la tensa calma del día anterior, nuevamente se reinician los preparativos en la ciudad de El Alto para bajar a La Paz. Los marchistas coccaleros de los yungas se dirigen hacia Villa Fátima y de allí hacia el centro de La Paz. Asimismo, se anuncia la llegada de miles de indígenas desde la aguerida región de Omasuyus, que desde hace un mes mantienen un bloqueo indefinido en el altiplano y los valles norte de La Paz. Por su parte, hay otra columna de mineros cooperativistas que vienen desde Oruro y que fueron violentamente reprimidos en Patacamaya, donde mueren tres (*El Diario*, 2003). También se anuncia la llegada de 14 mil indígenas del altiplano central, particularmente de Aroma. La ciudad de La Paz y las zonas residenciales a las que apuntan las movilizaciones se encuentran cercadas. Es un cerco de murallas humanas y piedras que evoca las memorias y miedos de aquel otro de Tupaj Katari-Bartulina Sisa de 1781.

Al interior de la ciudad de El Alto hay nuevos preparativos para una movilización hacia La Paz y exigir la renuncia inmediata de Sánchez de Lozada. Incluso en algunos de los sectores se pide la cabeza del presidente. Hay una decisión tomada socialmente: Sánchez de Lozada “debe renunciar”. Ante esto, los dirigentes de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, el presidente de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto, y el representante de los Gremialistas no están autorizados para dialogar con el gobierno. Este es un pedido generalizado. Así hay varias fuerzas que acechan al gobierno y a las zonas residenciales de La Paz: los mineros, gremialistas, indígenas o “campesinos”, los maestros, intelectuales y fundamentalmente los aymaras alteños. El gobierno de la coalición emite un manifiesto basado en cuatro puntos: referéndum consultivo por departamento para la exportación de gas, revisión de la ley de hidrocarburos, asamblea constituyente y preservación de la democracia. El manifiesto no es bien recibido. Todos coinciden en afirmar que “es muy tarde”. Una vez más el gobierno se equivoca. Al parecer no conoce la forma y sentido de la rebelión que tienen las poblaciones indígenas aymara o qhiswa de la gran región andina; cuando se toma una decisión colectiva, no se retrocede.

En el interior del país, en Cochabamba y el Chapare, se incrementan los bloqueos de caminos. En Oruro y Potosí hay una gran inquietud y movilizaciones. Se informa de una creciente escasez de productos alimenticios en estas ciudades y aumentan los pedidos de renuncia del presidente de la república. El jueves 16, después de nueve días de paro cívico indefinido de El Alto y cuatro en la ciudad de La Paz, se produce una nueva y multitudinaria movilización que baja desde El Alto hacia la hoyada. Desde tempranas horas de la mañana, desde distintos barrios y distritos se observa una agitada movilización con preparativos de pancartas donde expresan: “Goni asesino”, “el gas no se vende”, “renuncia de Goni”, “Goni carnicero”, etc. Las columnas de marchistas salen desde dos grandes regiones urbanas: la zona norte y sur. Desde cruce Villa Adela, unos, y otros, desde la altura del cruce el Kenko, se van acercando columnas de marchistas con palos, piedras, wiphalas y bande-

“En el discurso del presidente se nota una abierta provocación a la multitud que exige su dimisión [...] nuevamente se visibilizan socialmente las fronteras que separan el estado de la sociedad indígena-popular, porque el discurso presidencial más que alivianar el conflicto, enardece aún más los ánimos”

ras de Bolivia. Desde la región norte, Río Seco, Villa Ingenio y otros, se aproximan otras columnas para bajar por Ballivián, la Ceja de El Alto, el Faro Murillo y Pasanqueri. Dos helicópteros vuelan permanentemente sobre los marchistas, en los que se sospecha viajan francotiradores.

Al bajar por las laderas oeste de La Paz hemos podido observar un recibimiento jubiloso de los vecinos. Unos echaban agua desde las ventanas de las casas para refrescar a los manifestantes en señal de solidaridad y apoyo a la multitudinaria marcha. Otros ofrecían refrescos en bolsitas de nylon y otros botaban galletas. Se observan profusas columnas que se acercan hacia la hoyada. En el centro de la ciudad de La Paz, en la plaza San Francisco, la Av. 16 de Julio, El Prado, Av. Camacho se inicia, desde las cuatro esquinas, el cerco de la Plaza Murillo donde se encuentra el palacio de gobierno. Los policías ubicados en la primera línea de las murallas de seguridad del palacio y los militares en la segunda y tercera ven con mucho nerviosismo cómo la multitud grita: “Goni asesino”, “Goni ya no te queremos”, pero han sido marchas pacíficas que desmiente la versión del gobierno de que los manifestantes provocan acciones violentas. Sánchez de Lozada había denunciado a la prensa internacional que en Bolivia hay un movimiento narco sedicioso que tiene la finalidad de destruir la democracia. Se ha mostrado que, por el contrario, es el gobierno el que ha atentado contra la democracia con la muerte de más de 76 personas en 9 días y más de 400 heridos. La plaza de San Francisco ante la multitud politizada ha quedado muy pequeña. Algunos han calculado la participación de 50 mil manifestantes, pero fueron más de 150 mil, porque muchas columnas marchaban por fuera de la plaza. El bullicio de la multitud es ensordecedor, como no se había visto en más de veinte años. El gobierno está cercado. Incluso se han sumado a las movilizaciones sociales los sectores tradicionalmente favorecidos o administradores del estado, la zona sur no indígena o lo que los aymaras llaman, los q’aras. Y nuevamente Carlos Mesa se pronuncia en contra de la administración de Sánchez de Lozada, y afirma “no soy partidario de matar a la gente”. Se resquebraja más el

gobierno, y poco a poco (como ha sido construido) se desmorona. Los soportes políticos, intelectuales y morales no funcionan porque se multiplican los pedidos de renuncia como el de la ex defensora del pueblo, Ana María de Campero. La situación ya es insostenible y su perdurabilidad se hace cada vez más incierta.

En efecto, el viernes 17 de octubre a mediodía se anuncia la posible renuncia de Sánchez de Lozada. La noticia se esparce como reguero de pólvora sobre los territorios movilizados. Hay iniciales expresiones de júbilo, particularmente de la ciudad aymara de El Alto. Ya en la mañana Manfred Reyes Villa de Nueva Fuerza Republicana (NFR) había anunciado su alejamiento del gobierno con las renuncias de sus tres ministros. En la tarde, Jaime Paz Zamora hace lo propio. El gobierno del MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) ante esta nueva realidad política no tiene otra alternativa y se precipita en pedazos. Las horas no pasan rápido y la espera se hace tensa. Es la espera de un final dramático, de la caída del gobierno de Sánchez de Lozada al que los alteños han empezado a llamar el “carnicero” por la masacre perpetrada el 12 y 13 de octubre.

Durante ese día una multitud aún se moviliza en la Plaza San Francisco. Han llegado desde Aroma, Omasuyus, Muñecas, Los Andes, y desde Oruro la organización de los ayllus Jach'a Karangas. En la tarde llegan también los cooperativistas mineros de Huanuni hacia El Alto. De persistir mantenerse en el gobierno, Sánchez de Lozada hubiera provocado una acción más radical de todos estos sectores con el ingreso a la zona sur no indígena y al propio palacio de gobierno aunque a un costo humano muy alto. La clase política, de algún modo, ha buscado una salida menos dramática para mantener los privilegios acumulados. A las 9:40 de la noche aproximadamente se lee en el parlamento oficialmente la carta de renuncia del presidente. En ella, Sánchez de Lozada vuelve a acusar a las organizaciones sociales de ser parte de “la desintegración nacional, (de) el autoritarismo corporativista y sindical y (de) la violencia fratricida”, se muestra hasta el final como un hombre soberbio. El parlamento acepta con 97 votos a favor y 30 en contra la renuncia. Ante su oficialización, la ciudad de El Alto y parte de la hoyada estalla en júbilo con el reventón de petardos y dinamita que dura hasta la medianoche. Mucha gente se ha concentrado en los alrededores de las plazas, calles y avenidas para gritar: “¡Goni cayó!”. Miles de ellos expresan su alegría al afirmar: “ha valido la pena”. Por ello entre los distintos sectores indígenas movilizados, los mineros y los indígenas urbanos, rurales autoidentificados como parte de una misma realidad, el domingo 19 se abrazan y se despiden en la ceja de El Alto, pero anuncian que volverán a La Paz cuando sus demandas sean burladas.

Carlos Mesa como presidente de la república sostiene que habrá referéndum vinculante para la exportación del gas, atención a las mayorías marginadas, asamblea constituyente y revisión de la ley de hidrocarburos. A la misma hora Sánchez de Lozada sale

rumbo a Miami, Estados Unidos. El discurso de Carlos Mesa, sin embargo, no resulta claro en cuanto a la vigencia del modelo de libre mercado y del Decreto 21.060 que han profundizado la pobreza en Bolivia. Y lo fundamental, la clase política no cayó junto a Sánchez de Lozada, sino que sobrevivió al levantamiento indígena-popular. También es importante señalar que en el discurso del presidente no ha quedado definido qué va pasar con las leyes de seguridad ciudadana, la de hidrocarburos, la de capitalización, y la reforma de la constitución política del estado.

El Alto un nuevo escenario sociopolítico

La ciudad indígena-popular aymara de El Alto ha sufrido una de las masacres nunca vista en su joven historia. Se ha hecho un uso indiscriminado de la fuerza militar para tratar de acallar e inmovilizar el levantamiento. Hecho explicable de algún modo por la construcción estatal y social de un racismo histórico contra esta población. Desde los espacios del poder se imagina y se construye a la ciudad de El Alto como la Otra Ciudad, la ciudad de los indios. Hay relaciones de discriminación étnica que son muy fuertes, vistas incluso como naturales. Esto se nota en la vida cotidiana cuando se escucha decir en las radioemisoras: "El Alto es una ciudad sucia y desordenada". También se observa en los minibuses que transitan entre La Paz y El Alto, cuando las señoras o caballeros "distinguidos" usan perfumes desodorantes para tratar de hacer desaparecer el olor y posiblemente el color del resto de los pasajeros. Hay una construcción social y cultural de fronteras étnicas históricas que se manifiestan como hábitos (es lo que Bourdieu [1991] llama la distinción) y una construcción racial de las relaciones sociales entre los indios y los sectores blanco-mestizos que de tiempo en tiempo se manifiestan en violencia simbólica y física. La masacre estatal-gubernamental de la ciudad de El Alto el 12 de octubre de 2003 a 511 años de la llegada de los Pizarros y Almagros es un acto político y militar de estas construcciones racistas del poder en Bolivia. Sánchez de Lozada, con una educación norteamericana, se ha mostrado como el referente de estas construcciones raciales de las relaciones de poder político y social, y sobre esa base ha actuado sangrientamente contra las poblaciones y pueblos indígenas muy parecido a los social-darwinistas del siglo pasado que exigían a los gobernantes el exterminio de la raza indígena. La masacre del 12 y 13 de octubre, de algún modo, es parte de estos mecanismos de violencia estatal anti-indígena aymara.

Bibliografía

- Bourdieu, Pierre 1991 *La Distinción. Criterios y bases sociales del gusto* (Madrid: Tauro Humanidades).
- Condarco, Ramiro Zarate 1983 *El "Temible" Willka. Historia de la rebelión indígena de 1899 en la república de Bolivia* (La Paz: Renovación).
- Del Valle de Siles, María E. 1990 *La historia de la rebelión de Tupac Katari, 1 781-1782* (La Paz: Don Bosco).
- El Alteño* 2003 (El Alto) 14 de octubre.
- El Alteño* 2003 (El Alto) 12 de octubre.
- El Alteño* 2003 (El Alto) 9 de octubre.
- El Diario* 2003 (La Paz) 18 de octubre.
- El Diario* 2003 (La Paz) 16 de octubre.
- El Diario* 2003 (La Paz) 14 de octubre.
- El Diario* 2003 (La Paz) 11 de octubre
- Fernández, R. Jhonny 1993 *En las manos de la ciudad de El Alto* (Centro de reporteros populares).
- García Linera, Álvaro 2001 *Indios y q'aras: la reinención de las fronteras internas* , julio <<http://www.clacso.edu.ar>>
- INE 2002 *Bolivia: Características de la población* (La Paz: INE).
- INE 2001 *Mapa de pobreza de Bolivia* (La Paz: INE).
- La Prensa* 2003 (La Paz) 12 de octubre.
- La Razón* 2003 (La Paz) 13 de octubre.
- Mamani, Pablo s/d *El rugir de la multitud. La fuerza de los levantamientos indígenas en Bolivia/Qullasuyu* (próximo a publicarse).
- Quispe, Felipe 1990 *Tupak Katari vive y vuelve... Carajo* (La Paz: Ofensiva Roja).
- Steinberg, Marc W. 1999 "El rugir de la multitud: repertorios discursivos y repertorios de acción colectiva de los hiladores de seda de Spitalfields, en el Londres del siglo XIX", en Auyero, Javier *Caja de herramientas: lugar de la cultura en la sociología norteamericana* (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes).

Notas

- 1 Rescatamos la idea y la frase de Marc Steinberg (1999).
- 2 Este artículo se terminó de escribir el domingo 19 de octubre de 2003 y ha circulado en varias páginas web.
- 3 Senkata está en el sur, Distrito II, de la ciudad de El Alto. En esa zona está ubicada la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de donde se provee de combustible a las ciudades de El Alto y La Paz.

Rebelión popular y los derechos de propiedad de los hidrocarburos

Carlos Villegas Quiroga*

** Director del Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia.*

A partir de 1985, los cuatro gobiernos que se sucedieron en la administración del Estado boliviano prometieron y ratificaron continuamente la pertinencia y necesidad de un cambio de estilo de desarrollo. Señalaban que las bases del mismo deberían sustentarse en la transformación del aparato productivo de manera de orientarlo a la exportación, e inclusive se selló el eslogan *exportar o morir*. Decían además que este estilo de desarrollo iba a solucionar los problemas económicos y sociales tanto coyunturales como estructurales.

Después de dieciocho años de estabilización y de ajuste estructural, el estilo de desarrollo vigente sigue siendo el que caracterizó al país en los últimos decenios: Bolivia continúa en el marco del modelo primario exportador, introduciendo nuevas características. La más sobresaliente es la apropiación de los recursos naturales y del proceso de generación y uso del excedente económico a favor de las empresas transnacionales. Este es uno de los

aspectos que generó un profundo malestar en la sociedad boliviana, al punto de convertirse en uno de los pilares del movimiento social de octubre de 2003. La reivindicación principal giró en torno a la recuperación de los derechos de propiedad de los recursos hidrocarburíferos a favor del Estado boliviano.

Los procesos de capitalización y privatización de las empresas públicas significaron una virtual transferencia de los derechos de propiedad a manos de las empresas extranjeras, y un fenómeno similar ocurrió con el proceso de generación y uso del excedente económico. Como resultado de estos hechos, la concentración económica se acentuó considerablemente. Las principales actividades que arrojan rentabilidad en el presente y tienen buena perspectiva en el futuro, recursos naturales no renovables (hidrocarburos) y servicios (telecomunicaciones, energía eléctrica, transporte ferroviario y aéreo), quedaron bajo la responsabilidad de diez empresas extranjeras. Si ampliamos el espectro e incluimos minería, agricultura, comercio, banca e industria, se ratifica la concentración a favor de las empresas transnacionales.

Con la finalidad de promover el ingreso de empresas transnacionales, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) diseñó y aprobó un marco jurídico orientado a la privatización de la industria petrolera, y consolidó los derechos de propiedad a favor de las empresas transnacionales bajo la supuesta argumentación de incentivar la inversión en las diferentes fases de la cadena hidrocarburífera. En este sentido se promulgaron leyes y decretos supremos.

El 30 de abril de 1996 se promulgó la Ley de Hidrocarburos N° 1689, que tiene referencias significativas con relación a los derechos de propiedad de los hidrocarburos. Por una parte señala que el Estado es propietario de las reservas de gas natural cuando se encuentran en el subsuelo; en cambio, cuando éstas son producidas o declaradas campos comerciales, la propiedad es de la empresa transnacional o contratista. Además, éste tiene derecho de construir y operar ductos para el transporte de su propia producción y la de terceros.

En esta dirección, la Ley de Hidrocarburos señala en su Art. 5: "Es libre la importación, la exportación y la comercialización interna de los hidrocarburos y sus productos derivados". Y en su Art. 24: "Quienes celebren Contratos de Riesgo Compartido con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos adquieren el derecho de prospectar, explotar, extraer, transportar y comercializar la producción obtenida. Se exceptúan de la libre comercialización de los mismos los volúmenes requeridos para satisfacer el consumo interno de gas natural y para cumplir con los contratos de exportación pactados por YPFB con anterioridad a la vigencia de la presente Ley".

“...la generación del principal excedente económico y su respectiva utilización están en manos de empresarios extranjeros. El Estado perdió la posibilidad de incidir en las decisiones del uso del excedente económico”

Por lo tanto, mediante esta ley la comercialización de los hidrocarburos es libre, excepto los volúmenes requeridos para consumo interno y para los contratos suscritos con anterioridad. Es el caso de Brasil y la Argentina. No existen restricciones respecto a otras exportaciones, los productos tienen total libertad para exportar, y sólo se requiere contar con las reservas disponibles.

El 4 de agosto de 1997, dos días antes de dejar el gobierno, Gonzalo Sánchez de Lozada promulga el Decreto Supremo N° 24806, cuyo objetivo fue aprobar los modelos de Contrato de Riesgo Compartido. La cláusula tercera de este contrato, que se refiere al objeto del mismo, dice textualmente: “Es facultar al Titular para realizar actividades de exportación, explotación y comercialización de hidrocarburos en el área de Contrato bajo los términos y condiciones de este Contrato, mediante el cual el Titular adquiere el derecho de propiedad de la producción que obtenga en Boca de Pozo y a la disposición de la misma conforme a las previsiones de la ley de hidrocarburos”.

En consecuencia, los contratos de riesgo compartido otorgan a las empresas extranjeras la propiedad de los yacimientos hidrocarbúferos desde el momento en que éstos afloran a la superficie, es decir, en boca de pozo. Con esta decisión, el primer gobierno de Sánchez de Lozada concede plenamente la propiedad de los recursos hidrocarbúferos a favor de las empresas transnacionales, y por lo tanto éstas son propietarias del uso de los recursos gasíferos. Esto quiere decir también que son propietarias del excedente generado y del uso que dan al mismo. En base a este marco jurídico, las empresas extranjeras procedieron a activar las diferentes fases de la cadena de la industria del petróleo. El Estado no tiene la mínima injerencia, sólo capta impuestos establecidos por ley. Las empresas transnacionales se benefician de la renta económica, la cual expresa la diferencia entre ingresos y costos.

El artículo 139 de la Constitución Política del Estado textualmente señala: “Los yacimientos de hidrocarburos,

cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presente, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos. La exploración, explotación, comercialización y transporte de los hidrocarburos y sus derivados, corresponden al Estado. Este derecho lo ejercerá mediante entidades autárquicas o a través de concesiones y contratos por tiempo limitado, a sociedades mixtas de operación conjunta o a personas privadas, conforme a Ley”.

El marco jurídico, aprobado por el gobierno de Sánchez de Lozada, contradice plenamente lo señalado por la Constitución Política del Estado. La Ley 1689 y el Decreto Supremo de marras señalan que la producción de líquidos y de gas es de propiedad de las empresas transnacionales, y también las fases de transporte y comercialización. La Constitución Política del Estado, en cambio, en el artículo mencionado, es contundente al expresar que los yacimientos de hidrocarburos son de dominio directo o de propiedad del Estado nacional, es decir, que éste tiene poder para usar y disponer de lo suyo, a su vez es inalienable porque no existe el mínimo de posibilidades para enajenarlos o, lo que es lo mismo, no puede pasar el dominio del yacimiento a otro. Además el derecho que tiene el Estado sobre este recurso natural es imprescriptible, no puede extinguirse. Entonces, el artificio legal referido a la propiedad de la producción contradice y viola la Constitución Política del Estado.

Se confirieron derechos de propiedad vulnerando la pirámide jurídica. Así, el Decreto Supremo N° 24806 del 4 de agosto de 1997 entra en total contradicción con la Constitución Política del Estado Boliviano, en especial con el artículo 139, al permitir que en el Contrato de Riesgo Compartido suscrito entre YPF y las empresas extranjeras se diga, en la Cláusula Tercera, que éstas tienen el derecho de propiedad de la producción que obtengan en boca de pozo. Además, la Ley de Hidrocarburos N° 1689 les concede total libertad para la comercialización, el transporte, la refinación y la exportación. En consecuencia, las empresas extranjeras tienen derechos de propiedad y total libertad para explotar, producir y apropiarse del excedente hidrocarbúfero.

Entonces, el actual marco jurídico cambia drásticamente la concepción de excedente hidrocarbúfero. La anterior Ley de Hidrocarburos N° 1194, promulgada en 1990, era taxativa al señalar que el Estado era propietario de las reservas, de la producción y comercialización, y por lo tanto participaba y era el directo beneficiario de la generación, distribución y uso del excedente. En cambio, el marco jurídico actual señala que el Estado es propietario de las reservas de gas pero no de la producción y de la comercialización de líquidos y de gas, y por lo tanto le excluye del circuito de la generación, apropiación y uso del excedente. En esta perspectiva el Estado sólo se beneficiará del sistema tributario. Por supuesto, éste es un cambio cualitativo.



De estos hechos se puede colegir que la generación del principal excedente económico y su respectiva utilización están en manos de empresarios extranjeros. El Estado perdió la posibilidad de incidir en las decisiones del uso del excedente económico.

Por otro lado, el marco jurídico vigente procedió con la reclasificación de los campos petroleros: los hidrocarburos antiguos o existentes pagan bajo el concepto de regalías el 50% del valor pozo, mientras que los nuevos sólo pagan el 18%, perdiendo el Estado boliviano el 32%. La particularidad de los campos existentes es que están en un acelerado proceso de agotamiento. Se estima que en los próximos cinco años desaparecerán y quedarán sólo los campos nuevos ubicados en el Departamento de Tarija. Esta decisión tiene claros efectos sobre las finanzas públicas, ya que las mismas no tendrán la capacidad de satisfacer las diferentes demandas emanadas de las regiones y de los distintos sectores sociales. Este hecho ya se constituye en una preocupación actual. La crisis de las finanzas públicas se debe en parte a los resultados extremadamente exigüos que producen las reformas estructurales. Los ingresos fiscales que se esperaban están por debajo de las expectativas de los diseñadores de estas políticas.

Con la promulgación de las leyes de capitalización e hidrocarburos, se pasó drásticamente de una visión de economía estatal hidrocarbúrfica, que tuvo una vigencia de sesenta años, a una de total privatización. En América Latina, Bolivia, Argentina y Perú son los países que pasaron a tener una propiedad hidrocarbúrfica totalmente privada y transnacionalizada. Otros países petroleros decidieron mantener la propiedad bajo la tutela del Estado, con ajustes empresariales importantes para enfrentar los retos de la competencia internacional (Moguillansky y Bielschowsky, 2000).

Como señala Moguillansky: "Entre las modificaciones contractuales, la promovida por la Argentina, a partir de 1989 y desarrollada entre 1990 y 1991 fue la más radical, conce-

diendo permisos de exploración y explotación en que el petróleo o el gas natural pasan a la propiedad del concesionario. Le siguió Perú, que en agosto de 1993 promulgó la nueva ley de hidrocarburos, Ley 26221, que modifica el régimen de contratación petrolera en las etapas de exploración de producción y entrega la propiedad del petróleo y el gas a los contratistas”.

Los otros países petroleros latinoamericanos cambiaron la legislación petrolera con la finalidad de atraer y captar inversiones extranjeras, pero no se consideró la mínima posibilidad de entregar la propiedad del gas y el petróleo a las empresas extranjeras: es el caso de Ecuador, Venezuela, México y Brasil. Por supuesto, las condiciones actuales para estos países son más favorables que para los tres que privatizaron la producción de hidrocarburos, ya que entregaron la propiedad de los excedentes a las empresas extranjeras, beneficiándose de la monetización de las reservas de gas y petróleo.

También es necesario señalar que en los países que decidieron mantener las empresas petroleras estatales, resultado de la importancia de las reservas hidrocarburíferas, se dio un flujo significativo de recursos financieros debido a la existencia de una liquidez financiera en el mercado mundial. El capital de préstamo ingresó a estas actividades porque tienen perspectivas en términos de mercados y de rentabilidad. Con esto se quiere desmitificar aquella argumentación a favor de la privatización de YPF. Se decía que ya no es sujeto de crédito en el ámbito internacional. Los resultados en los países que dejaron a estas empresas como públicas desmienten las aseveraciones que realizaron la mayoría de los partidos políticos e inclusive las organizaciones gremiales de los empresarios bolivianos.

El conocimiento de estas mutaciones cualitativas por parte de la población tomó su tiempo. Los partidos políticos que gobernaron y aprobaron las mencionadas disposiciones legales no tuvieron una actitud transparente con la sociedad. A medida que los partidos políticos de oposición y las organizaciones de la sociedad civil fueron asimilando el contenido y las consecuencias de estas decisiones, el ambiente político y social se tornó tenso. Además, este escenario se deterioró aun más conforme emergían posibilidades de concretar el proyecto de exportación de gas natural a Estado Unidos y México por parte del Consorcio Pacific LNG, conformado por Repsol YPF, British Gas y Pan American y la empresa compradora Sempra, y asimismo por el hecho de que el Estado boliviano no tenía la más mínima posibilidad de participar e incidir en las negociaciones. El papel que asumía era totalmente pasivo en términos de recepcionar regalías y tributos.

Por estas razones, la rebelión popular de octubre de 2003 logró articular a la mayoría de la sociedad boliviana mediante el planteamiento central de la necesidad de una nueva Ley de Hidrocarburos que contemple aspectos centrales tales como la recuperación de los derechos de propiedad a favor del Estado boliviano, la industrialización del gas natu-



ral, la reposición de YPF, el priorizar mercados, los precios y los usos que se deberían dar a los probables recursos financieros provenientes de diferentes proyectos.

El actual presidente, Carlos Mesa G., se comprometió con el movimiento social que protagonizó la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada a elaborar una nueva Ley de Hidrocarburos y organizar un referéndum vinculante acerca de la problemática del gas natural. El año 2004 será fundamental, porque tendrán que discutirse a nivel de la población las propuestas gubernamentales.

Indudablemente el actual gobierno tiene una espléndida oportunidad para reorientar cualitativamente el curso que tomó la cuestión hidrocarburífera. La coyuntura exige tener una visión integral, de manera tal de diseñar una estrategia y política hidrocarburífera que incluya los aspectos centrales que harían a la mencionada estrategia. Sólo así se podría asumir una posición clara y coherente frente a la sociedad y las empresas transnacionales.

Los aspectos relevantes que se deberían abordar para diseñar no sólo una estrategia sino también una nueva Ley de Hidrocarburos tienen que ver con la propiedad, la renta de la industria petrolera, la industrialización del gas natural, la reconsideración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la posición nacional acerca de los mercados, y la utilización de los probables recursos que provendrían de las diferentes actividades y proyectos. Articulando estos aspectos, el gobierno podría asumir una posición clara y coherente frente a la sociedad y las empresas transnacionales.

La coyuntura es favorable para que el gobierno asuma decisiones estratégicas para el futuro de Bolivia. Es fundamental recuperar los derechos de propiedad, lo que en otras

palabras significa el retorno al Estado del excedente económico plasmado en gas y petróleo. Este sería el punto de partida para redefinir las relaciones con las empresas extranjeras, y buscar el justo medio para los intereses del Estado nacional y de las transnacionales.

Esta es una principal reivindicación del movimiento social que protagonizó la insurrección popular de octubre. Evitar que se repliquen en el futuro hechos de esta naturaleza pasa por tomar decisiones gubernamentales que recuperen los derechos de propiedad a favor del Estado y porque se apruebe una estrategia y política hidrocarburífera asociada a los intereses nacionales y no sólo de las empresas transnacionales.

Bibliografía

Moguillansky, Graciela y Ricardo Bielschowsky 2000 *Inversión y Reformas Económicas en América Latina* (México: Fondo de Cultura Económica).

Perfiles del movimiento social contemporáneo El conflicto social y político en Bolivia

Las jornadas de septiembre-octubre de 2003

Raúl Prada Alcoreza*

* *Doctor en Epistemología.
Director del Círculo
Epistemológico,
Universidad Real Pontificia
San Francisco Xavier
de Chuquisaca,
Bolivia.*

Las jornadas de septiembre-octubre en Bolivia, concentradas en el Altiplano norte y en dos ciudades colindantes, El Alto y la Ciudad de la Paz, aparecen como el resultado de un proceso de acumulación de los movimientos sociales desatados en abril de 2000, y continúan sus cursos propios durante cuatro años (2000-2003). Las significaciones histórico-políticas las podemos encontrar desde dos ángulos diferentes. La significación histórica puede ser evaluada por la relación que tienen estas jornadas con el pasado, la actualización de antiguas luchas, la reivindicación de las víctimas arrojadas al tiempo y sepultadas en el olvido, la densidad que adquiere la memoria en el momento presente. La significación política se puede evaluar por la repercusión que tienen estas jornadas en las estructuras de poder, en los dispositivos y agenciamientos políticos del Estado. El problema de las jornadas de septiembre-octubre, que desafía a su comprensión y conocimiento, se encuentra relacionado con el contenido de sus potencialidades y posibili-

dades, así como con el alcance de sus desenlaces. Estas posibilidades y sus latentes desenlaces, ¿forman parte de un proceso de ruptura con el Estado? ¿Forman parte de la constitución nacional, o de modo diferente anuncian el quiebre de la nación, su diseminación? ¿Constituyen la configuración de una nueva geografía política, compuesta por autonomías? ¿Forman parte de la revolución social, revolución que apunta al trastocamiento profundo del Estado, la nación y la sociedad?

Una descripción

Se llegó a septiembre de 2003 con conflictos sociales sin solución. Los pliegos que se vinieron planteando desde la Guerra del Agua, en abril de 2000, hasta el inicio de las jornadas de septiembre de 2003, con los sucesos de Warisata, Sorata e Ilabaya, quedaron en las rondas de negociaciones y en las mesas de diálogo. Lo que se logró arrancar al gobierno de entonces con la Guerra del Agua, que consiste en la salida de la transnacional del agua, "Aguas del Tunari", en la anulación del proyecto de privatización del elemento vital, en la evitación del súbito incremento de las tarifas del agua, quedó a mitad de camino en la medida que la Coordinadora del Agua no logró convertirse en una empresa autogestionaria. Terminó administrando modestamente la antigua dependencia estatal, Servicio Municipal de Agua Potable (SEMAPA), institución restringida en proyectos y recursos para atender las necesidades del campo y de la ciudad en cuanto al líquido elemento. El añorado proyecto de Misicuni, que atendería en tres etapas la demanda del agua del departamento de Cochabamba, no acaba de materializar ni siquiera su primera etapa. En cierto sentido se puede notar una latente frustración al respecto. El gran esfuerzo social llevado a cabo en la Guerra del Agua no cristalizó todavía en una autodeterminación y en una autogestión social.

Han transcurrido cuatro años desde la Guerra del Agua hasta la Guerra del Gas. El epicentro del conflicto se ha trasladado de la ciudad del Valle, Cochabamba, a las ciudades de El Alto y de La Paz, siendo la primera el motor del conflicto desatado en octubre y la segunda el escenario donde se dirime la correlación de fuerzas del campo político. En el transcurso de este intervalo se sucedieron dos asonadas sociales en tres de las cuatro grandes urbes del llamado eje central, Cochabamba, El Alto y La Paz. La ciudad de Santa Cruz no quedó al margen del conflicto social. Fue lugar de resonancia de las luchas sociales desatadas en el occidente boliviano. Obviamente no estuvo al margen de los conflictos locales. Estos se dieron en el tamaño de su localismo, como el repetido conflicto relativo a la demanda salarial de los maestros, a la demanda de presupuesto de la universidad pública, a distintos reclamos sectoriales, y recientemente, como consecuencia de las jornadas de octubre, se dio lugar el intrépido ingreso de la marcha campesina al centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, esta populosa urbe toda-

vía no ha producido un perfil propio, no ha logrado una participación propia en las definiciones del conflicto social. En otras palabras, no ha conseguido expresar nacionalmente lo que le acontece localmente. No ha podido traspasar los límites de su localismo, convirtiendo sus singularidades en desplazamientos transformadores en el contexto nacional. En todo caso, la Guerra del Gas ha comprometido a todos los sectores sociales involucrados en los movimientos sociales desde el 2000; ha logrado unificar al movimiento social que se hallaba diseminado en sus distintos componentes regionales. La consigna de la defensa del gas resultó ser no sólo una consigna unificadora, sino también una consigna nacional. Una consigna que sintetiza varios planos de las luchas sociales. Uno de los planos tiene que ver con la resistencia a la globalización privatizadora, a la ejecución de las políticas neoliberales, a la rebelión social contra el ajuste estructural y las consecuencias agravantes de las reformas estructurales. Otro plano tiene que ver con la recuperación de la soberanía nacional frente a la supeditación nacional al nuevo orden mundial. Un tercer plano tiene que ver con la recuperación de los recursos naturales y la lucha por el excedente. Un cuarto plano viene dibujado por la lucha de clases. Fue el movimiento popular el que reivindicó, desde las profundidades de su propia memoria, el gas para los bolivianos, para los trabajadores, para los desocupados, para las familias humildes. En esta perspectiva se plantea un enfoque de distribución social del recurso energético. Un quinto plano, y quizás un primordial eje articulador histórico, condicionante de los otros planos, atravesados por éste, es el relativo a las reivindicaciones indígenas, entendidas como reivindicaciones culturales, nacionales y étnicas. Todos estos planos se entrelazaron en la Guerra del Gas. La consigna de la defensa del gas resumió las demandas desplegadas en todos los planos, despliegues que anidan sus propias particularidades, sus específicas lógicas de desenvolvimiento. No sólo se trata de una consigna nacional, sino de una consigna que replantea popularmente la concepción de nación. Quizás sea ésta la razón por la que la defensa del gas estaba casada con la consigna popular de la Asamblea Constituyente.

Entre la Guerra del Agua y la Guerra del Gas se suscitaron conflictos de importancia en el campo, en el área rural. El bloqueo nacional campesino de caminos, en septiembre de 2000, que aisló a las cuatro ciudades del eje central, además de tener comprometidas a otras ciudades capitales departamentales, como Oruro, Potosí y Chuquisaca. El bloqueo parcial de caminos en el Altiplano norte, en julio de 2001, que mostró el carácter fragmentario de los movimientos sociales, los límites y debilidades locales. En el mismo momento se deslizó la marcha diezmada de la COMUNAL¹, que hizo patente las dificultades de extender nacionalmente una experiencia como la Coordinadora del Agua de Cochabamba. La marcha indígena de tierras altas y de tierras bajas por la Asamblea Constituyente, un poco antes de las elecciones nacionales, expresó otra perspectiva del movimiento indígena, no sindicalista, más bien comunitarista, organizada en torno a las autoridades originarias. Aunque con menos densidad demográfica que las convocatorias

de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), sin embargo, hizo sentir su interés particular en la Asamblea Constituyente para resolver el heredado problema colonial y la demanda indígena de territorio. La constante conflictividad social, política y policial en la región del Chapare, combinando esporádicos con férreos bloqueos carreteros dependiendo de la situación. Las sucesivas marchas de los maestros. La toma de la superintendencia de bancos por parte de los prestatarios, después de haberse agobiado en sus penosas, largas y rutinarias marchas, en incansables reclamos, en renovadas e inventivas formas de interpelación, incluyendo su protesta al desnudo ante el impávido ciudadano paceño. La dramática marcha de los jubilados y rentistas. Después de febrero de 2003, el bloqueo de caminos de los cooperativistas mineros, quienes recordaban el fantasma del comunismo minero. No podemos olvidarnos de la renovada toma de tierras del Movimiento de los Sin Tierra (MST), movimiento que viene convirtiendo últimamente a la cuestión de tierras, propiedad y posesión de tierra y territorio en el tema social más conflictivo. Estos conflictos sociales no se encuentran articulados ni se desarrollan en un continuo espacio-temporal. La mayoría de ellos son expresiones locales, sin mayor irradiación que sus propios territorios si descartamos la irradiación informativa y los reportajes ocasionales. Se diferencian no solamente por el lugar en que se dan, ni por las estructuras que ejecutan sus desplazamientos, sino también por las variaciones de sus intensidades. Paradójicamente, su fuerza y su debilidad radican en este ámbito de singularidades. Considerando este contexto, la pregunta que debemos hacer es: ¿de qué modo se acumula la memoria del movimiento social?

Antes de responder debemos recapitular un antecedente importante de los sucesos de septiembre-octubre, el motín policial y el subsiguiente desencadenamiento social, en febrero de 2003, con la toma y quema de edificios públicos, sedes de partidos y saqueo de centros comerciales, además de los depósitos de la Aduana. Quizás es en febrero cuando se da lugar al comienzo de la transformación de los comportamientos en lo que respecta al relacionamiento entre bases y dirigentes del movimiento social. Una relación heredada, todavía vertical, entre dirección y bases, se rompe y comienza a ser sustituida por la emergencia de la espontaneidad de las masas, por su irrupción sin consulta, por su elocuencia diseminada, pero con alto contenido afectivo, con intempestivos y fugaces tonos de intensidad. Es posible que esto tenga que ver con una suerte de acumulación de la experiencia social que se traduce en la modificación de los usos organizacionales. También es probable que esta emergencia se deba a la crisis que sobrelleva la conducción del movimiento social. El desarrollo del movimiento social cuestiona el monopolio de la representación política por parte de los partidos. Así mismo, siguiendo el curso de este requerimiento, se hace también evidente el monopolio y la centralización de la representación social por parte de la dirigencia sindical. Las prácticas y gestiones comunitarias exigen adecuar las expresiones representativas al control social de las asambleas. La emergencia de las bases es una verdadera revolución en el trámite, ya

***“Las jornadas de
septiembre-octubre
mostraron
un nuevo perfil
del movimiento
social
[...] templado
por la experiencia
de la lucha,
maduro para gestar
decisiones
desde abajo,
sometido
al irradiante
control social.
Un movimiento
social que comienza
a elaborar
su nueva
criatura...”***

conservador, de la elaboración de la representación social. Las direcciones y los dirigentes que motivaron el estallido de los conflictos recientes (2000-2003) terminaron convirtiéndose en estructuras inhibitoras de las iniciativas sociales, incluso altamente conservadoras comparándolas con los objetivos implícitos que persiguen los procesos de liberalización de los movimientos sociales. Febrero de 2000 hizo patente la crisis estatal. Los aparatos del Estado se desmoronaron, entrando al agenciamiento de una guerra intestina, Estado contra Estado, aparatos de Estado contra aparatos de Estado, policía contra ejército. Las posibilidades del gobierno se desmoronaron, y con ello la legalidad del Estado quedó hecha trizas. El presidente desapareció de la escena, y también su gabinete. Se hizo reiterativa la evaporación del congreso en plena beligerancia del conflicto social. La suerte quedó echada en manos de los directos actores y protagonistas del drama social. La muerte también se hizo presente, dejando su huella en los cuerpos martirizados, abiertos morbosamente por la metralla. Reapareció el nuevo verdugo de la represión, que había mostrado su cara oculta ya en la Guerra del Agua, sólo que ahora era un recurso abiertamente usado: los francotiradores. De febrero a octubre se va a dar lugar a la consecuencia de esta discontinuidad del relacionamiento entre bases y dirección, va emerger la forma organizada de la multitud. Se va a dar lugar a una grandiosa movilización social, construida inductivamente por proliferantes asambleas de base, múltiples direcciones territoriales que extienden rápidamente sus redes, articulando un gran movimiento autogestionario. Las jornadas de septiembre-octubre mostraron un nuevo perfil del movimiento social. Hablamos de un movimiento social templado por la experiencia de la lucha, maduro para gestar decisiones desde abajo, sometido al irradiante control social. Un movimiento social que comienza a elaborar su nueva criatura, el desarrollo del intelecto general autónomo, politizado. Hablamos de la subversión de los saberes, de su independencia respecto de los saberes institucionalizados, de su manumisión respecto de la dominancia de los medios de comunicación, de su inco-



Archivo OSAL

nexión respecto de la jerarquía del prestigio de la intelectualidad crítica. Este es un tema que sopesa las potencialidades del movimiento social.

Las transformaciones organizacionales no sólo se dieron en las ciudades, sino también en el campo, en el área rural. Esta modificación en la forma de gestión social se hizo sentir en el

Altiplano norte. Warisata, Sorata e Ilabaya fueron los escenarios comunales de los dramáticos acontecimientos de septiembre, pero también de la emergencia de las relaciones horizontales en las gestiones de la representación social y la toma de decisiones. Fueron tres las convocatorias a bloqueos de caminos por parte de la CSUTCB. Los comunarios sólo acudieron a la tercera, gestada por *malkus* y *mamatallas*, secretarios generales y esposas, es decir, elaborada por las bases sindicales y comunitarias. *Malkus* y *mamatallas*, secretarios generales y esposas acudieron a una huelga de hambre en la Radio San Gabriel de la ciudad del Alto. Desde allí, micrófono en mano, mantuvieron un contacto estrecho con sus comunidades. El bloqueo inmovilizó el transporte y detuvo a contingentes de turistas, particularmente en Sorata, donde se encontraba un conglomerado significativo de turistas extranjeros. El gobierno, presionado por las embajadas, decidió acudir con una expedición de rescate de fuerzas combinadas de la policía y el ejército. La expedición punitiva dejó un saldo de seis muertos. Este fue el costo del rescate de los sorprendidos turistas, atrapados en el vórtice del conflicto, anclados en su circunstancial retención. Fueron la excusa de la violencia estatal desatada contra los campesinos. La masacre de campesinos desató una ola de protestas y la expansión irreversible de los bloqueos. Fue el aguijón que desencadenó la fuerza acumulada en la más populosa urbe del país, fuerza acumulada en una larga historia de luchas en la ciudad de El Alto. La confraternidad entre la ciudad del Alto y las comunidades campesinas no es un dato reciente. La ciudad de El Alto está conformada demográficamente, mayoritariamente, por aymaras, migrantes en distintos niveles generacionales. Aunque la mayoría de la población urbana ha nacido en la dinámica urbe, la memoria migratoria es fresca. Sin embargo, no siempre las relaciones entre esta ciudad y el campo han sido armónicas, están atravesadas también por contradicciones derivadas de los procesos urbanos, aunque ciertamente endémicos en una ciudad olvidada, empero suficientemente diferenciadores como para demarcar nuevas identidades colectivas. Los aymara urbanos no

son ya campesinos a pesar de sus viajes itinerantes, de sus retornos a las festividades comunales, a pesar de que conlleven en sus costumbres ciertos aires rurales, aunque siembren en sus patios y domestiquen animales. El contexto urbano condiciona una transformación de las relaciones, las estructuras y las praxis sociales. El lenguaje no es suficiente para mantener la continuidad. Los usos del lenguaje también se modifican, su hibridación es más rápida, la mestización de la población urbana se hace más pronunciada. La movilidad social, el desclasamiento y el reencasamiento se hacen patentes. Estos procesos, lejos de empobrecer el desarrollo y la actualización de las identidades, las enriquecen en su exuberante variedad y en su abigarrada complejidad. Las jornadas de septiembre-octubre no fueron únicamente la continuidad de los desplazamientos del movimiento indígena, sino que los indígenas se incorporaron a luchas y movimientos sociales de alcance nacional, irradiaron en estos movimientos con sus propios contenidos y perfiles, pero también vivieron transformaciones que implican estas expansiones. No se puede reducir lo acontecido en la ciudad de El Alto a las circunstancias y al contorno de las reivindicaciones indígenas. Va más allá, incorporando lo indígena como eje articulador a un amplio movimiento social y a una lucha de liberación nacional, más rica en sus connotaciones, más profunda en su memoria histórica, más expansiva en sus alcances políticos, abierta a los distintos atravesamientos e influencias del movimiento social y las luchas nacionales.

El Alto es la ciudad que contiene a la nación

Cuando René Zavaleta Mercado usa esta figura de continente, se refiere al proletariado minero. El tropo es el siguiente: el proletariado minero, la clase que contiene a la nación. El proletariado minero sería el continente, el contenido sería la nación misma con toda su complejidad, la formación social abigarrada. ¿Qué significa esta relación entre continente y contenido? ¿Cómo puede la nación ser contenida en una clase social, más aún siendo ésta el proletariado minero? ¿Es que el proletariado contiene a la nación en su memoria? ¿O se trata más bien de la experiencia que tiene la clase? En sentido dialéctico se podría decir que el proletariado es la síntesis de la nación, en tanto formación social compleja condicionada por el modo de producción capitalista. El proletariado minero sintetiza la historia del capitalismo en Bolivia, la explotación minera articulada a las otras formas de explotación, no sólo la de los trabajadores mineros, ex-mitayos, indígenas, mestizos, fuerza de trabajo conformada por la separación de estos campesinos, estos artesanos, estos seres humanos de las relaciones de producción no capitalistas. La explotación minera se encuentra articulada a las formas de explotación rurales, haciendas, empresas, circuitos mercantiles simples, a diversas formas de subsunción formal del trabajo al capital. La explotación minera se encuentra articulada a las pervivientes formas de explotación coloniales. Por lo tanto, el proletariado minero resume en su cuerpo

social, en su memoria colectiva, en su experiencia de lucha, en su intelecto general, las múltiples memorias, las múltiples experiencias, los múltiples saberes. Hace de síntesis de todos estos recorridos, de todas estas formas históricas atravesadas por las relaciones capitalistas. Hace también de centralidad política en tanto y en cuanto se convierte en el motor de las luchas sociales. Hay un entorno del proletariado minero directamente afectado por sus costumbres sindicales. Se trata del entorno inmediato a la clase, es decir, el conjunto de la población allegada al proletariado, el agregado de los familiares. Hay también otros entornos indirectamente afectados por la centralidad minera. Esos entornos tienen que ver con las otras clases sociales populares.

Ahora bien, cuando se usa esta figura de continente para el caso de la ciudad del Alto, las connotaciones no tienen que ser necesariamente las mismas a pesar de las analogías. Cuando se dice que El Alto es la ciudad que contiene a la nación, se hace referencia a una ciudad y no a una clase, a pesar de que El Alto puede acercarse a ser una ciudad proletaria. En este caso está más claro que una ciudad es más literalmente un continente: contiene a la urbe que contiene a la población de ciudadanos que habitan en ella. A la ciudad acuden distintos flujos migratorios de toda la nación. En el caso de El Alto, particularmente del Altiplano. Si bien éste puede ser uno de los significados de la ciudad que contiene a la nación, no es ciertamente el único ni tampoco el más importante. Cuando se dice "contiene a la nación", se lo hace en el sentido fuerte del tropo, en el sentido histórico y político. Es como decir que la historia de Bolivia se condensa en esta ciudad, la demanda política de los movimientos sociales se condensa en esta ciudad. El conjunto de los movimientos sociales desatados desde abril de 2000 hasta octubre de 2003 de alguna manera confluyen y son recogidos por las organizaciones sociales de esta populosa ciudad en un momento de desprendimiento y de vivencias intensas. Ello ocurre cuando la ciudad de El Alto apuesta a su gasto heroico, cuando se sacrifica y entrega sus muertos a los

"... la historia de Bolivia se condensa en El Alto [...] El conjunto de los movimientos sociales desatados desde abril de 2000 hasta octubre de 2003 confluyen y son recogidos por las organizaciones sociales de esta populosa ciudad en un momento de desprendimiento y de vivencias intensas"

dioses de la historia en la Guerra del Agua. Entonces se puede decir que El Alto contiene a la nación de modo sacrificial, pero también de una forma volitiva: además de hacer causa de una demanda nacional, la recuperación de los hidrocarburos, la recuperación de los recursos naturales, la recuperación de la soberanía, lo hace como memoria histórica y conciencia trágica.

René Zavaleta Mercado dice que en noviembre de 1979 se rompe definitivamente con el pacto militar campesino y las masas se liberan de la ideología del nacionalismo revolucionario. Los sindicatos campesinos *kataristas* rompieron con la Confederación de Campesinos de Bolivia oficialista y tomaron las oficinas de la Confederación que se encontraban en el Ministerio de Asuntos Campesinos (MACA) como para certificar patentemente su vínculo clientelista con el gobierno. La incorporación de la Confederación Única de Campesinos Tupac Katari de Bolivia a la Central Obrera Boliviana dibuja un nuevo mapa de fuerzas en un modificado campo político. La nueva disponibilidad social, obreros y campesinos, define el perfil de la multitud, la que termina atravesando los límites del nacionalismo revolucionario, dejando este *ideologuema* en la penuria de sus propias incompatibilidades. Sin embargo, esta ruptura institucional del pacto militar campesino fue producto de una acumulación y de una ruptura efectiva anterior. El vínculo clientelista del pacto se rompió efectivamente en 1974, cuando la dictadura militar del General Banzer Suárez respondió a la demanda campesina con la masacre del valle. La masacre del valle mostró la auténtica cara del pacto militar campesino; la represión quebró con el pacto prebendal entre militares y campesinos. El gobierno de facto mandó tropas y tanques a Episana, Tolata y otras comunidades del valle. El epicentro de la rebelión campesina fue el valle de Cochabamba, pero en la medida que se expandía llegó incluso a propagarse la onda de la protesta hasta el Altiplano. La carretera a Oruro fue bloqueada a la altura de Lahuachaca. Hasta allí también llegó con su brazo de hierro la represión. Persecución y muerte inscribieron un entramado dramático en la memoria de estas tierras, por donde pasó el pacto militar campesino, dejando su huella sangrienta en el recorrido. Lo que vino después de noviembre de 1979 en lo que respecta a los movimientos sociales, los substratos de los imaginarios colectivos inherentes a estos movimientos, las ideologías concurrentes, las prácticas discursivas y los diseños políticos concomitantes a los movimientos, trascendió el *ideologuema* del nacionalismo revolucionario. Hasta 1982 las masas acompañaron a la Unión Democrática y Popular (UDP), expresión todavía anclada al nacionalismo revolucionario, con desgarradoras contradicciones y grandes dubitaciones, comprensibles en un frente de masas compuesto por distintas fuerzas sociales, diferentes corrientes ideológicas, encontradas latencias políticas, que guardaban para sí dicotómicas expectativas. *Kataristas*, movimientistas de izquierda, marxistas y sindicalistas se agolparon en el frente popular, persiguiendo distintos fines. Se puede decir que el ciclo del nacionalismo revolucionario se cerró en este dramático período que conjugó elecciones truncadas –interregnos democráticos– intercaladas por dictaduras militares, y gobierno turbulento. El ciclo del nacionalismo revo-



lucionario dura menos de medio siglo en el transcurso de la curvatura accidentada del tiempo social que es la memoria colectiva, concavidad irreducible de la historia. Perdura desde la década de los '40, con el recuerdo fresco de la Guerra del Chaco, cuando se comenzó a inscribir en la conciencia social el discurso del nacionalismo revolucionario, pero también el conjunto de creencias que lo acompañan, hasta 1984, cuando se interrumpe abruptamente la gestión del gobierno de Hernán Siles Suazo, obligado a renunciar por un chantajista Congreso de mayoría opositora, afligido por el laberinto económico al que llevó al país la hiperinflación, exigido por las demandas del movimiento obrero que quería ver materializadas sus expectativas en el frente popular.

La derrota popular deja un vacío político que es llenado por las pretensiones exacerbadas del neoliberalismo, discurso con pretensiones técnicas, seducido por los pronósticos apocalípticos del fin de la historia y la muerte de las ideologías, empero circunscrito en la práctica a una labor de cajero esmerado, a una práctica de ortodoxia administrativa. El neoliberalismo ingresa al gobierno en 1985, como se dice vulgarmente, pateando puertas. Su arrogancia desbordaba por los medios ante un perplejo y atónito entramado social, que no terminaba de comprender su propia derrota. Sin embargo, esta petulancia liberal contrasta con su vertiginoso paso por el gobierno: sólo llegó a durar una década y media. Terminó expulsado por la multitud proliferante, que lo había visto ascender estupefacta, y ahora se vengaba de aquella derrota, pero en un escenario político completamente distinto. Las heridas cicatrizaron, la experiencia política de las victorias y las derrotas se terminó convirtiendo en memoria del presente. El 2003 emergió de las profundidades de la geología de la formación social abigarrada de la multitud —de sus formas organizativas, sus prácticas asambleístas—, definiendo no sólo un nuevo mapa político sino también un nuevo espacio de relacionamientos sociales. El control social, la fuerza de las bases, la intelección del intelecto general, la democracia de la multitud, son las figuras puestas en escena.

Falta responder a las preguntas sobre las formas de acumulación de los movimientos sociales desatados en Bolivia en el 2000 y que se extienden hasta octubre del 2003. Este es un tema de análisis más que de descripción. En este sentido es menester su traslado a los enfoques teóricos. Aunque no busquemos por el momento una exposición amplia de la relación entre memoria colectiva y praxis del movimiento social, podemos optar por una exposición sucinta recurriendo a algunas hipótesis que iluminen el problema.

Una hipótesis

Según Paolo Virno (2003), la memoria es recuerdo del presente. De acuerdo a las tesis de Walter Benjamin, el pasado hace valer su pretensión mesiánica en el presente (Löwy, 2002). Es en el presente cuando se actualizan antiguas luchas, en el presente se abre la herida extemporánea para reivindicar a las víctimas del pasado. Ambos enfoques convierten al presente en el lugar privilegiado del acontecimiento, en un caso como el juego entre inactualidad (potencia) y actualidad, en otro caso como momento mesiánico. Retomando estos enfoques, podemos proceder a responder la pregunta sobre la acumulación de fuerzas en el movimiento social, el juego entre memoria y praxis.

El movimiento social es acción (praxis), actualiza su potencia, despliega su potencia, que es un todo no temporal de fuerzas. Al hacerlo temporaliza las fuerzas, las fragmenta, las dispersa en el espacio. El movimiento no realiza toda su potencia, pues ésta es infinita; si lo hiciera, suprimiría su propia potencia. La potencia es pues perduración. La memoria retiene el acto, difiere el acto, invierte el acto y hace como si éste viniera después de la memoria; entonces todo aparece como si la acción recordara algo, pero en realidad se trata de un recuerdo del presente. El movimiento social construye su memoria para interpretar sus propias acciones. La construcción adquiere dos tonalidades, una mesiánica, cuando reivindica a sus víctimas, y otra política, significando las actuales luchas mediante analogías con la utopía.

Los campesinos, mineros, gremialistas, desocupados, estudiantes, vecinos, ciudadanos y distintos sectores involucrados en el movimiento social boliviano del 2000 al 2003, han acumulado sus fuerzas, que es lo mismo que decir que han valorizado su propia experiencia, apoyados en la construcción de una memoria mesiánica (*katarista*) y política (marxista), dando un significado histórico a sus acciones en el momento presente. Son la multitud desbordante, el intelecto general autonomizado, los saberes colectivos sublevados contra la globalización, el capitalismo y el colonialismo. La multitud de múltiples rostros, pero también de múltiples acciones, de múltiples vivencias y de una enorme geografía bullente de localismos intensos. La multitud hace confluir sus múltiples acciones hacia el acontecer del acontecimiento, hacia un presente convergente, que carga

con todo el peso de estas acciones, del conglomerado de voluntades y de fines perseguidos. Potencia y acto dan lugar al momento histórico. La potencia hace de condición de posibilidad del acto y el acto efectúa la potencia. La potencia es el pasado inactual que acompaña constantemente al ahora. Esta concomitancia es entendida como momento histórico. El momento recupera el pasado potencial, también los pasados empíricos, otros *ahora* dados. Su acontecer adquiere significación histórica, por cuanto el presente se sostiene sobre esta densidad. El momento histórico es *bidireccional*, avanza y retrocede. Es como decir: todo avance es retrospectivo, y toda regresión es un devenir. Presente y futuro se asientan en el pasado potencial, pero también en el pasado empírico. El pasado potencial, al ser infinito, no se realiza plenamente. Se realiza fragmentariamente. Su realización incompleta se halla en el pasado empírico; por eso, en el momento histórico se trata de completar lo incompleto, o si se quiere, de realizar la utopía. Se busca rellenar los vacíos. Este relleno es el futuro. Se da pues una predisposición de la multitud a construir un futuro con los recursos que le brinda el pasado, tanto en su sentido potencial como en su sentido empírico. La acumulación de fuerzas, la fuerza de la memoria, no se da sólo por sedimentación de la experiencia sino también debido a la simultaneidad de potencia y acto, pasado potencial y praxis. Llamemos a esto *concomitancia diacrónica*². Un momento histórico rico en intensidades, como el relativo a las jornadas de septiembre-octubre, no solamente contiene una gran disponibilidad de fuerzas, es altamente convocativo, sino que dispone de la *contemporaneidad de lo no contemporáneo*³, dispone de la simultaneidad de acontecimientos pasados, vividos también con gran intensidad, que se hacen presentes como reclamando completarse.

Bibliografía

Löwy, Michael 2002 *Walter Benjamin: Aviso de Incendio* (México: Fondo de Cultura Económica).

Virno, Paolo 2003 *El recuerdo del presente* (Buenos Aires: Paidós).

Notas

1 La COMUNAL fue una propuesta organizacional, basada en la experiencia de la Coordinadora del Agua de Cochabamba. Esta vez se quería una coordinadora de los movimientos de carácter nacional.

2 Revisar en la obra citada de Paolo Virno sobre todo la segunda parte, "Temporalidad de la potencia, potencialidad del tiempo".

3 Esto escribió Ernst Bloch en *Herencia de Nuestro Tiempo*. El escrito de Bloch data de 1935. Hay una edición italiana en Sul Progresso, 1956, y otra reedición en 1990.

**Demandas ignoradas,
políticas anti-campesinas**

Ajuste y liberalización, las causas del conflicto social¹

Silvia Escobar de Pabón*

** Investigadora
del Centro de Estudios
para el Desarrollo Laboral
y Agrario (CEDLA).*

Fueron dieciocho años de ignorar los efectos de unas políticas que soñaban con un país moderno, pero que se dedicaban a fabricar exclusión y a sembrar pobreza por doquier, aunque con un denodado esfuerzo en el Altiplano boliviano. La denominada “guerra del gas” tiene sus raíces en esas políticas.

La agenda política del gobierno de Carlos Mesa ha dado prioridad a las demandas nacionales emanadas al calor de la revuelta popular: la recuperación del gas en beneficio de los bolivianos, el referéndum vinculante como mecanismo de consulta ciudadana y la convocatoria a la Asamblea Constituyente.

Sin embargo, pese a su dimensión trascendente, esta agenda resulta reducida ante las demandas sectoriales que originaron un conjunto de movilizaciones y enfrentamientos que precedieron a la denominada “guerra del gas”. Estas últimas –que se orientan tanto a cambios estructurales como a la superación de la crisis económica

y social en el país— siguen latentes y se expresan en una infinidad de acuerdos y convenios que, salvando algunas excepciones, han sido sistemáticamente incumplidos por los sucesivos gobiernos en los últimos dieciocho años.

Estas demandas deben ser enfrentadas por la actual administración gubernamental en un escenario de profundas limitaciones impuestas por la vigencia del modelo económico, leyes sectoriales, acuerdos bilaterales de comercio e inversiones, compromisos con organismos multilaterales de financiamiento, y presiones tanto de grupos empresariales como regionales.

Por esta razón, antes que en las reformas legales o institucionales, parece necesario detenerse en el análisis de los factores que dieron origen a los conflictos en la región de La Paz, como epicentro de la movilización popular, por cuanto permiten ilustrar una compleja realidad social que aqueja a sectores amplios de la población. Estos factores no pueden ser ignorados por más tiempo si se busca que la tregua social tenga un carácter relativamente duradero.

Un modelo en crisis

En el punto de partida se debe reconocer que la modificación de todo el andamiaje estatal a fin de compatibilizar el ordenamiento jurídico y legal a los preceptos del liberalismo ha sido de tal envergadura que, desde ese punto de vista, el país es radicalmente distinto al que prevalecía hasta 1985.

No ocurre lo mismo en el plano económico y social. En Bolivia, las reformas estructurales generaron una mayor concentración de la riqueza, de los ingresos y del consumo. Estos efectos se asocian cada vez más con la dinámica excluyente del mercado y una forma de intervención del Estado que deja por fuera a las demandas de los campesinos, los pequeños productores, los trabajadores del campo y las ciudades, a favor de los grupos de mayor poder económico.

En este sentido, las políticas económicas, la capitalización de las empresas públicas, y otras disposiciones que favorecen el libre flujo de capitales, han consolidado una reestructuración productiva que traslada a manos de las empresas transnacionales y a los sectores de su interés los ejes del crecimiento económico: hidrocarburos, comunicaciones, servicios financieros. Se trata de sectores intensivos en capital, con escasos eslabonamientos con el resto de la economía y con una reducida contribución a la generación de empleo.

***“El desempleo,
los bajos salarios
e ingresos,
el escaso impacto
distributivo
de la política social,
y el agravamiento
de las condiciones
de pobreza,
asociados a
la vigencia
del modelo
económico,
son parte
de una realidad
inocultable
que afecta
a más de dos tercios
de los hogares
bolivianos”***

En ausencia de políticas de desarrollo productivo, el país sigue siendo exportador de materias primas y recursos naturales con escaso valor agregado. La participación de la agropecuaria y la industria manufacturera en el producto interno bruto tiene un comportamiento errático y altamente vulnerable a factores climáticos y a los cambios en los precios internos y externos, en un contexto de apertura comercial extrema que pone al descubierto las limitaciones de la base productiva para elevar la productividad y competitividad.

Con este panorama en el trasfondo de fracaso económico en la transformación de la matriz productiva del país y la capacidad de la economía para generar empleos, la mirada del sector privado y de dos gobiernos consecutivos se volcó nuevamente a la inversión pública como la panacea para resolver los problemas económicos y sociales más acuciantes de la sociedad.

Bajo las condiciones actuales, y aún con una fuerte voluntad política, parece estar claro para los movimientos sociales que esto no se constituirá en una solución genuina a sus problemas. Por el contrario, han hecho notar que por este camino las soluciones son apenas paliativas y apuntan sólo a salvar, en el corto plazo, a un sector del empresario nacional muy golpeado por la crisis.

Si la perspectiva en lo económico y productivo no es auspiciosa, en lo social el panorama es aún mucho más preocupante. El desempleo, los bajos salarios e ingresos, el escaso impacto distributivo de la política social, y el agravamiento de las condiciones de pobreza, asociados a la vigencia del modelo económico, son parte de una realidad inocultable que afecta a más de dos tercios de los hogares bolivianos.

Esta realidad es reconocida no solamente por los gobiernos sino también por los organismos multilaterales. Lamentablemente, este reconocimiento es asimilado como una simple evidencia cuantitativa, como un “dato”

más de la realidad nacional, y no ha existido voluntad política alguna para una consideración profunda acerca de sus causas y sus consecuencias.

En este contexto, uno de los sectores más afectados por la actual orientación de políticas es el agropecuario campesino del Altiplano. Es preciso detenerse en el análisis del comportamiento de este sector a partir de las políticas de inversión pública y de apertura comercial —ejes centrales de las reformas estructurales— para tener en claro las dimensiones de la movilización social en la “guerra del gas”.

Grandes ausentes: inversión pública y recursos productivos

Siendo el acceso a recursos productivos una demanda permanente, ninguna política o servicio dirigido al sector agropecuario tuvo como destinatario principal a los productores campesinos del Altiplano, ni antes ni después de la aplicación del nuevo modelo económico.

Sin embargo, en el nuevo escenario, el cambio en las prioridades del gasto fiscal relega radicalmente la inversión productiva acentuando el abandono de las necesidades y demandas de los productores campesinos, lo cual a su vez se agrava con el cierre de los escasos servicios que estaban a su alcance en el modelo estatal previo: la banca estatal de fomento para el sector, el sistema de créditos en insumos agrícolas con carácter masivo y a precios subsidiados, los servicios de asistencia técnica e investigación agropecuaria.

Con mayor fuerza en las dos últimas décadas, el Estado boliviano no ha apoyado la ampliación de las bases productivas campesinas —disponibilidad de más y mejores tierras, riego, investigación, asistencia técnica, crédito en condiciones y a tasas a su alcance— que posibiliten mejorar la productividad y la competitividad de al menos los productos con mayor potencialidad. En particular, las demandas vinculadas con el acceso a más y mejores tierras, un factor crucial para los productores campesinos, han estado irremediablemente postergadas.

Si bien es cierto que la Ley INRA² contiene disposiciones relativas a la posibilidad de acceso a la tierra para propiedades colectivas e individuales, no las hace depender de la disponibilidad de tierras fiscales, que en las condiciones de concentración que prevalecen en el país serían el resultado de la reversión de las grandes propiedades de tierras que no cumplen una función económica-social.

Sin embargo, luego de siete años de aplicación de la Ley INRA, el resultado es pobre en términos de reversión y, por lo tanto, de dotación a campesinos sin tierra o con exten-



siones insuficientes. Un reciente comunicado de la Federación Sindical Única de Campesinos de Santa Cruz ilustra este extremo: en ese largo período se habrían legalizado solamente las parcelas de dos sindicatos, con una extensión no mayor a las 500 hectáreas, para cerca de 70 familias.

Como si fuera poco, la inversión pública en el sector agropecuario se fue reduciendo en términos absolutos y relativos, no sólo debido a las dificultades financieras del país, sino también a la idea dominante de restricción de la inversión pública productiva a favor de la inversión social promovida por los organismos multilaterales y respaldada por los gobiernos.

Mientras que no más de 60 millones de dólares se destinan a la inversión pública en la agricultura, la inversión por habitante en el ámbito municipal no sobrepasa un dólar por año, o expresado de otro modo, un promedio de 6 mil dólares anuales por municipio. De acuerdo con la información oficial para el año 2000, sólo una cuarta parte del total de la inversión pública es ejecutada por los municipios, y éstos invierten un promedio anual de 1,2% de los recursos en la agropecuaria³.

En estas condiciones, las necesidades locales en el área rural rebasaron las posibilidades reales de atención a través del componente "apoyo a la producción", que se asigna como responsabilidad a los municipios en la Ley de Participación Popular, y mucho más si se considera el apoyo directo a las actividades productivas que demandan los campesinos.

Los golpes de la apertura

Desde la perspectiva campesina, la apertura comercial iniciada en 1985 marca una diferencia sustancial entre las condiciones previas y las que rigen en el nuevo escenario para su desenvolvimiento.

Considerando los factores estructurales y la racionalidad productiva que caracterizan a la economía campesina, la competitividad de su producción es absolutamente débil en comparación con sus similares y la agricultura empresarial en otros países. Desconociendo esta realidad, ningún producto campesino fue incorporado en alguna franja de sensibilidad en los acuerdos comerciales bilaterales o regionales que el país suscribió en los últimos dieciocho años.

Como resultado, la política favoreció a las importaciones competitivas o sustitutivas de la producción campesina. El ingreso de productos presionó a la baja de los precios domésticos repercutiendo en los magros ingresos de los productores y determinó cambios en los sistemas productivos. De esta manera, se asistió al deterioro del Valor Bruto de la Producción Campesina (VBPC): en 1998, en la región andina, el VBPC era apenas el 44% de 1985, mientras que en las tierras bajas era sólo del 49%.

Este dramático descenso ocurrió a pesar del crecimiento de la producción, y por tanto se vincula con el deterioro creciente de los precios ocasionado por la apertura externa. Entretanto, las zonas menos favorecidas para la producción agropecuaria por su topografía abrupta, exposición a fenómenos naturales adversos, suelos pobres y parcelas fragmentadas, se ubican en el altiplano y los valles secos de la región andina, y son las más expuestas a un deterioro del ingreso campesino y al mayor empobrecimiento rural.

Sin duda, la reducida inversión pública en el marco de la descentralización y la apertura comercial son las dos políticas con mayor impacto en la secular acción anti-campesina del Estado boliviano: la primera, limitándoles la posibilidad de mejorar sus bases productivas para elevar su productividad y competitividad; la segunda, exponiéndolos a competidores externos de aventajadas tecnologías.

Paradójicamente, con las negociaciones en el marco del acuerdo del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsado por los Estados Unidos, se apuesta peligrosamente al desarrollo de una capacidad exportadora que no existe, al menos no para el caso de los campesinos. Nuevamente, esto significa adscribirse al acuerdo del ALCA, lo que supone la profundización de las políticas liberales, sin haber evaluado críticamente los resultados de las políticas en curso.

La apertura a ultranza a la inversión privada extranjera con la sola promesa de un “ilimitado” mercado abierto para el desarrollo de la capacidad exportadora no parece augurar resultados a favor de las condiciones de producción y reproducción para los campesinos u otros sectores productivos del país.

Los productores campesinos son cada vez más conscientes de las consecuencias de este conjunto de factores con los que asocian su mayor empobrecimiento y la desintegración social en el campo, que más temprano que tarde los obliga a la emigración temporal y definitiva en busca de mejores condiciones de vida, en particular en las ciudades capitales y ciudades intermedias de su entorno. Un destino frecuente de estos flujos migratorios es la ciudad de El Alto.

El Alto: el receptáculo del Altiplano

El deterioro de las condiciones de producción y de vida del campesinado del Altiplano de La Paz, Oruro y Potosí, y de las ciudades intermedias de estos mismos departamentos, ha sido fundamental en la emergencia de El Alto como la tercera ciudad en tamaño de población en el país, después de Santa Cruz y La Paz, con 650 mil habitantes en 2001.

En los noventa, El Alto, superada sólo por Santa Cruz, ha sido el principal destino de la población inmigrante en el país, con una tasa de crecimiento anual de su población superior al 5%. Cuenta con una población extremadamente joven (60% menores de 25 años) y en las edades de mayor fecundidad y propensión a la actividad económica: sólo el 10% de sus habitantes tiene 50 años y más. Por su origen y cultura puede ser calificada como una ciudad predominante aymara.

Su rápido crecimiento demográfico está acompañado de una extrema precariedad en las condiciones de vivienda y cobertura de servicios básicos (70% de los hogares no cuenta con alcantarillado e instalación sanitaria), pero también de una infraestructura social deficitaria considerando los servicios hospitalarios y el número y calidad de los establecimientos educativos.

Los recursos que provienen de la coparticipación tributaria apenas permiten una inversión por habitante equivalente a 15 dólares por año. Considerando además los bajos ingresos municipales por otros conceptos y la reducida inversión que realiza la prefectura, se puede concluir que es una de las ciudades menos favorecidas por la inversión pública en el marco de la descentralización.



A esto se suma su débil base material para la producción, concentrada en micro y pequeñas unidades económicas de baja productividad y que operan con escasos recursos complementarios al trabajo: capital, tecnología, crédito, asistencia técnica, capacitación. El 98% de los establecimientos en los diferentes rubros de actividad tienen estas características, y en su mayoría reproducen su ciclo productivo y de servicios en las condiciones iniciales, generando magros ingresos a sus ocupados.

En El Alto se encuentra una de las tasas más elevadas de la población en la actividad económica entre los hombres y las mujeres, pero también los mayores índices de trabajo infantil, y el promedio más alto de personas ocupadas por hogar.

Por otra parte, los jóvenes alteños han mejorado notablemente sus niveles educativos promedio y presionan por empleos acordes con su capacidad, expectativas y necesidades. Sin embargo, el desempleo y la incertidumbre laboral los acechan de manera constante, situación agravada por la discriminación social de que son objeto en el mundo del trabajo.

A pesar de esta enorme movilización de su fuerza laboral disponible, el 60% de los hogares permanece bajo la línea de pobreza, y la mitad de éstos se encuentran en la indigencia, lo que muestra la precariedad de su inserción ocupacional, pero sobre todo la inseguridad crónica en sus ingresos y los montos reducidos de éstos.

Frente al fracaso de un patrón de crecimiento que no beneficia a la mayoría de los productores y trabajadores del país, durante el conflicto de octubre emergieron solidaridades fuertemente marcadas por el origen y la cultura, pero también nuevas demandas.

Los habitantes de El Alto, izando la bandera de las reivindicaciones campesinas y las propias como trabajadores independientes, obreros, empleados y ciudadanos, rechazaron con fuerza al autoritarismo y la masacre como respuesta a sus legítimas aspiraciones, y plantearon como camino alternativo recuperar los recursos naturales y el ahorro nacional disponible para financiar un desarrollo con integración social.

El cambio que debe ser

Los planteamientos pasan por aspectos de fondo, como el cambio de modelo económico, comenzando por la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos y la industrialización del gas, el control de otros recursos naturales (los bosques y su biodiversidad, el agua, etc.), y el rechazo a la apertura al comercio y las inversiones bajo las condiciones del ALCA.

En el ámbito sectorial, más de sesenta demandas han sido actualizadas para plantearlas al nuevo gobierno. Entre otras, la modificación de la Ley INRA y el acceso a tierras productivas para campesinos y los trabajadores sin tierra; la anulación y sustitución de la Ley 1008; el apoyo directo a la producción para mejorar las bases productivas en la minería mediana, agropecuaria campesina, micro y pequeñas empresas; el apoyo al desarrollo rural; la anulación del código tributario y el rechazo a medidas tributarias de carácter regresivo; la estabilidad laboral, nuevas fuentes de trabajo e incrementos salariales en función del costo de vida.

De esta manera parecen haberse inaugurado movimientos sociales de nuevo cuño y la emergencia de nuevos liderazgos que cuestionan al conjunto del sistema político exigiendo su participación en la toma de las decisiones que les afectan, quizás la consecuencia más sobresaliente de la llamada "guerra del gas".

Notas

1 Este artículo ha sido publicado en el boletín *Coyuntura* N°3 de octubre de 2003 del CEDLA.

2 N. de la E.: Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria. Lleva el número 1715 y el nombre de ley INRA que se le da popularmente se refiere al Instituto Nacional de Reforma Agraria que fue creado por dicho texto.

3 Es importante señalar, a título comparativo, que los recursos destinados a aliviar la crisis de las empresas privadas superan los 150 millones de dólares.

MAS-IPSP: la emergencia del nacionalismo plebeyo¹

Pablo Stefanoni*

* *Licenciado en Economía (UBA), Maestrando en Ciencia Política (IDAES-UNSAM). Miembro de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP) y del Grupo de Trabajo de CLACSO "Transformaciones en las formas de hacer política en el Área Andina".*

La recurrente pregunta acerca de ¿qué es Bolivia? ha vuelto a desplegar un *litigio* (Rancière, 1996); esta vez sobre el orden neoliberal sintetizado en el Decreto Supremo 21060, firmado por Víctor Paz Estenssoro el 29 de agosto de 1985. Nuevas narrativas, imaginarios sociales y redes de sentido comenzaron a interpelar fuertemente el discurso "modernizador" impulsado por las élites políticas, económicas e intelectuales del país, cuyo portavoz carismático fue hasta hace poco tiempo Gonzalo Sánchez de Lozada. Y una "memoria explosiva" contribuyó a transformar el "vínculo imaginario con las condiciones de existencia" (Ansart, 1983), proponer reorganizaciones alternativas del pasado y enunciar –aunque sea aun de forma difusa– una reorganización diferente del futuro (Tapia, 2000). O, dicho de otra forma, comenzó a recuperarse la capacidad de autocomprensión y autogobierno que forma parte de la reserva simbólica del movimiento popular boliviano.

Esta recomposición identitaria –luego del declive del combativo movimiento obrero minero– le permitió a la izquierda reconstituir formas de interpelación eficaces y “pluralizar los centros de irradiación discursiva” (García Linera, 2003: 3) luego de más de una década y media de “discurso único” neoliberal. Esta vez con *rostro indio*, por fuera del “paraguas” del Nacionalismo Revolucionario (NR) y movilizándolo una fuerza social fundamentalmente rural: cocaleros del Chapare y los Yungas de La Paz, y comunarios aymaras del Altiplano. En esta línea proponemos leer el nuevo ciclo de acción colectiva que permitió el desborde electoral de los movimientos sociales y la constitución de un nacionalismo plebeyo, cuya fuerza acaba de desplegarse durante la “guerra del gas” y una de cuyas expresiones es el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos.

Campesinos-cocaleros: repertorio de acción colectiva y construcción de sentido

Las organizaciones cocaleras han logrado convertirse, desde fines de los años ochenta, en uno de los componentes más activos de la lucha social en Bolivia y uno de los sectores que más contribuyeron a revitalizar y fortalecer el movimiento sindical campesino. Esta emergencia como movimiento social se vincula principalmente a la “intromisión” del Estado boliviano (y de Estados Unidos) –en el marco de la “lucha contra el narcotráfico”– en su actividad productiva, mediante planes de erradicación forzosa y desarrollo alternativo que restringen la “libertad de mercado” promovida por la letra del neoliberalismo.

Los bloqueos de caminos –con capacidad para incomunicar a la región andina con el Oriente boliviano, mediante el bloqueo de la carretera troncal Cochabamba-Chimoré-Santa Cruz en el Chapare, o el acceso al Norte de La Paz a través de los bloqueos en los Yungas– y la confrontación con las fuerzas policiales y militares erradicadoras, han resultado en poderosas demostraciones de fuerza y capacidad de movilización que desafían el principio de autoridad y soberanía estatal. Pero sin duda, una de las rutinas más eficaces de los cocaleros como mecanismo de sensibilización han sido las marchas de grandes grupos poblacionales hasta la sede del gobierno en La Paz, que a través de la explicitación del espíritu de sacrificio y del cuerpo social en movimiento, junto con la eficacia de su resistencia, han logrado visibilizar un conflicto desarrollado al interior del Chapare (y los Yungas) y obtener un fuerte apoyo social.

Al igual que los mineros a mediados de los ochenta y los indígenas del Oriente, los cocaleros han concebido a la marcha como un recurso desesperado de *revelación* del grupo social en tanto colectividad, que –haciendo uso del propio cuerpo y autoimpo-

***“Emergió
un movimiento,
mezcla de izquierda
rural y urbana,
sindicalismo y etnia,
capaz de articular
un discurso
anti-neoliberal
y antiimperialista,
e incorporar
una visión
étnico-cultural
andina que interpela
a otros sectores
empobrecidos
y marginados
de la sociedad
boliviana”***

niéndose una serie de penalidades— busca la congregación de la solidaridad ciudadana a través de dos formas de interpelación: apelando a los sentimientos humanitarios de la gente (a partir del deterioro de los marchistas por los días de marcha o los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad); y al mismo tiempo, a los sentimientos de solidaridad político-ideológica por medio de la interpelación discursiva (Camacho Balderrama, 1999: 15-17), inscrita desde el nombre mismo con el que es bautizada cada marcha.

A través de una operación hegemónico-discursiva el signifi-
ficante *coca* —asociado por los gobiernos boliviano y esta-
dounidense con narcotráfico y cocaína— fue progresiva-
mente resignificado como “hoja milenaria heredada de
nuestros antepasados” y, fundamentalmente, “defensa de
la dignidad nacional”; convirtiendo al discurso en defensa
de la coca en una superficie de inscripción para el cre-
ciente cuestionamiento a la subordinación nacional a los
mandatos de la embajada estadounidense, cuya abierta
intervención en los asuntos internos de Bolivia asume
características imperiales. Por otra parte, la incorporación
de símbolos tradicionales como *pututus* y *wiphalas* en las
movilizaciones cocaleras da cuenta de la andinización o
wiphalización de su discurso. A la vez que la coca como
recurso natural “de interés estratégico” permite una cierta
recuperación —selectiva— de la retórica original del NR
(Argandoña, 2002), sólo que ya no se trata de la plata o
el estaño sino de la hoja “sagrada”.

De esta forma, los cocaleros han sido capaces de articu-
lar una serie de alianzas que pusieron a la defensa de la
coca en el centro de las luchas sociales y políticas del país,
y les permitieron hegemonizar una amplia serie de
demandas contra el “modelo” neoliberal; al tiempo que
incrementaban su participación en los foros y congresos
internacionales “anti-globalizadores” (Foro Social Mundial,
Campaña Continental contra el ALCA, congresos campesi-
nos, etcétera). Emergió así un movimiento, mezcla de
izquierda rural y urbana, sindicalismo y etnia, capaz de

articular un discurso anti-neoliberal y antiimperialista, e incorporar una visión étnico-cultural andina que interpela a otros sectores empobrecidos y marginados de la sociedad boliviana (Zegada, 2002).

Articulando lo social y lo político: el Instrumento Político de las organizaciones sindicales

Globalmente, la emergencia del MAS-IPSP es difícilmente desligable de la ruptura del “equilibrio moral” producto de más de una década de neoliberalismo, y de siglos de prácticas coloniales. Asimismo, no es comprensible lo ocurrido desde mediados de los años noventa sin tomar en cuenta la “irradiación” de las formas organizativas e ideológicas del sindicalismo obrero –especialmente a partir de la crisis minera– a las zonas de colonización más reciente, que transmitieron una experiencia acumulada y contribuyeron a politizar reivindicaciones de carácter económico-corporativo.

Al mismo tiempo, otros factores –de carácter más o menos coyuntural– intervinieron en el clima de “disponibilidad política” del que se benefició el MAS (incluso más allá de sus propias expectativas): a) la reinención de una narrativa de corte étnico que retoma las tesis del colonialismo interno (cuya difusión se debe en gran medida al liderazgo de Felipe Quispe en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia-CSUTCB); b) el creciente sometimiento del Estado boliviano a los dictados de la embajada estadounidense –especialmente en la cuestión de la erradicación de la coca– que creó un clima *antiimperialista* que recorrió transversalmente a diferentes sectores de la sociedad; c) el rechazo a los partidos políticos tradicionales, común a otras naciones del continente, especialmente en la región andina; d) la pérdida de capacidad articuladora del NR entre los diferentes grupos sociales; e) el espacio “vacío” dejado por la profunda crisis de experiencias neo-populistas como el partido Conciencia de Patria (CONDEPA) –y en menor medida la crisis de Unidad Cívica Solidaridad (UCS)– especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto; f) los efectos político-sociales del Plan Dignidad; que aumentó la violencia del conflicto cocalero y golpeó duramente a la economía del Chapare, con un efecto multiplicador negativo sobre toda la región cochabambina; g) la Ley de Participación Popular y la introducción de las diputaciones uninominales (reforma del Artículo 60 de la Constitución Política del Estado), que mejoró la estructura de oportunidades políticas para el MAS-IPSP, al permitirle acceder a varios gobiernos municipales, especialmente en la región cocalera del departamento de Cochabamba, y cargos legislativos nacionales; y h) *last but not least*, la irrupción democratizadora de los movimientos sociales, cuyas expresiones iniciales fueron la guerra del agua en Cochabamba en abril de 2000 y el ciclo de bloqueos aymaras del altiplano, entre abril y septiembre del mismo año.



La Tesis del Instrumento Político parece insertarse plenamente en una larga tradición de superioridad del sindicato sobre el partido, que ha marcado la lógica organizativa del movimiento popular, especialmente desde los años cuarenta. Como recuerda Zavaleta Mercado (1983) los sectores subalternos bolivianos son en primer lugar “clases sindicalistas”, en la medida en que su *acumulación en el seno de la clase* se da primariamente a través de la forma sindicato. De allí que esta forma organizativa remita a una organización más compleja y extensa que el sentido corriente del término. En el caso de los campesinos, detrás del nombre “sindicato” se “ocultan” instituciones que en muchos casos se superponen con las instituciones originarias (*ayllus*) y corrientemente constituyen organismos de poder con funciones estatales en las comunidades (ver Gordillo, 2000; Lagos, 1997), maquinarias territoriales, sociales y ahora electorales.

Luego de una serie de intentos fallidos (entre ellos, la Asamblea de Unidad de las Naciones Originarias) se constituyó la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP), resultante de la Tesis del Instrumento Político aprobada por el Primer Congreso Tierra y Territorio reunido en marzo de 1995 y que consistía en la fundación de un movimiento organizado como extensión de las instancias sindicales campesinas que venían protagonizando grandes movilizaciones en defensa de la tierra, el territorio y contra la erradicación de los cultivos de coca. Se abrió así un proceso que luego de una serie de divisiones culminó en el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), liderado por Evo Morales, el cual, al no contar con reconocimiento electoral, utilizó la personería jurídica del MAS, un desprendimiento lejano de Falange Socialista Boliviana (FSB), que en los últimos años había girado a la izquierda².

De esta forma, los “partidos” emergentes del nuevo ciclo de luchas campesino indígenas han nacido a partir de congresos sindicales de los movimientos sociales (cocaleros del Chapare y los Yungas, e indígenas del Altiplano) para conseguir proyección política y una prolongación parlamentaria de la acción colectiva (García Linera, 2003). Estas gigantescas maquinarias sindicales y comunitarias han mostrado ser eficaces fuentes de “capital político” con capacidad para disputarle los votos a los partidos tradicionales y modificar el escenario discursivo nacional en un contexto en el que hacer política electoral ha devenido un mandato de asamblea.

Después de una década y media de hegemonía de los partidos tradicionales, dos figuras surgidas de la resistencia social contra el modelo neoliberal –Evo Morales y Felipe Quispe– fueron legitimados con un gran caudal de votos. Y el líder del MAS quedó a menos de dos puntos porcentuales del triunfador –Gonzalo Sánchez de Lozada, del Movimiento Nacional Reformista (MNR)– quien fue finalmente elegido presidente por el Congreso en junio de 2002³. Podemos arriesgar que –a diferencia de fenómenos previos como el del compadre Carlos Palenque⁴– estos nuevos liderazgos contribuyen a desarrollar un proceso de liberación cognitiva *desde abajo*; en el cual los indios están a la cabeza de manera autónoma y los liderazgos son construidos a partir de un largo proceso de ocupación sucesiva de cargos en el sindicato campesino, para luego ocupar posiciones en el Instrumento Político (IP) y, eventualmente, en el Parlamento.

Aunque, al mismo tiempo, la inexistencia real de institucionalización en el MAS y de mecanismos internos de expresión de mayorías y minorías, abona un sistema de toma de decisiones en las que el líder (y *árbitro*) se apoya alternativamente en coaliciones coyunturales; en cuyo poder y capacidad de persuasión sobre el líder intervienen capitales legítimos variados, que difieren según la temática en discusión: capacidad de movilización sindical-corporativa, capacidades discursivas, formación “técnica”, etcétera. Más que de fracciones se trata de grupos de presión informales (según

***“... los ‘partidos’
emergentes
del nuevo ciclo
de luchas campesino
indígenas han nacido
a partir de congresos
sindicales
de los movimientos
sociales (cocaleros
del Chapare
y los Yungas,
e indígenas
del Altiplano)
para conseguir
proyección política
y una prolongación
parlamentaria
de la acción
colectiva”***

proveniencia ideológica, relaciones personales, étnicas, etc.), que en un escenario gelatinoso, corrientemente no logran “solidificarse”; todo lo cual reafirma el papel arbitral de Evo Morales como garantía de continuidad del MAS como una empresa política común⁵.

De todas formas, no hay que olvidar que cuando se trata de posicionamientos políticos generales –o acciones como bloqueos, etc.– Morales “baja” a los congresos y amplios sindicatos campesinos, actitud que sin duda encarna mucho más que una pose y representa una instancia de “confirmación carismática” (Weber, 1998: 195). El encuentro *cara a cara* con las bases –al igual que con sus votantes– resulta clave en la construcción de liderazgo de Evo Morales; su vestimenta, vocabulario (y su constante victimización) constituye un eficaz intento de diferenciación con respecto a los “políticos tradicionales”, presentándose genuinamente como *uno más* entre sus compañeros campesinos, pese a haber ocupado espacios antes reservados a quienes poseían los beneficios de la distinción. Este ser *uno más* –un portavoz privilegiado de los campesinos que siempre vuelve a sus bases, y que se esfuerza por aprender para responder a sus actuales responsabilidades– le ha permitido a Evo Morales la producción de un “poder simbólico” al interior del sindicalismo cocalero (y desde allí en el Instrumento Político) a partir de la credibilidad, la confianza, el reconocimiento y la fidelidad de sus pares; y la constitución de una lógica de “inclusión-exclusión” sobre sus potenciales competidores internos (Ansart, 1983). La conservación de este poder simbólico es especialmente importante en el contexto de un movimiento concebido como una extensión de estructuras sindicales, atravesado por relaciones informales y asimétricas capitales sociales, escolares, culturales y étnicos entre sus miembros.

El MAS en su laberinto

Luego de los favorables resultados electorales, uno de los desafíos que afronta el MAS es la construcción de una estructura discursiva que, a partir de cierto “cierre” ideológico, le permita crear una *síntesis* coherente entre una relectura del pasado colonial y una propuesta de futuro; destinada a atraer el apoyo de las clases medias urbanas, más vinculadas a los procesos de individuación modernizante y alejadas de las lógicas sindical-corporativas predominantes en el MAS. Por el momento, en un contexto de ambigüedad ideológica –propio de las organizaciones sindicales de las cuales es una “extensión”– prevalece una suerte de “murmullo ideológico” (Antezana, 1983) basado en la oposición al neoliberalismo y la defensa de la soberanía y la dignidad nacionales.

Pese a ello puede observarse el intento de articulación de elementos nacional-democráticos (tendiente a recuperar el antagonismo social, corrientemente presentado por los sectores dominantes como mera “diferencia”): una idea de nación plebeya (pueblo



sencillo y trabajador, pueblos originarios, o simplemente “los pobres”), la defensa del territorio y la soberanía (centrada especialmente en los recursos naturales: gas, petróleo y hoja de coca), combinada con una fuerte interpelación antiimperialista (fundamentalmente antiestadounidense) vinculada a la defensa de la “dignidad”. De allí que el antagonismo

pueblo=nación/oligarquía=antinación, propio del NR, esté presente en el discurso del MAS, aunque el pueblo no sea ya una “construcción” mestizo-criolla como la imaginaron los teóricos del NR (Montenegro, Céspedes), sino “originaria” y anticolonial⁶.

En sus interpelaciones discursivas puede observarse que el reclamo del “derecho a gobernar esta tierra”, o que “el pueblo sea poder”, parte fundamentalmente de una contabilización numérica, que se expresa en el uso de la propia sigla partidaria en la consigna “Somos pueblo, somos MAS”; y difiere de la interpelación obrero-minera predominante hasta 1985, en la que la idea de que su trabajo y esfuerzo “sostenían” –económicamente– al conjunto de la nación era la que les daba “derecho” a gobernar, pese a ser un grupo minoritario de la sociedad.

La reivindicación de una Asamblea Popular Constituyente representa un eje importante en el discurso del MAS, entendida no como una mera reforma constitucional sino como la materialización de una “nueva correlación de fuerzas” (Evo Morales en *Pulso*, 2002). Sin embargo, la no puesta en práctica de los Comités de Defensa de la Soberanía en las ciudades (tal como se había propuesto en la pasada campaña electoral) y la falta de discusión en las bases de un proyecto de país alternativo, han hecho que esta propuesta haya perdido cierta fuerza como apuesta de transformación político-social.

Paralelamente la prematura electoralización de la actividad política (con vistas a las elecciones municipales de 2004, como “trampolín” para las presidenciales de 2007) “puede inhibir los repertorios de acción colectiva que son los que en el fondo dieron lugar a este nuevo ciclo de resurgimiento de la izquierda” (García Linera, 2003: 4); lo que puede tener un efecto potencialmente negativo en un movimiento que se piensa a sí mismo como una extensión política de las pulsiones de los movimientos sociales (incluso en el ámbito electoral)⁷. La combinación en la práctica de lógica sindical-comunal y lógica

democrática-liberal –y las estrategias que intervienen en cada una– no ha resultado fácil para los parlamentarios del MAS, que en gran parte fueron elegidos –y responden– a sus comunidades y, especialmente, a sus organizaciones sindicales.

El encuentro de las “dos Bolivias” no ha resultado exento de conflicto. A las formas de discriminación, derivadas del carácter racializado de la construcción del poder en Bolivia, se suma la posesión de capitales sociales, culturales, escolares y simbólicos cuya posesión o no determina la eficacia de la acción parlamentaria, el éxito o la futilidad de sus interpelaciones discursivas, y su visibilidad o invisibilidad intra y extramuros; que a través de los medios de comunicación, determinará la capacidad de crear “opinión pública”. Como nos recuerda Bourdieu (2001: 29) “los locutores desprovistos de la competencia legítima quedan excluidos de los universos sociales en que ésta se exige o condenados al silencio”. Y esto ocurrió en gran medida con los diputados campesino-indígenas, conspirando contra la transformación del *factor indígena* en fuerza hegemónica: en sus discursos, en su capacidad interpelatoria en castellano, e incluso en la forma de ocupación física del espacio parlamentario.

Más bien, en el ámbito parlamentario parecen invertirse las relaciones de fuerza simbólicas que priman en el MAS, y son los sectores medios urbanos quienes poseen mayor capacidad performativa. Resulta claro que la lengua quechua o aymara adquiere un mayor valor en el mercado rural –donde sin duda contribuye a la formación de capitales políticos– que en el medio urbano y especialmente en el Parlamento. No es difícil percibir en la frase “¿Adónde está entrando, señora?”⁸ ecos sutiles de viejas representaciones acerca de los indígenas y de su inclusión-exclusión en los diferentes espacios de la vida social, cuando los indios tenían prohibido circular libremente por las plazas y vías principales de las ciudades (Rivera Cusicanqui, 1983). Por eso su presencia en los curules y la imposición de un sistema de traducción simultánea (que aún no se utiliza) crea un escenario de lucha simbólica entre las prácticas señoriales de las élites blanco-mestizas y la presencia indígena-plebeya como un *otro* (portador de alteridad) que ocupa un espacio ajeno.

Entre lo nacional-popular y lo nacional-estatal

No hay duda que la tesis del instrumento político supone una importante carga de renovación en una historia político-sindical campesina subordinada en gran medida al Estado nacionalista. La interpelación a “votar por nosotros mismos” plantea una renovada forma de articulación entre las luchas sociales y electorales, luego de largos años en que obreros y campesinos votaban por diversas fracciones del MNR o planteaban el no-juego en el terreno electoral; claramente *lo* indio se ha transformado en una importante fuente de capital político, posibilitando que de manera autónoma un campesino de origen aymara como Evo Morales se erija en jefe de la oposición y de la primera minoría par-

lamentaria. Por otro lado, las nuevas configuraciones sociales, producto de una década y media de reformas estructurales, han posibilitado la emergencia de formas novedosas de interunificación social, acción colectiva y producción discursiva.

Pero no es menos evidente que las nuevas tecnologías puestas en juego por los movimientos sociales tienen como condición material de posibilidad a las antiguas organizaciones sindicales corporativas, desde las cuales el movimiento campesino se enfrentó con la oligarquía y luchó por la tierra en los primeros años cincuenta, pactó con las fuerzas armadas restauradoras a mediados de los sesenta, impuso una nueva narrativa anti-colonial y se articuló con el movimiento obrero en los setenta, y desafía hoy al trunco proyecto modernizador neoliberal.

Frente a las polarizadas visiones actuales acerca de cómo “cambiar el mundo”, el MAS-IPSP plantea sin fisuras la necesidad de transformar el poder conquistado por las organizaciones sociales en poder estatal; en el contexto del nuevo ciclo de luchas y transformación de la estructura de oportunidades políticas en beneficio de la acción colectiva de los sectores subalternos. Frente a la desidentificación nacional neoliberal, el MAS emerge como un nuevo nacionalismo plebeyo que resignifica la lucha nacional como una lucha por la tierra y el territorio, y pone en un lugar destacado la defensa de los recursos naturales, cuya dinámica ha dominado los enfrentamientos sociales en Bolivia desde 2000, desde la *guerra del agua* hasta la *guerra del gas*. Es, al mismo tiempo, un intento de articular a una multitud de sujetos, organizaciones y movimientos sociales en la que ningún sector es portador de privilegios ontológicos en la construcción de las nuevas identidades, por lo que las mismas son resultado de las luchas hegemónicas y articuladoras en curso.

Su agregación en un sujeto *popular* –pueblo sencillo y trabajador, e incluso empresarios nacionales o “patrióticos”– como bloque antagónico al orden establecido parece acercarse más a una interpelación de tipo populista que a las fórmulas interpelatorias tanto de las izquierdas tradicionales –sostenidas en la existencia de una clase “fundamental” cuya identidad se construye al nivel de la infraestructura económica– como de la *New Left* en países más institucionalizados. De allí que la tensión entre la dimensión nacional-popular (ruptura y confrontación) y la nacional-estatal (desactivación de los antagonismo y homogeneización) (Aboy Carlés, 2003) acompañe el desarrollo del MAS, en un contexto de crisis donde la implosión del *gonismo* ha derribado el “cerco parlamentario” y la megacoalición oficialista, y la convocatoria a una futura Asamblea Constituyente puede transformarse en una importante oportunidad política para quienes propugnan alternativas transformadoras. Pero como toda “oportunidad” será limitada en el tiempo y los resultados dependerán de las luchas político-ideológicas, en un escenario crecientemente radicalizado y dicotómico, entre las fuerzas “restauradoras” y las empeñadas en una transformación radical y progresista de la sociedad.

Bibliografía

- Aboy Carlés, Gerardo 2003 "Repensando el populismo", en *Política y Gestión* (Buenos Aires) Vol. 4.
- Alenda Mary, Stéphanie 2002 "CONDEPA y UCS, ¿fin del populismo?", en *Opiniones y Análisis* (La Paz: Fundación Hanns Seidel-Fundemos) N° 57.
- Ansart, Pierre 1983 *Ideología, conflictos y poder* (México: Premia Editora).
- Antezana, Luis H. 1983 "Sistema y proceso ideológicos en Bolivia (1935-1979)", en Zavaleta, René (comp.) *Bolivia Hoy* (México: Siglo Veintiuno Editores).
- Argandoña, Álvaro 2002 *Coca, coccaleros y discursos en Bolivia* (Cochabamba) mimeo. Tesis de Maestría.
- Bourdieu, Pierre 2001 (1985) *¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos* (Madrid: Akal).
- Camacho Balderrama, Natalia 1999 "La marcha como táctica de concertación política (las marchas coccaleras de 1994 y 1995)", en Laserna, Roberto (coord.), Camacho Balderrama, Natalia y Córdova E., Eduardo *Empujando la concertación. Marchas campesinas, opinión pública y coca* (Cochabamba: CERES-PIEB).
- Correo del Sur* 2002 (Sucre) 4 de agosto.
- Chávez, Walter 2003 "Bolivia, una revolución social democrática", en *Le Monde Diplomatique* (Buenos Aires) N° 53.
- García Linera, Álvaro 2003 "Radiografía de las nuevas izquierdas", en *Le Monde Diplomatique* (La Paz) N° 10.
- Gordillo, José María 2000 *Campesinos revolucionarios en Bolivia. Identidades, territorio y sexualidad en el Valle Alto de Cochabamba, 1952-1964* (La Paz: PROMEC-Universidad de la Cordillera-Plural Editores-CEP).
- Lagos, María L. 1997 (1994) *Autonomía y poder. Dinámica de clase y cultura en Cochabamba* (La Paz: Plural Editores).
- Pulso* 2002 (La Paz) N° 149.
- Rancière, Jacques 1996 (1995) *El desacuerdo. Política y Filosofía* (Buenos Aires: Nueva Visión).
- Rivera Cusicanqui, Silvia 1983 "Luchas campesinas contemporáneas en Bolivia: el movimiento 'katarista': 1970-1980", en Zavaleta, René (comp.) *Bolivia Hoy* (México: Siglo Veintiuno Editores).
- Tapia, Luis 2000 "La densidad de la síntesis", en AA.VV. *El retorno de la Bolivia plebeya* (La Paz: Muela del Diablo Editores).
- Weber, Max 1998 (1922) *Economía y Sociedad* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Zavaleta Mercado, René 1983 "Forma clase y forma multitud en el proletariado minero en Bolivia", en Zavaleta, René (comp.) *Bolivia Hoy* (México: Siglo Veintiuno Editores).
- Zegada, María T. 2002 "Dinámica Política en el Trópico: Actores, conflictos y estrategias destructivas", en Argandoña, Álvaro y Ascarrunz, Carla (comp.) *Seminario Futuro del Trópico de Cochabamba. Escenarios para el Desarrollo Sostenible* (Cochabamba: UMSS-Centro de Estudios de Población).

Notas

1 Este trabajo es una síntesis del artículo “Conflicto social, crisis hegemónica e identidades políticas en Bolivia: la emergencia del MAS-IPSP”, elaborado gracias a la contribución del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), a través de su Programa Regional de Becas. El mencionado artículo forma parte de los resultados del proyecto que fue premiado con una beca de investigación en el Concurso para investigadores “Movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe” en el marco del Programa de Becas CLACSO-Asdi para investigadores jóvenes de América Latina y el Caribe, 2002.

2 El otro movimiento emergente de las luchas campesino-indígenas es el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), fundado por Felipe Quispe –el Mallku– el 14 de noviembre de 2000, el mismo día y en el mismo lugar en el que Túpac Katari –el líder indígena que mantuvo un cerco de La Paz en los años 1781 y 1782– fuera ejecutado 219 años antes.

3 La expulsión de Evo Morales del Parlamento en enero de 2002 (acusado de ser autor intelectual de los violentos choques armados entre militares y cocaleros en Sacaba) y sus enfrentamientos con el entonces embajador estadounidense Manuel Rocha constituyen dos momentos en los que el antagonismo entre partidos tradicionales-sistema político-Embajada estadounidense y Evo Morales-MAS emerge con fuerza en la superficie, con un fuerte carácter simbólico que transformó su postulación en una candidatura “maldita” para el *establishment* político boliviano.

4 Ver Alenda Mary (2002).

5 Evo Morales ha concentrado una gran cantidad de poder en su persona: es secretario ejecutivo de las seis federaciones del trópico, presidente del MAS, jefe de bancada parlamentaria y jefe del Estado Mayor del Pueblo.

6 Con una consigna que tiene grandes similitudes a la opción “Braden o Perón”, utilizada por el peronismo en Argentina en las presidenciales de 1945, el MAS convocó a la ciudadanía a elegir entre Rocha o Morales en los siguientes términos: “Boliviano: tú decides quién manda ¿Rocha ó la voz del pueblo?”, invocando al “pueblo sencillo y trabajador” como el sujeto y destinatario de las transformaciones propuestas, en favor de la soberanía y la dignidad nacional. Y utilizando los colores de la bandera nacional para reforzar el significativo “boliviano” (Afiche de campaña).

7 El desempeño del MAS (o por lo menos de sus principales dirigentes) durante la guerra del gas –y especialmente en la “transición” que condujo al ascenso del vicepresidente Carlos Mesa a la primera magistratura– ha reforzado la apuesta institucional-electoral como vía de acceso al poder estatal (ver declaraciones de Filemón Escóbar, citado en Chávez, 2003).

8 “Sin mesura y con un evidente tufillo racista muchos de los funcionarios ‘de planta’ del Congreso bautizaron sin miramientos a los congresistas indígenas; los adjetivos más usados fueron: ‘la indiada’ y ‘los campeches’. En la puerta de ingreso una diputada que vestía pollera fue examinada de punta a canto por los guardias de seguridad. ¿Adónde está entrando, señora?, cuestionaron inquisitivos (y en tono despectivo) los uniformados. Dicha escena no se repitió, sin embargo, cuando algunos individuos de traje y corbata cruzaron la puerta del Hemiciclo” (*Correo del Sur*, 2002).

Documentos

Manifiesto al pueblo boliviano

Coordinadora Nacional de Recuperación y Defensa del Gas

Cochabamba,
octubre 4 de 2003

Unidad ante estado de sitio y autogolpe de estado

El pueblo boliviano, desde abril del 2000, ha establecido con claridad y dignidad que es posible cambiar las condiciones de vida, que es posible prescindir y derrotar a aquellos que hasta el día de hoy deciden por nosotros, a espaldas de nosotros y contra nosotros, esos llamados gobernantes que están ciegos, sordos y torpes ante las demandas de la población. La gente sencilla y trabajadora ha empezado a escribir, diseñar y construir una nueva democracia, la participativa, la de las organizaciones de multitudes con dirección colectiva y horizontal, donde las decisiones sean tomadas por todos, sin que los caudillos o partidos políticos nos den permiso para hacerlo.

Hoy, a raíz del tema del GAS, el pueblo se ha rebelado, está indignado por el manejo absolutamente antipatriótico y antidemocrático de primero haberse enterado que a través de la ley de hidrocarburos y el decreto 27408, Sánchez de Lozada ha entregado nuestros hidrocarburos y recursos naturales y propiedad a las empresas transnacionales, y segundo, en contubernios con la oligarquía chilena, pretende regalar nuestro GAS, para el potenciamiento económico y militar de ese país.

A partir del 5 de septiembre de este año, continuando con la construcción de esos espacios de deliberación y dignidad se estableció la COORDINADORA

NACIONAL DE RECUPERACIÓN Y DEFENSA DEL GAS, como instrumento que posibilite esa tarea que desde hace años atrás se está impulsando, donde el protagonista de la organización, movilización y propuestas sea el pueblo boliviano.

La primera muestra de unidad y capacidad movilizadora se demostró el día 19 de septiembre, cuando más de medio millón de personas, no sólo en las principales ciudades, sino en pueblos y pequeñas comunidades a lo largo y ancho del país protagonizaron masivas marchas reclamando el gas para los bolivianos e industrialización.

Desde aquel día los conflictos sectoriales y la lucha por la recuperación se han intensificado y radicalizado, ahí están los primeros cinco mártires del GAS en Warisata y las múltiples demandas de sectores que rechazan la política de imposición y empobrecimiento del actual gobierno.

A todas estas protestas y señales dadas por el pueblo, el gobierno ha contestado con represión y menosprecio, a esto se ha sumado el pedido generalizado de que los gobernantes se vayan, lo que en la práctica significa la pérdida de legitimidad del actual gobierno, sumado a esto las últimas actuaciones de los políticos en la nominación de cargos en el aparato estatal demuestra la falta total de ubicación de la realidad del país y la indignación de la gente en contra de la autodenominada "clase política".

Por eso, desde la Coordinadora Nacional por la Recuperación y Defensa del Gas hacemos un llamado a todos los sectores, partidos políticos y líderes de los movimientos sociales a establecer el re-encauzamiento de la UNIDAD en torno al tema del GAS, como única forma de enfrentar inclusive la posibilidad cierta de un estado de sitio o un autogolpe, como se ha ido denunciando, UNIDAD sin protagonismos, estableciendo una dirección horizontal, colectiva, solidaria. Las acciones aisladas, la pretendida unidad con verticalismos y autoritarismos sólo conducirán al pueblo al precipicio y la confrontación en desigualdad de condiciones, donde el pueblo será nuevamente el que ponga a sus muertos.

Convocamos de manera vehemente a todos ellos, a todos nosotros, a través de la lucha por el GAS, a empezar a diseñar y construir un nuevo país. La ASAMBLEA CONSTITUYENTE es el camino para aquello. Una Asamblea desde abajo, entre todos los excluidos, ignorados y despreciados, sin la intermediación partidaria, aquella que tanto daño ha hecho al país.

Fuera a aquellos que han demostrado que no sirven para nada y que dejen el paso a la gente autoorganizada, y que ahora con sus actitudes y medidas están poniendo en riesgo la propia existencia como nación.

¡DEFENDER LA DEMOCRACIA!

Comunicado del Movimiento al Socialismo

13 de octubre de 2003

VIVA LA DEMOCRACIA

Desde abril del 2000, la sociedad civil organizada de múltiples formas ha ido apareciendo en el escenario público. Sus demandas son de búsqueda de reconocimiento de los derechos civiles, políticos y sociales.

Así, los más pobres, los excluidos, los marginados, los que andan de a pie, los que siempre fuimos los gobernados, hemos empezado a reclamar y a defender nuestros derechos.

Desde esa fecha, hemos recuperado dignidad para emitir nuestra voz, levantar nuestras frentes y decirles a los poderosos: ¡¡NO!! ¡Ya, basta de manoseos y de engaños! ¡Ya, basta de neoliberalismo! ¡Construyamos un nuevo proyecto de nación y dotemos de carne a nuestra democracia!

Así, hemos logrado a través de acción en las calles, hacernos escuchar y respetar. Y, en el calor de las movilizaciones, de las asambleas, de los cabildos, ha emergido la idea de una Asamblea Constituyente. Donde seamos todos los bolivianos, desbloqueando a los intermediarios de siempre, los que nos dotemos de un nuevo orden institucional democrático.

MÁS DEMOCRACIA

Asamblea Constituyente para darnos una visión colectiva de país. Es decir, una comunidad política ¡ahora! para nosotros y nuestros hijos. Además, para de una vez por todas hacer que la gente se sienta realmente representada por los suyos y no por ajenos.

La Asamblea Constituyente pretende ser el verdadero reencuentro de los bolivianos, en base a los principios de respeto de los Derechos Humanos: la vida, la libertad, la propiedad, la participación, la justicia, la elección, la salud, la educación, el bienestar, etc.

Por primera vez, desde el nacimiento de nuestra vida republicana, es la sociedad civil quien reclama Asamblea Constituyente. Por primera vez, los bolivianos queremos darnos un orden político donde realmente podamos sentirnos uno y no divididos. Por primera vez, la población exige que ya no sean unos pocos, las oligarquías de los partidos y los poderosos, quienes decidan por nosotros y nuestros hijos.

REFUNDAR EL PAÍS

Queremos refundar el país, la política, la democracia con nuestras propias manos: campesinos, obreros, profesionales, empresarios, nacionalidades y pueblos originarios, todos unidos, un país para nosotros, para todos.

La política es un derecho de todos y no de unos pocos. No se practica sólo una vez, a través del voto en las elecciones. Se hace todos los días, a través de cualquiera que emita su opinión, criterio, demanda y/o reivindicación personal o de su colectivo.

REFUNDAR LA DEMOCRACIA

La democracia no sólo son los procedimientos electorales, sino, fundamentalmente, hacer realidad que los Derechos Humanos se respeten y sean los mecanismos mediante los cuales nos relacionamos.

En otras palabras, que las instituciones sirvan para hacer cumplir los derechos de las personas y no, como ahora, que las instituciones sirven para fines particulares, de los pocos, de los que gobiernan y de los que tienen intereses oscuros.

Esta democracia y política que deseamos no es un ideal irrealizable, una fantasía, es ya una realidad. Algo de ella ya tenemos y debemos defenderla!

Esta democracia ya comienza hacerse realidad, cuando los que siempre fuimos los excluidos y marginados empezamos a manifestar nuestra autonomía y aparecemos en diferentes escenarios reclamando la afirmación de nuestros derechos.

Cada vez que participamos y nos movilizamos, cada vez que le decimos públicamente a los manoseos ¡NO!, estamos construyendo la nueva democracia. La democracia sostenida y sustentada en la sociedad civil, en nosotros y para nosotros mismos.

Esta democracia es un peligro para los intereses de los poderosos, de la oligarquía que nos gobierna. Y, por ello, no dudan en cancelar este escenario a nombre de una supuesta "democracia" cómoda a sus intereses, donde sólo nos quieren a nosotros callados, sumisos, serviles y muertos.

Frente a esos intereses oscuros, mezquinos y manoseadores, ¡defendamos la democracia! Desenmascaremos a sus verdaderos enemigos: los que sólo se sirven de ella para imponer sus decisiones e intereses.

Defendamos esta democracia, que desde la revolución del '52, los obreros, campesinos, pueblos y comunidades indígenas, profesionales, mujeres y hombres sencillos, han demandado y construido con sangre: ¡una democracia incluyente, participativa y emancipadora!

¡No a la democracia de la oligarquía gubernamental!

FUERA GONI, AHORA

¡Viva la democracia!

¡Asamblea Constituyente, Ya!

¡Viva Bolivia!

Resolución de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y de la dirección central del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP)

CONSIDERANDO:

Que en estos momentos la Nación indígena y Bolivia toda está viviendo días de terror, porque desde el momento en que iniciamos las movilizaciones, la Huelga de Hambre y los Bloqueos de Carreteras exigiendo el cumplimiento de los 72 puntos firmados en Pucarani y la Isla del Sol, fuimos agredidos y asesinados por el “gobierno constitucional de Sánchez de Lozada”, con el pretexto de “rescatar a los turistas” que se encontraban en Sorata.

Que, después de la masacre de Ilabaya y Warisata, todos los indígenas intensificaron los Bloqueos y se masificó la Huelga de Hambre, recibiendo del gobierno Carnicero del Goni, metralla tras metralla, dejando muertos y desaparecidos por centenares, enlutando a la familia de las naciones originarias del Gran Qullasuyu Marka.

Que la ciudad de El Alto, la metrópoli indígena más grande de Bolivia y la más pobre, se levanta bajo una sola voz y la fuerza de la desesperación de su pobreza, indignada por el asesinato cometido a sus padres, hermanos e hijos de las comunidades que son masacrados sin ninguna consideración.

Que la indignación se ha apoderado de la población, Warisata ha sido el rebalse que reventó la represa del descontento y la furia contenida, y una sola

voz, como reguero de pólvora recorre por toda Bolivia: LA RENUNCIA DE GONZALO SANCHEZ DE LOZADA A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.

Que, en este ataque brutal a la población civil de las comunidades de El Alto y la Hoyada, donde han dejado un centenar de muertos, heridos y desaparecidos al no poder sofocar la sublevación del pueblo en general, las fuerzas represoras incluso han metido gases en las humildes viviendas y han disparado a las criaturas, producto de esto han muerto niños de ocho, cinco años y seis meses.

Que, los destinos de este país estuvieron por 178 años en las manos de esta oligarquía personificada en la casta política que hasta hoy nos ha gobernado, y para lo único que sirvió fue para hacer de este Qullasuyu, la Bolivia de hoy, el país más pobre del Continente. Por eso y por mucho más, el poder debe ser tomado por nosotros para la recuperación de la grandeza de nuestro Qullasuyu.

POR TANTO, la CSUTCB, como organización matriz de los campesinos indígenas originarios a nivel nacional, y su brazo político el Movimiento Indígena Pachakuti, asumiendo su responsabilidad política e histórica, en Reunión de Emergencia, RESUELVE:

Artículo Único

Nos reafirmamos en nuestra inquebrantable posición de exigir la RENUNCIA INMEDIATA de Gonzalo Sánchez de Lozada a la Presidencia de la República de esta mal llamada Bolivia.

Es dado en la ciudad de El Alto, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil tres.

¡¡FUERA EL GRINGO ASESINO DE NUESTRO SUELO SAGRADO!!
¡¡SOBRE LA SANGRE INDÍGENA DERRAMADA JURAMOS RECUPERAR NUESTRO PODER!!
¡¡JALLALLA LA MOVILIZACIÓN GENERAL DEL PUEBLO!!
¡¡POR LA MEMORIA DE NUESTROS HÉROES TUPAJ KATARI Y BARTOLINA SISA!!
¡¡POR EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA CSUTCB, POR LA DIRECCIÓN CENTRAL DEL MIP!!

Cronología
Septiembre – diciembre 2003

Levantamiento popular y luchas sociales en América Latina: del “octubre boliviano” a las protestas contra el ALCA¹

José Seoane y Emilio Taddei

Bolivia y la crisis en el área andina

En septiembre se inicia en Bolivia el ciclo de confrontación social que, bautizado como la “Guerra del Gas”, habrá de culminar en una rebelión indígena y popular a mediados de octubre abriendo, tras la renuncia y fuga de Sánchez de Lozada y la designación parlamentaria de su vicepresidente Mesa, una transición aún en curso. Inscripta en un período de incremento del conflicto social y emergencia y consolidación de movimientos populares iniciado con la Guerra del Agua de 2000 en Cochabamba (Solón, 2003; ver el artículo de Raúl Prada Alcoreza en este OSAL) el levantamiento de octubre hunde sus raíces más próximas en las resistencias crecientes ante la política neoliberal impulsada por Lozada, aquel que supo acuñarlas en su primer mandato (1993-1997).

Estas resistencias habíanse dado cita en los enfrentamientos del febrero boliviano² que, señalando ya la fero-

cidad del régimen, había costado treinta y tres vidas³ hasta detener la implementación de una reforma impositiva regresiva acorde a las políticas de ajuste fiscal recomendadas por el FMI. Así también estuvieron a la base del crecimiento electoral de partidos estrechamente vinculados a movimientos indígenas-campesinos⁴ y que llevó a Evo Morales a un segundo lugar en la competencia presidencial en mayo de 2002.

Emergida de estos procesos, las jornadas de octubre en Bolivia guardan múltiples significaciones (Ver dossier sobre la "Guerra del gas" en este número). Entre otras cuestiones se ha señalado la articulación social de carácter nacional que, abigarrada y difusa, supo asumir la batalla por el gas primero y la demanda de renuncia del presidente después. En el marco de diferentes movilizaciones (entre ellas la del 19/9 impulsada por el MAS y la COB, entre otros, en oposición a la venta del gas) el bloqueo y la posterior represión en Warisata (20/9) habrá de encender un proceso de movilización y confrontaciones que se extiende rápidamente a lo largo de las barriadas más populares de la ciudad de El Alto en sucesivos "paros cívicos" hasta convertirse en un verdadero levantamiento popular. Barricadas, cortes de calles y rutas obstaculizan el abastecimiento de la ciudad de La Paz (particularmente del petróleo) y la acción de las fuerzas represivas. Entre los días 12 y 14 de octubre El Alto se convierte en el terreno de una verdadera batalla donde la extrema brutalidad de la represión policial y militar (que cobra en esa ciudad decenas de vidas de las más de 70 que habrán de contarse a nivel nacional) contrasta con la intensidad y solidaridad de una movilización social creciente. Esta experiencia popular señala, como otra de las características de las jornadas del octubre boliviano, la emergencia e incorporación al ciclo de la protesta de un movimiento territorial de base urbana, próximo a la ciudad capital, forjado por una población mayoritariamente joven, pobre y, en buena parte integrada por trabajadores precarios que supo constituirse amalgamada en su identidad y pertenencia indígenas (García Linera, 2003). Cercada y ocupada La Paz por bloqueos y movilizaciones que se extienden por todo el país, sumada la solidaridad de algunos sectores medios urbanos y perdido todo apoyo parlamentario e internacional, el 17 de octubre por la tarde el Goni, como se lo conocía popularmente, renunciará a la presidencia para refugiarse en Miami⁵.

La rebelión boliviana reactualiza en el final de 2003 el ciclo de crisis políticas (y más recientemente de crisis de la hegemonía neoliberal) que parece recorrer a lo largo de los noventa, con diferentes características e intensidades, distintos países latinoamericanos pero que sin duda alcanza en el diciembre argentino (2001) su más próxima y profunda manifestación. Sin embargo, su significación no se restringe a señalar una vez más el derrotero posible de la crisis de legitimidad del modelo neoliberal, justamente cuando la normalización institucional que se desarrolla en Argentina pareciera alejar de dicho país los fantasmas del masivo y callejero cuestionamiento social. Las demandas –comunes y específicas– condensadas en las jornadas de octubre (ver Silvia Escobar de Pabón

en este OSAL), la consistencia alcanzada por los movimientos populares, la fuerza de los intereses que propugnan la prosecución de las políticas neoliberales⁶, entre otras cuestiones, señalan que la crisis en Bolivia está lejos de haberse cerrado y se proyecta hacia el 2004⁷.

El país andino se convierte así en uno de los centros de la política continental de los gobiernos de la región. En el caso de los Estados Unidos este énfasis prolonga el fuerte apoyo norteamericano del que gozó el gobierno de Lozada hasta su renuncia así como la prolongada campaña promovida y financiada por sucesivos gobiernos de éste país para la erradicación del cultivo de coca y contra el movimiento cocalero –que supone entre otras cuestiones instrucción e intervención militar en la región del Chapare (Salazar Ortuño, 2003)– y contra la figura de Evo Morales después. También la resolución de la crisis boliviana entrará en la agenda de los gobiernos de distintos países del Cono Sur (particularmente de Brasil, Venezuela y Argentina). En un sentido similar el gobierno boliviano propugnará por concentrar en el problema del acceso al mar y las relaciones con Chile las demandas sociales planteadas. Pero la proyección continental del proceso en Bolivia está lejos de restringirse a las atenciones de estados y gobiernos. En el marco de las crecientes articulaciones sociales a nivel regional e internacional que vienen forjándose en el último lustro (de las cuales el Foro Social Mundial es una de sus expresiones más importantes, aunque no la única) diversas movilizaciones y actos de solidaridad habrán de tener lugar en la región (especialmente en Argentina, Ecuador y México) y a nivel internacional.

Por otra parte, la atención continental que despierta la transición en Bolivia está vinculada también a la medida que el rumbo que ésta adopte proyecta su sombra hacia el área andina atravesada por recurrentes inestabilidades y conflictividad social. Valga repasar brevemente la geografía sociopolítica de esa región durante este último cuatrimestre del año. En Perú el gobierno de Toledo arrastra una cada vez más baja popularidad, acosado por reiterados escándalos de corrupción y ante las demandas sociales de un efectivo cambio de rumbo respecto de las recetas neoliberales, en un cuadro de inestabilidad política que muestra a un aprismo y un fujimorismo remozados. Si bien en términos cuantitativos la conflictividad social descende, según los registros obtenidos por el OSAL, respecto del segundo cuatrimestre del año, la mayoría de los conflictos que se destacan (las protestas de los trabajadores de la construcción, los paros cívicos impulsados por diferentes Frentes Cívicos Regionales y las huelgas de médicos del sector público y de docentes universitarios) parecen obtener una relativa satisfacción a sus demandas. Por otra parte, en Ecuador, el gobierno de Lucio Gutiérrez avanza, en consonancia con las exigencias del FMI, con la privatización y ajuste del sector público al tiempo que profundiza su confrontación con el movimiento indígena (decreta la facultad para el Ejecutivo del nombramiento del Secretario del CONDENPE). En el marco de las protestas que des-

piertan estas políticas (y de un intenso conflicto de los maestros que se extiende casi a lo largo de los últimos dos meses del año), se incrementa y fortalece la convergencia de los movimientos populares en oposición al gobierno concluyendo el año con diferentes demandas de renuncia del presidente⁸. En este cuadro general debe mencionarse también la derrota electoral sufrida por el gobierno de Uribe en Colombia con el fracaso del referéndum así como con el triunfo de una oposición progresista en la capital del país (ver Alexander Reina en el presente OSAL). Finalmente en Venezuela, donde como en el caso anterior también disminuye la conflictividad social respecto del cuatrimestre pasado, la confrontación entre los proyectos bolivariano y liberal (López Maya, 2003) se expresará esta vez, frustradas las iniciativas de desestabilización y golpe de estado, en las campañas de recolección de firmas orientadas a obtener la convocatoria a diferentes referéndum revocatorios (entre otros, el del presidente Chavez) previstos en la nueva Constitución venezolana.

Estos procesos, disputas y estrategias se desarrollan en una Latinoamérica donde, en términos cuantitativos, la conflictividad social apenas desciende respecto de la registrada para el cuatrimestre anterior (de 2.323 registros a 2.126, un 8% menor) siendo un poco más numerosa en relación con la obtenida para los últimos cuatro meses del año 2002 (2.104 registros). Ciertamente, la evolución del número de conflictos protagonizados por una diversidad de organizaciones y movimientos sociales se distribuyen de manera irregular alrededor de los diecinueve países que considera el relevamiento del OSAL, mostrando un incremento importante en relación al cuatrimestre anterior en Bolivia, Argentina y Guatemala, y un descenso significativo en Colombia, Costa Rica (así como en la mayoría de los países Centroamericanos) y Brasil.

Similar comparación en relación a los sujetos sociales que impulsan y protagonizan estas protestas nos indica, particularmente, el crecimiento de las llamadas “protestas multi-sectoriales” (representan para el tercer cuatrimestre de 2003 un 78,5% más que para el segundo del año). Resulta claro que en ello contribuye decisivamente el proceso social boliviano de septiembre y octubre, pero incluso en algunos países donde el número total de conflictos no presenta demasiadas variaciones respecto del período anterior este tipo de protestas, se destacan (véase por ejemplo Uruguay y Panamá). Paralelamente, los asalariados de la administración pública también resaltan en la distribución y evolución de la conflictividad social durante este cuatrimestre. Y, en el mismo sentido, vale mencionar las movilizaciones inspiradas y articuladas con el llamado “movimiento antimundialización neoliberal”, especialmente aquellas que tienen lugar contra los acuerdos de liberalización del comercio y la movilidad de los capitales.

Estos tres señalamientos, que no agotan la riqueza del análisis de la conflictividad social para el período sobre el que volveremos más adelante, permiten dibujar los contornos,

las características y los resultados de una resistencia social a la profundización de las recetas neoliberales que supieron gozar de cierta credibilidad a principios de la década pasada. A contraluz marcan también, en otros casos, los avances de las políticas inspiradas en estas recetas. Intentaremos entonces en el presente artículo reseñar algunos de los casos destacados a nivel regional donde cobran relevancia éstas políticas y resistencias a lo largo de los últimos cuatro meses del año 2003, abordando luego un breve análisis respecto de los procesos de anexión económica y militarización social impulsados en la región para concluir con un panorama del año 2003 y las perspectivas que de éste pueden desprenderse.

Las protestas contra el “ajuste neoliberal”

Las iniciativas de privatizaciones, ajuste fiscal, reforma tributaria regresiva y desmantelamiento del sector público (y particularmente del área social), piezas del cuerpo central de las recetas neoliberales, recorren buena parte de los países de la región a lo largo del último cuatrimestre del año. Prolongan así un proyecto que impulsado por las élites políticas y económicas desde hace por lo menos una década, parece acentuarse al tiempo que transcurre el 2003 al compás de las renegociaciones con el FMI y la sanción de los presupuestos fiscales para el año próximo. De la geografía social que adoptan las resistencias sociales que despiertan la implementación de estas políticas de “ajuste neoliberal”, en el último cuatrimestre, se destacan algunas experiencias además de las ya reseñadas anteriormente.

En primer lugar, el ciclo de protesta que a lo largo de septiembre agudiza la “batalla por la seguridad social” que recorre a la sociedad panameña desde mediados de año frente a las tentativas de la presidenta Moscoso de implementar una reforma regresiva del sistema jubilatorio y privatizar la Caja del Seguro Social (Ver artículo de Marco Gandásegui, h. en este número). La remoción del Director de la CJS, contrario a la política del gobierno, intensifica las resistencias que culminan en la significativa huelga del 23 de septiembre (y luego en la del 30 de octubre) impulsadas por el Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social. Las mismas no consiguen la reincorporación del Director destituido pero logran “rechazar y desmontar –momentáneamente– el proyecto de privatización” (Gandásegui, 2003).

Por otra parte, en Uruguay, a meses del intenso y prolongado conflicto de los trabajadores de la salud pública que culmina con “una importante victoria del movimiento sindical” (Zibechi, 2003), a principios de diciembre se realiza el referéndum alrededor de la llamada “ley ANCAP” que avanzaba con la privatización de la empresa petrolera estatal. Impulsado por la Comisión de Defensa de ANCAP, en el mismo se impone por el 62%

la derogación de la ley aprobada el pasado año, incrementando el cuestionamiento social al gobierno de Batlle y las expectativas de triunfo electoral de la coalición EP-FA (Ver artículo de Raúl Zibechi en este número).

Nos hemos referido ya, aunque brevemente, a los procesos desarrollados en Ecuador y Colombia. En el caso colombiano, luego de las intensas protestas que habían despertado las políticas de reestructuración y privatización de empresas públicas que el gobierno llevó adelante durante el pasado cuatrimestre (Taddei, 2003), hacia fines de octubre la iniciativa del referéndum impulsado por el gobierno de Uribe (que incluye, entre otras cuestiones, medidas de ajuste fiscal) fracasa ante una masiva abstención.

Por otra parte, en México, frente a la recurrente tentativa del gobierno de Fox de aprobar reformas legislativas en materia impositiva y de desregulación y privatización del sector eléctrico y petrolero estatal, se desarrollan diferentes conflictos y movilizaciones. Estas protestas alcanzaron su punto más álgido en la manifestación del 27 de noviembre convocada por un amplio arco social y político⁹ y que a mediados de diciembre lleva a algunas de estas organizaciones a conformar un frente sindical, campesino, social y popular. Al calor de estas manifestaciones en la última parte de diciembre naufraga en el parlamento el intento de aprobar el proyecto de reforma tributaria gubernamental. En este terreno, como en lo que respecta a la privatización eléctrica y petrolera, el gobierno se vio imposibilitado de avanzar con la rapidez y frontalidad ambicionada. Pocos días después, el 1° de enero de 2004, habrá de cumplirse diez años del levantamiento zapatista, que a partir de agosto, y en el marco de un hostigamiento militar que no cede, ha dado nacimiento, profundizando la experiencia de constitución de los municipios autónomos en Chiapas, a las llamadas Juntas de Buen Gobierno y los Caracoles (ver dossier sobre el zapatismo en este número).

La política de "ajuste neoliberal" y las resistencias que la confrontan atraviesan también otros países de la región. En

"Las iniciativas de privatizaciones, ajuste fiscal, reforma tributaria regresiva y desmantelamiento del sector público (y particularmente del área social), piezas del cuerpo central de las recetas neoliberales, recorren buena parte de los países de la región a lo largo del último cuatrimestre del año"

este sentido, vale señalar las protestas y manifestaciones en Honduras –impulsadas por la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular– frente a distintos proyectos de ley que profundizan el ajuste del sector público y las privatizaciones (varios de ellos son finalmente aprobados), el intenso conflicto protagonizado por los estudiantes universitarios en Nicaragua en reclamo del cumplimiento del 6% del PBI para el presupuesto de las Universidades (que se destaca de las protestas que despierta diferentes leyes de ajuste fiscal que el gobierno impulsa, en su mayoría aprobadas hacia fin del año), las movilizaciones y la huelga general de diez días que los maestros en Paraguay llevan adelante contra la reforma del régimen jubilatorio impulsado por el gobierno, la escalada de protestas de los trabajadores de la salud en Chile (que culmina con los paros nacionales del 3 y 16 de diciembre) contra la reforma legislativa que sobre el sector promueve la Concertación, las huelgas y conflictos llevados adelante por los trabajadores de la salud y los docentes universitarios en Perú. A estas breves referencias habría que agregar la significativa huelga nacional con movilización que tiene lugar en República Dominicana a principios de noviembre (reprimida brutalmente por el gobierno) que cristaliza un proceso de protestas que viene intensificándose en el último período contra los apagones, el alza de precios y la política económica oficial. Por otra parte en Brasil, la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Lula obtiene media sanción parlamentaria, produciéndose hacia el final del año la expulsión del PT de aquellos parlamentarios que votaron contra la ley gubernamental de reforma de las jubilaciones aprobada en el cuatrimestre anterior.

De esta multiplicidad de experiencias de resistencias sociales frente al “ajuste neoliberal” que hemos brevemente reseñados, en sus semejanzas y diferencias, hay cuatro cuestiones que merecen ser resaltadas y que, en cierta medida, parecen profundizar una tendencia que hemos señalado ya en otras oportunidades. En primer lugar la forma que asume, en buena parte de ellas, la protesta que, particularmente bajo las ocupaciones de lugares de trabajo o edificios públicos y el bloqueo prolongado de carreteras y calles, parece caracterizarse por el desarrollo de procesos colectivos de apropiación territorial. En segundo lugar, estos conflictos son confrontados por las élites políticas, en muchos casos, por una intensa represión, acompañados también por la sanción de legislaciones cada vez más duras. En particular sobre este diagrama de criminalización de los movimientos populares hemos de concentrarnos en el siguiente punto. En tercer lugar, es importante señalar el papel protagónico que le cabe en muchas de estas resistencias a las organizaciones sindicales de trabajadores del sector público particularmente afectadas por las políticas de ajuste. En algunos casos el desarrollo de estos conflictos despliegan una extensión social y geográfica mucho más amplia, siendo capaces de incrementar su capacidad de interpelación a los poderes públicos en la medida que amplía sus horizontes reivindicativos y, como señala Zibechi para el caso de Uruguay, resultando capaz de obtener triunfos. Por último, la utilización y presencia en la programática de estos movimientos de instrumentos como el referéndum y/o la consulta popular. De la

demanda del referéndum sobre el gas y la convocatoria a asamblea constituyente en Bolivia a la exigencia de un plebiscito vinculante sobre el ALCA (que impulsan las coaliciones sociales constituidas en la oposición a dicho acuerdo a nivel continental), pasando por los casos tratados anteriormente, la demanda de una democratización radical de la gestión pública bajo las formas de lo que ha dado en llamarse “democracia participativa” parece constituirse cada vez más en un acervo de la experimentación popular contra las políticas neoliberales.

Estos señalamientos no pretenden sintetizar el conjunto de la conflictividad social del período bajo análisis. De ésta se destacan también, entre otros procesos, las ocupaciones y protestas que lleva adelante el MST en Brasil en reclamo de la reforma agraria y contra la persecución y represión que castiga al movimiento, el crecimiento del conflicto de los asalariados y desocupados en Argentina, y las crecientes manifestaciones en Haití en oposición al gobierno de Aristide (Ver artículo de Suzy Castor en este número).

Cancún, Miami y el CAFTA: hegemonía norteamericana y experiencias de resistencia social al libre comercio y a la militarización en América Latina

En el marco de la política hemisférica hacia América Latina desplegada por Estados Unidos –que se materializó en el orden internacional en 2003 con la intervención y ocupación militar de Irak– el gobierno del presidente Bush desplegó una sostenida ofensiva diplomático-comercial. Esta se centró en la concreción de tratados bilaterales de libre comercio y en la aceleración de las negociaciones para garantizar la entrada en vigencia del ALCA en el 2005. En el plano militar y represivo esta estrategia fue acompañada por una mayor presencia e influencia militar norteamericana (fundamentalmente en la región andina) y por la agudización de la criminalización social de la protesta en los países latinoamericanos, crecientemente asociada a la lucha contra el “narcoterrorismo” promovida por el gobierno norteamericano.

Una lectura provisoria de la acción y de los resultados de la “diplomacia de negocios” norteamericana en su tentativa de construcción de una zona de libre comercio desde Canadá hasta Argentina, permite observar –más allá de los avances efectivos de la misma– el surgimiento de tensiones y obstáculos que deben entenderse en el contexto de las transformaciones sociales y políticas ocurridas durante el último año en América Latina. Estas cuestiones se manifestaron en el rotundo fracaso de la V Cumbre Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que tuvo lugar en el mes de septiembre en Cancún, México (AA.VV., 2003[a]) y en las negociaciones desarrolladas durante la Cumbre Ministerial del ALCA realizada hacia finales de noviembre en Miami, Estados Unidos.

Estas dificultades resultan, por un lado, de la creciente impugnación y deslegitimación de los procesos de liberalización comercial manifestada por numerosos movimientos sociales y redes del continente que se oponen a los tratados de “libre comercio”, presentados como una tentativa de dar una respuesta a la crisis económica y social y a la deslegitimación creciente de las políticas neoliberales. En Cancún la acción directa y la presión de las organizaciones sociales sobre sus respectivos gobiernos fue fundamental en el fracaso del encuentro y la deslegitimación de la OMC (Bello, 2003). Por otro lado, cabe señalar que los Estados Unidos debieron afrontar en dichas cumbres las reservas expuestas por algunos gobiernos latinoamericanos (particularmente, Brasil y Argentina) en relación a cuestiones relativas, entre otras, al acceso a los mercados, a los subsidios a la agricultura, a las compras del sector público, a los servicios, a la propiedad intelectual y para la conclusión de las negociaciones de la “ronda de Doha” de la OMC. Asimismo, el gobierno venezolano reiteró su oposición al ALCA a la vez que reivindicó un proyecto alternativo de integración a través de la propuesta de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe, ALBA.

En contraste con las posiciones de las redes y movimientos sociales que hicieron oír su voz contra el “libre comercio”, los conflictos y tensiones que entorpecen las negociaciones no significaron, sin embargo, en ningún momento, un cuestionamiento por parte de los gobiernos latinoamericanos a los principios de liberalización comercial que guían las negociaciones de la OMC y el proyecto de integración continental en las Américas. Estas fricciones y la reformulación en las negociaciones del ALCA (conocida ahora como “ALCA light”) deben ser entendidos más bien como una tentativa de algunos gobiernos de la región (fundamentalmente Brasil y Argentina) de avanzar en lo inmediato de manera parcial en las metas fijadas al inicio del proceso y obtener mejores condiciones de acceso de algunos productos latinoamericanos al mercado norteamericano, de forma tal de garantizar la competitividad de algunos sectores claves de las economías nacionales.

En este contexto debe entenderse la activa participación de la diplomacia brasileña en la conformación del “Grupo de los 22” en la reunión de la OMC, en la tentativa de conformar un frente de países agroexportadores, al cual se integraron en un primer momento diversos países de la región. También la intensa actividad diplomático comercial que –liderada por Brasil– desplegaron los países del MERCOSUR (incorporación de Perú como miembro asociado y suscripción de un acuerdo de libre comercio con la Comunidad Andina de Naciones –CAN– que regirá a partir de abril de 2004), parece apuntar al intento de consolidar un bloque regional que permita mejores condiciones de negociación con los Estados Unidos. Por su parte, el gobierno de Bush intentó en la Cumbre “extraordinaria” de las Américas, que se realizó en Monterrey, México, en enero de 2004, ratificar el compromiso de concreción del ALCA en enero de 2005.

La consolidación y difusión a lo largo de 2003 de la campaña continental contra el ALCA, el “libre comercio” y la militarización en América Latina impulsada por movimientos sociales y redes de la región refleja también el creciente cuestionamiento popular al modelo neoliberal. Durante el año, y a diez de entrada en vigencia del NAFTA, las protestas impulsadas en México por la coordinación campesina “El Campo no aguanta más” han servido para denunciar las terribles consecuencias económicas, sociales y culturales que este acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá han tenido en la sociedad mexicana, en particular sobre los pueblos originarios y los pequeños productores agrícolas, deslegitimando así los pretendidos beneficios de las políticas de liberalización comercial.

En el período tratado la lucha contra el “libre comercio” cobró un gran impulso y visibilidad pública con las acciones de protesta y la presión sobre los gobiernos nacionales y la opinión pública ejercida en el mes de septiembre por las redes y movimientos en Cancún. Como señalamos anteriormente, estos contribuyeron de manera decisiva al fracaso de dicha cumbre y al *descarrilamiento* de la OMC. Las voces del movimiento continental contra el ALCA se hicieron oír también en noviembre en Miami. En ambos casos los movimientos campesinos de la región tuvieron una destacada participación. Este descontento también se hizo visible en el marco del contraforo “Otro mundo es posible” que tuvo lugar en enero de 2004 en Monterrey, en paralelo a la cumbre de presidentes de las Américas y que rechazó una vez más el proyecto del ALCA.

En relación a las acciones contra el ALCA cabe señalar la realización en Argentina a finales de noviembre de una Consulta Popular sobre el ALCA, la Deuda Externa y la Militarización organizada por la Autoconvocatoria NO AL ALCA y mediante la cual el 96% de los 2.250.000 votantes se expresó en contra del proyecto de integración hemisférica impulsado por Estados Unidos. El 15 de diciembre tuvo lugar en Montevideo, en paralelo a la XXV Reunión del Consejo del MERCOSUR, la V Cumbre Sindical del MERCOSUR que, bajo la consigna “Ahora MERCOSUR, NO al ALCA”, exigió a los presidentes de los países reunidos realizar consultas vinculantes en torno al proyecto de integración continental y exigió un cambio de rumbo en relación a las lógicas fiscal y monetarista que guiaron la construcción del bloque económico del Cono Sur en los años noventa. A mediados de diciembre en San Pablo se realizó un plenario con participación de doscientos delegad@s de organizaciones sindicales y populares y jóvenes de distintos países del continente quienes constituyeron el Comité de Enlace de los Trabajadores de las Américas en la lucha por frenar el ALCA. En Caracas, la realización del I Congreso Bolivariano de los Pueblos a fines de noviembre, culmina su declaración con un explícito rechazo al modelo neoliberal, al ALCA y a las políticas predatoras de los organismos internacionales. Asimismo, las campañas y confluencias contra el ALCA se ven reforzadas con la realización de Foros Sociales nacionales que tienen lugar en Uruguay (octubre) y en Brasil y Paraguay (noviembre).

“En el período tratado la lucha contra el ‘libre comercio’ cobró un gran impulso y visibilidad pública con las acciones de protesta y la presión sobre los gobiernos nacionales y la opinión pública ejercida en el mes de septiembre por las redes y movimientos en Cancún”

Las protestas y manifestaciones contra el tratado de libre comercio EEUU-Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés) se prolongaron y cobraron un nuevo impulso en ocasión de las últimas reuniones de negociación entre los gobiernos de la región y los Estados Unidos, iniciadas a fines de 2003. Durante los meses de septiembre y octubre se registran importantes marchas de protesta contra el CAFTA en Costa Rica, Nicaragua (convocadas por el Movimiento Social Nicaragüense) y El Salvador, donde el Bloque Popular Social vehiculiza el repudio a dicho tratado. Estas protestas no lograron sin embargo impedir su concreción y el mismo fue rubricado por Estados Unidos, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua el 17 de diciembre. Luego de la prolongación de las negociaciones entre Costa Rica y Estados Unidos hasta inicios de 2004, a finales de enero dicho país se incorpora al CAFTA.

La firma del CAFTA es el dato más relevante en relación a la política comercial norteamericana en la región durante el último cuatrimestre del año y resulta un paso significativo en la ampliación de la esfera de influencia del capital norteamericano en Centroamérica. La conclusión de las negociaciones en torno al CAFTA van acompañadas por la tentativa de un reforzamiento del Plan Puebla Panamá, a través de la promoción de inversiones en infraestructura y de la presión norteamericana para lograr que los países involucrados en el CAFTA se retiren del G22 conformado en Cancún.

En el mismo sentido, la aprobación por parte del poder legislativo chileno del TLC entre ese país y Estados Unidos y la entrada en vigencia del mismo a partir del 1° de enero de 2004, y el inicio de negociaciones para la firma de un TLC entre Colombia y el gobierno norteamericano se inscriben en la estrategia norteamericana de impulsar tratados bilaterales para ir cristalizando, en paralelo a las negociaciones multilaterales, un “ALCA de hecho”.

Por otra parte, las iniciativas de Estados Unidos tendientes a consolidar su influencia militar en la región andina cobran un nuevo impulso durante los últimos cuatro meses de

2003. En esta zona, particularmente convulsionada por las protestas sociales que, como en Bolivia, pueden desembocar en insurrecciones populares; la lucha contra el “narcoterrorismo” y la erradicación de los cultivos de coca en el marco del “Plan Colombia” y del “Plan Andino”, son el pretexto para promover la militarización social e intentar legitimar una política represiva que se ha acentuado de forma alarmante desde 2002.

En Ecuador, donde la política exterior del presidente Gutiérrez aparece cada vez más aliada con los intereses norteamericanos, se realiza un encuentro en el país andino de militares del Comando Sur para supervisar las tareas del Plan Colombia y coordinar el trabajo de espionaje en la base militar de Manta. Dicho país firma un convenio de cooperación económica con Estados Unidos con el fin de controlar la producción y el tráfico de drogas, el entrenamiento de policías y las Fuerzas Armadas y el lavado de dinero. También el presidente Gutiérrez intensifica la persecución y represión de dirigentes sociales, como lo manifiestan tanto la detención de un dirigente de ECUARUNARI (integrante de la CONAIE arrestado por “ofender” la investidura presidencial) como la represión contra la huelga de maestros¹⁰. El gobierno colombiano aprueba la inmunidad para las tropas norteamericanas que operan en su territorio y obtiene en contrapartida la entrega de diferentes préstamos de ayuda militar y financiamiento del Plan Colombia por parte de Estados Unidos. En Perú, bajo el pretexto de ayuda humanitaria y médica, se produce el ingreso de tropas norteamericanas en la ciudad de Iquitos al mismo tiempo que se anuncia la instalación de un centro de coordinación antinarcóticos en ese país.

La brutal y sangrienta represión en Bolivia, durante la cual fueron asesinadas más de setenta personas, resulta un paradigmático y triste caso de la preocupante escalada represiva que azota a las protestas sociales en América Latina. La represión contra la insurrección del pueblo boliviano durante la “Guerra del Gas” no logró sin embargo impedir las multitudinarias marchas y protestas de los movimientos indígenas, del movimiento obrero y de sectores urbanos que culminaron con el derrocamiento del presidente pronorteamericano Gonzalo Sánchez de Lozada.

Sin pretensión de exhaustividad cabe señalar, en Centroamérica, el inicio del programa militar Jaguar Maya en Guatemala, impulsado por Estados Unidos y que tiene por objetivo mejorar las tácticas de combate contra el narcotráfico y el crimen organizado, como también la vigencia del plan “Mano Dura” implementado por el presidente salvadoreño desde el cuatrimestre anterior. Asimismo el conflicto estudiantil en Nicaragua fue duramente reprimido por el gobierno, quien acusó de “terroristas” a los manifestantes universitarios.

La consolidación de la política de represión social fue acompañada en el último año de una creciente cooperación en materia de seguridad entre numerosos gobiernos latino-

americanos y el gobierno de Bush. A los hechos consignados en este y en números precedentes del *OSAL*, cabe agregar la presencia creciente de la lucha contra el terrorismo como objetivo presente en las declaraciones finales de los encuentros, cumbres y/o conferencias intergubernamentales en la región. Dichos acuerdos funcionan como un elemento de legitimidad de la persecución y encarcelamiento de dirigentes sociales practicados por numerosos gobiernos y para justificar la acción de personal militar y/o de inteligencia norteamericano que, como en el caso mexicano, comenzó recientemente a practicar controles “preventivos” en los aeropuertos de dicho país.

2004: desafíos de los movimientos populares frente al ALCA y el “neoliberalismo armado”

El contexto regional aparece signado en el 2003 por la perdurabilidad de los efectos de la profunda crisis y recesión económica que afectaron a la mayoría de los países de la región durante 2001 y 2002. Frente a la profundización del ciclo de protestas, resulta preocupante la tentativa de la mayoría de los gobiernos de dar continuidad al rumbo neoliberal bajo la lógica de la militarización social y la liberalización comercial promovida por Estados Unidos, como resortes privilegiados de “resolución” de la crisis.

En este escenario la dinámica de la protesta social prolonga algunas de las tendencias reseñadas durante 2002. En relación al número de conflictos registrados por el *OSAL* para todo el año 2003, estos resultan similares a los del año precedente (6.649 y 6.744 respectivamente). Su distribución en términos de los sujetos sociales que los protagonizan tampoco parece mostrar grandes diferencias entre ambos períodos, en los que se destacan la participación de los asalariados públicos (educación y salud fundamentalmente), de los sectores campesinos e indígenas y la difusión de protestas multisectoriales que –como en el caso de Bolivia en el cuatrimestre analizado– ponen en crisis la legitimidad política de la “gobernabilidad neoliberal”. La distribución geográfica de los conflictos en 2003 también se asemeja a la del año precedente: se destaca la preponderancia de la región andina donde se concentra el 40,64% de las protestas, registrándose un incremento del 3,44% respecto a 2002. La región norte y la sur agrupan respectivamente 34,85% y 24,49% del total de conflictos.

La crisis de legitimidad del régimen neoliberal también se ha expresado a lo largo del año, como en las elecciones presidenciales argentinas y en las recientes elecciones regionales y municipales en Colombia, en el triunfo de coaliciones y/o partidos políticos que manifiestan, al menos discursivamente, un cuestionamiento al rumbo ortodoxo de las políticas económicas. Sin embargo la profundización del modelo neoliberal del gobierno ecuatoriano luego de la ruptura con el movimiento indígena de ese país, es

quizás el ejemplo más claro de la falta de decisión, más allá de la discursividad electoral, de ensayar un cambio profundo en el modelo económico dominante. El mantenimiento de las líneas generales del recetario de la ortodoxia económica durante el primer año del gobierno del presidente Lula en Brasil y la perdurabilidad en la Argentina de las políticas regresivas de concentración del ingreso inherentes al patrón de acumulación dominante, ponen de manifiesto los límites de estas experiencias y plantean nuevos desafíos para los movimientos populares de la región.

La tentativa de materializar las aspiraciones hegemónicas norteamericanas a través de la concreción del ALCA a partir de 2005, será un elemento de significativa importancia en la agenda política latinoamericana durante el año que acaba de iniciarse. La consolidación de las campañas y convergencias continentales a lo largo del último año son una muestra de la importancia creciente que los movimientos sociales latinoamericanos han asignado a la lucha contra el "libre comercio" y la militarización a escala continental. El fortalecimiento de las experiencias de convergencia y su capacidad de articulación con las luchas que se libran en el ámbito nacional contra la aplicación de las políticas neoliberales, resultarán decisivos en este sentido. En este contexto cobrarán particular relevancia los encuentros y acciones ya programados, entre los que se destacan el III Encuentro Hemisférico de lucha contra el ALCA en enero en Cuba, la IV Conferencia de Vía Campesina, en junio en Brasilia, y la realización del primer Foro Social Continental de las Américas en el mes de julio en Quito, Ecuador. Estos y otros espacios de debate y movilización aparecen en el horizonte inmediato como grandes oportunidades para promover y consolidar los espacios de autonomía y autoactividad de los movimientos y fortalecer el debate democrático en torno a la búsqueda y concreción de alternativas que permitan avanzar hacia una integración solidaria de los pueblos de las Américas.

Bibliografía

- AA.VV. 2003[a] "El 'descarrilamiento' de la OMC y perspectivas frente al ALCA", en *OSAL* (Buenos Aires) N° 11, mayo-agosto.
- AA.VV. 2003[b] "El febrero boliviano. Crisis política y revuelta popular", en *OSAL* (Buenos Aires) N° 10, enero-abril.
- Algranati, Clara 2003 "Luchas sociales y 'neoliberalismo de guerra' en América Latina", en *OSAL* (Buenos Aires) N° 10, enero-abril.
- Bello, Walden 2003 "El significado de Cancún", en *OSAL* (Buenos Aires) N° 11, mayo-agosto.
- Gandásogui, Marco 2003 "La batalla por la seguridad social domina los movimientos sociales en Panamá durante el 2003", en *OSAL* (Buenos Aires) N° 12, septiembre-diciembre.
- García Linera, Álvaro 2003 *El Alto insurrecto* (La Paz) mimeo.
- López Maya, Margarita 2003 "Insurrecciones de 2002 en Venezuela. Causas e implicaciones", en Seoane, José (comp.) *Movimientos sociales y conflicto en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).
- OSAL 2003 *Informe sobre la cronología del conflicto social en Bolivia (septiembre-diciembre)* (Buenos Aires).
- Salazar Ortuño, Fernando 2003 "El Plan Dignidad y el militarismo en Bolivia. El caso del Trópico de Cochabamba", en Seoane, José (comp.) *Movimientos sociales y conflicto en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).
- Solón, Pablo 2003 "Radiografía de un febrero", en *OSAL* (Buenos Aires) N° 10, enero-abril.
- Taddei, Emilio 2003 "Las protestas sociales en el espacio urbano: trabajadores asalariados y convergencias sectoriales", en *OSAL* (Buenos Aires) N° 11, mayo-agosto.
- Zibechi, Raúl 2003 "Fuerza en la debilidad: éxitos del movimiento sindical uruguayo", en *OSAL* (Buenos Aires) N° 12, septiembre-diciembre.

Notas

1 El presente texto que intenta servir de introducción a la lectura de las cronologías del conflicto social en Latinoamérica para el tercer cuatrimestre de 2003, no podría haber sido escrito sin contar con los informes cuatrimestrales elaborados por los jóvenes investigadores del equipo del OSAL. Asimismo los aportes e intercambios con Clara Algranati resultaron, como siempre, indispensables para la redacción de esta síntesis. En el mismo sentido, queremos mencionar los comentarios de Ivana Brighenti y su dedicación en la corrección del texto. Por último también queremos agradecer las correcciones y observaciones realizadas por Miguel Ángel Djanikian.

2 Ver, entre otros, el dossier sobre el febrero boliviano, publicado en el *OSAL* (AA.VV., 2003[b]).

3 Las jornadas del 12 y 13 de febrero en Bolivia culminaron con un saldo de, por lo menos, treinta y tres muertos y 189 heridos (Solón, 2003).

4 Nos referimos al Movimiento Al Socialismo (MAS) cuyo referente es Evo Morales y al Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) que inspira Felipe Quispe. Para un análisis de la constitución del MAS consultar en este OSAL el artículo de Pablo Stefanoni.

5 Para una cronología del proceso ver el artículo de Pablo Mamani Ramirez en este número de la revista y OSAL (2003).

6 Además de las cuestiones planteadas por el movimiento de octubre (referéndum sobre el gas, convocatoria a Asamblea Constituyente), el gobierno de Mesa afronta en los próximos meses (como Lozada en febrero del pasado año) la necesidad de incrementar los recursos fiscales si se trata de cumplir con los compromisos asumidos ante el FMI.

7 Vale señalar que para marzo están previstas las elecciones municipales a nivel nacional.

8 A inicios de diciembre un amplio arco social y político conforma un "Frente de Unidad Nacional" de oposición a la política del gobierno; hacia el final del mismo mes la CONAIE pide la renuncia del presidente, y otras organizaciones sociales plantean la disolución de los tres poderes del Estado.

9 Entre las organizaciones sociales que convocan a dicha movilización se cuentan el Frente Sindical Mexicano (FSM), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la Promotora de Unidad Nacional, en el terreno sindical, El Barzón, el Consejo Agrario Permanente y la coalición "El Campo no Aguanta Más" quien protagonizó las multitudinarias protestas campesinas a principios de 2003.

10 En este contexto, con enorme preocupación, debe señalarse el atentado sufrido por Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, y su familia el 1º de febrero, así como el asesinato el 30 de enero de Patricio Campana, auditor de Petroecuador, que se encontraba investigando el robo de combustible de la empresa.

Región Sur

Fuerza en la debilidad: éxitos del movimiento sindical uruguayo

Raúl Zibechi*

** Docente e investigador
de la Multiversidad
Franciscana
de América Latina (Mfal).
Editor de Internacionales
del semanario Brecha
(Uruguay).*

En la segunda mitad de 2003 el movimiento popular uruguayo obtuvo dos importantes victorias. La primera fue consecuencia de la larga y removedora huelga de los funcionarios y médicos de salud pública, y la segunda fue el contundente rechazo a la “ley de ANCAP”, derogada en un referéndum, por la que la petrolera estatal quedaba habilitada para asociarse con empresas de capital extranjero. Aunque los dos movimientos mencionados se desarrollaron en escenarios muy diferentes –la acción social el primero, y las instituciones el segundo– los resultados fueron muy similares y consiguieron modificar el escenario político, profundizando el aislamiento del gobierno del presidente Jorge Batlle y, de forma simultánea, instalando la certeza del triunfo electoral del Encuentro Progresista-Frente Amplio en las elecciones de octubre de 2004.

La explosión de la crisis financiera en el invierno de 2002 tuvo un efecto paradójico: en vez de estimular la movilización social, la frenó. El gobierno uruguayo tuvo la capa-

cidad y el margen de maniobra suficientes –en el pico de la crisis, hacia fines de julio y comienzos de agosto– como para aislar a los sectores sociales más proclives a movilizarse (en particular los excluidos que protagonizaron saqueos a supermercados), y contó además con el apoyo explícito de la izquierda y el apoyo implícito del movimiento sindical, que renunciaron a derribar a un gobierno débil para buscar una salida negociada e institucional a la crisis. El “fantasma” a superar, tanto para el gobierno como para la oposición, era la posible similitud con la crisis de diciembre de 2001 en Argentina.

La huelga de la salud pública

Fue una huelga a todo o nada. Los funcionarios y los médicos exigieron un aumento de 2 mil pesos (72 u\$s), y no estuvieron dispuestos a negociar a la baja sus demandas, como suele hacerse en todas las huelgas. Fue además una huelga unitaria de todos los funcionarios de la salud pública, tanto los no médicos, agrupados en la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), como los médicos, agrupados en el Sindicato Médico del Uruguay [SMU]¹.

La situación por la que atraviesan los funcionarios de la salud pública es dramática, tanto por los bajos salarios como por las condiciones de trabajo, en hospitales atestados de pacientes y sin las condiciones mínimas para su atención. La mitad de los funcionarios percibe salarios de menos de 80 u\$s. De los 4 mil médicos, algo más de la mitad tienen salarios que no superan los 100 u\$s mensuales. En ambos casos, la inmensa mayoría son mujeres que no tienen otro ingreso, y buena parte de ellas son jefas de familia.

La prologada crisis económica, que se arrastra desde 1998, provocó cambios en la estructura de la atención de salud en Uruguay. Hasta ese momento, la mayoría de los uruguayos se atendían en el sistema mutual: instituciones creadas y dirigidas por los médicos, a las que tenían acceso la mayoría de los trabajadores por una cuota que representaba una pequeña fracción del salario. En los últimos años, por la creciente desocupación y el descenso del salario real, la emigración hacia la atención pública hizo entrar en crisis tanto al sistema mutual –que quedó desfinanciado, llevando al cierre a numerosas mutualistas– como al sistema público, desbordado y sin capacidad de atención a los 8 mil usuarios que mensualmente abandonan el sistema privado mutual (Mieres Gómez, 1997).

En los hechos la huelga fue una lucha por la dignidad. De ahí su radicalidad, que se sostuvo durante más de un mes. El conflicto comenzó de forma atípica. En la anual rendición de cuentas que se debate entre junio y julio en el Parlamento, el Ejecutivo no con-

***“En los hechos
la huelga
[de la salud pública]
fue una lucha
por la dignidad.
De ahí su
radicalidad,
que se sostuvo
durante más
de un mes”***

templó aumentos salariales a los funcionarios de la salud pública pese a la inflación del 26% con que se cerró el 2002. Como todos los empleados estatales, recibieron sólo un 2% de aumento. La presión desde las bases fue el detonante. Alfredo Silva, secretario general de la FFSP, señaló que el conflicto “nació en forma espontánea, por el desborde de los centros de la periferia que estaban sumamente presionados por la situación laboral” (Brecha, 2003[a]). El 5 de agosto la Federación ocupó un edificio del Parlamento para exigir ser recibidos por la Comisión de Salud de Diputados. No fueron atendidos, pero exigieron a la bancada de la izquierda que renunciara en masa al Parlamento, y esa misma noche decidieron el comienzo de la huelga.

El lunes 11 de agosto comenzó una huelga indefinida de los 15 mil funcionarios de la salud pública (4 mil médicos y 11 mil no médicos). La medida fue acompañada por una acción radical que hacía mucho tiempo no se registraba en Uruguay: la ocupación del hospital Vilardebó, donde las autoridades fueron desplazadas y sustituidas por una guardia gremial. El 13 se ocuparon dos hospitales más, y el 19 fue ocupado el hospital Pereira Rosell, uno de los más importantes del país, y se decidió ampliar la ocupación a otros cuatro hospitales. Durante más de diez días se sucedieron negociaciones, mientras la huelga recibía el apoyo casi unánime de la población. El gobierno anunció que no tenía presupuesto para contemplar aumentos salariales y amenazó con el desalojo de los centros, a la vez que con retener los salarios de los ocupantes.

El 27 de agosto la FFSP decidió dar por terminada la tregua negociadora y resolvió ocupar más hospitales. Al día siguiente el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) realizó un paro general en solidaridad con los huelguistas y en reclamo de la creación de un Sistema Nacional de Salud. Fue uno de los más masivos de la última década. Según la central sindical, fue seguido por el 80% de la pobla-

ción, y se realizaron actos en los hospitales ocupados. A casi un mes de iniciada la huelga, el sindicato mantenía ocupados seis hospitales en los que se hacía cargo de la atención de los pacientes, siete habían sido desalojados por la policía, y se instalaron guardias de coraceros en otros centros ante la eventualidad de nuevas ocupaciones. Frente a la oleada de ocupaciones y las permanentes amenazas del gobierno, la Comisión de Salud de Diputados, que mediaba en el conflicto, pidió una tregua al sindicato para que desalojara los últimos centros ocupados y al Ejecutivo para que no usara la violencia en los desalojos.

El 9 de septiembre la plana mayor de la central sindical (PIT-CNT) se presentó sorpresivamente en Casa de Gobierno para exigir una solución al conflicto, con la intención de no retirarse hasta ser atendidos. Una suerte de ocupación, ante lo que el gobierno decidió transar y mantener la propuesta de aumentos pero sin exigir mayor carga horaria. Ante este nuevo retroceso del gobierno, las asambleas de los centros de salud resolvieron por mayoría aceptar la oferta del Ejecutivo y dieron por finalizada la huelga, aunque las asambleas de los centros ocupados votaron por continuar. El SMU decidió en paralelo levantar la huelga, aunque los médicos esperaron la decisión de los demás funcionarios para retornar al trabajo.

La huelga de la salud pública fue una importante victoria del movimiento sindical. La unidad del gremio y la gran confianza de las bases en sus dirigentes permitieron al sindicato mantener un prolongado conflicto sin sufrir desgastes. Se pudo llegar a esta instancia gracias a la renovación de dirigentes que se registró en la FFSP en las últimas elecciones, en las que fueron elegidos delegados de base de los hospitales de la periferia, quedando relegada la vieja camada de dirigentes burocratizados y alejados de las problemáticas cotidianas de los funcionarios. El permanente contacto con las bases, las prácticas asamblearias, el respeto escrupuloso a las decisiones que emanaban de los centros, y la negociación transparente consolidaron la confianza de los afiliados hacia sus dirigentes. El triunfo fue posible gracias a la masiva participación de los trabajadores, por la unidad de los no médicos y los médicos, superando el tradicional corporativismo, y por el apoyo explícito de la población, que se volcó en apoyo de los ocupantes sobre todo en los barrios más pobres. "Ganamos porque la federación pasó del quietismo a un alto nivel de participación, tanto en las asambleas como en los plenarios de delegados donde hemos tenido la participación del 75% de los centros, algo que hacía mucho tiempo que no se lograba", señaló el secretario general del sindicato (Brecha, 2003[a]).

La central sindical, que se volcó en apoyo de los funcionarios en huelga, valoró el conflicto como uno de los triunfos más importantes de los últimos años, destacando la importancia de la movilización permanente como clave para destrabar las negociacio-

nes, así como la articulación entre la consulta a las bases y las decisiones de los dirigentes (Olesker, 2003).

La lucha contra la privatización de ANCAP

La "ley ANCAP" fue votada por el parlamento en diciembre de 2001 y promulgada por el Ejecutivo el 4 de enero de 2002. La particularidad de esta ley, que no suponía una privatización directa de la empresa petrolera estatal, de carácter monopólico, sino que habilitaba su asociación con empresas y capitales extranjeros, radicaba en que fue co-redactada por algunos importantes dirigentes del Frente Amplio, entre ellos los senadores Danilo Astori y Alberto Couriel, los dos más destacados economistas de izquierda del Uruguay. Pese a la división en sus filas, la dirección del Frente Amplio decidió votar en contra de la ley, actitud a la que se plegaron los senadores favorables a la "ley ANCAP".

Desde que el proyecto de ley comenzó a ser discutido en el parlamento, la Federación ANCAP mostró su rechazo y anunció que en caso de ser aprobada recogería firmas para convocar un referéndum derogatorio. Existen algunos antecedentes en la materia. En 1989 fue sometida a referéndum la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, o ley de impunidad, que se mantuvo en vigor con el 57% de los votos favorables. Pese a ello, la campaña por la recolección de firmas (un 25% del padrón electoral) movilizó a decenas de miles de activistas en todo el país, sentando un precedente que marcó un parteaguas en la historia política y social del país. En efecto, la movilización para la recolección de tantas firmas, en un tema "difícil" por la polarización política existente, supuso la puesta en acción de todas las organizaciones del campo popular y de la izquierda política, que utilizaron la modalidad de la visita casa por casa para conseguir las firmas. Esto supuso un largo proceso de diálogo de los activistas con los vecinos (algunas familias fueron visitadas hasta seis y siete veces en sus viviendas), lo que modificó las relaciones entre unos y otros, estableciéndose puentes de comunicación hasta ese momento inexistentes. Esta forma de acción, acompañada por un año de movilización permanente apelando a formas no tradicionales, que fueron desde el teatro barrial hasta marchas en bicicleta, asentada en unas 350 comisiones barriales partidarias, modificó la cultura política del Uruguay, hasta ese momento focalizada en la centralidad de los partidos y del momento electoral (Delgado, Ruiz y Zibechi, 2000).

Pese a la derrota, el referéndum quedó instalado en el escenario político y entre las formas de acción más destacadas del movimiento social. En diciembre de 1992, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, un amplio movimiento social, sindical y político consiguió frenar la Ley de Empresas Públicas, que preveía varias privatizaciones, alcanzando en el referéndum el 72% de los votos favorables a la derogación. Ese año quedó sella-

da la suerte del proyecto privatizador en Uruguay, de modo que en adelante las privatizaciones debieron apelar a caminos indirectos, como sucedió con la "ley ANCAP", que "sólo" promovía la asociación de la empresa estatal con capitales privados.

En marzo de 2002, el sindicato de ANCAP, el movimiento sindical y la izquierda comenzaron a recoger las firmas necesarias (unas 600 mil), que debían presentar antes de que se cumpliera el año de promulgada la ley. La experiencia acumulada en las recolecciones anteriores (además de las ya citadas hubo otras instancias para frenar proyectos privatizadores), y la oposición de la mayor parte de la población al actual gobierno y a la política neoliberal, facilitó que se alcanzaran las firmas requeridas.

Luego de diez meses, la Comisión de Defensa de ANCAP entregó, el 3 de enero de 2002, unas 650 mil firmas a la Corte Electoral, con una movilización de miles de personas. Del total de firmas, la mitad fueron recogidas por el movimiento social, en su inmensa mayoría el movimiento sindical, con el sindicato de ANCAP a la cabeza, y la otra mitad por los comités de base del Frente Amplio y los partidos que integran la coalición, que instalaron cientos de mesas en las calles de las ciudades de todo el país. La recolección de firmas fue acompañada por varias movilizaciones. Quizá las más significativas se hayan realizado en el entorno de la planta de ANCAP, en el barrio obrero de La Teja, en Montevideo, con la adhesión masiva de la población. Hacia fines de octubre los trabajadores ocuparon la planta en rechazo a la privatización de la División Alcoholes de ANCAP. Luego de diez días la ocupación se levantó con el compromiso del directorio de postergar la decisión hasta que finalice su mandato, o sea hasta las próximas elecciones nacionales.

Una vez entregadas las firmas comenzó una nueva etapa de la movilización, esta vez para presionar a la Corte Electoral, que, tal como sucedió en ocasiones anteriores, comenzó a anular firmas aduciendo que no cumplían los

"Esta forma de acción [la visita casa por casa], acompañada por un año de movilización permanente apelando a formas no tradicionales, [...] modificó la cultura política del Uruguay"

requisitos legales. Finalmente la Corte convocó el referéndum, y los partidarios de la revocación de la "ley ANCAP" lanzaron, el 18 de setiembre, la campaña por el sí a la derogación. Se realizaron decenas de actos en Montevideo y el Interior en los que habitualmente los oradores eran dirigentes del Frente Amplio-Encuentro Progresista (casi siempre Tabaré Vázquez), miembros de los partidos Nacional y Colorado partidarios de la derogación de la ley, y dirigentes sindicales de FANCAP.

El resultado fue contundente: 62% de los votos por la derogación de la ley, y 35% a favor de mantenerla. La coalición de gobierno, y también Asamblea Uruguay, grupo del Frente Amplio que defendió la ley, sufrieron una importante derrota, que de alguna manera adelanta lo que serán los resultados de las elecciones de octubre de 2004. Más allá del debate sobre la propia "ley ANCAP", parece evidente que funcionó el voto castigo contra uno de los gobiernos más desprestigiados que recuerdan los uruguayos.

Fortalezas y debilidades del movimiento social

¿Cómo fue posible que un movimiento que vive un largo proceso de declive y debilitamiento, con una caída importante de la afiliación (Supervielle y Gari, 1995), y que no ha protagonizado luchas importantes en los últimos años, haya conseguido dos éxitos tan importantes? La respuesta tiene varias aristas, pero en todo caso conviene destacar que la huelga de la salud pública y el referéndum para derogar la "ley ANCAP" son dos procesos claramente diferenciados, aunque tienen algunas características comunes.

La primera, y quizá la decisiva, es que el movimiento sindical (que sigue siendo con mucho el principal movimiento social uruguayo), obtiene triunfos cuando es capaz de representar intereses más vastos que los propiamente sectoriales o corporativos. Dicho de otro modo, en los dos casos el movimiento fue caja de resonancia de demandas de la población, la cual pudo expresarse a través de los espacios y canales abiertos por el sindicalismo. En el movimiento por la derogación contra la "ley ANCAP", la central sindical y la FANCAP sintonizaron con el amplio sentimiento contra las privatizaciones arraigado en la cultura política uruguaya. Algo similar sucedió con la huelga de la salud pública, que consiguió conectar con la bronca existente por los graves problemas que atraviesa la atención sanitaria. En este caso, además, la población premió con su simpatía y solidaridad la capacidad de lucha de los sindicatos de funcionarios y médicos, la justicia de sus demandas, y la dignidad de mantenerse firmes cuando la inmensa mayoría de los gremios del país optaron por la negociación con el gobierno, aún a costa de replegar banderas históricas. Para muchos, la digna lucha de la salud pública fue una suerte de revancha por la pasividad que mantuviera el movimiento social un año antes, cuando se disparó la crisis financiera.

En segundo lugar, ambos movimientos fueron capaces de conectar con la cultura política uruguaya, y a eso se deben también sus éxitos. Uruguay es un país con instituciones aún sólidas. Las clases subalternas nunca protagonizaron insurrecciones ni fueron capaces de desbordar, ni siquiera por breves períodos, ni a las clases dominantes ni a los aparatos represivos. En contraposición, el movimiento sindical uruguayo, que nació amparado por el Estado, adoptó las principales características de la cultura política uruguaya: la “pluralidad de mediaciones” (Lanzaro, 1986: 61), la articulación entre lo político-estatal y lo social-sindical, la institucionalización de los conflictos y la búsqueda del consenso.

En tercer lugar, el movimiento sindical ha mostrado una notable capacidad para “marcarle la cancha” a la derecha, frenando toda su política privatizadora, pero también a la izquierda, a la que a menudo suele arrastrar aprovechando sus indefiniciones en materia social.

Quizá una de las principales debilidades del movimiento social, en la perspectiva del inminente gobierno del Frente Amplio, es el tránsito de la “hermandad” entre la izquierda social y la política a una suerte de confusión entre los roles de una y otra (Caetano, Gallardo y Rilla, 1995: 126). Esta confusión, visible en las movilizaciones en defensa de ANCAP, ha mostrado sus aristas más problemáticas en las conflictivas relaciones entre el sindicato municipal y la administración de la izquierda en Montevideo. La autonomía del movimiento sindical será puesta a prueba el día que la izquierda acceda al gobierno nacional: deberá optar entre la tradicional “correa de transmisión” y la defensa de intereses corporativos. O, rompiendo esa dicotomía, profundizar en una autonomía no sectorial ni corporativa, como la que lo llevó a obtener victorias tan importantes.

Bibliografía

Brecha 2003[a] (Montevideo) 12 de septiembre.

Brecha 2003[b] (Montevideo) 5 de septiembre.

Brecha 2003[c] (Montevideo) 29 de agosto.

Caetano, Gerardo, Javier Gallardo y José Rilla 1995 *La izquierda uruguaya. Tradición, innovación y política* (Montevideo: Trilce).

Delgado, Martha, Marisa Ruiz y Raúl Zibechi 2000 *Para que el pueblo decida. La experiencia del referéndum contra la ley de impunidad en Uruguay (1986-1989)* (Lima: Instituto de Defensa Legal).

Lanzaro, Jorge 1986 *Sindicatos y sistema político. Relaciones corporativas en el Uruguay 1940-1985* (Montevideo: FCU).

Mieres Gómez, Gustavo 1997 *Al sector salud. 75 años de un mismo diagnóstico* (Montevideo: Sindicato Médico del Uruguay).

Olesker, Daniel 2003 *Balance primario del conflicto de la salud pública* (Montevideo) mimeo.

Observatorio Social de América Latina-OSAL 2003 *Cronología de protestas y movimientos sociales en Uruguay (mayo-diciembre de 2003)* (Buenos Aires).

Supenvielle, Marcos y Gabriel Gari 1995 *El sindicalismo uruguayo. Estructura y acción* (Montevideo: FCU).

Notas

1 La organización gremial de los médicos, creada en 1920, se autodefine como "sindicato", lo que es revelador de la actitud social de los fundadores cuyo espíritu se mantiene aún entre buena parte de los afiliados y dirigentes.

Argentina

[cronología septiembre-diciembre 2003]

SEPTIEMBRE

JUEVES 4 Más de un millar de trabajadores estatales de la Provincia de Buenos Aires (PBA) nucleados en la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) marchan por las calles de La Plata en reclamo de un aumento salarial y que se haga efectivo el decreto que garantiza un ingreso mínimo de 380 pesos para los empleados de la administración.

DOMINGO 7 Jorge Obeid, candidato del Partido Justicialista (PJ), es elegido gobernador de Santa Fe.

LUNES 8 La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) realiza una jornada de protesta con clases públicas y cortes de calles en reclamo de una recomposición salarial y el descongelamiento de la bonificación por antigüedad.

MARTES 9 El Frente Gremial Docente Bonaerense, integrado por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), marcha por las calles de La Plata bajo el lema "Día del Maestro-Día de Lucha" y realiza un acto frente a la Dirección General de Cultura y Educación provincial en demanda de mejoras salariales, entre otros reclamos.

La Corriente Clasista y Combativa (CCC) realiza la tercera jornada nacional de protesta bajo la consigna "No al Fondo Monetario Internacional (FMI)". Se movilizan en la Ciudad de Buenos Aires (BA) diferentes localidades de la PBA, Tierra del Fuego, Jujuy, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Mendoza, San Juan, Río Negro, Neuquén y Rosario.

MIÉRCOLES 10 El gobierno alcanza un acuerdo con el FMI que contempla un superávit fiscal máximo de 3% del Producto Bruto Interno (PBI), ninguna condición en materia de ajuste tarifario, y no incluye el compromiso de compensar a los bancos por los amparos. El gobierno no utilizará las reservas para efectuar pagos netos de deuda al organismo.

- JUEVES 11** La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realiza una jornada de protesta en Jujuy en demanda de un aumento salarial.
- DOMINGO 14** Se realizan elecciones en distintos distritos del país. Aníbal Ibarra es reelegido por el 53,5% en la segunda vuelta de las elecciones para Jefe de Gobierno de BA. En la PBA Felipe Solá (PJ) es reelegido por el 44,2%. En Jujuy, Eduardo Fellner (PJ) se impone con el 56% de los votos. En Chaco, el candidato de la Alianza Frente de Todos (integrada por la Unión Cívica Radica-UCR y otros partidos), Roy Nikisch, obtiene alrededor del 52%. En Santa Cruz, Sergio Acevedo (PJ) se consagra gobernador con el 73%.
- LUNES 15** Trabajadores de las líneas D y B de subterráneos realizan un paro sorpresivo en demanda del cumplimiento de la jornada laboral de 6 hs dispuesta en una resolución oficial.
- VIERNES 19** Los docentes agrupados en la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) cortan por tiempo indeterminado los puentes carreteros que unen la capital provincial con Cipolletti (Río Negro) en reclamo de un aumento salarial.
- MIÉRCOLES 24** Manifestantes del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), del Frente de Trabajadores Combativos (FTC), de la Unión de Trabajadores Piqueteros (UTP) y de la Unión de Trabajadores Desocupados, Ocupados y Changarines (UTODCH) cortan el tránsito de las boleterías de las estaciones de subte de Retiro, Plaza Miserere y Constitución (BA) en demanda de una jornada laboral de 6 hs y la creación de puestos genuinos de trabajo.
- Trabajadores de Brukman se encadenan frente a la textil e inician una huelga de hambre en reclamo de la expropiación de la fábrica abandonada por sus dueños.
- JUEVES 25** Manifestantes del MTR, de la UTDOCH, de la FTC y de la UTP bloquean por segundo día consecutivo las boleterías del subte de BA en demanda de 500 puestos de trabajo. La policía reprime a los piqueteros, dejando un saldo de 10 detenidos y 2 heridos.
- Piqueteros del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón se instalan en las afueras del Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo, en La Plata (PBA), en demanda de asistencia social y alimentaria y la ampliación de cupos para subsidios por desempleo. La policía los reprime, dejando un saldo de 3 detenidos y 50 demorados.
- VIERNES 26** A un año y tres meses del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, unas 10 mil personas, convocadas por organizaciones de desocupados, de derechos humanos y sindicales cortan el Puente Pueyrredón para exigir el esclarecimiento de los crímenes.

Unas 3 mil personas convocadas por la CTA, la Federación Universitaria de Cuyo, las Madres de Plaza de Mayo y partidos políticos de izquierda, entre otros, marchan por las calles de la capital de Mendoza para reivindicar el derecho a la soberanía nacional y expresar su rechazo a la presencia en el país de efectivos de las fuerzas armadas norteamericanas en el marco del operativo Águila III.

DOMINGO 28 Jorge Sobisch, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), obtiene su tercer mandato como gobernador en las elecciones generales realizadas en Neuquén.

En Corrientes se llevan a cabo elecciones legislativas. La Alianza Frente de Todos, compuesta por la UCR, el PJ y el Partido Liberal, se impone con el 53% de los votos frente al 24,3% del Partido Nuevo.

En Misiones es reelegido el actual gobernador Carlos Rovira.

LUNES 29 La policía desaloja a los docentes que mantienen cortado uno de los tres puentes que unen la provincia de Neuquén con la de Río Negro en reclamo de un aumento básico del 75%.

MARTES 30 El canciller Rafael Bielsa confirma que la operación militar Águila III no se realizará en Mendoza en los plazos originalmente previstos debido a las discusiones que generó en el Congreso el proyecto girado por el gobierno solicitando inmunidad funcional para las tropas extranjeras.

OCTUBRE

MIÉRCOLES 1 La Cámara de Diputados convierte en ley el proyecto que amplía hasta diciembre del año próximo el plazo para renegociar los contratos de los servicios públicos privatizados, norma exigida por el FMI en su último acuerdo con el país.

JUEVES 2 La Suprema Corte de Justicia de la PBA declara inconstitucional el recorte salarial aplicado desde mediados de 2001 a los empleados públicos de la provincia y ordena restablecer el valor original de los sueldos desde el 1º de julio del año próximo.

Cerca de 15 mil personas convocadas por el Movimiento Barrios de Pie, el MTR, el Bloque Piquetero Nacional, los MTD Anibal Verón de distintas localidades, junto a otras 20 organizaciones, marchan desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo contra la criminalización de la protesta social. Los manifestantes rechazan los últimos episodios de represión en el subte y en La Plata.

- VIERNES 3** Cerca de 2 mil piqueteros del Movimiento Barrios de Pie, del MTD Resistir y Vencer y del Movimiento Patriótico 20 de Diciembre bloquean el polo petroquímico de Dock Sud en reclamo de alimentos y garrafas para los comedores, en el marco de una jornada de repudio al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y al acuerdo con el FMI.
- DOMINGO 5** En San Juan, José Luis Gioia, del Frente para la Victoria gana la gobernación frente a Roberto Basualdo, del Frente Movimiento Vida y Compromiso. En Córdoba, Luis Juez gana la intendencia de la capital provincial.
- MIÉRCOLES 8** Unos 3 mil trabajadores estatales y docentes de Tucumán se movilizan hacia la casa de gobierno provincial para reclamar el veto a leyes sancionadas por la legislatura que otorgan facultades extraordinarias al gobernador.
- JUEVES 9** Vecinos de la localidad de General San Martín (Jujuy) marchan por la ciudad en reclamo de justicia para un joven que apareció muerto en confusas circunstancias en la comisaría 39ª del lugar. Los manifestantes destrozan la seccional y son reprimidos violentamente por personal de Infantería. Un joven de 20 años muere y 2 uniformados resultan heridos. Los jóvenes asesinados eran militantes de la CCC.
- Los trabajadores judiciales de Córdoba realizan una huelga por 24 hs para reclamar un aumento salarial.
- MARTES 14** Más de 5 mil personas convocadas por agrupaciones piqueteras, partidos políticos de izquierda y organismos de derechos humanos marchan por Libertador General San Martín (Jujuy) para reclamar justicia por la muerte de 2 jóvenes en esa localidad. La jornada de protesta incluye 19 cortes de ruta en la provincia y marchas en BA, Mar del Plata, La Plata y Tucumán.
- MIÉRCOLES 15** La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) realiza un paro con movilizaciones en BA y en el interior del país en reclamo del aumento salarial de 200 pesos.
- JUEVES 16** Los presidentes Néstor Kirchner e Inácio Lula da Silva se reúnen en BA, ratifican la alianza estratégica entre Argentina y Brasil y sientan las bases de la puesta en marcha del tribunal de resolución de controversias en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Ratifican que encararán conjuntamente la negociación con EE.UU. por el ALCA y exigirán la eliminación de los subsidios de ese país y de la Unión Europea (UE) a los productos agropecuarios. Firman el Consenso de Buenos Aires, que subraya que el tratamiento de la deuda externa de ambos países debe privilegiar el crecimiento con equidad y la justicia social.
- Trabajadores camioneros bloquean el acceso a sucursales del hipermercado Carrefour en La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza y Rosario en

demanda de la reincorporación de trabajadores despedidos y por una recomposición salarial.

VIERNES 17 Unos 4.500 manifestantes marchan, como todos los viernes, por las calles de Santiago del Estero, pidiendo justicia por los asesinatos de los jóvenes Nazar y Villalba.

SÁBADO 18 En Córdoba militantes de la CTA se movilizan por “pan, trabajo, salario y tarifa social”.

DOMINGO 19 Gildo Insfrán, del PJ, gana la gobernación provincial en las elecciones generales realizadas en Formosa.

MIÉRCOLES 22 Unos 800 piqueteros del Frente Único de Trabajadores Desocupados, el Frente Independiente de Trabajadores Desocupados, el Movimiento de Unidad Popular 20 de Diciembre y de Tendencia Clasista 1º de Mayo marchan hasta el Ministerio de Trabajo (BA) en reclamo de 3 mil planes de empleo, alimentos frescos y trabajo genuino. Acampan en el lugar hasta obtener una respuesta favorable a sus reclamos y bloquean las puertas del edificio, sin dejar salir al ministro Tomada y a varios de sus colaboradores hasta altas horas de la madrugada.

JUEVES 23 Los manifestantes que acampan frente al Ministerio de Trabajo levantan la medida de protesta luego de obtener un compromiso por parte de las autoridades de atender algunos de sus reclamos.

Unos 5 mil empleados de comercio marchan hasta la Casa Rosada (BA) en reclamo de que el gobierno interceda en la disputa que mantiene con el gremio de los camioneros por la representación gremial de un grupo de 300 trabajadores de Carrefour.

DOMINGO 26 En Mendoza, el radical Julio Cobos se impone en las elecciones para la gobernación al peronista Guillermo Amstutz. En La Pampa se consagra gobernador Carlos Verna, del PJ. En Catamarca, el Frente Cívico y Social consigue una victoria contundente sobre el PJ en los comicios de diputados nacionales y senadores. En Tucumán, Fuerza Republicana consagra a Ricardo Bussi senador nacional. En Ushuaia, el intendente y candidato a la reelección por tercera vez, Jorge Garramuño, gana la elección con el 45,7% de los votos frente al justicialista Ricardo Burlan que obtuvo el 36%.

MARTES 28 Empleados de la Dirección de Migraciones nucleados en ATE realizan un paro total y activo en reclamo de un aumento salarial de emergencia para los 500 compañeros cuyos sueldos se encuentran bajo la línea de pobreza y del pase a planta de unos 400 trabajadores contratados y transitorios, entre otras demandas.

Los médicos de los hospitales públicos de BA realizan una huelga de 2 hs en demanda de mayor presupuesto para el sector.

JUEVES 30 La Legislatura de BA aprueba la expropiación de Brukman que será finalmente traspasada a sus trabajadores.

NOVIEMBRE

MARTES 4 Más de 30 mil personas convocadas por el Bloque Piquetero Nacional y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), entre otras 30 organizaciones sociales, marchan desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo (BA) bajo la consigna "Por trabajo y salario, romper con el FMI. No a la criminalización de la protesta". Rechazan la denuncia oficial contra los grupos que hace días impidieron la salida de funcionarios y empleados del Ministerio de Trabajo y las versiones de la creación de una brigada antipiquetera.

VIERNES 7 Unas 70 familias del MTR ocupan un baldío abandonado en el barrio de Palermo (BA) en reclamo de viviendas dignas.

DOMINGO 9 Los piqueteros del MTR levantan la ocupación del terreno de Palermo luego de recibir la promesa de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de que se buscará una solución a sus problemas de vivienda.

En Chubut, el candidato del justicialismo Mario Das Neves se impone al actual gobernador radical José Luis Lizurume. En San Luis, el candidato del Frente Juntos por San Luis, Daniel Pérsico (PJ), se proclamó en la noche anterior ganador de la intendencia capitalina. Los comicios son convocados por el municipio y declarados ilegales por la Justicia electoral.

El empresario Domingo Amaya asume como intendente interino de San Miguel de Tucumán en reemplazo del represor Antonio Domingo Bussi, detenido el pasado 15 de octubre.

LUNES 10 Trabajadores estatales de Córdoba marchan por las calles céntricas en reclamo de aumentos salariales. Los docentes realizan además una huelga por 24 hs.

MIÉRCOLES 12 Un grupo de diputados, de los cuales varios responden al presidente Kirchner, presenta un proyecto de ley para amnistiar a los cerca de 3 mil procesados por protestas sociales desde 1991.

Trabajadores estatales de ATE se concentran frente al Congreso para reclamar modificaciones en el proyecto de presupuesto para el año próximo, a fin de que contemple partidas para aumentos salariales para empleados públicos y jubilados.

JUEVES 13 El gobierno anuncia que los beneficiarios de los planes Jefes de Hogar recibirán por única vez un aporte solidario de 50 pesos que cobrarán entre el 10 y el 23 de diciembre.

DOMINGO 16 Se realizan elecciones en Salta. Juan Carlos Romero, del PJ, gana la gobernación con más del 50% de los votos.

MARTES 18 Grupos de ex trabajadores bloquean desde las 7 de la mañana dos accesos a la planta de despacho de Gas Licuado de Petróleo de la empresa Repsol YPF, en Ensenada (PBA), en reclamo de una indemnización adeudada desde que la empresa fuera privatizada en 1991.

MIÉRCOLES 19 El Senado convierte en ley la prórroga de la emergencia económica hasta fines de 2004. Mediante esta ley se pesifican todos los bienes y las tarifas, se prohíben las indexaciones y se delegan en el Poder Ejecutivo facultades del Congreso. Además se le da al gobierno el poder de renegociar todos los contratos de las empresas de servicios públicos.

JUEVES 20 La policía de la provincia de Salta desaloja a los piqueteros que desde el 4 de noviembre mantienen bloqueada la entrada y salida de la destilería de Campo Durán. La gente de General Mosconi sale de sus casas al escuchar por una radio local la represión en directo. Toman una petrolera e incendian un tanque de combustible, ingresan a las oficinas de las empresas Refinor y Tecpetrol, sacan las computadoras, las rompen y las queman sobre la ruta nacional 34. Intentan también ocupar otras 2 plantas donde se apostó la Gendarmería. Ocho manifestantes son detenidos. Por la noche cortan la entrada a la ciudad para pedir la libertad de los arrestados.

Integrantes de distintas organizaciones que se oponen al ingreso de Argentina en el ALCA marchan por el microcentro de BA y arrojan huevos y piedras contra el edificio de la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana.

VIERNES 21 El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), la Asociación de Pequeños Productores del Norte de Córdoba (APENOC), la Organización de Comunidades Unidas del Norte de Córdoba (OCUNC), la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) de Mendoza, el MTD Aníbal Verón, Barrios de Pie, el MTR y algunas asambleas barriales, entre otros, marchan hasta la Plaza de Mayo en contra del ALCA.

Los siete piqueteros detenidos el día anterior en Salta recuperan su libertad pero seguirán bajo proceso acusados de impedir el paso y transporte de vehículos y personas.

DOMINGO 23 Se realizan elecciones generales en Entre Ríos. Jorge Busti, del PJ, obtiene la gobernación con más del 45% de los votos. En Corrientes se realizan elecciones

nes para legisladores nacionales. El Frente de Todos (PJ – UCR) consolida su triunfo obteniendo la mayoría de las bancas. En San Luis, la candidata del Movimiento Nacional y Popular (MNP), María Angélica Torrontegui, es elegida intendente. Durante la madrugada balean la casa del intendente consagrado en las elecciones de dos semanas atrás, Daniel Pérsico. Adolfo Rodríguez Saá es elegido diputado nacional por la provincia. En Tierra del Fuego, la Alternativa por una República de Iguales (ARI) gana las elecciones de diputados nacionales.

MARTES 25 Unos 200 desocupados del MTD, la CTA y otras organizaciones realizan una asamblea en el barrio San Lorenzo de la capital de Neuquén frente al estadio Ruca-Che para protestar contra la decisión del gobierno local de bancarizar con tarjetas a los planes sociales municipales y provinciales. Son duramente reprimidos por la policía. Durante todo el día los vecinos se suman a la protesta, que se extiende a zonas aledañas. Los manifestantes responden con piedras y barricadas para impedir el avance policial con motos, carros hidrantes y otros vehículos. La represión deja un saldo de 22 personas heridas, 5 de ellas con balas de plomo.

MIÉRCOLES 26 En Neuquén 3 mil personas marchan a la casa de gobierno provincial para repudiar la represión del día anterior y la implementación de la tarjeta de compra para los beneficiarios de planes sociales.

Termina la consulta popular lanzada por la Autoconvocatoria No al ALCA. Durante siete días votaron más de 2 millones de personas.

La Cámara de Senadores convierte en ley el Presupuesto 2004. Además de fijar las pautas de ingreso y gastos del Estado en cada ejercicio, otorga facultades especiales al jefe de Gabinete para manejar el gasto público a discreción sin necesidad de consultar al Congreso. El presupuesto prevé un aumento de 11,9% en las partidas para los gastos sociales y estima que en 2004 la economía crecerá un 4% y la inflación rondará el 10% anual.

El gobierno resuelve pagar 39.500 pesos a cada uno de los ex trabajadores de YPF por la deuda que el Estado mantiene con ellos desde la privatización de la petrolera.

JUEVES 27 La CTA convoca a unos 1.000 manifestantes frente a la casa de gobierno de la PBA para reclamar un aumento general de salarios.

VIERNES 28 Unos 10 mil desocupados del Bloque Piquetero Nacional se movilizan desde Plaza Constitución hasta la sede de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y el Ministerio de Trabajo (BA) en reclamo de puestos de trabajo genuino.

DICIEMBRE

LUNES 1 A pedido de la justicia, y bajo el cargo de intimidación pública, la policía detiene a 7 manifestantes de la Mesa Coordinadora Nacional de Trabajadores de YPF y Gas del Estado Desocupados de La Plata, Berisso y Ensenada. Integrantes de movimientos sociales y sindicatos se acercan hasta la sede de Tribunales para reclamar la libertad de los detenidos.

MARTES 2 La Justicia ordena la liberación de 7 ex trabajadores de YPF que fueron detenidos el lunes anterior por intimidación pública.

MIÉRCOLES 3 Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, las Abuelas de Plaza de Mayo y los Hijos por la Identidad, la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), entre otras organizaciones, inician, bajo la consigna "A veinte años sin dictaduras militares, construyamos juntos una verdadera democracia, sin hambre y sin impunidad", la 23ª Marcha de la Resistencia.

Doce acusados de participar en el saqueo e incendio de Tecpetrol y Refinor de General Mosconi, el 20 del mes último, son detenidos por orden de la Justicia de Tartagal por robo, incendio, daño y amenazas.

Los docentes de Tucumán paralizan las actividades por 48 hs en las escuelas primarias y secundarias para exigir al gobierno que no descuente de los salarios los dos días de paro que el sector cumplió el mes anterior.

MARTES 9 Cuatro policías son detenidos por la agresión que sufrió el manifestante que perdió el ojo izquierdo en la represión a los desocupados del martes 25 último en Neuquén.

MIÉRCOLES 10 La Asociación Madres de Plaza de Mayo comienza la 23ª Marcha de la Resistencia en la Plaza de Mayo bajo las consignas "Por la unidad latinoamericana" y "No pago de la deuda externa". Participan partidos de izquierda, organizaciones piqueteras y estudiantiles y dirigentes de Bolivia, Uruguay, Brasil y Venezuela.

En Salta se produce un choque entre policías y manifestantes de la CTA, CCC, partidos de izquierda y organizaciones barriales que marchan por el Día de los Derechos Humanos. Hay 5 manifestantes detenidos y tres policías heridos.

En Santiago del Estero la policía desaloja de una autopista a cien desocupados que realizan un piquete en demanda de alimentos y planes sociales. Hay 13 detenidos.

JUEVES 18 Después de 4 días se levanta el corte de la ruta 38 en Aguilares (Tucumán) por parte de integrantes del MIJD en demanda de planes sociales y subsidios.

Los médicos de los hospitales públicos de la PBA realizan una huelga de 24 hs en demanda de una recomposición salarial.

VIERNES 19 Los integrantes de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) realizan un acto en un estadio de fútbol de Buenos Aires al cumplirse dos años de los hechos de 2001 que llevaron a la caída del presidente De la Rúa. Asisten menos de 10 mil manifestantes. Expresan su respaldo al gobierno de Néstor Kirchner. La CTA adhiere, aunque hace su propio acto de homenaje a los muertos del 19 y 20 en la esquina donde fue asesinado Gustavo Benedetto desde el interior del Banco HSBC. Luego se suma a un acto frente al Congreso organizado por los familiares de las víctimas de esos días.

La Argentina desembolsa 268 millones de dólares para cubrir un vencimiento con el FMI. El organismo posterga hasta mediados de enero la aprobación de la primera revisión del acuerdo firmado en septiembre para apurar al gobierno en la negociación con los acreedores privados por la deuda externa.

SÁBADO 20 Los hechos de diciembre de 2001 son recordados con diversos actos y marchas en la zona de la Plaza de Mayo, convocados por distintas organizaciones por separado, que reúnen en total a unos 50 mil manifestantes. Los primeros en marchar son los integrantes del Movimiento Barrios de Pie, MTD Anibal Verón y diversas agrupaciones piqueteras peronistas, apoyados por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, entre otros. Luego, mientras se desconcentran, llegan a la Plaza de Mayo los manifestantes de la CCC. Finalmente llegan los integrantes del Bloque Piquetero Nacional y del MIJD junto con estudiantes, ahorristas, asambleístas barriales, militantes de derechos humanos y partidos de izquierda. En el transcurso de este acto explota una bomba de estruendo que produce heridas a 25 manifestantes. Por su parte, los familiares de las víctimas del 20 marchan junto con miembros de asambleas barriales y piqueteros del MTD Anibal Verón, pasando por los lugares donde se produjeron los asesinatos. Se realizan varios actos en el interior del país.

GLOSARIO DE SIGLAS

ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
APENOC	Asociación de Pequeños Productores del Norte de Córdoba
ARI	Alternativa por una República de Iguales
ATE	Asociación de Trabajadores del Estado
ATEN	Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén
BA	Ciudad de Buenos Aires
CAC	Cámara Argentina de la Construcción
CCC	Corriente Clasista y Combativa
CTA	Central de los Trabajadores Argentinos
FEB	Federación de Educadores Bonaerenses

FMI	Fondo Monetario Internacional
FTC	Frente de Trabajadores Combativos
FTV	Federación de Tierra y Vivienda
H.I.J.O.S.	Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
MIJD	Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados
MNyP	Movimiento Nacional y Popular
MOCASE	Movimiento Campesino de Santiago del Estero
MPN	Movimiento Popular Neuquino
MTD	Movimiento de Trabajadores Desocupados
MTR	Movimiento Teresa Rodríguez
OCUNC	Organización de Comunidades Unidas del Norte de Córdoba
PBA	Provincia de Buenos Aires
PBI	Producto Bruto Interno
PJ	Partido Justicialista
SADOP	Sindicato Argentino de Docentes Privados
SUTEBA	Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la PBA
UCR	Unión Cívica Radical
UE	Unión Europea
UEJN	Unión de Empleados Judiciales de la Nación
UEPC	Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba
UST	Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra
UTDOCH	Unión de Trabajadores Desocupados, Ocupados y Changarines
UTP	Unión de Trabajadores Piqueteros

Realizada por María Celia Cotarelo (PIMSA – Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina) y el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Relevamiento y sistematización a cargo de Florencia Ayala.

Fuentes: diarios Página 12, Clarín, La Nación y Crónica.

[cronología setembro-dezembro 2003]

SETEMBRO

3ª FEIRA 02 O presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) foi substituído após um período de desgaste da instituição na opinião pública com a acusação de que o INCRA estaria conivente com as ocupações de terra. A demissão acarretou a entrega de dez cargos de dirigentes do INCRA.

4ª FEIRA 03 Terceiro dia de manifestações de estudantes secundaristas de escolas estaduais e municipais em Salvador – Bahia (região nordeste). Eles protestavam contra o reajuste do preço da tarifas de ônibus e contra a lei que permite que os estudantes paguem meia passagem apenas durante o período letivo. As manifestações foram organizadas pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e reuniram, em média, cerca de 15 a 20 mil estudantes por dia, que bloquearam diversas avenidas de grande movimentação da cidade, impedindo que os ônibus circulassem e realizaram atos em frente à Prefeitura, Câmara Municipal e praças públicas. Houve confronto com a Polícia Militar (PM), que usou bombas de efeito moral. Alguns ônibus foram apedrejados e um estudante morreu atropelado por um ônibus durante a manifestação. A Prefeitura autorizou a aprovação de um projeto de emergência que garante o valor de 50% da tarifa durante todo o ano para os estudantes, extensivo inclusive aos universitários, mas o reajuste das passagens se manteve.

Índios Parecis fizeram reféns cinco funcionários da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) em Campos Novos do Parecis – Mato Grosso do Sul como forma de protesto por não poderem arrendar parte de suas terras a fazendeiros em troca de cestas básicas. A autonomia para o arrendamento de terras depende de aprovação de lei no Congresso.

5ª FEIRA 04 Chan Kim Chang, chinês naturalizado brasileiro, morreu após 9 dias de coma. Ele foi preso pela Polícia Federal ao tentar embarcar no aeroporto internacional do Rio de Janeiro com 30 mil dólares não declarados à Receita Federal. No dia seguinte, foi encontrado inconsciente na cela de um presídio estadual e levado em estado grave para o hospital. De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal, divulgado pela Secretaria de Direitos Humanos do Rio, Chan Kim Chang sofreu espancamento no presídio.

Fazendeiros do sul do Pará realizaram por conta própria com o reforço de seguranças fortemente armados, o despejo dos sem-terra que ocupam mais de 20 fazendas na região. A decisão foi tomada após um acordo entre líderes dos movimentos sociais, autoridades do estado e o INCRA de paralisarem a operação de reintegração de posse.

2ª FEIRA 08 O líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) Luciano Alves da Silva foi assassinado com quatro tiros na cidade de Craíbas, Alagoas (região nordeste). Segundo a superintendência do INCRA, ele era presidente da Associação do Assentamento Rendeira, o maior do Estado de Alagoas com 300 famílias.

3ª FEIRA 09 A PM de Sergipe bloqueou estradas que dão acesso a 5 municípios do sertão do Estado para tentar impedir que militantes do MST que se encaminhavam às cidades realizassem manifestações. O governo estadual alegou que o movimento havia anunciado que iria ocupar prédios públicos. Ainda assim, o movimento conseguiu entrar em três cidades e realizar um ato com 4 mil pessoas no município de Canindé. Houve confronto entre a PM e o MST e alguns Sem-Terra acabaram feridos.

A PM do Pará cumpriu a reintegração de posse e promoveu a retirada de cerca de 15 mil famílias de Sem-Terra ligadas à Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAGRI) que ocupavam uma área em Parauapebas – Pará (região norte) pertencente ao governo do Estado.

4ª FEIRA 10 Funcionários da Petrobrás paralisaram suas atividades por 24 horas em protesto contra a estatal que não aceitou reajustá-los em 32,35%. A empresa se reunirá com representantes da Federação Única dos Petroleiros (FUP) para discutir um novo cronograma de negociação com a categoria. Segundo a direção da FUP, o movimento contou com a adesão de 90% dos funcionários da área de produção e 60% do setor administrativo.

Paralisação nacional dos petroleiros reivindicando aumento salarial de 23,35%.

A líder sem-terra Diolinda Alves de Souza, mulher do principal líder do Pontal do MST no Pontal do Paranapanema – José Rainha, foi presa em sua casa, em Teodoro Sampaio, acusada, junto com outros líderes do movimento –inclusive José Rainha, que já se encontra preso– de formação de quadrilha. Os advogados do MST recorreram da decisão judicial, alegando que a mesma foi arbitrária e demonstra um objetivo de criminalização dos movimentos sociais. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra (CPT), 39 pessoas de movimentos sem-terra já foram presas no primeiro semestre deste ano.

5ª FEIRA 11 Protestos e paralisações em algumas agências bancárias de bancos privados em todo o país pela campanha salarial dos bancários, que possuem data-base este

mês, e reivindicam um reajuste de 21,58%, enquanto a Federação Nacional de Bancos (FENABAN) manteve a proposta de 10%, rejeitada pelos bancários.

Os líderes do MST José Rainha Júnior e Felinto Procópio dos Santos, presos desde 11/07, foram transferidos para uma penitenciária de segurança máxima em Presidente Bernardes – São Paulo, após a descoberta de um suposto plano de uma facção criminosa para matar os dois líderes sem-terra.

6ª FEIRA 12 Sete trabalhadores rurais foram assassinados em São Félix do Xingu – estado do Pará, quando buscavam sementes para plantio em uma reserva florestal. A polícia suspeita que o massacre esteja associado a uma milícia de pistoleiros que atua na região. O MST pediu a intervenção do governo federal nas disputas agrárias, além de medidas concretas para extinguir ações de milícias armadas em todo o país.

SÁBADO 13 Manifestantes organizados pela Coordenação dos Movimentos Sociais realizaram uma marcha de dois quilômetros até chegar em frete ao Consulado dos EUA para protestar contra a posição americana na reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Cancún e contra a criação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA).

3ª FEIRA 16 Término da greve de cinco dias dos funcionários da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que ocorreu em 22 estados. Segundo a ECT, a adesão foi cerca de 20%, e segundo representantes do sindicato, de 75% do total de 98 mil funcionários. Eles reivindicavam um reajuste de 69% nos salários, calculado com base nas perdas ocorridas desde o Plano Real em 1994, e a elevação do piso salarial, que atualmente é de 395 reais. A proposta da empresa foi de 6% de reajuste.

4ª FEIRA 17 Líderes dos partidos Partido da Frente Liberal (PFL) e Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que fazem oposição ao governo federal, pediram a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as ações promovidas pelo MST de ocupação de terras. A base governista do governo afirma que o requerimento é uma tentativa de causar constrangimento ao presidente Lula. O MST realizou no mesmo dia dois protestos: um em Salvador – Bahia integrantes do movimento realizaram uma caminhada reivindicando a soltura de um de seus líderes, José Rainha; e outro em Jaciara – Mato Grosso um grupo de quinhentos sem-terra ocuparam uma fazenda que pertence à União.

2ª FEIRA 22 O presidente-executivo da montadora alemã Volkswagen afirmou que os trabalhadores que por ventura realizarem greves na fábrica do Brasil serão demitidos. A declaração foi uma resposta à paralisação que ocorreu em agosto contra a terceirização de quase 4 mil trabalhadores. Os trabalhadores possuem um acordo com a empresa que garante estabilidade até 2006.

- 3ª FEIRA 23** Duzentos e cinquenta integrantes de movimentos sociais tentaram ocupar o prédio do Ministério da Agricultura para protestar contra a liberação dos transgênicos, após a aprovação de Medida Provisória que autoriza o plantio da soja modificada. A PM evitou a ocupação, mas houve confronto.
- 4ª FEIRA 24** O Sindicato Estadual dos Profissionais em Educação (SEPE) organizou um protesto, do qual participaram 800 estudantes, contra a falta de professores, fusão de turmas e redução da carga horária das disciplinas nas escolas estaduais em frente à sede do governo do estado do Rio de Janeiro, e tentaram agendar uma audiência com a governadora Rosinha Matheus. Houve confronto com a PM e dois estudantes se feriram.
- 6ª FEIRA 26** Entre 40 e 50 mil mulheres realizaram a Marcha das Margaridas, em Brasília, com a principal reivindicação de pressionar para maior agilidade na reforma agrária, além da maior participação das mulheres na reforma agrária. A caminhada durou cinco horas e foi pacífica. A Marcha das Margaridas foi realizada pela primeira vez no ano de 2001, e reuniu na ocasião 20 mil mulheres. O nome do evento é uma homenagem à uma líder sindical morta no ano de 1983, Margarida Maria Alves.
- 2ª FEIRA 29** Início de campanha salarial unificada com a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a Força Sindical para negociar reajuste de salários no segundo semestre. Foi realizada uma passeata que reuniu três mil trabalhadores no centro da cidade de São Paulo pedindo um reajuste salarial de 20%, diminuição da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais e participação nos lucros das empresas.

OUTUBRO

- 4ª FEIRA 01** Cerca de 50 famílias ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto ocuparam um terreno na zona norte do Recife. A área era alvo de negociação entre as lideranças do movimento e a prefeitura há praticamente um ano. De acordo com os sem-teto, a decisão foi tomada após um grupo ligado ao movimento ter visto no local funcionários de uma imobiliária, que estariam loteando o terreno para iniciar o processo de venda.
- DOMINGO 05** João Pedro Stedile, um dos principais coordenadores nacionais do MST declarou, no 2º Fórum Social Potiguar, que o governo não soube agir no episódio referente a liberação do cultivo de soja transgênica para a próxima safra, pois não levou em conta nem a opinião de dezenas de cientistas da própria Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), alertando que a questão dos transgênicos é muito perigosa.
- 3ª FEIRA 07** De acordo com relatório divulgado pelo INCRA, o Ministério de Desenvolvimento Agrário só assentou 6% das 60 mil famílias prometidas para

2003 pelo governo Lula. Somente 3.477 famílias foram beneficiadas com o Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA) de 1º de março a 31 de agosto. Existem hoje aproximadamente 200 mil famílias acampadas no país.

- 4ª FEIRA 08** Dois trabalhadores rurais foram assassinados em Nova Mamoré, estado de Rondônia (região norte). De acordo com o INCRA, esta região é localizada em mata fechada e repleta de madeireiros, sendo palco de intensas disputas de terra.
- 5ª FEIRA 09** Metalúrgicos da General Motors, em São José dos Campos e da Scania e da Mercedes, no ABC paulista paralisaram suas atividades por 2 horas em campanha por reajuste salarial de 20%, além dessa reivindicação, a categoria também quer reduzir a jornada de trabalho de 40 para 36 horas.
- 6ª FEIRA 10** De acordo com pesquisa feita pela CPT, a violência no campo dobrou nos primeiros nove meses do governo Lula em relação ao mesmo período do ano passado. Só entre janeiro e setembro, 60 trabalhadores rurais foram assassinados, o maior número já registrado no Brasil desde 1990. Mas de acordo com o secretário nacional da CPT, não só a violência e a repressão aumentaram, como também as ações do movimento se multiplicaram, os acampamentos de sem-terra aumentaram 161% e as ocupações 75%.
- 3ª FEIRA 14** Estudantes e professores da rede pública estadual do Rio de Janeiro protestaram nas proximidades do Palácio das Laranjeiras, sede do governo estadual, contra a falta de profissionais nas escolas, o déficit é de 10 mil funcionários e 26 mil professores. Os manifestantes pediram também a contratação de 8 mil profissionais aprovados em concurso de 2001.
- 5ª FEIRA 16** Fim da greve dos funcionários do Banco do Brasil (BB), paralisados desde o dia 13/10. Segundo levantamento da Confederação Nacional dos Bancários (CNB), a paralisação atingiu 77% dos funcionários que trabalham em 19 capitais do país. Após várias negociações, o BB concordou em conceder o mesmo reajuste autorizado para os bancos privados, de 12,6% para todos os funcionários. Pela proposta anterior, o índice de correção variava de acordo com a faixa salarial de cada trabalhador. Funcionários da Caixa Econômica Federal (CEF), que paralisaram suas atividades juntamente com os do BB permanecem em greve, já que a Caixa propôs um reajuste de 12,6% apenas para 85% dos seus funcionários e para os 15 mil trabalhadores restantes, o reajuste seria de 5%.
- 6ª FEIRA 17** Funcionários da Petrobrás aprovaram a proposta da FUP de paralisar suas atividades por 72 horas caso a companhia não avance nas negociações salariais. Os petroleiros querem 15,5% de reajuste e mais 6,8% por ganhos de produtividade. A direção da estatal, oferece apenas 10,7% de reajuste.

- 4ª FEIRA 22** Em greve desde o dia 13/10, os funcionários da CEF decidiram retomar suas atividades. Eles conseguiram um reajuste de 12,6% para quem recebe salário padrão, 10% para quem possui cargos de carreira técnica e assessoramento e para gerentes e empregados das áreas de assessoramento e carreira negocial, o reajuste foi de 5%. Além disso, o banco concordou em pagar a todos, abono de 1.500 reais, auxílio-refeição no valor de 11,67 reais por dia e cesta-alimentação de cem reais.
- 3ª FEIRA 28** Integrantes do MST ocuparam um terreno às margens da via Dutra, próximo ao município de Queimados, no Rio de Janeiro. Esta ocupação tem uma característica diferente, já que foi praticada por trabalhadores desempregados das cidades. Líderes do movimento afirmaram que esta é uma nova modalidade de ação do MST, uma vez que tais pessoas, devido ao alto índice de desemprego, buscam uma chance no campo engajando-se no movimento.

NOVEMBRO

- 4ª FEIRA 05** Metalúrgicos da fábrica da Volkswagen, em greve desde 29/10, recusaram a proposta salarial da montadora de garantir um reajuste real sobre os salários apenas em junho do próximo ano, e decidiram continuar a paralisação. Segundo a comissão de fábrica, cerca de seis mil carros deixaram de ser fabricados nestes nove dias.
- 5ª FEIRA 06** Marcha de oito mil pessoas em Belo Horizonte – Minas Gerais deu início ao 1º Fórum Social Brasileiro, preparatório para o próximo Fórum Social Mundial. Na abertura do Fórum, dois outros protestos: foram realizados um manifesto organizado por um grupo de deputados do Partido dos Trabalhadores (PT) contra o novo acordo com o FMI, e um documento elaborado pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI), que denunciou a não demarcação de terras indígenas e o aumento de violência contra os índios. Os dois documentos foram encaminhados ao presidente Lula.
- 2ª FEIRA 10** Início da marcha organizada pelo MST, Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas (CONTAG) e CPT, que pretende reunir dois mil manifestantes para percorrer durante oito dias cerca de 200 km, de Goiânia – Goiás até Brasília – Distrito Federal, com o objetivo de pressionar o governo a liberar, ainda este ano, o Plano Nacional de Reforma Agrária.
- 4ª FEIRA 12** O Superior Tribunal de Justiça autorizou a libertação do líder do MST, José Rainha Júnior, preso desde 11 de julho. Ele terá direito a responder o processo em liberdade até a sentença judicial ser definitiva.

DEZEMBRO

- 5ª FEIRA 11** Há alguns meses atrás cerca de 40% dos 800 mil funcionários públicos aderiram a uma greve contra a reforma da previdência, concluída após oito meses de tramitação na Câmara e no Senado. Ela institui, entre outras medidas, a cobrança de contribuição previdenciária de 11% de funcionários públicos aposentados, aumenta em sete anos a idade mínima – 55 anos para as mulheres e 60 anos para os homens – para os servidores se aposentarem e reduz o valor das pensões em 30% sobre o que exceder 2.400 reais.
- DOMINGO 14** O Diretório Nacional do PT, por 55 a 27 votos, expulsou quatro parlamentares petistas: a senadora Heloísa Helena (AL) e os deputados federais Babá (PA), Luciana Genro (RS) e João Fontes (SE), que votaram contra a reforma da previdência.
- 4ª FEIRA 17** Em greve desde o dia 10/12, Polícias Federais de alguns estados do país retomaram suas atividades. Eles reivindicaram o cumprimento da lei 9266, de 1996, que enquadrou todos os funcionários da Polícia Federal como servidores de nível superior, a efetivação de um plano de cargos que crie carreira de apoio para os funcionários administrativos, de modo que estes tenham poder e autonomia para aquisição de equipamentos necessários ao trabalho de investigação, e ainda, repasse de verbas para a Polícia Federal, cuja dívida é de cerca de 45 milhões de reais.

A CPT divulgou seu relatório anual sobre conflitos no campo no período de janeiro a novembro de 2003, constatando que a violência no meio rural bateu recordes dos últimos 11 anos. Em relação ao ano passado, afirma a CPT, os assassinatos de agricultores aumentaram 77,5%. Em relação à tentativa de assassinato o aumento foi de 76,3%. Nas disputas de terras, 2.346 famílias foram expulsas das propriedades, mais de 20 mil sofreram ameaças de expulsão e cerca de 7.000 foram vítimas de pistolagem. Outras 30.853 famílias sofreram despejos, durante os quais cerca de 6.000 tiveram suas casas, suas roças ou seus pertences destruídos. Uma das explicações para o aumento da violência no campo, segundo a CPT, é que a expectativa criada pelo governo Lula em relação à reforma agrária levou os movimentos sociais a redobrar suas ações.

SIGLAS

ALCA	Área de Livre Comércio das Américas
BB	Banco do Brasil
CEF	Caixa Econômica Federal
CIMI	Conselho Indigenista Missionário
CNB	Confederação Nacional dos Bancários

CONTAG	Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas
CPI	Comissão Parlamentar de Inquérito
CPT	Comissão Pastoral da Terra
CUT	Central Única dos Trabalhadores
ECT	Empresa de Correios e Telégrafos
EMBRAPA	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
FENABAM	Federação Nacional de Bancos
FETAGRI	Federação dos Trabalhadores na Agricultura
FUNAI	Fundação Nacional do Índio
FUP	Federação Única dos Petroleiros
INCRA	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
MST	Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra
OMC	Organização Mundial do Comércio
PDA	Plano de Desenvolvimento do Assentamento
PFL	Partido da Frente Liberal
PM	Polícia Militar
PSDB	Partido da Social Democracia Brasileira
PT	Partido dos Trabalhadores
SEPE	Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação
UBES	União Brasileira dos Estudantes Secundaristas

Equipe:

Coordenação: Prof. Dr. Roberto Leher (UFRJ/LPP-UERJ).

Assistentes de Pesquisa: Gleide Banus Barbosa (LPP/UERJ); Mariana Oliveira Setúbal (LPP/UERJ). Colaboração: PROEALC / CCS / UERJ – Coordenado por: Profa. Dra. Silene de Moraes Freire; Bolsistas: Livânia de Oliveira Conceição e Reginaldo Machado da Costa Júnior.

Fontes: Jornal do Brasil, Jornal Folha de São Paulo, Jornal O Globo, Jornal O Estado de São Paulo, Jornal Brasil de Fato, Agência de Notícias Carta Maior.

[cronología septiembre-diciembre 2003]

SEPTIEMBRE

- JUEVES 4** Un millar de personas convocadas por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y otras agrupaciones de derechos humanos se manifiesta junto al Partido Comunista (PC) frente a La Moneda en reclamo por la anulación de la Ley de Amnistía, que contempla la reducción de penas de quienes demuestren haber actuado bajo órdenes.
- MIÉRCOLES 10** Integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) derriban siete postes de traslado de electricidad a 15 km al sur de Copiapó y otros dos a 35 km al norte, dejando sin suministro a casi toda la III Región en la víspera del aniversario del 11 de septiembre.
- JUEVES 11** En un nuevo aniversario del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, integrantes del Partido Socialista (PS) depositan un arreglo floral en el monumento al presidente de la Unidad Popular en la Plaza de la Constitución, donde luego realizarán celebraciones consecutivas militantes del PC, miembros de la AFDD y cerca de 300 miembros del FPMR, de los cuales 39 son apresados luego de un choque con la policía. En Santiago y sus alrededores, opositores al régimen realizan barricadas, saqueos y fogatas, atacan a carabineros y destruyen parte del tendido eléctrico afectando a 15 comunas capitulinas, lo cual finaliza con un saldo de 12 policías heridos y alrededor de 60 detenidos en los enfrentamientos. En Talca, Linares, Castro, Puerto Montt, Rancagua, Rengo, Concepción y Copiapó se repiten las manifestaciones de rechazo al golpe de estado pinochetista, las cuales finalizan con un número oficial de más de 300 encarcelados en todo el país bajo acusaciones por desórdenes, robo y maltrato de obra a carabineros. Por su parte, alrededor de 4 mil personas –entre quienes se encuentran funcionarios del gobierno dictatorial, familiares, amigos y colaboradores del ex dictador golpista– acuden al acto organizado por la Fundación Pinochet junto a legisladores y directivos del ejército y la Fuerza Aérea.
- DOMINGO 14** La Asamblea de los Derechos Humanos, la AFDD, el PC, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el FPMR, anarquistas y otros colectivos de izquierda marchan junto a 4 mil personas desde la plaza Los Héroes al

Cementerio General de Santiago para recordar a Salvador Allende y repudiar al golpe militar que lo derrocó. Los manifestantes rechazan también la iniciativa oficial sobre juzgamientos a represores y condenan al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con los EE.UU. Un contingente de 1.500 carabineros custodia y reprime la movilización además de detener tras un enfrentamiento a 37 de sus miembros.

MARTES 16 El secretario de la Presidencia, el gerente general de Endesa Chile, las propietarias de los terrenos en disputa por Ralco y sus abogados se reúnen en el Palacio de La Moneda para firmar un Memorando de Entendimiento en el que las 4 pehuenches que mantenían su oposición a la venta –las hermanas Huenteao, Berta Quintremán y Aurelia Marihuán– se comprometen a entregar sus parcelas a cambio de compensaciones económicas y de tierras, entre otros puntos.

LUNES 22 El tribunal oral de la ciudad de Angol condena a Pascual Pichún y Aniceto Norín –ambos dirigentes de la Coordinadora Mapuche Arauko Malleko– a una pena de 5 años de prisión luego de culpabilizarlos por el delito de amenazas terroristas.

SÁBADO 27 Medio centenar de mapuches se concentra en las afueras del Tribunal Oral Penal de Temuco en solidaridad con los lonkos condenados. Aniceto Norín se declara inocente y denuncia la presencia de testigos pagos durante el proceso.

MARTES 30 Bajo una convocatoria del Colegio de Profesores, la cuarta parte de los 140 mil docentes con que cuenta el sistema educativo público realiza un paro nacional por 24 hs en reclamo por mejoras salariales.

OCTUBRE

DOMINGO 12 Alrededor de un millar de personas marchan en Santiago desde la plaza Italia hacia el cerro San Lucía donde realizan un acto junto a mil personas más en el que conmemoran un nuevo aniversario de la conquista de América, reclamando por el fin de la discriminación hacia los pueblos originarios, la liberación de los presos políticos y la anulación de las leyes de Seguridad Interior del Estado y de Conductas Terroristas. Organizaciones mapuches y de otras etnias participan de la medida junto a colectivos de estudiantes, de minorías sexuales, anarquistas, jóvenes y partidos de izquierda.

JUEVES 16 Unos 800 trabajadores de la división norte de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) bloquean por 6 hs los accesos a la mina de Chuquicamata en protesta contra una propuesta de la empresa que les adjudica el pago de los sobrecostos de 1.800 viviendas destinadas a su traslado a la ciudad de Calama. Los mineros acuden a una reunión con empresarios de la compañía que finaliza sin acuerdos.

MIÉRCOLES 22 Tras doce años de iniciadas las negociaciones el senado nacional reafirma con 34 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones la suscripción de un TLC con los Estados Unidos mediante el sufragio favorable de los legisladores de la Concertación y en menor parte de la oposición. El acuerdo implica para el país la desgravación en un año del 87% de sus exportaciones y una promesa de ampliar el proceso a la totalidad en 2015, así como la obligación de desarancelar el ingreso de las mercancías importadas desde la potencia norteamericana. Medio centenar de dirigentes del Colegio de Profesores, del PC y militantes antiglobalización de la Asociación por una Tasa Tobin de Ayuda al Ciudadano - Chile (ATTAC) interrumpen la sesión denunciando el convenio para ser expulsados luego a pedido del presidente de la cámara.

JUEVES 23 A iniciativa del Colegio de Profesores, maestros municipalizados de todo el país inician una huelga por 48 hs en reclamo de un aumento salarial y por la suspensión del plan de autoevaluación docente impulsado por el gobierno concertacionista. Los empleados públicos marchan por Santiago hacia el Ministerio de Educación.

LUNES 27 Cuatro presos de la agrupación Kamina Libre inician una huelga de hambre en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) de Santiago exigiendo su libertad al gobierno de la Concertación.

NOVIEMBRE

LUNES 3 Comunidades mapuches de la Araucanía y de Los Lagos inician un proceso de recuperación de tierras ancestrales usurpadas mediante la ocupación indefinida de 45 fundos que en total suman 18 mil has. El Consejo de Todas las Tierras los apoya en sus movilizaciones.

Enfermeros, auxiliares, técnicos, paramédicos y demás empleados de salud de la XI Región afiliados a la Federación de Profesionales Universitarios de la Salud (FENPRUSS) y a la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS) inician una huelga indefinida en reclamo de un aumento salarial del 30%.

MARTES 4 El paro de los empleados de la salud convocado por la FENPRUSS se extiende a las ciudades de Puerto Montt y Concepción. El Ministerio de Salud emite una declaración en la que afirma desentenderse de la solución a los reclamos de los huelguistas.

JUEVES 6 Funcionarios del despacho de Salud de la región de Aisén, dirigentes de la FENPRUSS y la FENATS se reúnen en la ciudad de Coihaique, donde acuerdan el levantamiento del paro regional a cambio del diseño de un programa de mejoramiento salarial, la provisión de otros beneficios y capacitación laboral y la declaración de una amnistía para los huelguistas.

DOMINGO 16 Los huelguistas de Kamina Libre deponen las medidas iniciadas el 27 de octubre tras acordar con gendarmería beneficios de reclusión.

DOMINGO 30 Se realizan las elecciones para designar a ocho representantes indígenas en el Consejo Nacional Indígena de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), en las cuales sufragan 27 mil inscriptos de las etnias aymara, atacameña, rapa nui, mapuche y huiliche –que incluye además a los indígenas de la Región Metropolitana– de un padrón total de 131 mil.

DICIEMBRE

MIÉRCOLES 3 El Colegio Médico convoca a una huelga por 24 hs en rechazo al Acuerdo Universal de Garantías Explícitas (AUGE) que es acatada por el 80% de los agremiados, según los organizadores. El ministro de Salud cifra el apoyo a la medida de lucha en un 30%. La Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (CONFENATS), el Colegio de Enfermeras, la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM) y la FENPRUSS resuelven reponer los encuentros del Consejo de Gremios de la Salud (CONGRES) para debatir allí la realización de otras jornadas de paro contra la reforma sanitaria.

JUEVES 4 Los 907 trabajadores de la división Andina de CODELCO –ubicada en la V Región– inician una huelga indefinida pidiendo a la empresa un aumento salarial de 4% y no de 1,4%, tal como les fue ofertado. El Sindicato de Integración Laboral y el Unificado de Trabajadores participan en la medida.

SÁBADO 13 El Sindicato de Integración Laboral de Trabajadores de CODELCO acepta una oferta de aumento salarial de 2,57% realizada por la empresa.

LUNES 15 El Sindicato Unificado de Trabajadores de CODELCO se pronuncia en favor de la oferta empresarial, igual a la aceptada por el Sindicato de Integración Laboral el sábado último, y llama a sus 665 afiliados a retomar sus tareas.

MARTES 16 El Colegio Médico y su Consejo Regional de Santiago, la CONFENATS, los gremios de trabajadores de consultorios y los de hospitales metropolitanos convocan a una jornada de huelga en rechazo a la reforma de la salud –que incluye al plan AUGE y los proyectos de ley de Autoridad Sanitaria y de Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES)– y exigiendo al gobierno que quite el carácter de urgencia con que ésta se trata en el parlamento para abrir un período de discusión. El gobierno expresa que no modificará el AUGE.

GLOSARIO DE SIGLAS

AFDD	Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
ATTAC	Asociación por una Tasa Tobin de Ayuda al Ciudadano
AUGE	Acuerdo Universal de Garantías Explícitas
CAS	Carcel de Alta Seguridad
CODELCO	Corporación Nacional del Cobre
CONADI	Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
CONFENATS	Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud
CONFUSAM	Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada
CONGRES	Consejo de Gremios de la Salud
FENATS	Federación Nacional de Trabajadores de la Salud
FENPRUSS	Federación de Profesionales Universitarios de la Salud
FPMR	Frente Patriótico Manuel Rodríguez
ISAPRES	Instituciones de Salud Previsional
MIR	Movimiento de Izquierda Revolucionaria
PC	Partido Comunista
PS	Partido Socialista
TLC	Tratado de Librecomercio

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios El Mercurio y La Tercera.*

Paraguay

[cronología septiembre-diciembre 2003]

SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 10 Campesinos nucleados en la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) organizan la primera protesta a nivel nacional contra el gobierno de Nicanor Duarte Frutos en rechazo a la criminalización de las luchas sociales y pidiendo la reforma agraria. En Asunción y en Coronel Oviedo deben suspender la concentración prevista debido a la escasa presencia de manifestantes, pero en Ciudad del Este 300 personas organizan una vigilia permanente en la Plaza de la Paz hasta tener novedades sobre las peticiones realizadas. En Canindeyú, campesinos de la Organización Nacional Campesina (ONAC) levantan una carpa de resistencia para evitar la venta de tierras a ciudadanos brasileños.

MIÉRCOLES 17 Tras ocupar durante 24 hs las oficinas de la Dirección de Extensión Agraria (DEAG) de San Estanislao, San Pedro, unos 500 integrantes de la Federación Nacional Campesina (FNC) levantan la medida luego de firmar un acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que establece la distribución de semillas para la campaña algodonera.

MARTES 23 La Asociación de Médicos del Hospital de Clínicas inicia un paro indefinido hasta que se restituya en el cargo a la directora del hospital, forzada a renunciar por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas. Piden además la renuncia de los 12 miembros del Consejo de la Facultad de Ciencias Médicas y el inicio de un cambio estructural en la institución.

OCTUBRE

MIÉRCOLES 1 La FNC encabeza una movilización campesina nacional, con cortes de ruta y ocupación de las oficinas regionales de la DEAG, exigiendo al Gobierno la distribución inmediata de semillas de algodón.

LUNES 6 La FNC comienza a hacer cierres de ruta intermitentes en 9 departamentos como medida de presión por no recibir respuesta concreta del gobierno sobre la entrega de semillas de algodón.

MIÉRCOLES 15 La Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay (OTEP), la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y la Unión Nacional de Educadores (UNE-SN) inician una huelga nacional de 5 días en reclamo de mayor presupuesto para educación. Los maestros de Asunción y del departamento Central se concentran en la Plaza Italia para marchar hasta la Plaza de la Democracia.

Decenas de indígenas de la Región Oriental llegan a Asunción, donde marchan hasta la Vicepresidencia de la República y al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) reivindicando más tierras y la reforma del INDI que, según consideran, no cumple una función acorde a sus necesidades. Por otra parte, unos 200 líderes de los 17 pueblos nativos de Paraguay concluyen el primer Congreso Indígena tras 5 días de desarrollo en la quinta Ykua Satî, donde ratifican su compromiso de seguir trabajando por unidad, dignidad y respeto.

JUEVES 16 Los docentes en huelga agremiados a la FEP y la UNE-SN marchan hasta la Plaza O'Leary reclamando mayor presupuesto para 2004 y repudiando el proyecto recientemente conocido de reforma de la caja fiscal, que incluye el cambio del sistema jubilatorio. Rechazan la intención del Ejecutivo de aumentar el tiempo de aporte, que actualmente está fijado en 25 años.

MIÉRCOLES 22 Los anestesistas del Hospital de Clínicas se unen a la huelga que llevan adelante los médicos de la institución desde hace casi un mes.

LUNES 27 Tras el fracaso de las negociaciones con el gobierno, la OTEP, la FEP y la UNE-SN comienzan una huelga nacional indefinida, que incluye cortes de rutas en gran parte del territorio nacional, en rechazo al proyecto de Ley de Reforma de la Caja Fiscal que modifica los requisitos para la jubilación.

MARTES 28 Campesinos del MCNOC marchan hasta el Instituto de Bienestar Rural (IBR), donde fuerzan una reunión con el titular para analizar las solicitudes de titulación de asentamientos de tierras. Luego se dirigen hasta la Fiscalía General del Estado y al Ministerio del Interior, reclamando que se regulen los casos en que sus afiliados se hallan procesados.

VIERNES 31 Miles de docentes de la OTEP, la FEP y la UNE-SN marchan hasta el Ministerio de Hacienda mientras maestros del interior bloquean rutas y realizan concentraciones multitudinarias en diferentes puntos del país en rechazo a la propuesta del Ejecutivo de modificar el régimen de jubilación.

NOVIEMBRE

JUEVES 6 Cerca de 20 mil maestros de todo el país marchan por las calles del microcentro hasta el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en rechazo a la intención del Gobierno de modificar la Ley de la Caja Fiscal. En varios puntos del país los docentes realizan, además, cierres tempo-

rales de rutas. Finalmente, la OTEP, FEP y UNE-SN acuerdan levantar la huelga tras convenir con el gobierno pasar de 25 años de aporte jubilatorio a 28 años.

SÁBADO 8 Luego de 39 días de huelga, la Asociación de Médicos del Hospital de Clínicas firma un acuerdo con el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas donde los médicos se comprometen a ampliar el horario de consultas para compensar el déficit producido con la suspensión de las actividades. Los directivos a su vez asumen el compromiso de desistir de la acción de calificación de huelga presentada ante la Justicia, por la cual el paro habría sido declarado ilegal.

MIÉRCOLES 19 La Confederación Nacional de Organizaciones Populares - Movimiento Sin Techo (CONOP-MST) firma con el Ejecutivo un acuerdo por el que se buscará poner en regla la situación de varios asentamientos del Departamento Central.

VIERNES 21 Debido al incumplimiento del acuerdo firmado por el gobierno el 4 de noviembre pasado, integrantes de la Coordinadora de Pescadores del río Paraguay y de la Federación de Pescadores del Sur cierran de manera indefinida los ríos de las zonas del Bañado Tacumbú y de cerca de la represa de Yacyretá, Ayolas, hasta que el Ministerio de Hacienda desembolse el dinero para el pago de subsidios compensatorios por la veda que rige desde el 1º de noviembre hasta el 15 de diciembre.

Los funcionarios del Poder Judicial comienzan una huelga general en reclamo de un aumento de sueldos del 20%.

SÁBADO 22 Culmina el Foro Social Paraguayo luego de 2 jornadas de conferencias, debates y actividades en el Campus Universitario de San Lorenzo donde más de 60 organizaciones del movimiento social se expresan contra el neoliberalismo, el imperialismo y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

LUNES 24 Los pescadores artesanales que bloquean con sus canoas desde el viernes el río Paraguay levantan el cierre cuando son atacados por lanchas patrulleras de la Armada Nacional.

MARTES 25 Los pescadores artesanales acuerdan con las autoridades de la Secretaría del Ambiente (SEAM), la Secretaría de Acción Social (SAS) y el Comité de Emergencia Nacional (CEN) levantar los bloqueos del río Paraguay tras el compromiso del pago del subsidio estatal de 203 mil guaraníes a cada pescador registrado con licencia.

DICIEMBRE

DOMINGO 14 Mil delegados departamentales participan del congreso extraordinario de la FNC, donde resuelven, entre otros puntos, luchar contra el uso indiscriminado de agrotóxicos y defender su proyecto de reestructuración de la banca pública.

LUNES 15 Después de 46 años, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprueba un acuerdo stand by de 15 meses a favor de Paraguay por el que el país tiene derecho a un crédito para complementar los activos de reserva existentes equivalente a 73 millones de dólares. A cambio, el país debe cumplir un estricto programa, que incluye reducir el gasto público y ejecutar un presupuesto equilibrado.

Camioneros de la Federación de Transporte Internacional de Cargas del Paraguay (FETRAPAR) cierran media calzada de la ruta principal que une al país con Argentina, en el cruce del puente San Ignacio de Loyola, en protesta por las trabas ejercidas por funcionarios de las aduanas argentinas de Concordia, que desde el 3 de noviembre retienen mercaderías en tránsito a Paraguay.

MIÉRCOLES 17 La Cámara de Senadores sanciona el presupuesto general 2004, por el cual el gobierno central recibirá 8,7 billones de guaraníes y los entes descentralizados 8,3 billones. El Ministerio de Hacienda da su aprobación al proyecto, calificándolo de equilibrado (su objetivo es lograr superávit fiscal) para permitir el acuerdo stand by con el FMI.

GLOSARIO DE SIGLAS

ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
CEN	Comité de Emergencia Nacional
CONOP-MST	Confederación Nacional de Organizaciones Populares - Movimiento Sin Techo
DEAG	Dirección de Extensión Agraria
FEP	Federación de Educadores del Paraguay
FETRAPAR	Federación de Transporte Internacional de Cargas del Paraguay
FMI	Fondo Monetario Internacional
FNC	Federación Nacional Campesina
IBR	Instituto de Bienestar Rural
INDI	Instituto Paraguayo del Indígena
MAG	Ministerio de Agricultura y Ganadería
MCNOC	Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
MEC	Ministerio de Educación y Cultura
ONAC	Organización Nacional Campesina
OTEP	Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay
SAS	Secretaría de Acción Social
SEAM	Secretaría del Ambiente
UNE-SN	Unión Nacional de Educadores

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: diarios Última Hora y Noticias.*

Uruguay

[cronología septiembre-diciembre 2003]

SEPTIEMBRE

MARTES 2 Integrantes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) –que desde hace más de un mes se encuentran en conflicto con el ministerio en reclamo de un aumento salarial de 2 mil pesos, por lo que ocupan unos 8 centros de salud– toman el hospital Piñeyro del Campo y el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT). Más tarde son desalojados por la policía. En tanto, llega una guardia policial a la puerta del Hospital Pasteur, que también se encuentra tomado por sus trabajadores. Además ocupan 4 nosocomios más del interior. Mientras, el de Maldonado es desocupado por la policía, y los trabajadores de Rivera, Colonia, Juan Lacaze, Paysandú y Salto aguardan para llevar a cabo las ocupaciones. En tanto, el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) solicita una entrevista con el presidente Jorge Batlle, y la Comisión de Diputados, que media en el conflicto, solicita una tregua. Por su parte, el ministerio emplaza a 4 mil trabajadores de los centros ocupados a que vuelvan a sus puestos, decretados esenciales. También, la FFSP realiza una manifestación en el casco central de la cartera pidiendo la renuncia del titular de la misma, Conrado Bonilla, y de todo su equipo.

VIERNES 12 Luego de realizar asambleas en unos 60 hospitales, el plenario de la FFSP acepta una fórmula del gobierno consistente en un aumento de alrededor de 1.000 pesos para unos 5.500 trabajadores, que perciben los sueldos más bajos, y un incremento menor para unos 5 mil funcionarios que también percibirán el aumento. Luego, la gremial comienza a desocupar los nosocomios. En tanto, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), que también reclama un aumento salarial y mantuvo el conflicto junto a la FFSP, firma un preacuerdo con el gobierno que ratificará el lunes siguiente.

JUEVES 18 Representantes del PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM) e integrantes del Nuevo Espacio, el Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) y el Partido Colorado lanzan en el Paraninfo de la Universidad de la República la campaña para la derogación de la Ley de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), que permite la asociación de la empresa con capitales privados,

con miras al referéndum que se realizará el próximo 7 de diciembre y que decidirá sobre el destino de la petrolera. La proclama de lanzamiento es leída por el presidente de la Federación de Funcionarios de ANCAP (FANCAP).

JUEVES 25 La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) de Canelones, en conflicto con la comuna de ese departamento por salarios atrasados desde hace 3 semanas, decide en asamblea intensificar las medidas de lucha que viene llevando a cabo. El plan incluye paros de 24, 48 y 72 hs., ocupaciones y huelgas de hambre.

VIERNES 26 Se lleva a cabo el 21° Congreso Nacional de Funcionarios Municipales en la ciudad de Canelones. Los trabajadores comunales resuelven exigir la remunicipalización de todos los servicios privatizados, el pago al día de los salarios y los aumentos salariales previstos. En este marco, los funcionarios de la Intendencia Municipal de Canelones (IMC) realizan una marcha por la capital departamental.

OCTUBRE

JUEVES 2 Integrantes de la ADEOM-Canelones paran durante la jornada en reclamo de salarios adeudados y se concentran en la capital departamental, en Ciudad de la Costa, en Ruta 8 y en el acceso a la ciudad de La Paz, para entregar volantes explicando sobre la deuda que la comuna mantiene con ellos. En tanto, representantes del gremio se reúnen con legisladores del Partido Colorado, del Frente Amplio (FA) y del Partido Independiente (PI), que se comprometen a mediar en el conflicto.

En el marco de la crisis del mutualismo, los trabajadores de la salud privada nucleados en la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), del sector público y del Hospital de Clínicas, marchan desde el Obelisco hasta el Edificio Libertad para reclamar un Seguro Nacional de Salud. Los manifestantes realizan un acto y entregan más de 100.000 firmas en respaldo sus reivindicaciones.

VIERNES 10 Unas 42 organizaciones de la sociedad civil dan inicio al segundo Foro Social Uruguay (FSU), que se lleva a cabo en diversas facultades de la Universidad de la República y en la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) con el objetivo de buscar alternativas al neoliberalismo.

DOMINGO 12 Finaliza el FSU, del que participaron cientos de personas. Del cierre participan representantes del PIT-CNT, del EP-FA y del Partido Nacional, entre otras organizaciones.

MIÉRCOLES 15 En el marco del aniversario de ANCAP y de la realización de un paro parcial, cientos de personas convocadas por el PIT-CNT se concentran frente al

Palacio Legislativo, marchan hasta el edificio sede de la empresa y llevan adelante un acto a favor del "Sí" en el referéndum a realizarse en diciembre, el cual se propone derogar la ley que permite la asociación de la petroquímica con capitales privados.

MIÉRCOLES 22 La ADEOM-Canelones inicia un paro de 48 hs luego de que la semana anterior levantara una tregua que mantuvo durante 10 días a la espera de que los legisladores que obran de mediadores abrieran un diálogo con la IMC, y de que en éste no se llegara a un acuerdo para el pago de salarios adeudados.

VIERNES 24 Cinco funcionarios de ADEOM-Canelones comienzan una huelga de hambre. Representantes de la iglesia y comerciantes del departamento acompañan a los huelguistas en el momento de iniciar la medida.

Se inaugura el VIII Congreso del PIT-CNT en la Universidad de la República. En el discurso de apertura, el secretario de organización de la central, Juan Castillo, se manifiesta a favor de la defensa de las empresas públicas y convoca a votar contra la Ley de ANCAP en el plebiscito que se realizará en diciembre. Además, rechaza el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el bloqueo a Cuba, y se solidariza con el pueblo boliviano. Luego, los representantes de la ADEOM reclaman que los desocupados nucleados en la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) y el gremio de los "jornaleros solidarios" de la IMM participen del evento con voz y voto, lo que es rechazado por la mayoría de los delegados.

MIÉRCOLES 29 Miles de personas convocadas por la fracción del EP-FA Alianza Progresista participan de un acto en Montevideo a favor del "Sí" a la derogación de la Ley de ANCAP en el referéndum que se realizará el próximo 7 de diciembre. Del evento participan el líder del EP-FA, Tabaré Vázquez, el intendente capitalino Mariano Arana, el ex presidente de la Federación Rural, dirigentes sindicales y productores agropecuarios, entre otros.

VIERNES 31 Luego de haber realizado una marcha el día anterior que contó con la presencia de trabajadores y productores, la ADEOM-Canelones, junto a representantes de la Federación Nacional de Municipales, del Nuevo Espacio, del EP y del FA, realiza una movilización en la capital departamental en apoyo a los 7 funcionarios de la comuna que se mantienen desde hace días en huelga de hambre.

La Comisión de Defensa del Agua y la Vida junto a legisladores del EP-FA y del Partido Nacional entregan al Parlamento 282.776 firmas para impulsar una reforma constitucional que declare al agua, a su uso y su preservación, como un derecho en manos del estado. Luego la comisión realiza un acto frente a la sede de Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE) del que son oradores representantes de ese gremio y de la FANCAP, entre

otros, a favor de la defensa del patrimonio nacional. En tanto, las firmas son enviadas a la Corte Electoral.

NOVIEMBRE

SÁBADO 1 En el marco de la campaña por el "Sí" para el referéndum por ANCAP, un grupo de legisladores y dirigentes políticos, encabezados por el presidente del EP-FA, Tabaré Vázquez, y en representación de la Comisión de Defensa de ANCAP (CDA), realizan un acto en la ciudad de Rocha, departamento de Rocha.

En la clausura del VIII Congreso de la central obrera se realizan las elecciones para la dirección del PIT-CNT. Triunfa la línea de los denominados "moderados" integrada por comunistas y socialistas, que obtiene 22 cargos en la Mesa Representativa, mientras que los de Tendencia Combativa logran 10 cargos, y la lista integrada por representantes de FFOSE, 1. En tanto, los representantes de ADEOM-Montevideo, que sostienen que se debe mantener una política de confrontación con el gobierno no se presentan a la elección, y un sector radicalizado de los bancarios vota en blanco. Con estos resultados, durante los próximos 2 años la central apostará a la negociación con el gobierno.

MIÉRCOLES 5 Los trabajadores de ADEOM-Canelones, en conflicto con la IMC desde hace 51 días, realizan asambleas en todo el departamento para evaluar una propuesta de la comuna que incluye estabilidad laboral para contratados y zafrales. En relación a los aumentos salariales y el pago de sueldos atrasados, los mismos estarían supeditados a la recaudación de la comuna. El gremio acepta este acuerdo pero reclama también que sean recontratados los 13 militantes sindicales despedidos, y esto no es aceptado por la intendencia. Otros puntos por resolver son la renegociación de los convenios con las cooperativas médicas y que los funcionarios puedan acceder a créditos sociales.

JUEVES 6 Trabajadores de la IMC realizan una marcha por Canelones hasta el local de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), donde 7 funcionarios comunales llevan a cabo una huelga de hambre desde hace 2 semanas. En tanto, la iglesia propone mediar en el conflicto. Por su parte, el Nuevo Espacio solicita la renuncia del intendente departamental, Tabaré Hackenbruch.

La FFOSE para durante la jornada y realiza un acto en la explanada de Obras Sanitarias del Estado (OSE) en rechazo a la privatización del agua. Además, llama a votar por la derogación de la ley de ANCAP y acusa a la fracción del Partido Colorado Foro Batllista de represión sindical a los funcionarios de ese organismo y de la comuna de Canelones.

SÁBADO 8 La ADEOM-Canelones se reúne en asamblea general y decide rechazar la oferta de la IMC y continuar con las medidas de lucha. De no haber prontamente una respuesta de parte de las autoridades, iniciarán ocupaciones.

La CDA realiza una marcha que finaliza con un acto en el Parque Posadas para promover el voto por el "Sí" en el referéndum por ANCAP. Los oradores del evento son el ex presidente de la Federación Rural y un dirigente de la FANCAP, entre otros.

JUEVES 13 La ADEOM-Canelones para durante la jornada y realiza una movilización por la capital departamental en reclamo de una solución al conflicto que mantiene desde hace 2 meses con la IMC. La marcha cuenta con la participación de la Mesa Representativa del PIT-CNT que sesiona en esa ciudad. En tanto, la Junta Departamental conforma una comisión mediadora a fin de encontrar soluciones al conflicto.

VIERNES 14 La ADEOM-Canelones levanta la huelga de hambre que llevan a cabo 6 funcionarios comunales desde hace 22 días luego de algunos avances en las negociaciones con la comuna y debido al mal estado de salud de los ayunantes. La intendencia, además de cancelar el mes de agosto, se compromete a pagar los salarios adeudados en función de la recaudación a partir del 28 del corriente mes cuando finaliza la amnistía tributaria, a aumentar los sueldos en un 2,5% a partir de noviembre, y a renegociar los acuerdos con las cooperativas médicas. Sin embargo, el gremio mantiene el conflicto y rechaza la propuesta de las autoridades. Considera insuficientes el aumento salarial y los aspectos referidos a la estabilidad de los empleados contratados, además de la negativa de recontratar a los militantes sindicales que fueron despedidos. Por tanto, continuará con el plan de lucha votado a fines de septiembre, que incluye ocupaciones de edificios públicos y paros progresivos de 24, 48 y 72 hs.

VIERNES 21 Un grupo de trabajadores del diario La República toma las instalaciones del matutino en rechazo al despido de 8 personas, de los cuales 6 son delegados de gremiales, considerando que es por persecución anti-sindical de parte del director del periódico. En tanto, el PIT-CNT y la Asociación de Prensa Uruguaya (APU) expresan su repudio a los despidos.

JUEVES 27 Unos 200 integrantes de la FUS ocupan sorpresivamente el Ministerio de Salud Pública (MSP) para que se formalice la promesa del gobierno de crear un fondo de recuperación para pagar las deudas salariales del sector de la salud privada. Luego son recibidos por representantes de los ministerios de Economía y Salud, que les entregan un borrador donde se explicita que el fondo contará con aportes del estado, lo que es considerado por los representantes gremiales como un avance en las negociaciones. Además, el gobierno anuncia que definirá cómo se instrumentará el fondo en las primeras semanas de diciembre próximo.

DICIEMBRE

- LUNES 1** Luego de una amenaza de desalojo y de intensas negociaciones en las que participaron el PIT-CNT, la APU y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), los trabajadores del diario La República, que mantienen ocupadas las instalaciones desde hace 10 días, firman un acuerdo con el director del periódico por el cual éste se compromete a reincorporar a 2 trabajadores seleccionados por la empresa, y finalizan la ocupación.
- MARTES 2** La Justicia clausura la investigación sobre la desaparición de la nuera de Juan Gelman luego de que 3 semanas atrás el presidente Jorge Batlle incluyera este caso en el marco de la Ley de Caducidad, lo que impide que continúe la indagatoria.
- MIÉRCOLES 3** Miles de personas participan en Montevideo del acto multipartidario de cierre de la campaña de la CDA con miras al referéndum por ANCAP que se realizará el próximo domingo. Son oradores el presidente del EP-FA, Tabaré Vázquez, miembros del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Nuevo Espacio y de la FANCAP. El acto es precedido por el tramo final de la marcha del "contra éxodo" organizada por la FUCVAM y la FANCAP, que partió 6 días antes de Bella Unión y recorrió varios departamentos, sumando más de 1.000 Km.
- DOMINGO 7** Se lleva a cabo en todo el país el referéndum para decidir si la ley que permite la asociación de ANCAP con capitales privados es derogada o no, organizado luego de un proceso iniciado en marzo de 2002 encabezado por la CDA en el que, siguiendo la iniciativa de la FANCAP en conjunción con el PIT-CNT y el FA, participaron diversas fuerzas políticas, sindicales, y sociales. El "Sí" a la derogación de la Ley de ANCAP obtiene el 62,14% de los votos, en tanto el "No" logra el 35,47%. Tras conocerse los resultados aproximados de la votación, partidarios del "Sí" se reúnen en la sede de la FANCAP, donde realizan un acto, mientras miles de personas festejan en la avenida 18 de Julio, en Montevideo, muchos de ellos portando banderas del FA.
- LUNES 8** El presidente Jorge Batlle realiza una conferencia de prensa en el Edificio Libertad en relación a los resultados del referéndum sobre ANCAP realizado el día anterior. El mandatario rechaza una propuesta efectuada por el líder del EP-FA de crear una comisión interpartidaria para avanzar en un proyecto de política energética y le reclama propuestas concretas para el futuro de la petrolera. Además, afirma que el Ejecutivo no buscará mecanismos para eludir la decisión de la mayoría de la población sobre el tema.
- MIÉRCOLES 10** En el marco de la celebración por el Día Internacional de los Derechos Humanos., el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y Amnistía Internacional realizan una marcha por Montevideo. La organización de Madres y Familiares de

Uruguayos Detenidos-Desaparecidos del Uruguay realiza un acto en el Memorial de los Desaparecidos. Las organizaciones rechazan la decisión de Batlle de incluir el caso de la desaparición de la nuera de Juan Gelman en la Ley de Caducidad y la intromisión del Ejecutivo sobre el Poder Judicial en el caso de Elena Quinteros, y reclaman el esclarecimiento de ambos casos.

LUNES 15 Representantes de 8 centrales sindicales de los países que integran el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), más Chile y Bolivia, culminan en el Paraninfo de la Universidad de la República la 5° Cumbre Sindical del MERCOSUR organizada por la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS). Aprueban una carta en reclamo de una integración regional desde una perspectiva popular que contemple aspectos sociales y culturales y no sólo intereses económicos. Rechazan el ALCA y apoyan la creación de un Parlamento del MERCOSUR, con miembros elegidos por voto directo en sus países. La misiva será entregada en la cumbre de mandatarios de la región que se llevará a cabo en Montevideo al día siguiente. Luego, los representantes sindicales marchan hasta el Obelisco y realizan una caravana hasta el Teatro de Verano.

A un día de que comience en Montevideo la cumbre de presidentes de los países del MERCOSUR, Chile y Bolivia, se realiza una serie de contactos bilaterales entre los mandatarios. El Presidente de la República, Jorge Batlle, se reúne con sus pares chileno y boliviano, Ricardo Lagos y Carlos Mesa. El presidente argentino, Néstor Kirchner, se reúne con Mesa y con Lagos. El presidente de Paraguay, Nicanor Duarte, demanda que se levanten las trabas comerciales a los países pequeños que integran el MERCOSUR. Representantes de Argentina y Brasil anuncian que los presidentes de ambos países no se reunirán con Batlle. Por otra parte, los mandatarios de Argentina y Chile se reúnen, por separado, con el líder del EP-FA, Tabaré Vázquez.

MARTES 16 Se lleva a cabo en Montevideo la Cumbre de presidentes del MERCOSUR y países asociados, Chile y Bolivia. En este marco se resuelve: suscribir un Acuerdo de Libre Comercio con la Comunidad Andina de Naciones (CAN); la incorporación de Perú como estado asociado al MERCOSUR; el establecimiento de la Comisión de Representantes y la designación del ex mandatario argentino, Eduardo Duhalde, como su presidente. Además, los mandatarios firman una declaración en la que acuerdan avanzar hacia la conformación del ALCA en 2005 y negociar con el resto del mundo como bloque. En tanto, Uruguay hace entrega de la presidencia pro t mpore del bloque a Argentina. Luego de la cumbre, los cancilleres del MERCOSUR y de la CAN firman el Acuerdo de Complementaci n Comercial.

El intendente capitalino, Mariano Arana, entrega las "llaves de la ciudad" a los presidentes de Brasil, Argentina, Bolivia y Paraguay en la IMM. Luego, los mandatarios –excepto el de Paraguay, que no asiste a la ceremonia– salen al

balcón de la intendencia a saludar a cientos de personas, muchas de ellas portando banderas del EP-FA. En tanto, el líder del EP-FA, Tabaré Vázquez, se reúne con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en la IMM.

VIERNES 19 Se inaugura el IV Congreso Extraordinario del FA con un discurso de su presidente, Tabaré Vázquez, en el Velódromo Municipal de Montevideo. El líder partidario hace referencia a la “estrategia de país” que se plantea la agrupación, consistente en: atención a la emergencia social, reactivación económica sobre las bases de producción y trabajo, ordenamiento del sistema financiero, racionalización del sistema tributario, reforma del estado, integración nacional e inserción internacional.

DOMINGO 21 El Congreso del FA sesiona en el Palacio Peñarol y proclama a Tabaré Vázquez y a Rodolfo Nin Novoa como candidatos a presidente y vicepresidente de la República para las elecciones del año próximo, reeditando la postulación para las pasadas elecciones nacionales de 1994 y 1999. También, habilita a otras candidaturas para las próximas internas y rechaza una moción para promover la derogación de la Ley de Caducidad en caso de que esa fuerza política llegue al gobierno.

MARTES 23 La FUS, que en el día de ayer inició paros rotativos e instaló una carpa frente al MSP en reclamo de que se establezcan pautas concretas para la creación de un fondo para el pago de salarios adeudados, llega a un acuerdo con el gobierno mediante el cual las autoridades definen la forma en que será distribuido el fondo reclamado. La gremial levanta las medidas de fuerza, aunque se mantiene en conflicto.

LUNES 29 La ADEOM-Canelones inicia un nuevo plan de lucha en reclamo de salarios atrasados. En este marco, realiza un paro de 2 hs. en todo el departamento y se concentra en la plaza de la capital departamental y frente al edificio del gobierno local. Además, corta la intersección de las rutas departamentales.

GLOSARIO DE SIGLAS

ADEOM	Asociación de Empleados y Obreros Municipales
AEBU	Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay
ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
ANCAP	Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland
APU	Asociación de Prensa Uruguaya
CAN	Comunidad Andina de Naciones
CCSCS	Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur
CDA	Comisión de Defensa de ANCAP
EP-FA	Encuentro Progresista-Frente Amplio

FA	Frente Amplio
FANCAP	Federación de Funcionarios de ANCAP
FEUU	Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay
FFOSE	Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado
FFSP	Federación de Funcionarios de Salud Pública
FSU	Foro Social Uruguay
FUCVAM	Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua
FUS	Federación Uruguaya de la Salud
IMC	Intendencia Municipal de Canelones
IMM	Intendencia Municipal de Montevideo
INOT	Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
MSP	Ministerio de Salud Pública
MTSS	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
OSE	Obras Sanitarias del Estado
PI	Partido Independiente
PIT-CNT	Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores
SERPAJ	Servicio de Paz y Justicia
SMU	Sindicato Médico del Uruguay
UTD	Unión de Trabajadores Desocupados

Región Andina

Del imperio mediático al realismo político

Alexander Reina O.*

** Politólogo
especializado
en participación política
de la Pontificia
Universidad Javeriana.
Director de la Estrategia
de Incidencia
y Organización Política
del Instituto Popular
de Capacitación (IPC),
Medellín.*

Colombia acaba de terminar una de las jornadas electorales más importantes de la reciente historia de nuestro país y no precisamente por el volumen de la votación sino por el significado de los resultados electorales y los cambios que produjeron en la coyuntura política del país.

Un análisis de la jornada electoral y sus resultados debe contemplarse en un marco más complejo que la simple jornada electoral del 25 o 26 de octubre¹. Sin embargo, ello no debe omitir la importancia que los resultados han mostrado en lo que se ha denominado como un cambio en el mapa político nacional y algunos cambios en los mapas políticos locales.

Por ello reseñaremos algunos de los sucesos políticos más importantes que se presentaron durante el primer período del gobierno del presidente de Álvaro Uribe Vélez como indicativos de un estilo de gobierno y como antecedentes al cambio inesperado del mapa de poder político en el país.

Este ejercicio analítico quiere argumentar el tránsito que estamos viviendo en el sistema de partidos colombiano, el cual se polarizará cada vez más entre lugares imaginarios ideológicos de izquierda y de derecha pese a que los actores se rehúsen a ser ubicados en estos dos extremos o que aún no existan discursividades plasmadas en plataformas ideológicas, ni promovidas por estructuras orgánicas sólidas.

Luego de hacer un ejercicio de contextualización, revisaremos algunos de los datos más significativos de las pasadas elecciones y su impacto en la coyuntura política nacional, y presentaremos algunas conclusiones a manera de hipótesis interpretativas de lo que podrá ser el futuro inmediato en materia de cambios políticos en nuestro país.

A manera de contexto

La llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de la república el pasado 7 de agosto de 2002 con 5.862.655 de votos, el 53% de la votación total, con los que ganó en primera vuelta frente al candidato del Partido Liberal Horacio Serpa Uribe, el cual solo alcanzó el 31,8% (3.514.779) de la votación total, fue calificada como la derechización de la opinión pública nacional.

La ruptura de las negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejército del Pueblo –FARC EP– y el gobierno nacional fue la cima de una serie de hechos requeridos para que el discurso de la campaña del actual presidente tuviera la opinión pública a su favor y así conquistar la máxima magistratura de la nación.

Mano firme y corazón grande fue el eslogan de lo que sería el espíritu de su gobierno. Luego de pasado su primer año de gobierno, su estilo personalista, mediático y frenético de la política mantenía los réditos de popularidad (80% de aceptabilidad²) necesarios para que sus políticas de gobierno fueran vistas como la solución al conflicto armado. Zonas de rehabilitación en varias partes del país, consejos comunales de gobierno por toda Colombia, reformas tributarias regresivas, presiones al congreso de la república con su ministro del interior Londoño para aprobar cuanta propuesta surgiera de su gobierno, empezaron a gestar una polarización innecesaria que capitalizarían los sectores de la izquierda democrática en el país.

Pese a su popularidad e imagen de ser un gobernante eficiente, de mano dura frente a la guerrilla y de combatir con eficiencia la corrupción, los índices de desempleo no cedían al ritmo que deseaban los colombianos, y el déficit fiscal no descendía como lo exigía el FMI. Así mismo el conflicto armado pese a mostrar un descenso en algunas cifras como homicidios y actos terroristas en algunas regiones y un aumento en las desercio-

nes de guerrilleros, hasta el rango de comandantes, no generaba golpes simbólicos y estratégicos a la insurgencia, dentro de una estrategia efectiva de combate en el marco de una guerra de guerrillas.

De ahí que fuera importante buscar una alternativa efectiva que permitiera resolver de un solo tajo dos molestias que serían en mediano plazo una piedra en el zapato que corroería la supuesta legitimidad del 80% de su gobierno que mostraban las encuestas. El Referendo³ que apareció en su campaña como caballito de batalla contra la corrupción, le dio el viraje suficiente para afrontar la crisis fiscal que padecía el Estado, transformándose en una colcha de retazos producto del cruce de intereses entre el ejecutivo y el legislativo, los cuales transaron apuestas: el ejecutivo, la reforma económica; el legislativo, una tenue reforma política.

Como es acostumbrado en el gobierno Uribe, se adelantaban además de las reformas mencionadas, otras de igual tenor como la reforma a la justicia en donde se busca recortar el alcance de la Tutela, el proceso de negociación con los Paramilitares o Autodefensas con muchas críticas por la ventana a la impunidad que abriría la ley de alternatividad penal y otra reforma política que promovía el propio congreso, la cual, como se mencionó en algunos medios de comunicación, obedecía al plan B en caso de perderse el referendo. Esta última, fue aprobada con anterioridad al Referendo introduciendo cambios estructurales al Sistema Electoral en cuanto a la fórmula electoral, las exigencias para conformar partidos políticos, las posibilidades de presentar listas y candidatos por parte de los partidos, con lo cual se terminaba la operación avispa⁴, y la exigencia de un Umbral para participar en la repartición de curules en los cuerpos colegiados, así como presentar listas con Voto Preferente.

La reforma política aprobada por el acto legislativo 001 de 2003 permitió, mediante un régimen transitorio, a algunos congresistas agruparse y con los votos obtenidos en las elecciones del congreso de 2002 obtener el Umbral necesario para poder participar de las elecciones del Congreso en 2006. Aunque el Polo Democrático⁵ se opuso a esta reforma, pues fue diseñada para beneficiar a los sectores políticos de la coalición del presidente Uribe, estos capitalizaron los alcances de la misma convirtiéndose en una fuerza política con importancia.

De ahí que el país enfrentara un debate referendizado que no dejaba ver en el fondo una reforma estructural del Estado con fuertes contenidos conservadores y neoliberales que se apoyaban en un fenómeno de opinión mediático en donde el presidente Uribe era su gran precursor.

Sin embargo, algunas regiones del país como los departamentos de Antioquia, Nariño y Tolima desarrollaban experimentos de participación ciudadana y comunitaria a los que

llamaron Constituyentes Departamentales, a través de las cuales se pretendía el replanteamiento de los proyectos políticos regionales en donde se han priorizado salidas pacíficas al conflicto armado y reconstruyeran pactos sociales que disputaran el consenso uribista nacional, el cual parecía contrario a las lógicas de democracia participativa que estas representaban.

Al contrario de lo que ocurría en nuestro país en materia política, en el resto de América Latina se mostraban síntomas un poco más alentadores que interrogaban a los actores políticos colombianos sobre la posibilidad de alcanzar por la vía electoral el poder político necesario para desarrollar proyectos de transformación económica y política en el mediano plazo. Brasil con Lula y el PT, Chávez en Venezuela y la organización popular, Lucio Gutiérrez y los movimientos sociales y étnicos, y finalmente Kirchner en Argentina en su lucha contra la impunidad y su confrontación al sistema financiero internacional.

Reforma Política y Referendo Transformación del sistema electoral y sus impactos

Realizar una reforma política y acudir al Referendo como instrumento de participación ciudadana sin intermediación de la clase política tradicional pretendía desde gobiernos anteriores una transformación de los partidos políticos y un cambio en los componentes del sistema electoral que permitieran una reducción de la distorsión en la representación política y aumentar los grados de visibilidad política y de mayor responsabilidad entre electores y elegidos, mejorando así, los niveles de gobernabilidad del ejecutivo (Sartori, 1999).

Es así como se introdujeron algunos cambios a la constitución en materia de Sistema Político electoral y de partidos⁶, los cuales incidieron en los resultados de la jornada electoral del 26 de Octubre en donde sectores de centro izquierda salieron victoriosos.

A partir de los estudios de Nohlen se podía deducir que la nueva reforma al sistema electoral obligaría necesariamente a la aglutinación política debido a los efectos que esta generaría al momento de transformar los votos en escaños, generando un realineamiento de los actores políticos a partir no sólo de discursos de corte estratégico, sino también como un procedimiento pragmático frente a la amenaza que significaba la bancada uribista en un contexto de unanimismo del voto de opinión frente a la figura del presidente Uribe (Nohlen, 1998).

Ya sabían las fuerzas políticas de centro izquierda que “el fracaso de las terceras fuerzas debía atribuirse a razones que incumben más directamente a insuficiencias internas, que a limitaciones en el espacio político-partidista” (Pizarro León Gómez, 1997: 92).

***“... el presidente
decidió asumir
en persona
el impulso
del referendo,
poniendo
a prueba
su legitimidad,
convirtiéndolo
en un plebiscito
en donde
lo que se buscaba
era legitimar
su poder para sacar
a flote el paquete
de reformas
que se venían
tramitando
en el Congreso”***

Este fenómeno de agrupamiento exigió de todos los actores en campaña algunos niveles de diferenciación, razón por la cual el discurso de oposición al presidente Uribe y en especial a su Referendo significó la llave maestra para capturar el descontento de algunos sectores de la sociedad, que si bien no veían con malos ojos las propuestas de moralización de la política del gobierno, no compartían totalmente algunas de sus prácticas de corte autoritario.

En este contexto político electoral y contrario a lo que pudo haberse predicho, los sectores ligados a la corriente uribista no lograron llegar a acuerdos políticos electorales que les permitiera usufructuar la imagen del presidente en la jornada electoral⁷. De un lado por el desprecio que el mismo presidente mostró frente a los resultados electorales locales y su apoyo a una u otra fuerza, y de otro por los diversos orígenes de donde provenían muchos de sus apoyos, los cuales no ponían en peligro su imagen de independiente.

En cuanto al Referendo y pese a la buena imagen y aceptación demostrada en las encuestas de opinión por parte de los colombianos hacia el presidente, la intención de voto hacia este no auguraba un muy buen resultado, por ello, el presidente decidió asumir en persona el impulso del mismo, poniendo a prueba su legitimidad, convirtiéndolo en un plebiscito en donde lo que se buscaba era legitimar su poder para sacar a flote el paquete de reformas que se venían tramitando en el Congreso⁸.

Por consiguiente, el equipo de gobierno decidió convocar el referendo el 25 de octubre como estrategia para que las maquinarias electorales que se movilizarían el 26 de octubre para las elecciones locales, contribuyeran a alcanzar los resultados que se necesitaban para lograr aprobar el referendo⁹.

Así las cosas, el presidente Uribe, sus aliados políticos, el movimiento social abstencionista y el naciente Polo Democrático se jugaban su capital político en la jornada electoral y definirían el nuevo escenario para los próximos años.

Resultados electorales y derrumbe del imperio mediático

Según el diario *El Tiempo*, para el Concejo Nacional Electoral de las catorce preguntas que estaban en consulta sólo pudo ser aprobada la número uno¹⁰. De acuerdo al ente oficial, el referendo alcanzó sólo 6.673.050 de votos, lo que fue interpretado como un triunfo significativo para el movimiento social abstencionista, en donde el Polo Democrático era uno de los pilares fundamentales, por ello su éxito electoral en las diferentes alcaldías y gobernación del Valle fue leído por los medios de comunicación como un golpe al presidente Uribe y un posible viraje en la opinión pública hacia posturas menos conservadoras, como hasta el momento se venía presentando (*El Tiempo*, 2004).

Sin embargo y de acuerdo a un análisis profundo de los resultados, lo que podemos corroborar es que la población votó de forma independiente en las dos jornadas electorales para las que fue convocada. Es decir, no podemos afirmar que exista un viraje en la opinión pública hacia tendencias de izquierda o menos conservadoras como resultado del triunfo electoral del PDI, ya que muchos de los votos que estos tuvieron fueron dados por un porcentaje significativo de los que votaron afirmativamente el referendo.

Según puede verse en los Gráficos 1 y 2, al comparar la votación del referendo por departamentos con la votación obtenida por el presidente Uribe en las elecciones presidenciales, podemos encontrar que estas coinciden en su gran mayoría, es decir, los votantes del referendo fueron los mismos votantes del presidente Álvaro Uribe. Además, podemos ver en el Gráfico 1 los departamentos donde obtuvo mayor votación el referendo. Casualmente, en algunos de ellos fue donde el PDI obtuvo sus principales triunfos electorales, como son el caso de Bogotá y Santander.

De ahí que no se pueda afirmar con tanta seguridad que el gobierno haya perdido legitimidad, sin embargo la no aprobación del Referendo es un golpe fuerte contra un estilo bonapartista del presidente Álvaro Uribe, como lo caracteriza Luis Guillermo Jaramillo. Sin duda, este hecho político ha sido capitalizado por la dirigencia política del PDI al presentarse ante los medios de comunicación como los grandes triunfadores en este anunciado pulso político. Por ello, manifestaron públicamente la necesidad de discutir con el gobierno sobre las propuestas de reforma del Estado y los intentos de recortar algunas garantías constitucionales en materia de derechos humanos (Jaramillo, 2003: 1).

Este anunciado triunfo del PDI y su aparición como una fuerza política de centro izquierda, viable política y electoralmente, luego de los intentos fallidos de la Unión Patriótica y del M-19, aún tiene muchos restos por cumplir. De un lado, demostrar su capacidad de gobernar con eficiencia y sentido social la más importante ciudad de Colombia y de otro convertir a su base electoral en base militante de una estructura partidaria que, como lo

afirma Eduardo Pizarro León Gómez (2003), se mueve en el dilema de ser un partido moderno o responder sólo a sus liderazgos caudillistas.

Otro de los retos de este partido será acompañar en un diálogo respetuoso al movimiento social que se expresó en contra del Referendo en su lucha por detener el paquete fiscal que se pretendía aprobar de un solo tajo, y que pese a la derrota obtenida, hoy se encuentra dentro de la agenda legislativa para aprobar mediante un proyecto de ley en el Congreso, lo que ya fue negado en las urnas.

Igualmente, el gobierno de Uribe ha tenido una lección importante al comprender que un país no se gobierna con encuestas, y que los estados de opinión no son precisamente el mejor indicador para medir los intereses de la población y de sus representantes.

Ahora no queda más que esperar que este triunfo se capitalice en una oposición fuerte pero inteligente, continuando en los procesos de unidad de los sectores populares y de la clase media que permitan tener las fuerzas necesarias para enfrentar los futuros debates electorales y los debates estratégicos del país en materia económica, y relacionados con el conflicto armado.

Gráfico 1
Promedio de participación por departamento en el Referendo

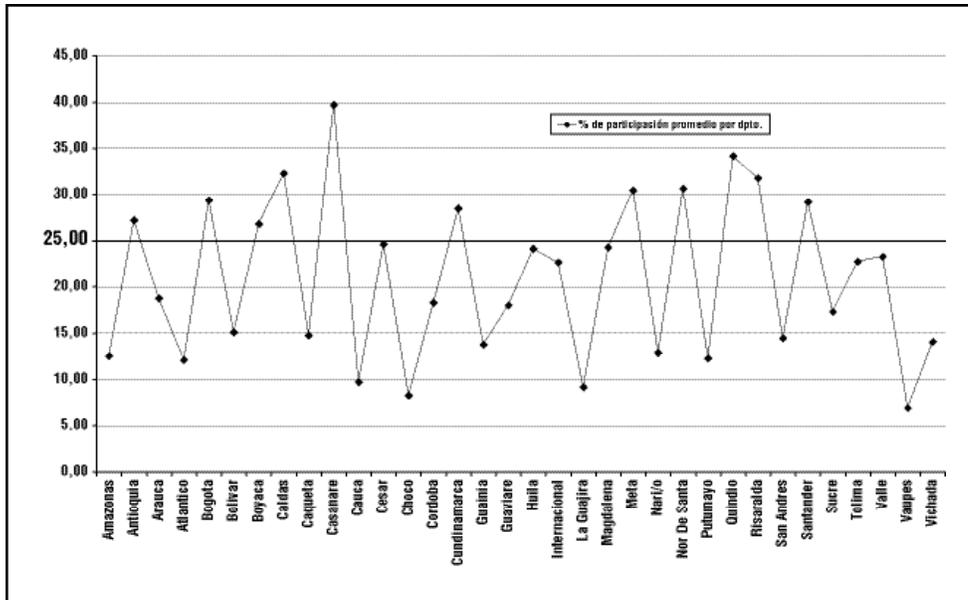


Gráfico elaborado por el autor con datos de la Registraduría Nacional de Colombia

Gráfico 2 Resultados electorales presidencia por departamento

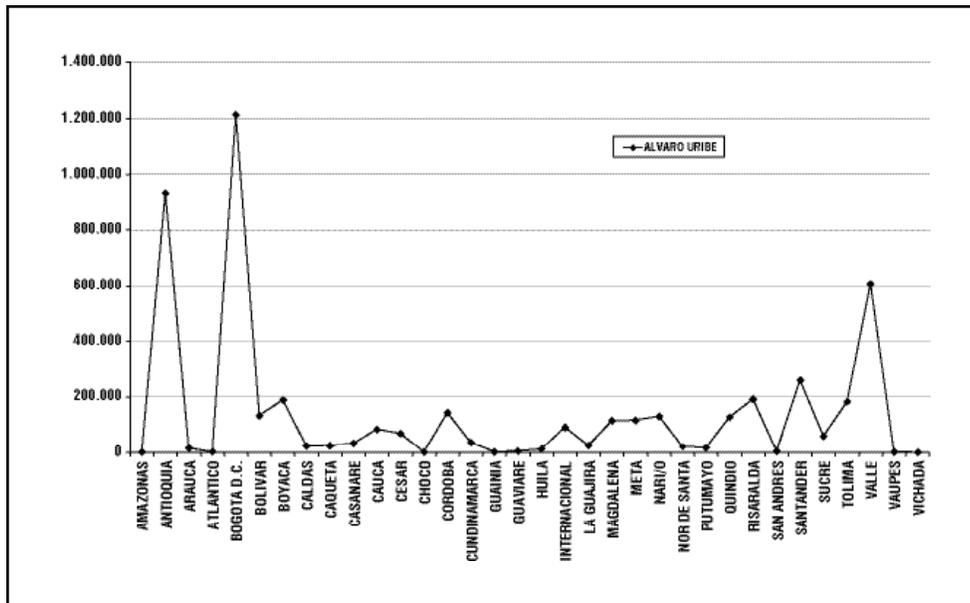


Gráfico elaborado por el autor con datos de la Registraduría Nacional de Colombia

Bibliografía

El Tiempo 2004 "Consejo Nacional Electoral confirma que solo pasó el primer punto del Referendo" (Bogotá) 3 de enero. Página de Política.

Invamer Gallup 2004 "El Record del presidente Uribe", en *El Colombiano* (Medellín) 18 de enero.

Jaramillo, Luis Guillermo 2003 *Uribe, un gobierno bonapartista* (Medellín: IPC).

Nolhen, Dieter 1998 "Sistemas electorales y Sistemas de partidos políticos: Una introducción al problema con carácter orientador", en *Sistemas electorales y de partidos políticos* (México: Fondo de Cultura Económica) Capítulo III, 35-52.

Pizarro León Gómez, Eduardo 2003 "¿Entre partido moderno y liderazgo caudillista? El dilema del PDI", en *El Tiempo* (Bogotá) 23 de diciembre.

Pizarro León Gómez, Eduardo 1997 "¿Hacia un sistema multipartidista? Las terceras fuerzas en Colombia hoy", en *Análisis Político* (Bogotá) N° 31, mayo-agosto, 82-104.

Sartori, Giovanni 1999 *Elementos de Teoría Política* (Madrid: Alianza Editorial) Capítulo XI, 257-277.

Notas

1 La elección del 25 de octubre correspondió a la votación por el Referendo y la del 26 octubre por los candidatos a corporaciones y cargos públicos locales y regionales.

2 Según Invamer Gallup (2004), una de las más importantes encuestadoras del país, el presidente Uribe ha mantenido su aceptabilidad entre un 74% y un 80%, catalogado como un record histórico en nuestro país.

3 Este instrumento de participación fue creado por la Constitución de 1991 y reglamentado por la Ley 134 de 1994 sobre mecanismos de participación ciudadana.

4 Esta fórmula fue denominada así por el ex-presidente de la República Alfonso López Michelsen, del partido Liberal, la cual consistía en avalar un número infinito de candidatos a las corporaciones públicas con el objeto de transferir por la vía de coaliciones electorales los votos a los candidatos a cargos en el Ejecutivo, y en las corporaciones públicas, fragmentar al máximo la votación de tal forma que se logran más curules por la vía de los residuos y no por los cuocientes como lo demandaba la ley.

5 En ese momento sólo era una coalición presidencial que acompañó a Luis Eduardo Garzón para la presidencia y que se comportaba como bancada pese a que jurídicamente no fuera reconocida como tal.

6 La reforma política fue aprobada por el Congreso de la República mediante acto legislativo 001 de 2003, donde los principales cambios impuestos fueron los siguientes: Umbral del 2% del total de votos conseguidos a nivel nacional para elecciones de Senado para obtener o mantener la personería jurídica y participar de la repartición de escaños; cambio en la fórmula electoral Hare (representación proporcional) por el método D'Hont (representación mayoritaria), es decir, cambiamos la fórmula Hare (de cuociente y residuo) por la fórmula D'Hont (o cifra repartidora); los partidos políticos sólo podrán presentar listas únicas para cada una de las corporaciones públicas y para cargos uninominales; se introducen las listas abiertas o con voto preferente en los partidos políticos; se abre un régimen transitorio que permite a los Senadores o Representantes a la Cámara agruparse para conformar partidos, siempre y cuando entre todos contabilizaran con los votos que obtuvieron para las elecciones anteriores un mínimo del 2% del total de votos válidos, es decir, más o menos 220.000 votos. Amparados en este régimen se creó el Polo Democrático Independiente (PDI).

7 Según los diarios nacionales luego de la reforma se identificaron más o menos los siguientes partidos de corte uribista: El Nuevo Partido, Movimiento Equipo Colombia y Cambio Radical, por mencionar los más importantes.

8 Reforma a la justicia, Ley de Alternatividad Penal o negociación con los paramilitares, Ajuste del Estado, Reforma Tributaria y otras.

9 Según la Sentencia de la Corte Constitucional, dado que el Referendo contiene 15 preguntas, serían 15 los referendos que deberían ser aprobados, y para ello se avaló el umbral del 25% del Censo Electoral, es decir, 6.267.443 de un total de 25.069.773 de votantes.

10 La pregunta establece la muerte política de los corruptos y recibió 5.874.193 de votos por el Sí; 294.348 por el No y 125.266 nulos.

Bolivia

[cronología septiembre-diciembre 2003]

SEPTIEMBRE

- MARTES 2** La Confederación Sindical de Trabajadores en Salud de Bolivia (CSTSB) inicia un paro nacional por 72 hs en demanda de la reincorporación de 22 trabajadores despedidos por participar de medidas de presión quienes, a su vez, ingresan en el decimosexto día de huelga de hambre en demanda de la restitución de sus puestos de trabajo.
- JUEVES 4** La CSTSB levanta el paro nacional por 72 hs tras firmar un acuerdo con el gobierno en el cual se obtiene la estabilidad laboral de los trabajadores despedidos, entre otras reivindicaciones.
- LUNES 8** Miles de personas pertenecientes a diversas organizaciones sociales, entre alumnos de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), campesinos y vecinos de la ciudad, marchan por las calles de El Alto hacia el centro de La Paz y declaran un paro cívico en repudio a la intención del gobierno de vender el gas a los EE.UU. por un puerto chileno, a la firma del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y en demanda de un conjunto de más de 80 reivindicaciones sectoriales. Durante la manifestación, la policía reprime a los estudiantes quienes intentan bloquear la carretera que conduce hacia el aeropuerto metropolitano.
- MIÉRCOLES 10** Varias decenas de campesinos del altiplano paceño, incluido el líder del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) y dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Felipe Quispe, se declaran en huelga de hambre en el auditorio de radio San Gabriel de El Alto en repudio a la venta del gas, a la firma del ALCA y en demanda de la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, entre otras cuestiones.
- LUNES 15** Diversas organizaciones sociales, aglutinadas en la Coordinadora por la Defensa del Gas, inician medidas de fuerza en diferentes puntos del país en repudio a la decisión del gobierno de exportar el producto a los EE.UU. por un puerto chileno y en rechazo al ALCA. Campesinos y cocaleros proceden al bloqueo de rutas en las ciudades de Pando, Beni y en la región de Los Yungas y el altiplano paceño. En El Alto, la Federación de Juntas

Vecinales (FEJUVE) local y la Central Obrera Regional (COR) inician un paro cívico por tiempo indefinido.

VIERNES 19 Cerca de 20 mil personas, entre trabajadores, cocalleros, campesinos y estudiantes, convocados por el Movimiento Al Socialismo (MAS), el Estado Mayor del Pueblo (EMP) y la Central Obrera Boliviana (COB), se movilizan por el centro de las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz en repudio a la exportación del gas y a la firma del ALCA. El conjunto de organizaciones que participan de la medida coincide en que el gas debe ser industrializado y utilizado en el país.

SÁBADO 20 Fuerzas combinadas de la policía y el ejército intervienen el bloqueo de ruta campesino en la localidad de Warisata en el altiplano paceño. La represión de las fuerzas de seguridad causa la muerte de 5 campesinos, un militar y más de 20 heridos entre manifestantes y agentes del orden. Felipe Quispe, dirigente de la CSUTCB, repudia el hecho, convoca a declarar un estado de sitio campesino en la región y anuncia la intensificación de los cortes de ruta.

LUNES 22 El Comité Ejecutivo de la Federación Departamental de Maestros de Educación Rural de La Paz determina el inicio de una huelga general indefinida en protesta por el asesinato de campesinos llevado a cabo por fuerzas policiales y militares en la intervención del bloqueo campesino de Warisata el pasado fin de semana.

MIÉRCOLES 24 Efectivos de la policía y el ejército detienen, en el marco de la ley de Seguridad Ciudadana a 21 personas en las localidades de Achica Arriba e Irpachico, del departamento de La Paz, acusadas de participar en bloqueos de rutas.

MARTES 30 Alrededor de 20 mil personas, pertenecientes a diversas organizaciones entre las que se encuentran los maestros rurales y urbanos, estudiantes de la UPEA, trabajadores administrativos de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y estudiantes secundarios, marchan por la ciudad de La Paz en la convocatoria realizada por la COB en el segundo día de huelga general declarada por la máxima entidad de los trabajadores. En el departamento de Oruro un conjunto de organizaciones sociales se moviliza por el centro de la ciudad en rechazo a la exportación del gas.

OCTUBRE

MIÉRCOLES 1 Diversos sectores sociales, entre estudiantes universitarios y trabajadores fabriles, marchan por el centro de La Paz en el tercer día de huelga general convocada por la COB en repudio a la exportación de gas a los EE.UU por un puerto chileno, en rechazo al ALCA y para exigir la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Al promediar la movilización, efectivos

del Grupo Especial de Seguridad (GES) reprimen a los manifestantes y detienen a 14 estudiantes. En Cochabamba cientos de personas se movilizan, convocados por la Central Obrera Departamental (COD), con las mismas reivindicaciones.

JUEVES 2 Diversas organizaciones sociales, aglutinadas en la COR realizan un paro cívico en El Alto y se movilizan por el centro de la ciudad en oposición a la política del gobierno. Efectivos de la policía y el ejército reprimen a los manifestantes y se enfrentan con estudiantes de la UPEA y con miembros de la FEJUVE quienes resisten con palos y cartuchos de dinamita. Distintas movilizaciones con similares demandas se producen en las ciudades de Beni, Sucre, Santa Cruz y en la región de los Yungas de La Paz.

Más de mil trabajadores de la salud de todo el país inician un paro de actividades por 48 hs de acuerdo con la convocatoria de la CSTSB y la COB en defensa del gas.

VIERNES 3 Estudiantes universitarios, rentistas y trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) marchan por la ciudad de La Paz para expresar su rechazo a la exportación del gas y para exigir la renuncia del presidente de la nación. En Cochabamba, con las mismas consignas, campesinos y cocaleros se movilizan por el centro de la ciudad e instalan bloqueos en las principales vías de acceso a la región.

Miles de personas marchan por la ciudad de La Paz en contra de la política del gobierno y para exigir la renuncia del presidente Sánchez de Lozada. La misma situación se vive en diversas ciudades del interior del país entre las que se destacan Potosí y Oruro, cuyas movilizaciones son protagonizadas por los maestros y los mineros respectivamente.

LUNES 6 Alrededor de 500 mineros del centro productivo Huanuni de Potosí inician una marcha hacia la ciudad de La Paz en protesta por la intención del gobierno de exportar gas a los EE.UU. y en apoyo de las medidas de presión desarrolladas por la COB.

MIÉRCOLES 8 Estudiantes y profesores de diversas universidades se manifiestan, en diferentes puntos del país, contra la política del gobierno y en rechazo a la exportación de gas y al ALCA. Las movilizaciones más destacadas se producen en la Universidad Gabriel René Moreno (UGRM) de Santa Cruz, en la UMSS de Cochabamba y en la Tomás Frías de Potosí.

JUEVES 9 Los mineros de Huanuni que marchan desde Potosí hacia El Alto se enfrentan en la localidad de Ventilla con fuerzas combinadas de la policía y el ejército. Como consecuencia de la represión, un trabajador muere a causa de una explosión mientras que otros 8 resultan heridos.

SÁBADO 11 Vecinos de El Alto se enfrentan con la policía y el ejército en una nueva jornada del paro cívico que se lleva a cabo en rechazo a la exportación del gas. La represión provoca la muerte de 2 personas mientras que otras 19 resultan heridas.

DOMINGO 12 Las Fuerzas Armadas inician, bajo órdenes del gobierno, el operativo de ocupación militar de El Alto para garantizar el abastecimiento de combustible en la ciudad de La Paz con la llegada de camiones cisterna. En horas de la mañana tropas del regimiento Ingavi intervienen una marcha convocada por la FEJUVE y toman las calles y avenidas de la zona norte de la ciudad ocasionando la muerte de 2 personas. Los habitantes de la región intentan interrumpir la caravana de camiones con piedras y palos al tiempo que los efectivos allí apostados reprimen con gases lacrimógenos y balas de plomo. El accionar del ejército se extiende por 7 zonas de la ciudad lo que provoca 26 muertos, 25 de ellos civiles, y más de 60 heridos en lo que constituye la jornada más violenta en la historia de la ciudad.

LUNES 13 Campesinos, cocaleros y trabajadores aglutinados en diversas organizaciones sociales como la Coordinadora por la Defensa del Gas y la COB intensifican los bloqueos de rutas en los departamentos de Santa Cruz, Potosí, Oruro y Sucre en protesta contra la exportación del gas y para exigir la renuncia del presidente Sánchez de Lozada. En el corte de carretera efectuado en Santa Cruz, un grupo de bloqueadores se enfrenta con la policía y resiste el intento de desalojo. Como consecuencia de la represión muere un campesino por el impacto de bala de plomo mientras que otros 4 resultan heridos.

Estudiantes de la UMSS, cocaleros, trabajadores afiliados a la COD y el EMP marchan y bloquean las calles céntricas de Cochabamba para exigir la renuncia de Sánchez de Lozada, en rechazo del ALCA y en demanda de la modificación de la Ley de Hidrocarburos. Efectivos de la policía reprimen a los manifestantes y detienen a 3 personas.

El vicepresidente de la república, Carlos Mesa, retira su apoyo al presidente Lozada tras los hechos de violencia ocurridos en los últimos días en todo el país aunque expresa que no renunciará al cargo.

Diversas marchas contra la represión y la política del gobierno se llevan a cabo en las ciudades de El Alto, La Paz y en la localidad santacruceña de San Julián. Las fuerzas de seguridad intentan evitar la realización de las mismas y reprimen a los manifestantes lo que genera la muerte de 20 personas mientras que otras 100 resultan heridas. Al finalizar la jornada se produce la muerte de 8 personas que fueron heridas durante los acontecimientos del último domingo.

MARTES 14 Alrededor de 20 mil personas marchan por el centro de Sucre convocadas por la COD local. Al promediar la manifestación se producen enfrentamientos con la policía en el momento en que los manifestantes arremeten contra el edificio de la Prefectura local. La represión deja un saldo de 2 personas heridas y 4 detenidas.

El Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) y los habitantes de Potosí inician un paro cívico y bloquean las principales calles y accesos a la ciudad en demanda de la renuncia del presidente de la república.

Cocaleros y estudiantes marchan por la ciudad de Cochabamba y bloquean las calles para exigir la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. En horas de la tarde la policía interviene la movilización y detiene a 17 personas, muchas de ellas menores de edad.

MIÉRCOLES 15 El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada anuncia que de común acuerdo con los partidos que integran la coalición de gobierno, el poder ejecutivo convocará a un referéndum consultivo por departamento para conocer la posición del pueblo sobre la exportación del gas, se revisará la ley de hidrocarburos y se incorporará el mecanismo de la Asamblea Constituyente al régimen constitucional. Momentos después, Evo Morales y Felipe Quispe expresan que no aceptan las propuestas y reiteran el pedido de renuncia del primer mandatario.

Un destacamento de militares del Regimiento Calama interviene, en la localidad de Patacamaya del departamento de Oruro, la marcha de 2 mil mineros de Huanuni hacia la ciudad de La Paz en repudio a la exportación del gas y en demanda de la renuncia del presidente de la república. Como consecuencia de la represión 3 trabajadores resultan muertos por balas de plomo mientras que otros 14 son heridos de gravedad y trasladados a la capital departamental.

Miles de personas se reúnen frente a la sede de la COD de Cochabamba en un acto convocado por la organización obrera, la Federación Universitaria Local y el dirigente cocalero Evo Morales como punto culminante de la jornada de movilizaciones en reclamo de la renuncia del presidente Sánchez de Lozada. Al finalizar la actividad la policía reprime a la multitud al tiempo que un grupo responde a la agresión arrojando bombas caseras a los balcones del Comando Departamental de la Policía. La represión deja un saldo 4 personas heridas y 22 detenidas.

JUEVES 16 Alrededor de 200 mil personas, según los organizadores, entre campesinos, cocaleros de Los Yungas, mineros, y decenas de juntas vecinales de El Alto, se movilizan por el centro de La Paz para exigir la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y rechazar la propuesta del gobierno referida a la

realización de un referéndum sobre la exportación del gas. Hacia el final de la marcha diversos grupos de estudiantes de la UPEA se enfrentan con la policía en las inmediaciones de la Corte Superior de Justicia (CSJ) lo que deja un saldo de 3 heridos y 28 detenidos.

Organizaciones sociales de la localidad Uyuni, en el departamento de Potosí, entre las que se encuentran maestros, trabajadores de la salud, campesinos y mineros declaran a instancias de la COR un paro cívico con la paralización de todos los servicios para exigir la renuncia del presidente de la nación.

VIERNES 17 El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), renuncia a la primera magistratura luego de 6 semanas de conflictos sociales originados en la intención del gobierno de exportar gas a los EE.UU. por un puerto chileno en las que, como consecuencia de la represión policial y militar, perdieron la vida más de 70 personas. El Congreso de la nación nombra, con el apoyo de todos los partidos con representación parlamentaria, primer mandatario al hasta entonces vicepresidente Carlos Mesa Gisbert. El nuevo presidente anuncia la convocatoria a un referéndum vinculante para determinar la política a seguir con respecto al gas, el llamado a una Asamblea Constituyente, la revisión de la ley de hidrocarburos y expresa que ocupará el cargo hasta que el cuerpo legislativo así lo disponga.

SÁBADO 18 Dirigentes de la COR, de la FEJUVE de El Alto y de los cocaleros del Chapare expresan que declararán una tregua en las medidas de presión para permitir al nuevo gobierno el cumplimiento de sus compromisos.

Campesinos del Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MSTB) ocupan la hacienda Collana en La Paz y reiteran su exigencia de la entrega de tierras por parte del gobierno.

LUNES 20 Alrededor de 5 mil campesinos, pertenecientes a la CSUTCB, marchan desde El Alto hacia La Paz para realizar, en representación de las 20 provincias del departamento, una asamblea en la plaza San Francisco en la cual otorgan un plazo de 90 días para que el presidente Carlos Mesa brinde solución al pliego petitorio de 72 puntos entre los que se encuentran la libertad de todos los dirigentes campesinos detenidos, el pedido de 3,8 millones de hectáreas de tierra y la suspensión de la erradicación de la coca en Los Yungas y el Chapare. El primer mandatario asiste a la asamblea campesina en la cual expresa la necesidad de que se le otorgue una tregua para trabajar y organizar su gobierno.

MARTES 21 El líder del MAS, Evo Morales, anuncia que las federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba otorgan al gobierno un plazo de 30 días para que brinde respuestas a las exigencias del sector referidas a la suspensión de la erradicación de las plantaciones de coca.

VIERNES 24 Dirigentes del MSTB firman un acuerdo con representantes del gobierno por medio del cual los primeros se comprometen a desalojar la estancia Collana en el departamento de La Paz a cambio de la creación de una comisión especial para resolver el conflicto de la repartición de tierras en todo el país.

MARTES 28 Alrededor de 150 integrantes del MSTB ocupan tierras en la zona de los Yungas en el departamento de La Paz. Esta acción se origina en el rechazo de ciertos dirigentes regionales de la organización a los acuerdos entre la conducción nacional del movimiento y el gobierno.

VIERNES 31 El presidente Carlos Mesa dispone la amnistía para los detenidos durante las protestas sociales realizadas en el mes de octubre en diversos puntos del país. El decreto alcanza a 70 personas que fueron detenidas bajo la Ley de Seguridad Ciudadana.

NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 5 Parlamentarios del MAS, MIP y del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), entre otros, votan la modificación de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana mediante la derogación de los artículos referidos al endurecimiento de las sanciones penales contra aquellos que bloqueen rutas en cualquier punto del país. El cuerpo de la ley es resistido por el conjunto de las organizaciones sociales.

LUNES 10 Un grupo de mujeres campesinas, integrante del MSTB, ocupa una hacienda en la localidad de Mallasilla, en el área urbana de la Paz.

JUEVES 13 Comienza en la ciudad de Santa Cruz el Encuentro Social Alternativo, organizado por un conjunto de movimientos sociales entre los que se encuentran campesinos y cocaleros. La actividad se plantea como un complemento de la Cumbre Iberoamericana a realizarse en la misma ciudad el 14 y 15 del corriente.

LUNES 17 Habitantes de Punata, el Comité Cívico y la Central Campesina local apedrean la Alcaldía y queman parte del mobiliario de la Intendencia municipal para exigir la renuncia del alcalde y varios concejales.

MARTES 18 Familiares de las víctimas de la represión estatal desatada en los sucesos del mes de octubre marchan desde El Alto hacia la ciudad de La Paz e instalan un piquete de huelga de hambre frente a la casa de gobierno en demanda de que el poder ejecutivo haga efectivo el pago de las indemnizaciones.

MIÉRCOLES 19 Los familiares de las víctimas de la represión estatal perpetrada en el mes de octubre durante la llamada guerra del gas declaran un cuarto intermedio en

la huelga de hambre que llevan adelante y suspenden el diálogo que mantienen con el gobierno. Representantes de los familiares rechazan la oferta oficial de una indemnización cercana a los 60 mil bolivianos en efectivo y los gastos de salud y educación de los hijos de los fallecidos y expresan que la demanda mínima asciende a los 120 mil bolivianos por familia.

DOMINGO 23 Cientos de mujeres marchan por el centro de La Paz en lo que constituye el inicio de las actividades por el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer que se realiza todos los 25 de noviembre. Las manifestantes se pronuncian contra cualquier forma de discriminación de género.

MARTES 25 La CSTSBS declara un paro de actividades por 24 hs para exigir que el Ministerio de Salud cumpla con los acuerdos firmados con la anterior gestión gubernamental entre los que se encuentran la institucionalización de cargos y la elaboración de una matriz presupuestaria para el sector.

MIÉRCOLES 26 Un grupo de 10 integrantes del COMCIPO se declaran en huelga de hambre en las oficinas del Comité de Minería de la Cámara de Diputados en la ciudad de La Paz en demanda de la aprobación del proyecto de ley 386 referente a la anulación de las concesiones a empresas privadas para la explotación de los recursos naturales existentes en el Salar de Uyuni.

DICIEMBRE

LUNES 1 Alrededor de 200 personas, entre heridos y familiares de las víctimas de la represión estatal ocurrida en el mes de octubre, arriban a La Paz en la marcha iniciada el 29 de noviembre en Warisata en demanda de una indemnización cercana a los 50 mil bolivianos.

MARTES 2 Trabajadores del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) realizan un paro de actividades para exigir al gobierno que permita a la empresa ingresar al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional de excepción impositiva. En horas de la tarde el poder ejecutivo deja sin efecto el artículo 10 del nuevo Código Tributario por el que se impedía a las empresas capitalizadas beneficiarse con el programa. Momentos después, los trabajadores levantan la medida.

Integrantes de la Coordinadora de Familiares de los Caídos y Heridos en la guerra del gas se crucifican e inician una huelga de hambre en las inmediaciones del Viceministerio de Justicia, de la COB y del Congreso Nacional en demanda de la aprobación por parte del gobierno de una indemnización cercana a los 60 mil bolivianos.

Miembros de la Coordinadora Nacional de Rechazo a las Disposiciones Transitorias del Nuevo Código Tributario realizan un plantón en las puer-

tas de la Cámara de Senadores para exigir la anulación de la retroactividad de la norma. Representantes del sector expresan que una de las demandas es la universalización de la suspensión del pago de impuestos y facturas irregulares, beneficio del que hoy sólo disfrutaban las empresas capitalizadas.

JUEVES 4 Un grupo de familiares de heridos graves durante la represión estatal en lo que se conoce como la guerra del gas, firma un acuerdo con el gobierno consistente en una indemnización cercana a los 50 mil bolivianos y levanta las medidas de presión iniciadas en los últimos días. De esta manera son 15 los que han firmado mientras que el resto continúan con la huelga de hambre organizada por la Coordinadora de Familiares.

MARTES 9 El presidente Carlos Mesa promulga la Ley 2557 en reemplazo de la 1854 por la cual se restituye la propiedad estatal de 2,15 millones de hectáreas de la reserva fiscal del Salar de Uyuni por lo que los dirigentes del COMCIPO suspenden la huelga de hambre mantenida en la Prefectura local.

MIÉRCOLES 10 Los principales dirigentes de la Coordinadora Nacional de rechazo a las Disposiciones del Nuevo Código Tributario se declaran en huelga de hambre en el parlamento en rechazo al artículo 3 de la reglamentación el cual fija la retroactividad de los nuevos impuestos.

JUEVES 11 Unidades de la Policía Técnica Judicial (PTJ) de La Paz, efectivos de la policía ecológica, de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR), agentes de inteligencia y 15 fiscales de los principales departamentos del país realizan un operativo militar en la región del Chapare y ordenan la detención de 27 personas entre campesinos, dirigentes de las 6 federaciones de cocaleros del trópico y militantes del MAS, acusados de terrorismo, alzamiento armado y organización criminal. A pesar de que no se hallan pruebas contundentes 8 personas son detenidas y trasladadas hacia La Paz. Campesinos y cocaleros de la región se declaran en estado de emergencia y anuncian posibles manifestaciones y bloqueos de ruta para exigir la libertad de los detenidos.

La Federación Sindical de Trabajadores del LAB (FSTLAB) declara un paro laboral de 24 hs en protesta por la determinación del Congreso Nacional de excluir del beneficio del Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional de exención impositiva a las empresas capitalizadas entre las que figura la línea aérea.

VIERNES 12 El juez segundo de Instrucción Cautelar, determina la liberación de los 8 dirigentes cocaleros detenidos en las últimas horas debido a la ausencia de pruebas en su contra. El presidente Carlos Mesa y el dirigente del MAS, Evo Morales, coinciden en que el caso debe ser investigado.

LUNES 15 En la ciudad de Oruro finaliza el V Congreso Ordinario del MAS con la reelección de Evo Morales como máximo dirigente. El líder cocalero afirma que el movimiento defenderá la democracia y que pacíficamente ocupará las estructuras del estado. El nuevo estatuto establece un cupo femenino del 50% en todas las instancias y candidaturas del partido.

Trabajadores del LAB se movilizan por el centro de La Paz en demanda que el Congreso de la nación incluya a la empresa en el programa de excepción tributaria para que la misma pueda seguir funcionando.

GLOSARIO DE SIGLAS

ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
CNS	Caja Nacional de Salud
COB	Central Obrera Boliviana
COD	Central Obrera Departamental
COMCIPO	Comité Cívico Potosinista
COR	Central Obrera Regional
CSJ	Corte Superior de Justicia
CSTSB	Confederación Sindical de Trabajadores en Salud de Bolivia
CSUTCB	Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
EMP	Estado Mayor del Pueblo
FEJUVE	Federación de Juntas Vecinales
FSTLAB	Federación Sindical de Trabajadores del LAB
GES	Grupo Especial de Seguridad
LAB	Lloyd Aéreo Boliviano
MAS	Movimiento Al Socialismo
MIP	Movimiento Indígena Pachakuti
MIR	Movimiento de Izquierda Revolucionario
MNR	Movimiento Nacional Revolucionario
MSTB	Movimiento Sin Tierra de Bolivia
PTJ	Policía Técnica Judicial
UGRM	Universidad Gabriel René Moreno
UMOPAR	Unidad Móvil de Patrullaje Rural
UMSS	Universidad Mayor de San Simón
UPEA	Universidad Pública de El Alto

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera.
Fuentes: diarios Los Tiempos, La Razón, El Diario, El Nuevo Día
y Correo del Sur.*

Colombia

[cronología septiembre-diciembre 2003]

SEPTIEMBRE

LUNES 8 Los anesthesiólogos del Hospital Universitario de Barranquilla (HUB), convocados por la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (ANTHOC) realizan un paro para exigir el pago de los salarios adeudados y denunciar la crisis presupuestaria en ese centro de salud.

MARTES 9 El ejército se enfrenta con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el caserío Campo Bello, zona rural del municipio de Puerto Caicedo, Putumayo, y con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en San Francisco y Segovia, Antioquia.

Estudiantes de la Universidad de Antioquia impiden el ingreso de vehículos en esa institución y marchan hacia la gobernación de esa ciudad, contra el decreto 2566 al que consideran como un paso para la privatización de la educación superior, ya que éste contempla la reforma del reglamento estudiantil, la mercantilización de la educación y la violación de la autonomía universitaria, entre otras cuestiones.

MIÉRCOLES 10 Los neurocirujanos y trabajadores del HUB se suman a la lucha de los anesthesiólogos y se declaran en asamblea permanente para exigir el pago de los salarios adeudados a todos los empleados del centro de salud.

El Banco Mundial (BM) aprueba un crédito de 200 millones de dólares para Colombia.

VIERNES 12 Los anesthesiólogos y los neurocirujanos del HUB levantan el paro iniciado el lunes pasado luego de que la Secretaría de Salud se compromete a pagarles los salarios adeudados. Los trabajadores de base afiliados a ANTHOC continúan con la protesta.

El ELN secuestra a 8 extranjeros que se dirigían a Ciudad Perdida, en la Sierra Nevada de Santa Marta. El presidente de la nación destina 1.500 hombres para que se encarguen de liberar a los secuestrados.

- DOMINGO 14** Las FARC y el ejército se enfrentan en la vereda Ochalí, en Yarumal y en el municipio de San Francisco, Antioquia. Además, los militares combaten con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la vereda las Balsas, de Gómez Plata, en ese mismo departamento.
- MARTES 16** El presidente Uribe sostiene que no hay avances en las gestiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para avanzar en las negociaciones con las FARC y ratifica la confianza en Brasil para que facilite eventuales diálogos de paz en su territorio.
- MIÉRCOLES 17** El gobierno de Estados Unidos y el de Colombia firman un acuerdo que otorga inmunidad ante la Corte Penal Internacional (CPI) a los oficiales estadounidenses implicados en crímenes de lesa humanidad.
- VIERNES 19** Las FARC y el ejército se enfrentan en la vereda Alto Chuscas, en el municipio de San Francisco, oriente antioqueño y en la vereda Bocas de Santana, en Urrao, suroeste del departamento.
- SÁBADO 20** Pobladores de Pueblo Viejo bloquean la Troncal del Caribe contra los permanentes cortes y racionamientos de energía por parte de la empresa Electrocaribe.
- DOMINGO 21** El Bloque Metro se enfrenta con los Bloque Cacique Nutibara, Central Bolívar y Calima, en el municipio de San Roque, causando la huida de más de 700 pobladores.
- LUNES 22** El Fondo Monetario Internacional (FMI) destaca las reformas fiscales que tiene en marcha el gobierno colombiano para “asegurar la sostenibilidad de la deuda y promover la estabilidad y el crecimiento económico”.
- MARTES 23** El ejército combate con el ELN en una zona rural de El Tambo, Cauca, y con las FARC en el caserío El Jordán, Meta y cerca de los municipios de Arauquita y San Vicente del Caguán.
- MIÉRCOLES 24** Habitantes del barrio La Luz de Barranquilla realizan una protesta en ese sector contra la falta de energía eléctrica desde hace una semana. Una persona dispara desde un bus contra los manifestantes, asesinando a uno de ellos. La policía reprime con gases lacrimógenos.
- SÁBADO 27** Habitantes del barrio El Santuario de Barranquilla bloquean la carrera 8 entre calles 45 y 50 en protesta por la falta de energía en ese sector y contra la empresa Electrocaribe. Se producen enfrentamientos con la policía.
- DOMINGO 28** Personas no identificadas cometen un atentado con una motocicleta bomba que estalla en la llamada zona rosa de la capital caqueteña, en el occidente de la ciudad, dejando un saldo de 11 muertos y 48 heridos.

LUNES 29 El ejército y las FARC combaten en Puerto Toledo, en Puerto Rico y en la vereda El Diamante, en el municipio de Mesetas, departamento del Meta y en el sitio El Rodeo, municipio de Útica, Cundinamarca. Además, el ejército se enfrenta con las AUC en San Luis de Palenque, Casanare.

El ELN reconoce ser el autor del secuestro de los extranjeros en la Sierra Nevada de Santa Marta y expresa su voluntad de encontrarle una salida incruenta a esta operación. Uribe exige la inmediata liberación de los turistas.

OCTUBRE

MIÉRCOLES 1 El presidente Uribe, durante una visita al congreso de EE.UU., anuncia que se retirará del Grupo de los 21, después del fracaso de la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Cancún, México.

JUEVES 2 Las FARC y el ejército se enfrentan en la plaza del municipio de Ituango, norte de Antioquia.

El ELN acepta la mediación de la iglesia católica para la liberación de los extranjeros que tiene en su poder y recibe la visita del obispo de Medellín y del sacerdote Echeverri en una cárcel de Antioquia, donde se encuentran detenidos 2 miembros de esa guerrilla.

VIERNES 3 El vicepresidente del sindicato de la Frontino Gold Mines es asesinado por personas no identificadas cuando llegaba a su casa en el barrio Antonio Galán, en Segovia.

DOMINGO 5 Las FARC y el ejército se enfrentan en un área rural de Saravena, en Topaipí, Cundinamarca, en los municipios de Machetá y Caparrapí, al norte de Bogotá y en Urao. Además, el ejército combate con el ELN en zona rural de Zapatota, Santander y con los paramilitares en las cercanías al municipio de El Carmen, al nororiente de Bogotá.

MARTES 7 El gobierno de EE.UU. entrega 5 millones de dólares para ayudar militarmente al gobierno de Colombia.

DOMINGO 12 El ejército combate con las FARC y el ELN en Santander y Tolima. Además, se enfrenta con el ELN en una zona rural del municipio de Aracataca, Meta, y con las FARC en el Cauca y en el municipio de Sácama, Casanare.

LUNES 13 El ELN pone como condición para la liberación de los extranjeros secuestrados la conformación de una comisión de la Iglesia, con participación internacional, que verifique la crisis humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta.

- JUEVES 16** La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA) y la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) realizan una marcha de antorchas en Barranquilla llamando a la población a que se abstenga de votar el referendo promovido por el gobierno con el que éste pretende llevar adelante reformas políticas, económicas y sociales.
- MARTES 21** Trabajadores del Hospital General de Barranquilla, convocados por la ANTHOC, paralizan las consultas externas en reclamo de los recursos correspondientes a sus mesadas de septiembre y de mayor presupuesto, entre otras cuestiones.
- SÁBADO 25** Se lleva adelante la votación del referendo en todo el país con el objetivo de implementar reformas estructurales políticas, económicas y sociales, impulsadas por el ejecutivo y promovidas por el FMI. Los resultados del mismo representan un fuerte golpe al gobierno ya que éste sólo logra la aprobación de 3 o 4 de las 15 preguntas contempladas en dicha consulta.
- DOMINGO 26** Se realizan elecciones regionales a alcaldes, concejales, diputados y gobernadores en todo el país. El candidato por el Polo Democrático Independiente (PDI), Luis Eduardo Garzón, se consagra como alcalde de Bogotá, con más del 46% de los votos. Durante los comicios, se producen desórdenes, y choques entre partidarios de distintos candidatos en varios sectores del país como Barranquilla, Magdalena, Guamal y Pedraza. En Guamal, pobladores destruyen documentos electorales denunciando fraude y arremeten contra las instalaciones de la registraduría, siendo reprimidos por la policía. En Pedraza, habitantes destruyen la casa del secretario de Gobierno. En los corregimientos de Totumo, la Peña, la Junta, Potreritos, los Cardones, la Sierrita, el Hatico de los Indios y Caracolí, municipio de San Juan, sur de La Guajira, no se llevan a cabo las elecciones debido a los hostigamientos perpetrados por las FARC. Además, estas últimas se enfrentan con la policía en el Cauca y hacen estallar granadas en Tolima contra una brigada militar y contra la empresa lechera Colanta, situada en Antioquia, provocando la muerte de 6 trabajadores.
- MARTES 28** Habitantes de Moñitos, Córdoba, incineran la registraduría y el material electoral denunciando fraude. Se producen enfrentamientos con la policía.
- El presidente Uribe acepta la propuesta de la iglesia y del ELN de que se conforme una comisión entre la ONU, la Iglesia y esa guerrilla para liberar a los extranjeros secuestrados.
- MIÉRCOLES 29** Tras el fracaso del referendo impulsado desde el ejecutivo, los ministros del gabinete presentan su renuncia al presidente Uribe.

El gobierno de EE.UU. manifiesta su apoyo incondicional al presidente Uribe, a pesar de que haya fracasado el referendo, y destaca los éxitos del Plan Colombia y los obtenidos por su programa de erradicación aérea de coca en Colombia.

En Montería, San Bernardo del Viento, Ciénaga de Oro y Puerto Libertador, se realizan protestas contra el fraude electoral. Pobladores de Lórica, Córdoba, realizan un alzamiento e irrumpen en la Casa de la Cultura donde se realizaron los escrutinios para la alcaldía, produciendo destrozos dentro de la misma. Ante esta situación, el primer mandatario de Córdoba prohíbe las manifestaciones públicas y los desfiles, entre otras cuestiones.

NOVIEMBRE

SÁBADO 1 Se produce un atentado con una “casabomba” en Florencia, Caquetá, que deja un saldo de 3 muertos. El ejército acusa a las FARC de ser los responsables del hecho y ofrece 30 millones de pesos por su captura.

JUEVES 6 El ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño Hoyos, renuncia a su cargo en el gabinete.

VIERNES 7 La cámara de representantes aprueba la ley antiterrorista que confiere a las fuerzas represivas el poder de efectuar allanamientos, escuchas telefónicas e interceptar la correspondencia privada sin mandato judicial por un lapso de 72 hs.

LUNES 10 Maestros afiliados a ADEA realizan una protesta frente a la alcaldía de Barranquilla para exigir el pago de los sueldos atrasados.

La ministra de Defensa presenta su renuncia al ejecutivo.

MARTES 11 La ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo y el comandante de la policía presentan la renuncia a sus cargos. El presidente Uribe, además, decide remover a 4 generales, entre ellos al director de la policía metropolitana de Medellín, acusado por el gobierno de despilfarrar dineros públicos.

MIÉRCOLES 12 El comandante de las Fuerzas Armadas renuncia a su puesto.

SÁBADO 15 Se produce un atentado en Bogotá, en la zona rosa, que deja un saldo de un muerto y 72 heridos. Las autoridades atribuyen el hecho a las FARC.

DOMINGO 16 El ejército y el ELN combaten en la vereda La Linda, municipio de Nariño, Antioquia.

LUNES 17 El presidente Uribe llama a retirarse de sus servicios al comandante de la Brigada 24 de Putumayo, por malos manejos de dinero.

Las FARC y el ejército se enfrentan en Chalán, Sucre.

Las FARC realizan 15 atentados simultáneos contra el oleoducto Transandino y la infraestructura petrolera en Putumayo, cerca de Orito.

MIÉRCOLES 19 El gobierno, designa una nueva cúpula militar y realiza cambios en las jefaturas de divisiones y brigadas nombrando a militares desatacados en combate, como una demostración de que enfrentará militarmente con mayor decisión al conflicto armado interno. El general Herrera, actual director de la Escuela Superior de Guerra, solicita al presidente Uribe su retiro de las fuerzas militares.

JUEVES 20 Empleados de los juzgados de Medellín, Cali y Bogotá, convocados por el Sindicato de Trabajadores de la Rama Judicial (ASONAL JUDICIAL), paralizan sus actividades contra los despidos que pretende hacer el Consejo Superior y el recorte que se intenta implementar en el sector.

El BM aprueba un crédito de 150 millones de dólares para la aplicación de un programa de reforma fiscal en Colombia.

VIERNES 21 Los trabajadores de la alcaldía de Barranquilla hacen paro y realizan una jornada de protesta para exigir el pago de sus salarios.

Delegados de la Iglesia, la defensoría del Pueblo y la ONU viajan a la Sierra Nevada de Santa Marta para verificar el cumplimiento de los derechos humanos en ese lugar.

Los pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) inician la "operación tortuga", que consiste en la demora de los vuelos, la extensión de los tiempos muertos de escala y duración del vuelo, entre otras cuestiones, contra la reestructuración de la empresa Alianza Summa promovida por las directivas, el despido de 350 trabajadores, entre ellos 98 aviadores, y el convenio colectivo de trabajo.

LUNES 24 El ELN libera en la zona rural del Magdalena a 2 de los extranjeros secuestrados en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Cerca de 800 paramilitares del Bloque Cacique Nutibara (BCN), que opera en Medellín, inician un proceso de desmovilización. Los mismos se concentrarán en la localidad de La Ceja bajo la custodia del ejército y la policía. La Organización de Estados Americanos (OEA) expresa su apoyo al proceso de "reinserción" de las autodefensas. La organización Human Rights Watch

(HRW), por su parte, expresa su desacuerdo con la forma en que se lleva adelante el acuerdo de paz con las AUC.

VIERNES 28 El presidente Uribe exhorta a los comandantes de las FARC a desmovilizarse y a seguir el ejemplo tomado esta semana por más de 800 hombres de las AUC.

Estudiantes de la Universidad de Antioquia, que se encuentran en lucha desde hace más de 2 meses, resuelven reanudar las clases el lunes próximo, luego de acordar con representantes de la institución el otorgamiento de poderes al Sistema Universitario Estatal para que demande el decreto 2566, la impresión del reglamento estudiantil para repartirlo entre los matriculados y el establecimiento de normas sobre créditos académicos y calidad.

DOMINGO 30 Unos 120 mil camioneros de todo el país, convocados por la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), inician un paro para exigir al gobierno que congele los precios de los combustibles y los peajes por 3 años, entre otras cuestiones.

DICIEMBRE

LUNES 1 El gobierno nacional inicia la campaña "Actúa Colombia contra el Terrorismo", a través de la cual ofrece millonarias recompensas por los jefes de las organizaciones armadas.

El ejército se enfrenta con las FARC en el municipio San José de Fragua, Caquetá, en el barrio Nariño, Medellín y en Tame, Arauca, así como en Puerto Lleras, Meta, en San Vicente del Caguán, Caquetá y en Cumaribo, Vichada.

MIÉRCOLES 3 Hombres armados asesinan al hermano de la esposa del vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL) y a un trabajador de Coca Cola, en la ciudad de Barrancabermeja.

VIERNES 5 El gobierno declara el inicio del proceso de diálogo, negociación y firma de acuerdos con las Autodefensas Campesinas del Cauca.

SÁBADO 6 La ACC levanta el paro que viene realizando luego de acordar con el ministro de Transporte el control efectivo del cabotaje que se presta irregularmente con vehículos extranjeros y la defensa de la tabla de fletes, entre otras cuestiones.

El ejército combate con las FARC cerca de San Juan de Rioseco, y también las combate -tanto como al ELN- en Arauca, Valle y en Putumayo.

El gobierno nacional declara el inicio del proceso de diálogo, negociación y firma de los acuerdos con las Autodefensas Campesinas de Ortega, en Cajibío, Cauca.

DOMINGO 7 El congreso de EE.UU. aprueba un monto de 731 millones de dólares para destinar al Plan Colombia.

La ACDAC y Avianca-Sam acuerdan la normalización de las operaciones de las aerolíneas por parte de los pilotos de Avianca-Sam, afiliados a ACDAC, y el compromiso por parte de la administración de presentar un plan de retiro voluntario para los pilotos, entre otros puntos.

MARTES 9 Familiares de uniformados y políticos secuestrados por la guerrilla toman por tiempo indeterminado la catedral de Bogotá para exigir al gobierno un acuerdo humanitario que ponga fin al cautiverio de sus personas cercanas.

MIÉRCOLES 10 La plenaria del Senado aprueba el proyecto de ley denominado Estatuto Antiterrorista que da facultades a las autoridades a interceptar llamadas telefónicas y correspondencia sin previa orden judicial, entre otras cuestiones.

JUEVES 11 Más de 6 mil trabajadores de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL) inician un paro de 24 hs, convocado por la Unión Sindical Obrera (USO), contra la forma en que se llevó adelante el tribunal de arbitramento que contempló persecuciones a los sindicalistas, despidos, amenazas y veto para el ingreso a los sitios de trabajo y la constante militarización de las instalaciones de la empresa, y para exigir un aumento salarial. Más tarde, dicho tribunal anuncia un reajuste del 5% de los salarios de los obreros, así como una bonificación salarial de 400 mil pesos colombianos, entre otras cuestiones. Además, se establece que a partir del día de la fecha cualquier trabajador que ingrese a ECOPETROL estará bajo el sistema general de pensiones que se aplica a todos los colombianos y perderá el beneficio de no poder ser despedido después de 16 meses de trabajo.

SÁBADO 13 El presidente Uribe asegura que la concertación salarial de este año, que contempla un salario mínimo para el próximo de 358 mil pesos, con aumento de 7,83% frente al que rige actualmente y el pago del incremento salarial retroactivo al 1° de enero de 2003 para 800 mil funcionarios del país, refleja que Colombia “no se dejará contagiar por las versiones de lucha de clases que recorren América Latina”.

Varias comunidades campesinas, de maestros y activistas de derechos humanos se declaran en rebeldía contra la aprobación del estatuto antiterrorista y rechazan las detenciones arbitrarias de ciudadanos acusados de colaborar con la guerrilla.

LUNES 15 Se producen 3 explosiones sucesivas al mediodía en 3 de los principales almacenes de cadena de Barranquilla, que dejan un saldo de un muerto y 74 heridos. Según el gobierno, un grupo de las FARC se atribuye la autoría del hecho.

MIÉRCOLES 17 Cerca de 870 miembros del BCN de las autodefensas se desmovilizan y abandonan el centro de Paz y Convivencia, en La Ceja. El gobierno se compromete a proteger a los desmovilizados.

El ejército y las FARC se enfrentan en la vereda Llanogrande, de Urao y en el corregimiento de Santa Ana, Granada y en Abejorral, así como en zonas rurales de Segovia y Remedios.

VIERNES 19 El presidente Uribe felicita a su colega estadounidense George W. Bush por la captura del líder iraquí Saddam Hussein. El gobierno de EE.UU., por su parte, entrega más de 574 millones de dólares a Colombia para “combatir el narcotráfico y el terrorismo”.

SÁBADO 20 El ejército se enfrenta con el ELN en la vereda El Volante, corregimiento de Tucurín, municipio de Aracataca.

DOMINGO 21 El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y el gobierno se enfrentan en la zona rural del municipio de Montecristo, Bolívar.

El presidente Uribe autoriza al ex mandatario Alfonso López Michelsen a buscar un acuerdo humanitario con las FARC que permita la liberación de unos 70 rehenes.

LUNES 22 El ELN libera al resto de los extranjeros secuestrados en la Sierra Nevada de Santa Marta. Un comité encabezado por la iglesia católica y la defensoría del pueblo recoge a los turistas en un lugar no precisado de la Sierra Nevada. Además, el ELN propone realizar un diálogo regional de paz en la Costa Atlántica para atender la crisis humanitaria que se vive en esa zona.

El ejército se enfrenta con el ELN en zonas rurales del norte y noreste de Colombia, y con las FARC en el suroeste y oeste del país.

MARTES 23 Trabajadores de la alcaldía de Bogotá toman el primer piso del edificio de la administración distrital para exigir el pago de la primera quincena de diciembre, el retroactivo del año 2003, las primas y las prestaciones.

DOMINGO 28 El ELN descarta un eventual diálogo de paz con el gobierno de Uribe, pese al acercamiento que el mandatario tuvo hace un mes con Felipe Torres, portavoz de esa organización.

GLOSARIO DE SIGLAS

ACC	Asociación Colombiana de Camioneros
ACDAD	Asociación Colombiana de Aviadores Civiles
ADEA	Asociación de Educadores del Atlántico
ANTHOC	Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia
ASONAL JUDICIAL	Sindicato de Trabajadores de la Rama Judicial
AUC	Autodefensas Unidas de Colombia
BCN	Bloque Cacique Nutibara
BM	Banco Mundial
CPI	Corte Penal Internacional
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
ECOPETROL	Empresa Colombiana de Petróleos
ELN	Ejército de Liberación Nacional
ERP	Ejército Revolucionario del Pueblo
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FECODE	Federación Colombiana de Educadores
FMI	Fondo Monetario Internacional
HRW	Human Rights Watch
HUB	Hospital Universitario de Barranquilla
OEA	Organización de Estados Americanos
OMC	Organización Mundial de Comercio
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PDI	Polo Democrático Independiente
SINALTRAINAL	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos
USO	Unión Sindical Obrera

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diarios El Tiempo, El Colombiano y El Heraldo.
Indymedia Colombia y Rebelión.*

Ecuador

[cronología septiembre-diciembre 2003]

SEPTIEMBRE

- MIÉRCOLES 3** El Fondo Monetario Internacional (FMI) inicia una segunda revisión del programa económico de Ecuador para la aprobación de un tercer desembolso. Se reúne con el ministro de Economía y autoridades del Banco Central (BC).
- VIERNES 5** Asume Rodrigo Lasso como ministro de Agricultura y Ganadería, puesto vacante desde agosto pasado.
- Ecuador y EE.UU. realizan un Acuerdo de Asistencia Humanitaria y Cívica que incluiría la construcción de centros de acopio en tres ciudades del país, entre otras cosas.
- LUNES 15** El Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) retira la concesión para la generación de energía eléctrica a la empresa Electroecuador.
- MARTES 16** Los más de 18 mil servidores públicos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) inician un paro nacional en reclamo de que sus salarios perciban un alza hasta la escala 14.
- JUEVES 25** Los trabajadores públicos de petroleras, empresas eléctricas, docentes, estudiantes y jóvenes marchan en Quito en contra de que el Congreso Nacional apruebe la ley de unificación y homologación salarial. La policía lanza gases lacrimógenos y chorros de agua hirviendo desde carros hidrantes. Resultan varios detenidos. El Congreso aprueba la Ley urgente de Servicio Civil, Homologación y Unificación salarial del sector público, que era parte del acuerdo con el FMI. Dicha ley impide el reintegro de los empleados al sector público una vez que hayan sido indemnizados los servidores recibirán su remuneración según sus funciones y la capacidad financiera que tenga el Estado, entre otras cosas.
- SÁBADO 27** Más de 16 organizaciones sociales, indígenas y de trabajadores, entre petroleros, de salud, educación y jubilados realizan en Guayaquil el II Congreso Nacional de los Pueblos para tratar el rechazo a la Ley de Servicio Civil.

Resuelven realizar marchas y ocupaciones de instalaciones públicas y recolectar firmas para revocar los 3 poderes del estado, entre otras cosas.

DOMINGO 28 Finaliza el III Congreso Nacional de Pachakutik (PK) iniciado el pasado jueves 25 en el cual es elegido Gilberto Talahua como el nuevo coordinador nacional del movimiento.

MARTES 30 Ecuador y EE.UU. firman un convenio de cooperación económica para controlar la producción y el tráfico de drogas ilícitas, el entrenamiento de la policía y las Fuerzas Armadas y el lavado de dinero, entre otras cosas.

OCTUBRE

VIERNES 3 El presidente Gutiérrez anuncia que el país está avanzando en la conformación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral con EE.UU.

LUNES 6 El ejecutivo decreta la reforma del artículo 5 del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) lo cual permite que el secretario ejecutivo del organismo sea nombrado directamente por el presidente de la república.

JUEVES 9 La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) rechaza el decreto del presidente Gutiérrez sobre la elección del secretario ejecutivo del CODENPE y lo acusa de traidor ya que de esta forma los indígenas perderán la potestad de elegir a sus representantes. Piden que la medida quede sin efecto.

VIERNES 10 El ministro de Agricultura, Rodrigo Lasso, dimite a su cargo por desacordar con el presidente sobre la suspensión de la emergencia económica para el sector bananero.

MARTES 14 La Asociación Nacional de Bananeros inicia un paro indefinido con un cierre total de carreteras en la provincia de El Oro para que el gobierno declare la emergencia económica en la región, la paralización de las exportaciones bananeras por 15 días y que haga cumplir el precio oficial de la caja de bananos, entre otras cosas. La carretera que une a Ecuador con Perú se encuentra bloqueada.

Unas 18 asociaciones de jubilados y pensionados, maestros de la Unión Nacional de Educadores (UNE), campesinos, indígenas y miembros del Seguro Social Campesino (SSC) marchan desde el edificio de la Caja de Seguros en Guayaquil, en rechazo a la creación del seguro social municipal, propuesto por el alcalde Nebot. La policía reprime con golpes y gases lacrimógenos y resultan detenidos 3 dirigentes.

MIÉRCOLES 15 El paro bananero de El Oro se extiende a Guayas y Los Ríos. En El Oro demandan la presencia del presidente Gutiérrez para buscar una solución al conflicto. El mandatario asegura que no asistirá hasta que no se levante la medida. Declara en estado de emergencia temporal exclusivamente para los pequeños productores para combatir la "sigatoca negra", una plaga que afecta la fruta.

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Unión Europea (UE) firman un acuerdo de diálogo político y cooperación con el fin de establecer mecanismos para fijar una zona de libre comercio entre las regiones.

La CONAIE realiza una asamblea en Quito para definir las medidas a realizar en contra del decreto sobre el CODENPE y del gobierno. Se declaran en movilización permanente y realizan un listado de 22 resoluciones entre las que se encuentra el llamado a juicio político al ministro de Energía y Minas y la solicitud para convocar al pleno del Congreso Nacional a los ministros de Defensa, Relaciones Exteriores y al secretario nacional de la Administración.

Se encuentran en el país militares del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. enviados por el Comando Sur para administrar y supervisar la construcción de 3 centros de acopio para la Defensa Civil en Nueva Loja, Guayaquil y el Austro. Dicho Comando supervisa y financia las tareas militares del Plan Colombia, y coordina el trabajo de espionaje que se realiza desde la Base de Manta.

JUEVES 16 Los dirigentes del paro bananero de El Oro y Guayas se reúnen en Quito con el presidente Gutiérrez. Éste anuncia estar dispuesto a ceder en algunas demandas. En Guayas, se suman al paro las cooperativas de taxis y camionetas. Las actividades comerciales en la capital de El Oro están paralizadas. Por la mañana se realiza la marcha más numerosa desde el comienzo de la huelga. En Guabo, 4 personas son heridas en un enfrentamiento con militares cuando intentan bloquear vías. Por la tarde se logra un acuerdo entre el gobierno y la Asamblea de El Oro para concluir el paro.

VIERNES 17 Los bananeros suspenden el paro luego del compromiso del presidente Gutiérrez de detener por una semana la exportación de la fruta, decretar la emergencia agropecuaria y la declaratoria de regulación de la oferta exportable bananera. Asimismo, los bananeros se oponen a la designación del ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Seminario, porque representa al sector exportador.

LUNES 20 Gilberto Talahua asume como nuevo coordinador de PK. También se renueva el Comité Ejecutivo y la Comisión de Ética. Talahua critica al régimen y acusa al presidente Gutiérrez de siervo del FMI y peón de la derecha del país.

JUEVES 23 El gobierno prohíbe realizar paros y bloqueo de carreteras ya que entorpecen el desarrollo del país.

Unos 5 mil estudiantes secundarios marchan hasta la presidencia de la República, en Quito, en demanda de que el gobierno destine el 30% del presupuesto general al sector educativo y emita un carné estudiantil que reduzca un 50% los pasajes de transporte público. La policía lanza gases lacrimógenos.

LUNES 27 El ejército refuerza la frontera con Colombia, al norte del país.

MARTES 28 Unos 15 oficiales norteamericanos visitan la Base de Manta, en Manabí, como parte de tareas de reconocimiento.

MIÉRCOLES 29 El Congreso resuelve revisar el Acuerdo de Asistencia Humanitaria y Cívica firmado con EE.UU.

La Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) y la Juventud Revolucionaria Ecuatoriana (JRE) protestan en las cercanías de la Universidad Central en demanda del carné estudiantil. Los colegios Consejo Provincial, Técnico Sucre, Amazonas, Montúfar y Mejía se encuentran rodeados de policías para impedir que los alumnos salgan a protestar.

VIERNES 31 Ecuador y Brasil acuerdan intensificar la cooperación bilateral para luchar contra el narcotráfico a través del intercambio de experiencias e informaciones.

NOVIEMBRE

VIERNES 7 Arriba al país el secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan.

LUNES 10 El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas suscribe un convenio que ratifica la participación de la institución militar del Ecuador en las misiones de paz de la ONU.

MARTES 11 Ecuador y EE.UU. dan por terminado el Acuerdo de Asistencia Humanitaria. El gobierno se evita, de esta forma, que el tema llegue al Tribunal Constitucional.

DOMINGO 16 El canciller Zuquilanda niega que se haya retirado el Acuerdo de Asistencia Humanitaria con el Comando Sur de EE.UU.

MARTES 18 La UNE inicia un paro nacional indefinido en demanda de asignaciones económicas prometidas por el gobierno en junio pasado como elevar 20 dólares

el salario básico. Unos 2 mil maestros se concentran en el estadio del Instituto Nacional Mejía, de Quito. Se suman más de 100 estudiantes. El ministro de Educación amenaza con sancionar a los huelguistas. Marchan en Cuenca, Ambato, Santo Domingo y Loja. En Quito y Guayaquil las marchas son dispersadas con gases lacrimógenos.

VIERNES 21 El FMI acepta extender por 3 meses el programa de asistencia a Ecuador. El país y EE.UU. firman un acuerdo mediante el cual Ecuador recibirá 2 millones 800 mil dólares para el Programa de Desarrollo de la Frontera Sur.

SÁBADO 22 El presidente Gutiérrez pide la intervención de organismos internacionales Derechos Humanos para que investiguen su accionar luego de las declaraciones realizadas en su contra por la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), el PK y el SSC, sobre un vínculo de su gobierno con el narcotráfico.

Se conforma una Comisión Mediadora entre la UNE y el gobierno a fin de llegar a un acuerdo.

JUEVES 27 Los maestros y los trabajadores de la salud realizan la marcha "por la educación, la salud y la vida". Exigen el incremento de 20 dólares al sueldo básico de los maestros y la firma del noveno contrato colectivo del sector sanitario.

El gobernador de Chimborazo presenta su renuncia ante la presión de las autoridades locales que exigen su destitución. El presidente Gutiérrez nombra a Plinio Tamayo como gobernador encargado.

Los internos del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil inician una huelga nacional indefinida para que la Función Judicial agilice los procesos y aplique un artículo de la constitución que indica que deben ser liberados quienes permanezcan detenidos sin sentencia durante un año.

DICIEMBRE

LUNES 1 Los docentes de la UNE marchan hasta el Palacio de Carondelet en Quito. La policía lanza gases lacrimógenos. En Guayaquil los maestros ocupan la Dirección de Educación del Guayas. En Cuenca, supervisores y empleados de la Dirección de Educación de Azuay se unen al paro.

VIERNES 5 Miembros de la UNE cortan, con la solidaridad de taxistas y buseros, las principales calles de Tulcán, en Carchi. La Panamericana y el Puente Internacional Rumichaca son cerrados por 2 hs. por la Cooperativa Rápido Nacional como muestra de solidaridad hacia los maestros.

MIÉRCOLES 10 Más de 5 mil taxistas de 126 cooperativas bloquean las calles del sur de Guayaquil y cercan el edificio de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) en demanda de que su titular derogue el uso de un nuevo taxímetro.

La UNE realiza la "toma de Quito" en demanda de que el gobierno aumente su salario básico y el presupuesto para la educación. Delegaciones de todo el país se concentran en el estadio de la Universidad Central sumando unas 5 mil personas. Las delegaciones de Loja, Esmeraldas, El Oro, Sucumbíos, Orellana, Zamora, Cañar, Azuay, Guayas, Manabí y otras ciudades son impedidas de acceder por un cerco policial. Se unen la JRE, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), la FESE, padres de familia, la Unión de Educadores Municipales, trabajadores de la salud y otros. Se movilizan hacia el Palacio de Gobierno y la policía los reprime con gases lacrimógenos, resultando 25 detenidos y unos 20 heridos.

JUEVES 11 El ministro de Economía propone pagar a la UNE un bono mensual de 10 dólares de septiembre de 2003 a diciembre de 2004. Los educadores rechazan la oferta.

VIERNES 12 La UNE cierra las vías en el norte, centro y sur del país.

El titular de la ECUARUNARI, Humberto Cholango, es detenido en el sector de El Dorado y llevado al Centro de Detención Provisional (CDP) por orden del intendente de Pichincha por declarar en televisión que el presidente es un "mentiroso, incapaz e incoherente".

SÁBADO 13 Unos 50 indígenas reclaman en las afueras del CDP la libertad de Humberto Cholango, quien es liberado por la tarde.

MARTES 16 La Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud (OSUNTRAMSA) suspende por 48 hs. los servicios de consulta externa de 230 hospitales públicos del país para presionar al gobierno a que suscriba el noveno contrato colectivo que establece un alza salarial de 50 dólares para los 14 mil trabajadores. También rechazan la municipalización de la salud y la aplicación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Mientras tanto, el ministro de Salud presenta su renuncia, que es aceptada por el presidente Gutiérrez.

Más de 470 maestros públicos del país inician una huelga de hambre indefinida en el Consejo Provincial de Pichincha, en Quito, y en la Casa de la Cultura, en Guayaquil para que Gutiérrez cumpla con sus demandas salariales. En Quito, unos 1.500 docentes marchan hacia la prefectura y son reprimidos por la policía con bombas lacrimógenas. En Guayaquil la huelga comienza en medio de gases lacrimógenos y un fuerte control policial.

Los manifestantes son desalojados en dos ocasiones de la Casa de la Cultura. Mientras tanto, el ministro de Educación Otto Morán presenta su renuncia.

El presidente Gutiérrez acepta las renuncias de varios ministros. Los nuevos integrantes del área son Teófilo Palma en Salud, Roberto Paissalague en Educación, Patricio Acosta en Bienestar Social y José Repetto en Vivienda. Los cambios también abarcan al Ministerio de Gobierno, donde estará Raúl Baca Carbo y al Ministerio de Medio Ambiente el cual será ocupado por Yolanda Kakabase. El resto del Gabinete es ratificado.

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la CAN firman un acuerdo histórico en Montevideo, para formar un espacio comercial común.

VIERNES 19 La Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), la Federación de Indígenas Evangélicos (FEINE), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) exigen la disolución inmediata de los tres poderes del estado.

LUNES 22 Se reúnen dirigentes de la UNE y los ministros de Educación y de Gobierno. Las autoridades proponen el incremento de 10 dólares al salario básico en enero de 2004, un bono mensual de 20 dólares durante todo el año y aumentar 5 dólares más al básico en 2005. La UNE analiza la oferta.

Más de 15 organizaciones sociales, entre dirigentes indígenas, del magisterio, trabajadores eléctricos, dirigentes del SSC, el Frente Popular, la CMS, bananeros, y Federaciones de Barrios realizan una asamblea en la sede de la CONAIE para debatir sus acciones de oposición al gobierno. Resuelven oponerse a la privatización de los sectores estratégicos del país (petróleo, electricidad y telefonía); que Ecuador se abstenga de participar en el Plan Colombia y que se recobre la soberanía monetaria; que se cumpla el acuerdo con los maestros y que se firme el contrato colectivo con los trabajadores de la salud, entre otras cosas. La FEINE y la FENOCIN no participan.

MARTES 23 La dirigencia de OSUNTRAMSA se reúne con el gobierno en Carondelet para analizar la firma del noveno contrato colectivo. El ministro de Gobierno se compromete a continuar con las negociaciones para la firma del contrato colectivo.

MARTES 30 La UNE levanta el paro luego de firmar un acuerdo con el gobierno que incluye un incremento de 10 dólares al sueldo básico en enero de 2004, un bono de 20 dólares mensuales, otro aumento de 5 dólares en enero de 2005, con un bono mensual de 15 dólares durante todo ese año. También se integrará una comisión entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y la UNE para revisar el salario de 2006 y la inversión de 14 millones 600 mil dóla-

res para capacitación, entre otras cosas. La UNE, por su parte, se compromete a realizar la auditoría a los Proyectos y Programas Educativos con financiamiento externo, especialmente con el programa "Redes Amigas". Los días perdidos de clases, serán recuperados.

GLOSARIO DE SIGLAS

BC	Banco Central
CAN	Comunidad Andina de Naciones
CDP	Centro de Detención Provisional
CMS	Coordinadora de Movimientos Sociales
CODENPE	Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
CONAIE	Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CONELEC	Consejo Nacional de Electricidad
CTG	Comisión de Tránsito del Guayas
ECUARUNARI	Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
FEINE	Federación de Indígenas Evangélicos
FENOCIN	Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras
FESE	Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador
FEUE	Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador
FMI	Fondo Monetario Internacional
FUT	Frente Unitario de Trabajadores
JRE	Juventud Revolucionaria Ecuatoriana
MEC	Ministerio de Educación y Cultura
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
ONU	Organización de las Naciones Unidas
OSUNTRAMSA	Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud
PK	Pachakutik
SSC	Seguro Social Campesino
TLC	Tratado de Libre Comercio
UE	Unión Europea
UNE	Unión Nacional de Educadores

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Fuentes: diarios Hoy, La Hora y El Comercio.*

[cronología septiembre-diciembre 2003]

SEPTIEMBRE

VIERNES 5 El gobierno regional de Ica encabeza un paro de 24 hs en reclamo por un mayor presupuesto para 2004. Cientos de pobladores bloquean la Panamericana Sur, entre los km 390 y 310, donde son reprimidos por la policía. Diez personas quedan detenidas.

MIÉRCOLES 17 Los maestros afiliados al Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP) realizan un paro nacional, en protesta porque el gobierno ha incumplido los 40 puntos acordados tras la huelga de mayo. Más de 10 mil maestros se manifiestan por las calles de Iquitos.

Miles de trabajadores sindicalizados, encabezados por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), marchan hasta el Congreso para demandar al gobierno un cambio en la política económica y una verdadera reforma tributaria, entre otros puntos.

JUEVES 18 La Asociación de Productores Agropecuarios de Coca del valle del Monzón rompe el diálogo con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), señalando que el pintado de colegios o la entrega de semillas del café u otros productos no soluciona el problema de la coca. Reclaman una solución integral a su problema y exigen ser reconocidos como agricultores y no como narcotraficantes.

LUNES 22 El sindicato de trabajadores de la construcción civil comienza una huelga indefinida a nivel nacional y cerca de 10 mil obreros realizan una marcha hasta el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), para exigir aumento salarial, mejores condiciones laborales y la creación de fuentes de trabajo. En el interior del país también realizan manifestaciones.

MIÉRCOLES 24 La Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú suspende la huelga indefinida iniciada 4 días antes, luego de una asamblea en la que aceptan el aumento dispuesto por el MTPE de 1,70, 1,60 y 1,50 soles para las categorías de operario, oficial y peón, respectivamente.

JUEVES 25 Catorce gremios campesinos de diversas regiones y ciudades, integrantes del Comité Unitario Nacional de Gremios Agrarios (CUNGA), comienzan un paro agrario nacional de 48 hs, demandando al gobierno que atienda la situación de pobreza de las comunidades rurales y que cambie su política hacia el sector. Realizan movilizaciones y bloqueos de carreteras en casi todo el país.

Los trabajadores del sector salud de Lambayeque, Piura, Tumbes, Amazonas y San Martín comienzan una huelga regional indefinida, en reclamo, fundamentalmente, de una descentralización y distribución equitativa del presupuesto para el sector.

OCTUBRE

MIÉRCOLES 1 Unos 25 mil docentes universitarios, agrupados en la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP), inician una huelga indefinida, en reclamo de la homologación de sus sueldos y de mayor presupuesto para las universidades públicas, entre otros puntos.

VIERNES 3 El gobierno peruano se retira del grupo de naciones que se enfrentó recientemente a Estados Unidos y a Europa por los subsidios agrícolas que éstos aplican en sus países, denominado Grupo de los 21 (G-21).

LUNES 6 Los trabajadores y campesinos de La Convención, poblado de Kiteni, en huelga desde el 28 de septiembre pasado, son atacados con bombas lacrimógenas por unos 50 policías que arriban al lugar desde Lima, con el objetivo de que levanten varios piquetes de huelga establecidos en distintos tramos de la carretera de acceso al lugar. Veintiséis personas quedan detenidas y 20 resultan heridas.

MIÉRCOLES 15 Los trabajadores de EsSalud, nucleados en la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social del Perú (FED-CUT) comienzan una huelga nacional indefinida, demandando que se nivelen sus remuneraciones congeladas desde hace más de 13 años y que EsSalud cobre las deudas que le deben el estado y las empresas privadas.

JUEVES 23 Los trabajadores de EsSalud levantan la huelga nacional que sostienen desde hace más de una semana, luego de acordar con el gobierno un aumento a partir de diciembre de 97,5 soles y un incremento de 80 a 100% de la bonificación por vacaciones, gratificación y pago de guardias durante 2004. También se unificará la jornada laboral en 150 hs.

Diez mil personas provenientes de los 4 conos de Lima marchan hasta el Ministerio de Vivienda y el Congreso, para exigir la titulación de los terrenos que habitan.

Culmina el II Foro Andino, donde delegados de Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y todo Perú acuerdan expresar su oposición a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a las políticas norteamericanas que pretenden imponer el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Consideran, entre otros puntos, forjar una auténtica integración regional de los pueblos y naciones del Área Andina y anteponen la soberanía alimentaria de sus países sobre cualquier regla comercial.

LUNES 27 Miles de madres pertenecientes al programa Vaso de Leche de 48 distritos de Lima marchan hasta la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros en Miraflores para protestar contra la Ley de Transferencias Programáticas que suponen quitará la administración del programa a los municipios.

Llega a Lima desde distintos puntos del país la marcha de sacrificio iniciada por 3 mil agremiados a la CGTP, quienes establecen un gigantesco campamento frente al MTPE. Reclaman al gobierno que restituya en sus puestos laborales a los trabajadores despedidos durante el gobierno de Fujimori.

NOVIEMBRE

MARTES 4 Los trabajadores del Poder Judicial comienzan una huelga indefinida nacional, en demanda de aumentos salariales, mejores condiciones de trabajo y participación en el proceso de reforma de la administración de justicia. Piden que se elimine la cuarta disposición transitoria del proyecto de Ley de Presupuesto Público 2004, que al disponer la evaluación del personal facilita el camino a una ola de despidos.

MIÉRCOLES 5 Con cerca de 100 puntos de bloqueo en la carretera que va de Sullana a la provincia ecuatoriana de Loja, miles de campesinos del distrito de Tambogrande, Piura, comienzan un paro de 72 hs, en rechazo al proyecto de explotación minera de la compañía canadiense Manhattan Minerals Corp. (MMC).

Los trabajadores y obreros de las universidades públicas, nucleados en la Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades del Perú (FENTUP), comienzan un paro indefinido, en reclamo de mayor presupuesto para el sector.

MARTES 11 Perú suscribe un Memorando de Entendimiento con Naciones Unidas, que permite al país el envío de oficiales de las diversas armas, helicópteros, aeronaves y fragatas misileras a distintos lugares del mundo para operaciones de mantenimiento de paz.

LUNES 17 Los médicos de los hospitales públicos –agremiados en la Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud (ANMMS), en la Federación

Médica del Perú (FMP) y en la Asociación de Médicos Contratados– disponen la atención gratuita en todos los nosocomios del país, como medida de presión para que el gobierno incremente el presupuesto para el sector, aumente los sueldos y nombre a los médicos contratados, entre otros puntos.

Los pobladores de la provincia de Islay, región de Arequipa, comienzan un paro de 48 hs para que las autoridades nacionales les garanticen el trasvase de aguas de la represa Pasto Grande, región de Moquegua, para la cuenca del río Tambo. Bloquean unos 20 km de carreteras a lo largo de la región.

MIÉRCOLES 19 Los pobladores de la provincia de Islay, Arequipa, prolongarán por 2 días más el paro convocado desde el lunes, debido a que el ministro de Agricultura no toma las medidas para hacer cumplir la determinación del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) que ordena a Moquegua transferirle 8 millones de metros cúbicos de agua al valle de Tambo.

Ex trabajadores de Pescaperú pertenecientes a la primera lista de indemnizados por la Ley de Ceses Colectivos en diciembre de 2002, llegan a Lima desde todos los puertos del país, en protesta por el incumplimiento del gobierno del pago de las indemnizaciones a los trabajadores despedidos durante los años de Fujimori.

JUEVES 20 El paro cívico que desde el lunes llevan adelante los habitantes del valle de Tambo, Mollendo y Matarani pasa a ser indefinido, tras el fracaso de las negociaciones emprendidas en Lima entre representantes de Arequipa y Moquegua. Los habitantes de Moquegua, por su parte, comienzan un paro regional y bloquean el puente de Montalvo, exigiendo que el INRENA se retracte de la decisión de derivar agua para el valle de Tambo.

DOMINGO 23 Tras el fracaso de las negociaciones, los pobladores de la provincia de Islay, Arequipa, deciden pasar a una huelga indefinida y mantener el bloqueo de la Panamericana Sur y vías aledañas, hasta que se abran las compuertas de la represa de Pasto Grande.

MARTES 25 Los médicos en protesta nacional desde el lunes pasado radicalizan la medida y comienzan una huelga indefinida, por considerar insuficientes las gestiones realizadas para dar cumplimiento a sus reclamos.

La población de Arequipa para durante la jornada, en solidaridad con el pueblo de Islay. Decenas de camiones bloquean el km 48 de la Panamericana Sur y los pobladores de Mollendo, capital de la provincia de Islay, marchan por el centro de la ciudad.

MIÉRCOLES 26 La región de Junín, Huancayo, comienza una huelga indefinida. exigiendo al gobierno que cumpla con transferir el 50% de los recursos obtenidos

por la privatización de Electro Andes SA que corresponde por ley ser invertido en la región. Más de 10 mil personas marchan hasta la municipalidad provincial de Huancayo. Por la noche el presidente regional anuncia la suspensión temporal del paro, pues el ministro de Economía lo recibirá al día siguiente.

JUEVES 27 Miles de estudiantes y docentes de las universidades nacionales de Lima y de distintas provincias, en huelga desde hace casi 2 meses, marchan hasta el Congreso para reclamar mayor presupuesto para Educación, la homologación de los haberes de los maestros y la protección de la gratuidad de la enseñanza.

Comuneros y pobladores de los distritos de Ulcumayo y Carhuamayo que no han recibido la noticia de la suspensión temporaria del paro indefinido de Junín, bloquean carreteras. Un contingente policial los reprime, tras lo cual un dirigente muere por un tiro en el pecho y 3 personas resultan con heridas. Por otra parte, el ministro de Economía y Finanzas asegura en el debate del Presupuesto de la República que habrá una mención expresa en el dictamen de presupuesto para que el pueblo de Junín reciba los fondos pendientes de la venta de la empresa de Electro Andes SA.

El Congreso aprueba el proyecto del Presupuesto para el año 2004, que asciende a 44,115 millones de soles, de los cuales el 25% se destinará al pago de la deuda externa, el 62% a gastos de capital –que incluye sueldos y pensiones– y el 13% a gastos de inversión.

La presidenta de la Región Moquegua acepta entregar el agua de la represa Pasto Grande al gobierno regional de Arequipa hasta fin de año, tras acordar con el gobierno central que éste transferirá el proyecto especial Pasto Grande a la Región Moquegua antes del 15 de diciembre, que se conformará una comisión encargada de analizar la problemática hídrica de las cuencas del río Tambo y Moquegua y que ésta deberá proponer alternativas de aprovisionamiento de agua para el Valle del Tambo.

VIERNES 28 Por tercer día consecutivo, los alumnos de las universidades estatales de la capital marchan desde la Plaza Dos de Mayo hacia el Congreso para reclamar el aumento del presupuesto destinado a Educación, pues la partida aprobada les otorga menos del 2% del Presupuesto General y ellos exigen el 6%.

SÁBADO 29 El presidente del Poder Judicial anuncia la finalización de la huelga indefinida iniciada hace 24 días por los trabajadores del sector, luego de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por el cual recibirán un aumento en sus haberes de 120 soles a partir de enero de 2004.

DICIEMBRE

- MIÉRCOLES 3** Los trabajadores de los puertos del Callao, Salaverry, Chimbote, Paita, Ilo y General San Martín, Pisco, paran durante la jornada en defensa de la Ley de Puertos y en contra de las presiones de sectores económicos interesados en distorsionar la norma a su favor, con intenciones privatistas.
- JUEVES 11** La empresa minera canadiense MMC no califica para obtener el derecho a explotación del yacimiento minero de Tambogrande, Piura. Queda concluida así la confrontación con la población de la zona, que se venía movilizándolo, argumentando que la explotación minera contaminaría el valle de Tambogrande.
- VIERNES 12** El Ejecutivo solicita la renuncia de todos sus ministros de estado y sus consejeros presidenciales a raíz de un escándalo que por denuncias periodísticas en los últimos días ha envuelto a la jefa de gabinete Beatriz Merino, a la Iglesia, a un funcionario de la sede presidencial y a un legislador, debido a contratos que se habrían realizado de modo irregular.
- La FMP decide en asamblea nacional suspender la huelga nacional indefinida, luego de que el Ministerio de Salud (MINSA) se compromete a aumentar los sueldos a partir de enero de 2004 y a nombrar de manera progresiva a los 4 mil médicos contratados.
- LUNES 15** El presidente Toledo juramenta a su cuarto gabinete de ministros, encabezado ahora por Carlos Ferrero Costa. Diez ministros son ratificados en sus cargos y los de Agricultura, Mujer, Defensa y Relaciones Exteriores son reemplazados.
- MARTES 16** Perú es reconocido oficialmente como estado asociado del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
- VIERNES 19** El Ejecutivo crea la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica de Tambo-Alto Tambo Moquegua, organismo que tendrá el poder de decisión en materia de uso y conservación del agua y suelo en Tambo y Moquegua.
- MARTES 23** El Ejecutivo aprueba la tercera lista de ex trabajadores del estado reincorporados, gracias a la Ley de Ceses Colectivos.
- LUNES 29** La oficina de administración técnica del distrito de riego de Moquegua dispone el cierre de las compuertas del proyecto especial de Pasto Grande, de manera tal que la represa no abastecerá más de agua al valle de Tambo, en Arequipa.

GLOSARIO DE SIGLAS

ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
ANMMS	Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud
CGTP	Confederación General de Trabajadores del Perú
CUNGA	Comité Unitario Nacional de Gremios Agrarios
DEVIDA	Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
FED-CUT	Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social del Perú
FENDUP	Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú
FENTUP	Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades del Perú
FMP	Federación Médica del Perú
G-21	Grupo de los 21
INRENA	Instituto Nacional de Recursos Naturales
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
MINSA	Ministerio de Salud
MMC	Manhattan Minerals Corp.
MTPE	Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
OMC	Organización Mundial del Comercio
SUTEP	Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana

[cronología septiembre-diciembre 2003]

SEPTIEMBRE

LUNES 1 Cerca de 100 campesinos se concentran en las puertas del Instituto Nacional de Tierras (INTI), seccional Zulia, en reclamo de mayor celeridad en los procesos administrativos para la dotación de tierras baldías. También exigen la titularidad del asentamiento La Mantilla, en el municipio Jesús Enrique Lossada y cartas agrarias sobre 451 hectáreas para 82 familias.

MIÉRCOLES 3 Los conductores de 701 unidades agrupadas en 4 líneas que operan en el oeste de Caracas junto con miembros de otras 8 líneas de transporte paralizan el tránsito en la carretera vieja que conduce a Los Teques para protestar por la situación de inseguridad.

VIERNES 12 Miembros del partido oficialista Patria Para Todos (PPT) marchan desde la Plaza Catia hasta la entrada del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas, para entregar un documento exigiendo el rechazo de las firmas juntas y entregadas por la oposición para solicitar el referendo revocatorio del mandato presidencial. Horas más tarde, el CNE declara inadmisibile la solicitud de referendo, alegando que la recolección de firmas no llena los requisitos legales necesarios porque fueron recogidas antes de que se completara la mitad del mandato presidencial.

Más de 360 médicos residentes del hospital Pérez Carreño de Caracas paralizan durante 4 hs sus actividades para protestar por el retraso en el pago de 6 quincenas y bono nocturno.

LUNES 15 Habitantes de la población de Capadare, municipio Acosta de Falcón, cierran por más de 7 hs la carretera vieja que conduce a Mirimire, en protesta por tener más de 8 días sin el servicio de electricidad a causa de un transformador quemado. La toma finaliza en horas del mediodía, cuando la empresa Eleoccidente informa sobre la adquisición de un transformador nuevo que será instalado durante la tarde. Por su parte, vecinos de San Pablito, en Caricuao, cierran la vía adyacente a la sede de Hidrocapital para protestar por la escasez de agua desde hace 7 meses.

MARTES 16 Empleados de la alcaldía de Carirubana, estado Falcón, comienzan una huelga en desacato al alcalde provisional Carlos Tremont, quien asumió luego que el capitán Luis Marcano dejara el cargo el 11 de agosto como consecuencia de una orden de captura emitida en su contra por 11 presuntos delitos de malversación de fondos.

MIÉRCOLES 17 Por segundo día consecutivo, cerca de 4 mil trabajadores del Hospital Clínico Universitario de Caracas paralizan sus labores en reclamo del pago de deudas contractuales que no les han sido saldadas.

Miembros de la directiva del sindicato de la Salud toman la sede de la Inspectoría del Trabajo, ubicada en la avenida Michelena de Valencia, sector Candelaria y cierran la vía al tránsito como medida de presión ante la firma del contrato colectivo.

JUEVES 18 Obreros y empleados del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), seccional Carabobo, suspenden sus actividades hasta nuevo aviso por el incumplimiento del Gobierno Nacional con el pago de deudas adquiridas, entre las que se encuentran el aumento salarial de 10% vencido el pasado 1 de julio y otro por el 20%, el 17% de fideicomiso pendiente desde agosto y el seguro colectivo de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) desde hace un año. También reclaman el pago de cestatickets del año '99 y los bonos de guardería, además de la dotación de uniformes a los obreros y viáticos.

SÁBADO 20 Las fuerzas de oposición al gobierno del presidente Chávez realizan un acto denominado "El Barcelonazo" en la Av. Caracas de la ciudad de Barcelona, en el que manifiestan su apoyo al gobernador del estado Anzoátegui, David De Lima, y al referendo revocatorio.

DOMINGO 21 Unos 600 reclusos del retén de La Planta, en El Paraíso, se declaran en huelga de hambre en protesta por el retraso en los procesos judiciales y la mala atención por parte de las autoridades penitenciarias. Desde el exterior del penal se escuchan disparos, por lo que algunos familiares que se encuentran esperando para realizar visitas cortan la Av. Páez en protesta contra la represión.

LUNES 22 Representantes de varias juntas de vecinos de la parroquia Libertad de Ciudad Ojeda, toman las oficinas administrativas de Hidrolago en esa ciudad, en protesta por la indiferencia que ha mostrado la empresa hidrológica y su contratista E. & CH.G.CA. respecto a la recuperación de las tres personas que inhalaron el gas letal sulfuro de hidrógeno dentro de un colector que reparaban la semana pasada.

Los 600 reclusos del retén de La Planta levantan la huelga de hambre iniciada el domingo, tras reunirse en horas de la noche con representantes del

Ministerio del Interior y Justicia, quienes se comprometen a solventar la problemática de los traslados a los tribunales.

- SÁBADO 27** Más de 4 mil personas convocadas por los partidos de oposición realizan una concentración denominada “El Valencianazo” en defensa del referendo revocatorio.
- LUNES 29** Representantes de la Coordinadora Democrática (CD) entregan en el CNE la solicitud para convocar al referendo revocatorio del presidente Hugo Chávez Frías. Al mismo tiempo, el Movimiento V República (MVR) presenta solicitudes de revocatorios contra 38 diputados a la Asamblea Nacional (AN), 7 gobernadores y el alcalde mayor, Alfredo Peña.
- MARTES 30** Más de 5 mil conductores del estado Carabobo, pertenecientes a las 60 organizaciones que agrupa el Sindicato Unico de Transporte de Carabobo, cortan durante 8 hs la Autopista Regional del Centro (ARC) en varios sectores, además de avenidas y calles de la ciudad de Valencia, en protesta por el robo y asesinato de un chofer y un colector de autobús. El corte se levanta luego de que los representantes del sindicato firman un acuerdo con los diferentes organismos de protección del estado para evaluar, coordinar y planificar juntos las políticas de seguridad.

OCTUBRE

- JUEVES 2** Alumnos y padres de Padilla, cierran el jardín de infantes y el liceo Isla de Toas y la escuela Nacional Las Playitas, alegando que no quieren maestros viajeros sino aquellos docentes residentes en las islas que perdieron el concurso de interinato en el municipio.
- VIERNES 3** Un grupo de miembros de la sociedad civil y grupos opositores cierran la Redoma de Guaparo en Valencia luego de conocerse la retención de equipos de Globovisión, llevada a cabo por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en Caracas. En la capital, grupos de personas toman las calles para protestar por el mismo motivo mientras que varios manifestantes se concentran frente a la sede de dicha comisión en Las Mercedes, municipio Baruta y otros cortan parcialmente la autopista Francisco Fajardo a la altura del distribuidor Altamira. La manifestación frente a la sede del organismo oficial es dispersada por la Guardia Nacional (GN) con perdigones y bombas lacrimógenas luego de que algunos manifestantes lanzaran botellas y pintura contra los vidrios del edificio.
- VIERNES 10** Un centenar de trabajadores de la línea 4 del Metro de Caracas marchan por las estaciones de Plaza Venezuela, San Martín y zonas aledañas, exigiendo a la empresa Odebrecht, contratista del transporte subterráneo de

la capital, la contratación de más de 80 obreros, de acuerdo a un acta convenio firmada con anterioridad.

LUNES 13 Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), junto con la Federación de Centros Universitarios (FCU), secuestran en Caracas 19 unidades de transporte público como medida de protesta por el aumento del pasaje anunciado la semana pasada.

Unos 1.600 reclusos del Internado Judicial Carabobo, conocido como Penal de Tocuyito, se declaran en huelga de hambre en reclamo de celeridad procesal y la concesión de beneficios a los presos.

MIÉRCOLES 15 Se cumple en un 90% el paro convocado por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) en todo el país, para reclamar el saldo de las cuentas de homologación y prestaciones sociales adeudadas desde el año 2000, además de los aportes a las universidades por 390 mil millones de bolívares correspondientes al último trimestre de 2002.

Al cumplirse el tercer día de la huelga de hambre que llevan adelante los reclusos, las autoridades del Penal de Tocuyito deciden suspender la visita conyugal que se efectúa los días jueves.

JUEVES 16 Un grupo de mujeres, familiares de reclusos del Penal de Tocuyito, cortan el tránsito en la autopista Valencia-Campo de Carabobo, a la altura del centro penitenciario en protesta por la suspensión de la visita conyugal.

VIERNES 17 La población penal de Tocuyito levanta la huelga de hambre que mantiene desde el pasado lunes, tras firmar un acuerdo con las autoridades, jueces de Ejecución y representantes de la Defensoría del Pueblo, en el cual las primeras se comprometen a respetar y defender los derechos humanos y a darle celeridad procesal a los casos de los internos.

LUNES 27 El directorio del CNE decide dejar sin efecto los revocatorios de los gobernadores, alcaldes y concejales solicitados por el MVR, dejando sólo los de diputados, y estipula la fecha del viernes 21 al lunes 24 de noviembre para juntar las firmas que avalen los pedidos. Por su parte, la oposición deberá juntar las firmas para pedir el revocatorio presidencial entre el viernes 28 de noviembre y el lunes 1º de diciembre.

MARTES 28 Un grupo de vecinos de la comunidad 6 de Enero de Carlos Arvelo, estado Carabobo, toma las instalaciones del INTI exigiendo la tenencia de los terrenos donde habitan, ya que los gobiernos municipal y regional tienen una serie de obras de mejoras esperando para ejecutar hasta tanto consigan la documentación.

NOVIEMBRE

JUEVES 6 Un grupo de ancianos pertenecientes a la Fundación Nacional de la Tercera Edad se instala en la entrada de la Alcaldía de Valencia declarándose en huelga de hambre, hasta tanto los concejales que se opusieron a la aprobación del Crédito Adicional solicitado por el alcalde, rectifiquen y le den entrada al proyecto de manera definitiva.

Estudiantes de diferentes liceos del área metropolitana de Caracas protestan durante la mañana por el alza en los precios del pasaje. Por su parte, estudiantes del liceo Fermín Toro de El Silencio protestan por el mal estado de las canchas de la institución, jugando un partido de fútbol en la calle, mientras que los del liceo Gustavo Herrera se quejan por el mal estado del plantel dictando clases públicas en el medio de la Av. Libertador.

LUNES 10 El presidente de la FCU de la Universidad de Los Andes (ULA), Nixon Moreno, y el vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de esa casa de estudios, Gerly Ramírez, inician una huelga de hambre en la oficina de la institución en Caracas, en reclamo de la reapertura del comedor central cerrado hace 3 años, de la entrega de 800 millones de bolívares por parte del Ministerio de Educación Superior para gastos médicos de los estudiantes y la aplicación de un plan para combatir la delincuencia en la universidad, entre otras cosas.

MARTES 11 Los estudiantes del ciclo diversificado de la unidad educativa Aurelio Beroes de la urbanización Monte Claro de Maracaibo, toman las instalaciones de la institución en protesta por la falta de asignación de profesores, dotación de pupitres y rehabilitación de la planta física.

MIÉRCOLES 12 Un grupo de efectivos de la Policía Municipal de Baruta se encadena frente al comando policial en la urbanización Piedra Azul, para exigir al alcalde Henrique Capriles Radonsky su reincorporación y el fin de una serie de acciones que consideran un atropello a sus personas.

Cuatro estudiantes más se unen en las puertas del rectorado en Mérida, a la huelga de hambre que iniciaron el presidente de la FCU-ULA y el vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA el lunes pasado en reclamo de una serie de reivindicaciones gremiales.

MIÉRCOLES 19 Alrededor de 500 empleados y obreros de la UCV se apuestan en las inmediaciones de la Plaza Venezuela de Caracas y cierran el tránsito en varias calles con 10 buses de transporte universitario, para protestar por el pago de sólo 65 de los 80 días de aguinaldo que les corresponden según la contratación colectiva.

Trabajadores de diferentes despachos de la Alcaldía Mayor, incluyendo bomberos, Protección Civil, Policía Metropolitana (PM), hospitales y ambulatorios, protestan frente a la sede del Ministerio de Finanzas exigiendo el pago de 53 mil millones de bolívares por concepto de situado constitucional y subsidio.

LUNES 24 Finaliza luego de 4 días y en total normalidad, salvo pequeños inconvenientes, la jornada de recolección de firmas del sector oficialista con vista a los referendos revocatorios de diputados opositores.

MIÉRCOLES 26 Cerca de 150 personas de la tercera edad, realizan una marcha denominada el Bastonazo, desde la terminal de pasajeros hasta la plaza Bolívar de Guacara, en protesta al maltrato del que son víctimas por parte de los transportistas.

JUEVES 27 Luego de 3 días finaliza el I Congreso Bolivariano de los Pueblos con un NO rotundo al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), por ser un modelo impuesto por las grandes transnacionales que deja a un lado la economía social.

VIERNES 28 Cerca de 400 ex funcionarios del extinto Servicio Autónomo de Vigilancia del Estado Zulia (SAVEZ), protestan frente al Palacio de Gobierno regional, en reclamo del bono de 500 mil bolívares que se les debe desde hace 7 meses como parte de las prestaciones. La protesta finaliza con un enfrentamiento entre los manifestantes y la policía regional, dejando un saldo de 6 personas detenidas y un niño herido.

Durante el primer día de la jornada de recolección de firmas para solicitar el referendo revocatorio del presidente de la república, Hugo Chávez anuncia su candidatura para las elecciones presidenciales de 2006. Mientras tanto, representantes del oficialismo entregan en la sede del CNE de Caracas, planillas con 698.177 firmas para solicitar la revocatoria del mandato a 8 diputados opositores.

Unos 1.300 obreros dependientes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social en el estado Vargas exigen en Maiquetía el pago del bono de 500 mil bolívares ofrecido por el presidente Chávez, la cancelación de fideicomisos pendientes desde el año 1997 y el pago por los domingos trabajados desde 2001, entre otras cosas.

DICIEMBRE

LUNES 1 Con una masiva concentración nocturna en el distribuidor de Altamira en Caracas, la oposición política al gobierno del presidente Chávez celebra la finalización de la jornada de 4 días de recolección de firmas para pedir el refe-

rendo revocatorio del primer mandatario. Extraoficialmente, la CD maneja la cifra de 3.652.565 firmas recogidas hasta las 10 de la mañana.

MIÉRCOLES 3 Un grupo de vendedores ambulantes se enfrenta con efectivos de la PM y de la GN con ráfagas de armas automáticas, piedras y artefactos explosivos, provocando el cierre de comercios y el desvío del tránsito automotor. El enfrentamiento se produce cuando las fuerzas de seguridad intentan decomisar fuegos artificiales en el centro de la capital, y deja un saldo de 25 personas heridas entre las que se encuentran 3 agentes de la PM, 2 trabajadores de prensa y 20 vendedores ambulantes.

SÁBADO 6 Más de 62 mil seguidores del presidente Hugo Chávez marchan 11 km, desde Petare hasta el final de la Av. Bolívar, en Caracas, para celebrar los 5 años de ejercicio presidencial del primer mandatario. Al finalizar la marcha, Chávez habla durante aproximadamente 2 hs por cadena nacional denunciando la falsedad de las firmas recogidas recientemente por la oposición para intentar revocarlo.

MARTES 9 Un nutrido grupo de indígenas pertenecientes a la etnia Yucpa que habita la Sierra de Perijá, toma las instalaciones de la Alcaldía del Municipio en protesta por la dilación gubernamental en la reparación de las vías que comunican a la Sierra con la población de Machiques.

Unos 112 efectivos de la Policía de Barcelona inician un paro para pedirle al alcalde, capitán José Pérez Fernández, la destitución de la actual directora de ese cuerpo de seguridad, la comisaria Nirvia Núñez, debido al plan de depuración que ha venido practicando desde hace 3 años y por el cual ha expulsado a 30 policías.

MIÉRCOLES 10 Representantes del oficialismo entregan ante el CNE 156 cajas con un total de 1.306.650 firmas correspondientes a 12 solicitudes de referendo para revocar diputados, con lo que el número aproximado de firmas entregadas en distintas instancias asciende a 3.461.000, quedando pendientes 4 solicitudes de revocatorios a parlamentarios opositores.

Enfermeras, médicos y empleados administrativos del hospital Adolfo Ponds de Maracaibo, adscrito al seguro social, protestan enérgicamente en las afueras del centro de salud en reclamo del pago de diversos compromisos contractuales como los cestatickets, aguinaldos y bonos especiales. También los médicos, trabajadores y personal obrero de la maternidad Santa Ana, dependiente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ubicada en San Bernardino, Maracaibo, paralizan sus actividades por algunas horas en protesta por el retraso que mantiene la institución en pagarles el fideicomiso y el aguinaldo correspondiente a este año a los 617 empleados.

LUNES 15 Un grupo de trabajadores de la Misión Robinson en el estado Zulia protesta frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) en Maracaibo, en reclamo por el atraso en el pago de 3 meses de sueldo de 390 mil bolívares y un bono especial de 500 mil más.

MARTES 16 Más de 400 jornaleros que trabajan en el Plan Bolívar toman el sector El Latin de Carlos Soubllette, en Maiquetía, Vargas, luego de que les informaran que no recibirían el bono especial navideño de 250 mil bolívares dado que su cargo es de carácter temporal.

MIÉRCOLES 17 Los sindicatos de los transportistas públicos de Maracaibo toman las instalaciones del Instituto Municipal del Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros del Municipio Maracaibo (IMTCUMA) para exigir al Fondo de Transporte Urbano (FONTUR) la cancelación de la deuda que mantiene con los choferes por el Boleto Directo Personalizado (BDP) de los estudiantes.

Los obreros de las escuelas y centros educativos de la región de Zulia se concentran frente al Palacio de Gobierno en Maracaibo y reclaman al ejecutivo regional el cumplimiento de cláusulas de su contratación y el otorgamiento de cargos fijos en el sistema.

VIERNES 19 Bajo el resguardo de unos 800 militares, y en una caravana de 2 autobuses y más de 10 coches con 100 militantes, la CD entrega ante el CNE 250 cajas con los originales y las copias de las planillas que contienen aproximadamente 3,4 millones de firmas que respaldan la convocatoria a un referendo para recortarle el mandato al presidente Hugo Chávez.

MARTES 23 La dirigencia de Acción Democrática (AD) junto con sus pares del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de la CD entregan 92 cajas con 137.608 planillas originales con igual número de copias que contienen las firmas para solicitar la revocatoria de 26 diputados del oficialismo.

Aproximadamente 200 ancianos, todos pensionados del IVSS, cortan la Av. Bolívar de Valencia, a la altura del banco Banesco, en protesta porque hasta la fecha no se ha hecho efectivo el pago del subsidio por parte del gobierno nacional.

GLOSARIO DE SIGLAS

AD	Acción Democrática
ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
AN	Asamblea Nacional
ARC	Autopista Regional del Centro
BDP	Boleto Directo Personalizado
CD	Coordinadora Democrática
CNE	Consejo Nacional Electoral
CONATEL	Comisión Nacional de Telecomunicaciones
FAPUV	Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela
FCU	Federación de Centros Universitarios
FONTUR	Fondo de Transporte Urbano
GN	Guardia Nacional
HCM	Hospitalización, Cirugía y Maternidad
INAVI	Instituto Nacional de la Vivienda
IMTCUMA	Instituto Municipal del Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros del Municipio Maracaibo
INCE	Instituto Nacional de Cooperación Educativa
INTI	Instituto Nacional de Tierras
IVSS	Instituto Venezolano de los Seguro Sociales
MAS	Movimiento Al Socialismo
MVR	Movimiento V República
PM	Policía Metropolitana
PPT	Patria Para Todos
SAVEZ	Servicio Autónomo de Vigilancia del Estado Zulia
UCV	Universidad Central de Venezuela
ULA	Universidad de Los Andes

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández.
Fuentes: diarios El Universal, Últimas Noticias, Notitarde y Panorama Digital.*

Región Norte

La batalla por la seguridad social domina los movimientos sociales en Panamá durante el 2003

Marco A. Gandásegui, h.*

** Miembro directivo
del Centro de Estudios
Latinoamericanos (CELA)
"Justo Arosemena",
Panamá.*

La batalla en torno a la seguridad social dominó el movimiento social panameño en 2003. Las luchas populares se dieron en el marco de una creciente pauperización de la población y desempleo, resultado de la aplicación de políticas neoliberales de ajuste económico.

En 2003 aumentó en Panamá la población que vive por debajo de la línea de pobreza. Igualmente, la población económicamente activa sin empleo continuó creciendo. Estas cifras se dieron a pesar del crecimiento de un 4% que tuvo el producto interno bruto (PIB) el año pasado, según voceros del gobierno.

El crecimiento del PIB parece no haber afectado la tasa de desempleo y el creciente empobrecimiento, especialmente de la población rural y de las periferias urbanas del país. En las áreas rurales, los sectores más afectados son los pueblos indígenas (el 6% de la población de la República). En las áreas urbanas, el sector informal siguió

su expansión absorbiendo a la población expulsada de las actividades mejor remuneradas y más estables¹.

La tendencia observada es el resultado de la aplicación de las políticas neoliberales que en el caso de Panamá se iniciaron en la década de 1980. Los ajustes han provocado un desplazamiento importante de las inversiones de los sectores productivos a los sectores especulativos. En 2003, por primera vez desde la invasión norteamericana en 1989, se produjo una fuga de capitales financieros. El sector financiero tuvo un crecimiento negativo.

Sin embargo, el PIB creció como resultado del fuerte incremento que experimentaron los sectores de la construcción, las actividades portuarias, el turismo y la pesca. En cambio, el sector industrial tuvo un crecimiento negativo del 1%. Igualmente, el sector agropecuario creció negativamente en un 0,7%.

Política de ajuste

El estancamiento de los sectores productivos (industria y agropecuario), que a su vez se refleja en la pérdida de empleos y más pobreza, es el resultado de las políticas de ajuste. Estas últimas se han concentrado en los últimos dos lustros en las privatizaciones de los servicios públicos, en la desregularización de las instituciones gubernamentales y en las políticas de flexibilización de la fuerza de trabajo (mano de obra). Las áreas más afectadas por las políticas de ajuste han sido la energética, la telefónica y el transporte. Las tarifas eléctricas, de teléfono y de transporte urbano han aumentado entre 60 y 200% en los últimos dos años.

La distribución de agua potable, los servicios de salud y la educación no han sido privatizados, pero han experimentado incrementos fuertes. Los sectores menos afectados por los ajustes habían sido hasta el 2003 la seguridad social y la educación superior. El año pasado, el gobierno

“... las políticas de ajuste [...] se han concentrado en los últimos dos lustros en las privatizaciones de los servicios públicos, en la desregularización de las instituciones gubernamentales y en las políticas de flexibilización de la fuerza de trabajo. Las áreas más afectadas por las políticas de ajuste han sido la energética, la telefónica y el transporte”

anunció la reducción del presupuesto que por ley se le asigna a la educación universitaria. Incluso le creó una deuda de u\$s 18 millones al no cumplir con los pagos de seguridad social y servicios básicos.

Al mismo tiempo, el gobierno convocó a un “diálogo por la seguridad social” para ajustar la política financiera de la Caja de Seguro Social (CSS).

Reacción popular

La reacción popular no se dejó esperar. Igual que en 1998, cuando el gobierno nacional pretendió privatizar el IDAAN [Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales], o en 2001, cuando se incrementó la tarifa del transporte urbano colectivo, se produjo una movilización masiva de la población y sus organizaciones populares. En comparación con 1998 y 2001, las protestas fueron más extendidas, incluyendo sectores del interior del país y, además, capas medias que antes no se habían movilizado. La lucha por la defensa de la seguridad social contó también con apoyo activo de quien fuera el director de la CSS hasta septiembre de 2003, Juan Jované.

La primera señal de los enfrentamientos que se producirían en la segunda mitad de 2003 se dio cuando el gobierno comenzó a explorar en el “diálogo por la seguridad social” las fórmulas más viables para aumentar la edad de jubilación, doblar la densidad de los aportes de los asegurados y la diversificación de la cartera de inversiones de la CSS. La institución recauda anualmente u\$s 1.000 millones, y tiene depositados en el Banco Nacional de Panamá plazos fijos que superan esa suma.

Los sindicatos laborales, los gremios educativos y médicos rechazaron de una vez las propuestas gubernamentales. Las propuestas ya habían sido presentadas por el sector privado en forma insistente en años anteriores sin encontrar calor oficial, y menos apoyo popular. El cambio de posición del gobierno también provocó protestas de sectores amplios de la población, incluyendo a sectores profesionales y estudiantiles, y movilizó a las comunidades.

La lucha en el “diálogo”

Como consecuencia del enfrentamiento verbal que se produjo en el “diálogo”, el director de la CSS, Juan Jované, se convirtió en el defensor de la institución que encabezaba las aspiraciones de los asegurados y de la población que se expresaba a través de sus organizaciones.

En junio de 2003 el escenario estaba preparado para que los actores definieran sus objetivos. Por un lado, las organizaciones empresariales presionaban para aumentar las obligaciones de los trabajadores y para desregularizar (privatizar) a la CSS. Por el otro, los trabajadores estaban decididos a defender la institución de la seguridad social contra los ajustes económicos exigidos por el sector privado.

Los empresarios contaban con el apoyo logístico y político de las instituciones financieras internacionales, especialmente el BID, y sus maniobras eran “facilitadas” por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los medios de comunicación más poderosos contribuyeron a la desestabilización de la CSS montando una campaña que apuntó a desacreditar a la institución, y especialmente a su director, Juan Jované. En medio de la crisis, el gobierno circuló la información, recogida por los medios de comunicación, acusando a la administración de la CSS de desviar medicamentos hacia las FARC, movimiento armado insurgente de Colombia. Las FARC, para aquella época, acababan de ser incluidas en la lista de organizaciones “terroristas” del presidente de EE.UU., George Bush. La información obviamente no tenía fundamento, e incluso el aparente contrabando de medicinas hacia Colombia comprometía a funcionarios de la Policía Nacional y del Ministerio de Salud. El gobierno se sumó abiertamente a la campaña desreguladora a mediados de 2003.

Los trabajadores, a su vez, encontraron apoyo en las capas medias y en las organizaciones populares de todo el país. Los enfrentamientos entre Jované y los funcionarios del gobierno, e incluso con los miembros de su propia directiva en la CSS partidarios de los ajustes, se hicieron cada vez más crecientes. Sólo una televisora, propiedad de la Iglesia católica, respaldó la posición de los trabajadores².

La batalla por la seguridad social puso a prueba las fuerzas enfrentadas. La victoria de un contrincante sellaría la suerte del otro y definiría el curso que habría de tomar el país.

El primer enfrentamiento

Para el mes de junio de 2003, “el diálogo” se encontraba paralizado y los objetivos del gobierno de iniciar el proceso de privatización de la CSS parecían derrotados. Los sectores populares organizaron un Frente Popular por la Defensa de la Seguridad Social, donde la central obrera CONATO, el Movimiento Nacional por la Defensa de la Soberanía (MONADESO) y otras doce organizaciones populares se habían aglutinado³. También se organizó un Foro Económico Social Alternativo (FESA) para estudiar la viabilidad de dar una orientación política a las fuerzas movilizadas por la defensa de la CSS⁴.

A mediados de junio de 2003 el director de la CSS solicitó la activación de una partida extraordinaria u\$s 29,9 millones según los acuerdos alcanzados en las negociaciones presupuestarias con el gobierno a fines de 2002. Reactivando el enfrentamiento, el gobierno rechazó inmediatamente la solicitud del director y le exigió que sometiera su petición a la junta directiva de la CSS. El contralor general de la República, Alvin Weeden, asumió el liderazgo del sector desestabilizador e insinuó que el director de la CSS era incompetente y que debía abandonar su cargo.

Mediante un conjunto de maniobras el gobierno logró modificar la mayoría favorable hacia Jované en la junta directiva de la CSS. Cuando la solicitud fue presentada, no logró encontrar los votos necesarios para su aprobación. El gobierno logró frenar la política institucional que perjudicaría los servicios que prestaba la CSS, y además desestabilizaba a miles de empleados (la CSS tiene cerca de 11 mil empleados en sus planillas).

El 24 de junio los empleados de la CSS llevaron su protesta a las calles. Declararon un paro de 48 horas prorrogable, y a primera hora se tomaron los centros de trabajo y cerraron las vías más importantes de la ciudad de Panamá. La reacción del gobierno fue inmediata. Envió tropas antimotines a los hospitales y centros de salud, donde reprimió a los trabajadores. En el primer encuentro los medios informaron: “dos heridos, dos detenidos y el desalojo del centro parvulario del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias fue el saldo de los enfrentamientos entre la Policía Nacional y funcionarios de la CSS”.

El contralor Weeden mantuvo su posición de no negociar la partida extraordinaria. Según *La Prensa*, “reiteró que ‘no hay viabilidad legal’ para conceder un crédito extraordinario a la Caja. El artículo 199 de la Ley de Presupuesto establece con claridad que los créditos adicionales serán viables cuando exista un superávit o excedente real en los ingresos y esa situación no existe en la CSS”. El contralor achacó los altos gastos en la administración de la Caja al aumento de la planilla durante la administración de Jované, que según él se incrementó de 13 mil a 24 mil funcionarios. Weeden propuso que se utilizaran los dineros del presupuesto que no se llegan a ejecutar.

Por su lado, los empleados de las diversas dependencias de la CSS en el interior del país respaldaron el paro de labores convocado por la dirigencia de los funcionarios administrativos. En la policlínica de Penonomé, durante dos noches consecutivas, los empleados realizaron vigiliyas frente a las instalaciones donde laboran. Además plantean el rechazo a cualquier intento de privatización de la Caja y exigen el pago de las cuotas obrero-patronales por parte de los empleadores morosos.

En la provincia de Veraguas el paro fue apoyado por 200 funcionarios administrativos en los centros de Soná y Santiago. La acción de protesta fue apoyada por la Coordinación

de la CSS en Santiago, la Policlínica Horacio Díaz Gómez, la dirección institucional en Santiago, y el Hospital Ezequiel Abadía en Soná. El vocero de los empleados recalcó que se han tomado todas las previsiones para que los servicios no se paraliquen, especialmente en el cuarto de urgencias.

En Colón se realizaron cierres de calles y marchas por parte de los empleados administrativos de las diferentes dependencias de la CSS. Los funcionarios de la Policlínica de Sabanitas bloquearon la vía Transistmica que une la ciudad atlántica con la capital a 80 kilómetros de distancia. Mientras tanto, los administrativos de las instalaciones ubicadas en el centro de la ciudad marcharon todo el día, con pancartas en mano y gritando consignas en apoyo de Juan Jované.

El Frente por la Defensa de la Seguridad Social consideró que el paro había resultado un éxito. El gobierno se había visto forzado a utilizar la fuerza para reprimir un movimiento que la población del país calificaba como justo. Además, las intenciones privatizadoras del sector privado se hicieron evidentes en sus denuncias de la CSS y de su director, Juan Jované. Por el lado de los sectores populares, la unidad de los diversos sectores se había consolidado. Obreros y médicos, empleados de la CSS y estudiantes, profesionales y trabajadores se habían unido para enfrentar al gobierno. Sin embargo, la batalla por la seguridad social del país apenas comenzaba.

En un comunicado expedido el 27 de junio de 2003, las mujeres organizadas anunciaron que se retiraban del "diálogo" auspiciado por el gobierno. "Consideramos que continuar en la mesa del Diálogo Nacional por el Seguro Social es beneficiar a los sectores que desean aumentar la edad de jubilación de las mujeres... Por eso junto a CONATO y a las organizaciones de los sectores populares llamamos a clausurar este Diálogo y a unificar esfuerzos en la verdadera defensa de la CSS. Convocamos a las mujeres trabajadoras, amas de casa, jóvenes, estudiantes

"... la unidad de los diversos sectores se había consolidado. Obreros y médicos, empleados de la CSS y estudiantes, profesionales y trabajadores se habían unido para enfrentar al gobierno. Sin embargo, la batalla por la seguridad social del país apenas comenzaba."

y profesionales conscientes, a organizarnos para movilizarnos en defensa de la CSS, a luchar por la vida, defendiendo una seguridad social solidaria”.

El Foro Mujer y Desarrollo, que aglutina a las mujeres que luchan por la CSS, condenó también “los actos de represión y encarcelamientos de los empleados de la CSS y advertimos que no aceptaremos salida que afecte el funcionamiento de la CSS, al tiempo que repudiamos cualquier acción que atente contra la dirección honesta de Juan Jované en la Caja de Seguro Social”.

La destitución de Jované

Los dos meses que siguieron, julio y agosto, fueron de enfrentamientos constantes entre los defensores de la CSS, con Jované a la cabeza, quien contaba con el respaldo de la totalidad de las organizaciones populares del país, y el gobierno, el sector privado y las agencias facilitadoras internacionales. En julio de 2003 el gobierno niega el aumento de los salarios a los empleados de la CSS acordado en negociaciones anteriores. En agosto, bloquea la aprobación del presupuesto de la CSS correspondiente a 2004. A principios de agosto de 2003 el gobierno transfiere una partida de 150 millones a la CSS que estaba pagando un interés de 8%. La partida, sin embargo, no sale del Banco Nacional de Panamá, donde sólo paga el 1,5% en interés.

El conflicto en torno a la aprobación del presupuesto de la institución se convierte en el arma principal del gobierno para debilitar a la CSS. En la junta directiva de la CSS, el gobierno exige que Jované prepare un presupuesto que esté de acuerdo con las exigencias de las instituciones financieras internacionales. Jované se mantiene firme con su propia versión. El 10 de septiembre de 2003, después de reunir los votos que necesitaba, el gobierno logra que la junta directiva separe a Jované de su cargo de director. El propio gobierno, según la ley de la CSS, tiene que aprobar la separación del director y proceder con su destitución.

La destitución provocó una movilización que estremeció los cimientos de la sociedad panameña durante dos semanas. El 11 de septiembre, Panamá y otras ciudades del país fueron testigos de protestas que movilizaron a decenas de miles de personas. La jornada arrojó un saldo de varios heridos y 49 detenidos, entre ellos varios dirigentes sindicales. En la capital, trabajadores de la CSS bloquearon la vía Simón Bolívar a la altura del Complejo Hospitalario Metropolitano y se enfrentaron con la policía cuando ésta intentaba desalojarlos. Luego, las fuerzas antimotines ingresan al establecimiento, reprimen y detienen a 30 empleados de la CSS.

La marcha del 12 de septiembre

El 12 de septiembre, el Frente por la Defensa de la Seguridad Social organizó una marcha que atravesó un sector importante de la ciudad de Panamá con más de 50 mil participantes. El mensaje que el pueblo panameño le hacía llegar al gobierno era inequívoco. Los dirigentes sindicales dieron al gobierno un plazo de tres días para reincorporar a Jované como director de la CSS, y en caso contrario amenazaron con convocar a la huelga general. Además exigieron la libertad de los dirigentes detenidos por la Policía Nacional. En la provincia de Veraguas, integrantes de la Coordinadora Popular Veragüense (COOPOVE) realizaron una marcha por las calles de Santiago en apoyo a los funcionarios de la CSS que se mantienen en paro, entregaron una proclama al gobernador, y cerraron la vía Panamericana. En las provincias de Herrera y Los Santos, la manifestación bloqueó el puente sobre el río La Villa. En la provincia de Chiriquí, miembros del SUNTRACS y estudiantes universitarios cerraron la vía Interamericana en David y se enfrentaron con la policía, que reprime y detiene a 8 manifestantes. A su vez, un total de 600 trabajadores de la CSS realizaron una marcha. Por otra parte, en Colón se decretó una pena de 60 días de arresto conmutable para 24 de las personas que fueron detenidas durante las protestas.

El sábado 13 son liberadas 54 personas –38 de ellas del SUNTRACS y de la CSS– que fueron detenidas en las dos jornadas de protesta. Sin embargo, el secretario de Defensa de SUNTRACS, Saúl Méndez, no es liberado, y es acusado de atentar contra la personalidad interna del estado, lo que conlleva una pena de quince a veinte años de prisión.

Por otra parte, dos manifestantes liberados denuncian que fueron víctimas de tortura física y psicológica mientras estuvieron detenidos.

La huelga general

En una asamblea realizada en la Universidad de Panamá, el Frente por la Defensa de la Seguridad Social llama a la huelga general a partir del 23 de septiembre. Una semana antes, a partir del 15 de septiembre, los 11 mil trabajadores de la CSS convocan a una huelga indefinida. A su vez, la Coordinadora Magisterial por la Defensa de la Seguridad Social que aglutina a los gremios de educadores convoca a un paro de 48 horas. También los estudiantes de secundaria y de la universidad se suman a las protestas y a los piqueteos con cortes de ruta y manifestaciones. El gobierno respondió con represión, amenazando con arrestar a todos los que bloquearan rutas y con despedir a cualquier funcionario de la CSS que participara en los bloqueos. También acusó a Jované de querer “desestabilizar el país”. El jueves 18 de septiembre, nuevamente,

decenas de miles de trabajadores, encabezados por el dirigente de los trabajadores de la construcción Saúl Méndez, liberado dos días antes, marcharon por las principales avenidas de la ciudad capital.

Los diez días que precedieron a la huelga general

Domingo 14	El Frente reunido en el Paraninfo de la Universidad de Panamá convoca a una huelga general para el 23 de septiembre.
Lunes 15	Centenares de personas se manifiestan en protesta frente a las oficinas de la CSS, se realizan protestas en todas las ciudades del interior y la presidenta Moscoso anuncia que serán destituidos todos los altos dirigentes de la CSS.
Martes 16	Los profesores y maestros se declaran en un paro militante indefinido. Los médicos realizan un paro de 24 horas en protesta por la destitución de Jované.
Miércoles 17	Los maestros y profesores deciden extender el paro hasta el 23 de septiembre. Se le suman docentes de otras dependencias. Los médicos extienden su paro por 24 horas adicionales. Las protestas continúan en las ciudades del interior del país. Los grupos estudiantiles FER y PAT llevan sus protestas a la sede de la CSS.
Jueves 18	Sindicatos y gremios marchan hasta la Presidencia de la República donde Jované hace uso de la palabra en la Plaza Catedral. La presidenta Moscoso se aleja de Palacio para firmar ante el arzobispo de Panamá, en acto público, su compromiso de no privatizar la CSS.
Viernes 19	Se producen manifestaciones en Penonomé, capital de la provincia de Coclé.
Sábado 20	Las enfermeras se suman al movimiento declarando su apoyo al Frente por la defensa de la seguridad social y rechazando la destitución de Jované. Las asociaciones de la CSS presentan un documento para negociar con el gobierno, exigiendo la restitución de Jované.
Domingo 21	El Frente propone dialogar con la presidenta Moscoso sobre la base del respeto a la autonomía de la CSS, el rechazo a cualquier iniciativa de privatización y la restitución de Jované, entre otras cosas.

Lunes 22	El gobierno junto con el PNUD, responde, 24 horas antes de la huelga general, anunciando que elaboraría un anteproyecto de ley para reformar el sistema de atención de salud.
Martes 23	Los obreros se concentran en la Plaza Porras. Los estudiantes universitarios se enfrentan a los antimotines en la vía Simón Bolívar. En el resto del país se producen enfrentamientos. El país es paralizado.

La huelga tuvo un seguimiento masivo, con una paralización del 75% en el sector de la construcción, el 95% de los docentes de las escuelas públicas, y más del 25% en el sector salud y la empresa privada.

El sábado 27 de septiembre, el Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social realiza una asamblea en el Paraninfo de la Universidad de Panamá y aprueba llevar a cabo la segunda huelga nacional el 30 de octubre para lograr que el gobierno atienda a un pliego de doce peticiones, incluyendo no perseguir a los participantes de la lucha por la CSS, respeto a la autonomía de la entidad, el reintegro del ex director de la institución, Juan Jované, y la aprobación del presupuesto original, entre otras.

Resultados de la huelga

Según *El Panamá América*, "mientras los dirigentes sindicales consideraron 'efectiva' la huelga general de advertencia realizada ayer por los gremios aglutinados en el Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social, los empresarios y el Gobierno coincidieron en que no tuvo el respaldo de las bases". El diario, bastión de sectores conservadores, apunta que "aunque se cumplió con la huelga de advertencia no se dio ayer un acercamiento entre el Ejecutivo y los dirigentes para iniciar conversaciones, por lo que se esperan nuevas acciones de protestas en las calles".

Según el dirigente de la Asociación de Profesores, Andrés Rodríguez, ésta es sólo una advertencia a la mandataria Mireya Moscoso sobre las acciones que puede hacer el pueblo. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), mediante un comunicado, sostuvo que el ausentismo fue reducido. No obstante, dijo que la huelga tuvo efectos negativos en el sector de la construcción, generando pérdidas.

La presidenta Mireya Moscoso reiteró al país su intención de resolver mediante el diálogo las diferencias surgidas debido a la crisis de la CSS, e hizo un llamado a la conciencia de los dirigentes gremiales para buscar, a través del diálogo, resolver las diferencias,

evitando alterar el orden y respetando los derechos de terceros para no afectar el desarrollo económico y la paz social, y especialmente con el fin de evitar el cierre de las escuelas. En el pliego de demandas del Frente por la Defensa de la Seguridad Social se plantearon los cinco puntos fundamentales por los cuales el pueblo panameño se lanzó a la calle.

En primer lugar, para evitar la privatización de la CSS. En segundo lugar, para impedir el aumento de la edad de jubilación a los 65 años, rechazar el aumento de los años de cuotas base (360 meses) para la jubilación, y evitar la disminución del número de beneficiarios.

El sector privado había anunciado un plan para introducir un sistema de “pilares” en la CSS que privilegiaría a los asegurados con salarios más altos, perjudicando a la gran mayoría, cuyos ingresos mensuales no superan los u\$s 400. El gobierno aparentemente simpatiza con la propuesta que implicaría la privatización de la seguridad “social” panameña, valga la contradicción.

La huelga del 23 de septiembre de 2003, y las movilizaciones que sacudieron el país entero, tanto antes de esa fecha como posteriormente, enviaron un mensaje claro a los gobiernos: el actual, y el próximo, que tomará posesión el 1ro de septiembre de 2004. Si la presidenta Moscoso o el próximo mandatario deciden aplicar las medidas de ajuste económico en el sistema de seguridad social panameño, tendrán que hacerlo por encima de una resistencia popular que ya demostró su capacidad de movilización y disposición para luchar. El costo social sería muy alto.

Conclusión

Sin embargo, al final de las jornadas de lucha y movilizaciones, la unidad de los sectores populares y de las capas medias en defensa de la seguridad social no se tradujo en un proyecto político común. La movilización logró rechazar y desmontar –momentáneamente– el proyecto de privatización de la CSS. El gobierno, empero, logró destituir a Jované y, además, retomar las riendas de la política financiera de la institución.

La próxima ronda de enfrentamientos puede producirse en el primer semestre de 2004 ya que tanto el gobierno como el sector privado anunciaron que presentarían propuestas privatizadoras de la CSS a la Asamblea Legislativa después de las elecciones nacionales de mayo del año en curso.

Bibliografía

La Prensa 2003[a] Suplemento "Pulso de la Nación", octubre.

La Prensa 2003[b], 25 de marzo.

Observatorio Social de América Latina-OSAL 2003 *Cronología de protestas y movimientos sociales en Panamá* (septiembre-diciembre) (Buenos Aires).

Tareas 2003 (Panamá) N° 115, septiembre-diciembre.

Notas

1 Según el Banco Mundial, en 2000 "de los 2,8 millones de habitantes de Panamá, el 37% (un millón) vive en pobreza extrema. En las áreas rurales e indígenas, el 72% es de extrema pobreza y el 95% de los indígenas padece desnutrición y pobreza" (*La Prensa*, 2003[b]).

2 A pesar de los ataques lanzados contra Jované por parte del gobierno, la empresa privada y los medios de comunicación, "el 51,4% de las personas entrevistadas estaría dispuesto a apoyarlo", según una encuesta publicada en octubre de 2003 (*La Prensa*, 2003[a]).

3 El Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social aglutinó a lo largo del conflicto a CONATO, el Frente Nacional de Gremios de Trabajadores de la Caja de Seguro Social y el sector Salud, la Unidad Magisterial, COMENAL, MONADESO, Foro Económico Social Alternativo, Coordinadora Estudiantil, Foro Mujer y Desarrollo, Poder Social Siglo XXI, Coordinadora Nacional de Organizaciones del Campo, Asociación de Afectados por Riesgos Profesionales, Movimiento Rescate Gremial de la Universidad de Panamá, APEMEP y la Confederación de Jubilados y Pensionados.

4 Ver los artículos "Estrategia alternativa de desarrollo" del Foro Económico Social Alternativo y "Propuesta a los desafíos de la Caja de Seguro Social" aparecidos en *Tareas* (2003).

Significado histórico de la revolución de Saint-Domingue

Suzy Castor*

A Blas Santos, un cazador de utopías

* *Catedrática,
historiadora
y escritora haitiana.
Directora del Centre
de Formation
et de Recherche Économique
et Sociale
pour le Développement
(CRESFED).*

Existen eventos que no sólo cambian el curso de la vida de un pueblo, sino que trascienden a la humanidad toda. Cobran por su significado un valor universal y se vuelven inmortales. Basta citar por ejemplo, la revolución francesa en el siglo XVII, la revolución rusa y la cubana en el siglo XX. Estos acontecimientos dibujan nuevos rumbos en esta gran marcha de la humanidad. Sus legados históricos representan brújulas conductoras, las cuales en momentos decisivos infunden a los pueblos confianza en sí mismos, alimentan el imaginario popular y mueven resortes insospechados para la acción histórica.

Uno de estos acontecimientos insoslayables fue sin duda la revolución de Saint-Domingue, al finalizar el siglo XIX. Muy compleja en sus aspectos racial, social, anticolonial y antiesclavista, marcó profundamente la vida de tres continentes involucrados en el tráfico comercial triangular de la trata.

Europa –a través de Francia– estaba entonces en un pujante auge de desarrollo capitalista, en el cual la explotación de las colonias jugó un papel importante en la acumulación de capital. África, proveedora de “madera de ébano”, a través de la trata de negros que vinculaba el continente negro y las metrópolis a las colonias del Nuevo Mundo. Catalizador del desarrollo industrial en la metrópoli, el continente negro nutría también a los Estados Unidos, que se benefician libremente de un nuevo mercado con la ruptura del exclusivismo del pacto colonial. Asimismo, alejando del continente americano los sueños de expansión de Napoleón, la revolución haitiana creaba condiciones favorables para la compra de Louisiana, cuya adquisición duplicaba el territorio de la nueva República norteamericana.

Haití, como precursora de la emancipación, iniciaba para la América española una nueva etapa correspondiente a la independencia. Es precisamente en Haití donde los descendientes africanos escribieron la primera página del proceso de liberación de los pueblos latinoamericanos, sometidos al yugo del colonialismo. La abolición de la esclavitud y el surgimiento del primer país independiente de América Latina constituyen un hecho de excepcional interés en el proceso de liberación de los pueblos del colonialismo.

Tan singular y excepcional resulta este acontecimiento histórico, subversor del orden colonialista, racial e incluso imperial, que nos puede sorprender el hecho de que la historiografía, los historiadores e incluso la mayoría de los intelectuales, no hayan calibrado en toda su dimensión tal evento.

Habría que recordar a los escritores antillanos C.R James con el clásico *Los Jacobinos Negros*, Aimé Césaire con su penetrante análisis en *Toussaint Louverture, la Revolución francesa et le problème colonial*, José Luciano Franco con la erudita *Historia de la revolución de Haití*. Alejo Carpentier fue uno de los que más hizo

**“Es en Haití
 donde los
 descendientes
 africanos escribieron
 la primera página
 del proceso
 de liberación
 de los pueblos
 latinoamericanos [...] La abolición
 de la esclavitud
 y el surgimiento
 del primer país
 independiente
 de América Latina
 constituyen un hecho
 de excepcional
 interés en el proceso
 de liberación
 de los pueblos
 del colonialismo”**

conocer con el realismo mágico de sus novelas, *El siglo de las luces* o *El reino de este mundo*, el contexto, la complejidad, la grandeza, los dilemas y lo maravilloso de la revolución haitiana y de sus héroes.

Saint-Domingue: esclavitud y colonia

Saint-Domingue, Isla de la Tortuga, estas palabras despertaban desde siempre la imaginación y la codicia de las potencias europeas más fuertes de la época, Inglaterra, España, Francia, Holanda, aferradas entonces en una rivalidad sin merced en este mar Caribe, "frontera imperial", como dijera Juan Bosch (1981).

Ya en los albores del siglo XVIII, después de años de una subrepticia ocupación de las tierras de Santo Domingo, todavía bajo dominio español, las sucesivas olas de aventureros, piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros franceses, verdaderos agentes de la corona, condujeron a la erección de una eficaz administración colonial en la parte occidental de la isla. La explotación intensiva de este minúsculo pedazo de tierra la transformó en la más floreciente de las colonias. En vísperas de la revolución francesa de 1789, considerada como la perla de la corona, esta colonia contaba con 793 trapiches, 3.150 añilerías, 789 algodoneras, 317 cafetales, 182 destilerías de aguardiente de caña y 50 cacaotales, además de incontables tenerías, tejares, talleres de tabiques, mosaicos y otras caleras. La producción agrícola e industrial de Saint-Domingue, en su expresión comercial, proporcionaba a Francia dividendos similares a los que la América española prodigaba a España.

El floreciente comercio con esta isla, primera productora mundial de azúcar, mantenía constantemente ocupados a 750 buques de la marina mercante francesa, tripulados por 80 mil marinos. Los 500 mil esclavos, 40 mil blancos, 28 mil libertos, y una recepción anual de 25 a 30 mil africanos, conformaban una sociedad compleja, muy jerarquizada, donde se entrecruzaban antagonismos múltiples a diferentes niveles.

En este siglo de las luces dominado por las ideas de los enciclopedistas, cuando los vientos libertadores y renovadores de la igualdad y fraternidad de la revolución francesa acompañaban el amanecer del capitalismo moderno, esta riqueza reposaba en una de las explotaciones más vergonzosas de la historia: la esclavitud. El trabajo de los esclavos, base de la organización social, de la producción en las plantaciones y en los ingenios, aseguraba el auge económico, la prosperidad de esa sociedad, y sentó las bases del capitalismo moderno a escala mundial. Parafraseando a Eric William (1976), se podría decir: "No negros, no azúcar".

Las reivindicaciones se multiplicaban: más autonomía frente a la metrópolis reclamaban los blancos, igualdad cívica con los blancos reivindicaban los libertos, resistencia multi-forme y constante de los esclavos, y juego de influencias de Inglaterra, España y otras potencias europeas, así como de los Estados Unidos. En realidad, aunque los contemporáneos ni de lejos lo sospechaban, Saint-Domingue se movía sobre un polvorín cada día más peligroso.

La lógica del sistema esclavista

En efecto, con lágrimas, sudor y sangre, la fuerza de trabajo de los esclavos alimentaba la economía de plantación, sobre la cual se asentaban en gran parte la intensa acumulación de capital comercial y la prosperidad de la burguesía francesa. Las técnicas de control, terror, represión y tortura se complementaban con todo un andamiaje religioso, cultural y político que explicaba y justificaba el sistema, la trata y la esclavitud, en nombre de la civilización cristiana. Más riquezas se producían, más salvaje e intensa se volvía la explotación y más inicuas las condiciones de esos transplantados africanos fuertes, jóvenes, cuya vida útil en la colonia se calculaba en apenas siete años. Como lo decía, otra vez Eric William (1976): “Curioso, que un producto tan dulce y tan necesario para la existencia como el azúcar, haya podido incitar a tantos crímenes y a tanta sangre”. La burguesía revolucionaria francesa se acomodaba muy bien, aunque a veces desconcertada por las contradicciones entre los principios de su revolución, inscritos en la Declaración de los Derechos del Hombre, y las “nefastas” consecuencias de una abolición de la esclavitud.

El estallido

A esa explotación inmensamente brutal respondió la insurrección de los que no eran nada, que no tenían cara, ni nombre, familia, derecho, tierra o patria. El rechazo de su condición de esclavos por esta masa heteróclita de los negros secuestrados de Dahomey, Senegal, Costa de Marfil o de regiones más profundas de África, estalló en una rebelión sin precedente. Explotó arrastrando un potencial revolucionario insospechado para la metrópolis francesa. La irrupción se realiza en medio de grandes violencias. Era el fin de la resistencia individual o limitada de los cimarrones, y el inicio de una rebelión con sacrificios y dolor, pero también con heroísmo, grandeza humana, gloria y penacho.

Se inició entonces la revolución más compleja de los tiempos modernos, que adquirió características de una guerra social de esclavos contra amos, guerra racial de negros contra blancos, una guerra entre potencias imperiales rivales, una lucha de liberación nacional. Los fundamentos ideológicos de la esclavitud, del colonialismo y del racismo son

sacudidos de raíz: en este sentido la revolución de Haití era inconcebible en su tiempo, pues trastornó el espacio ideológico en el cual surgieron hombres tales como Toussaint Louverture, Dessalines, Petion, Christophe. La amplitud de tal fenómeno iba mas allá de lo que muchos de la época podían entender.

La conquista de la libertad

Las formas de resistencia utilizadas hasta entonces por los esclavos quedaron bien atrás, cuando los tímidos reclamos o sueños de mejorías en las condiciones de su vida se transformaron rápidamente en reclamo de la libertad. Un brasero ardiente prendió y arrastró a los esclavos. Estos, rechazando el dios de los blancos, invocaron a sus dioses, que les ordenaban por voz del sacerdote vudú Boukman “koute la libete, ki pale nan kè nou” (escuchen la libertad que habla en vuestro corazón) para consagrar la legitimidad del derecho a la rebelión y a la insurrección.

El 21 de agosto de 1791, en un hecho impensable, se proclamaron libres. Esta jornada magna, como el 14 de julio de 1789, con la toma de la Bastilla, representó una fecha en la historia de la liberación de los pueblos, constituyendo un acontecimiento que trastornará todo el sistema colonial y la estructura misma de la sociedad y de la economía. El terror permanente y secular ejercido durante “siglos de barbarie habían vuelto bárbaro al pueblo”. Los negros, sin capacidades técnicas, recurrirán a la violencia como respuesta al terror permanente y secular del sistema esclavista que habían vivido en cuerpo y alma. Para ellos, la libertad no era ya negociable. La Convención Nacional de Francia tuvo que reconocer el *fait accompli* y proclamar oficialmente la abolición de la esclavitud en las colonias francesas. Las condiciones de la conquista de esa libertad en Saint-Domingue tendrán repercusiones sobre el derrumbe del sistema esclavista. Nunca se pudo restablecer en Saint-Domingue, como en otras partes, la esclavitud, y tampoco se pudieron asentar nuevas bases ideológicas para justificarlo.

De la libertad a la independencia

La gigantesca figura de Toussaint Louverture contribuyó a consolidar la libertad conquistada. Como gran estratega, y hombre de estado genial, libera el territorio de la colonia de la ocupación inglesa y española, establece relaciones diplomáticas con otras potencias, monta un aparato militar, reconstituye la economía, organiza y define para Saint-Domingue una autonomía de la metrópolis que linda la independencia. Esta visión extraordinaria para la época no podía ser entendida ni por la misma metrópolis, en nombre de la cual este hombre poco común quería promover esas reformas visionarias.

Por lo tanto, en estos vaivenes de revolución y contrarrevolución, la respuesta de Napoleón Bonaparte fue el envío a Saint-Domingue de una expedición de 60 mil hombres para el restablecimiento de la esclavitud y el control total de la colonia. La maquinaria aplastante del imperio, con los veteranos de las conquistas europeas, debía demostrar a los indígenas la inutilidad de cualquier resistencia. Error. El gran ejército francés tuvo que recurrir a las armas de la traición para deportar a Louverture. De hecho, con su desaparición del escenario se abrió la etapa de la guerra total. Era un hecho cada día más evidente que la conservación de la libertad estaba íntimamente ligada a la independencia. Qué tan ciertas eran las palabras proféticas que Louverture pronunció al ser deportado: "al derribarme, se cortó solamente el tronco del árbol de la libertad de los negros. Volverá a brotar porque sus raíces son potentes y numerosas".

La guerra total y el triunfo

A menudo se nos escapa cuán desproporcionado fue el enfrentamiento de esos esclavos andrajosos, contra las tropas napoleónicas que disponían de las tecnologías más avanzadas de la época, la experiencia de incontables campos de batalla, los medios del aparato de estado y la arrogancia de gran potencia. Napoleón se dio rápidamente cuenta de que había subestimado la determinación de estos ex-esclavos.

Los insurgentes movilizaron todos sus recursos y conocimientos, desarrollaron estrategias y tácticas militares eficaces, pusieron en marcha con intuición todos los medios políticos, psicológicos y religiosos al servicio de su causa. Con tenacidad, más allá de toda rencilla, realizaron la unidad en la cima con los diversos generales y por la base con los jefes cimarrones que difícilmente se podían someter a la disciplina de un ejército. Jean Jacques Dessalines fue reconocido como general en jefe.

Se demostró con ello que cuando los hombres tienen la convicción de que sólo el combate les permite salvar lo que no es negociable, son capaces de una determinación increíble, de valor, heroísmo, creatividad, confianza en sí mismos. Por ello, llevaron adelante una lucha sin merced, sin cuartel, de tierra quemada, y la guerra adquirió un nivel inusitado de violencia frente a la violencia espantosa desatada por el poder imperial. El último episodio de esta guerra, la batalla de Vertières, el 18 de noviembre de 1803, ilustra el genio y el descomunal heroísmo del ejército indígena, consagrando la derrota de las tropas imperiales y la pérdida de la colonia por Francia. Fue una victoria titánica, inconcebible para la época. Y el general Donatien Rochambeau, uno de los oficiales franceses más capacitados y crueles, tuvo que firmar la capitulación del imperio.

“Se inició entonces la revolución más compleja de los tiempos modernos, que adquirió características de una guerra social de esclavos contra amos, guerra racial de negros contra blancos, una guerra entre potencias imperiales rivales, una lucha de liberación nacional”

Un proceso histórico: la construcción de una nueva nación

La proclamación de la independencia en Gonaives el 1° de enero de 1804 daba nacimiento a una nueva nación libre e independiente. Los cultivadores, soldados, generales, mujeres y hombres unidos en un mismo espíritu, compartían la convicción de vivir una epopeya única, de significado excepcional, fruto de sufrimientos incommensurables, heroísmo, valor, patriotismo y generosidad: “El pueblo y los soldados se confundían con entusiasmo en abrazos jurándose vivir libres e independientes”. Estos objetivos constituían factores estructurantes de la nacionalidad, y ésta se fue forjando en las plantaciones, en las conspiraciones libertarias, en el ejército indígena, en el crisol de la guerra de independencia, al mismo tiempo que surgían factores centrífugos de intereses sociales y económicos diferentes o contradictorios, elementos culturales y étnicos, de cosmovisiones de la vida libre. La integración nacional planteaba un gran desafío para esa comunidad de hombres y mujeres que ya tenían territorio propio cuya apropiación y poblamiento constituían en sí una gran labor. Había que fortalecer una nación, crear una comunidad étnica homogénea y construir un país.

Las grandes potencias nunca aceptan que los países considerados como subordinados por leyes naturales se afirmen su soberanía, sobre todo cuando eso toca sus intereses. La osadía de un pequeño estado negro, pretendiendo ser un país al igual que todos los otros, fue percibida como una bofetada por el mundo blanco, esclavista y colonialista. Más aún, no se podía perdonar el miedo que suscitó por el “mal ejemplo” que ofrecía. Fuera de los obvios problemas internos, el nuevo estado tiene que defenderse de los proyectos de reconquista de los franceses, sortear las intenciones de dominio de Inglaterra, recurrir a una diplomacia hábil con una Norteamérica esclavista, y luchar para que se le reconozca el derecho a existir. El castigo inexorable fue el cordón sanitario impuesto por las potencias mayores a la joven nación. La

necesidad de defenderse del peligro exterior, la ruptura con la ex metrópoli que llegó hasta la eliminación física de los franceses en el territorio, se convierte en un factor más de cohesión de la nación.

Después de haber observado las dificultades de los países de África y de Asia en su acceso a la independencia en el siglo XX, la imposición de embargo a países considerados rebeldes o indeseables, las batallas diplomáticas para llegar a su aislamiento, las acciones encubiertas para destruirlos, se puede imaginar hoy día, *mutadis mutandi*, la multiplicación de los obstáculos y dificultades que había de sobrellevar este pequeño país en el amanecer del siglo XIX. No podía referirse a las experiencias de otros pueblos que ya hubieran accedido a la vida independiente ni apoyarse en la solidaridad de otras naciones "amigas". "Independiente y solitaria", según un perspicaz investigador haitiano, Benoît Joachim (1979), Haití tenía que crear con titubeos, pasos en falso, caídas, su identidad definida en el concierto de las naciones.

Sin embargo, pese a sus dificultades, tanto por su ejemplo como por su acción, Haití jugó un papel importante en la emancipación latinoamericana. No obstante su política de no-intervención, ya en el acta de independencia acordaba libertad y nacionalidad a todos los negros que pisaran el suelo haitiano. Abrazando la causa de los países del Continente, ofreció refugio a Mina, Francisco de Miranda, y al gran Simón Bolívar, así como armas, municiones, naves, aprovisionamiento y voluntarios para reanudar la lucha, particularmente en Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Con generosidad y humanismo, abogaba por la abolición de la esclavitud y la independencia de los otros países del Continente. Simón Bolívar escribía en esta época a Alejandro Pétion: "Usted es el primero de los bienhechores, un día América le proclamará como su libertador".

Un modelo híbrido

Saint-Domingue, esta colonia próspera, había muerto. La nueva Haití nacía de las cenizas de plantaciones quemadas, de infraestructuras destruidas en un mundo inmensamente hostil. Si la conquista de la libertad y de la independencia fueron obras de gigantes, esta construcción nacional se va a revelar como una empresa todavía más difícil para esos hombres y mujeres con intereses diferentes, múltiples y contradictorios que en este pedazo de tierra habrían de resolver sus problemas y llegar a una meta de envergadura.

La aceptación consensual y tácita del militarismo en las prioridades del poder para defender el suelo patrio, y la sedimentación de una nueva identidad nacional más allá de las múltiples etnias africanas, constituyen cimientos a partir de los cuales se van a manifes-

tar visiones diferentes y aún opuestas en la organización de la nueva sociedad y la reconstitución del aparato productivo. Por una parte, el modelo de la plantación sin esclavitud, apoyado en el cultivo de productos de exportación según las exigencias del capitalismo comercial dominante. Por la otra, el modelo de la pequeña propiedad campesina orientada hacia el cultivo de víveres para la satisfacción de las necesidades internas. Hecho único en América, el estado es propietario del 90% de las propiedades, y el poder de estado garantiza el acceso a la propiedad. La visión de los dirigentes militares y regionales se impondrá. De ahí los malentendidos, la fragilidad y la exclusión inherentes al modelo que se adopta.

Los cambios intervenidos vaciaban de su contenido a la plantación postcolonial: destrucción de las plantaciones, huida de la tecnología y los capitales, falta de mercados, y sobre todo la ausencia de mano de obra, porque pese a los reglamentos de cultivo excesivamente severos, los ex-esclavos se niegan a trabajar en las plantaciones y cultivan, como verdaderos cimarrones, su pequeño huerto. Las dos concepciones, en una lucha abierta o sorda pero siempre presente, se codean y combinan sus estructuras: la economía cafetalera reemplaza a la azucarera, y da a Haití unas características diferentes de las de otros territorios.

También, las líneas de fuerza del nuevo estado entrecruzaron el modelo europeo y africano en la adopción de las instituciones públicas, en la construcción del cuadro legal y la realidad de su aplicación. Las relaciones sociales reprodujeron con la misma imbricación y ambigüedad la cultura de plantación y de la contra-plantación, la creación de valores culturales y las pautas de comportamiento. Así, en esas circunstancias propias, se va desarrollando una nueva identidad que cristaliza en la nacionalidad.

Pasada la época heroica

De la época heroica de defensa de la soberanía nacional al asentamiento de esta nueva sociedad post-esclavista y post-colonial van surgiendo nuevas estructuras agrarias y productivas y otra forma de articulación hacia el mercado mundial. Al mismo tiempo reaparecen y se consolidan estructuras y modelos traídos de África que se manifestaban en las prácticas productivas, organizativas y culturales. Al final del siglo XIX se van produciendo mutaciones en la estructura socioeconómica, marcada por una gran dependencia hacia el exterior. Se fortalece una oligarquía –con un sector terrateniente mulato y negro, y un sector mercantil principalmente urbano y mulato– constituida y consolidada gracias al poder político. Esa consolidación se realiza bajo la constante presión y lucha del campesinado que se encuentra en los escalones más bajos de la pirámide social.

Llegado el primer centenario de la independencia, con el impacto de la segunda revolución industrial y el impulso del capitalismo mundial que sacude a toda América Latina, se manifiestan en el último cuarto del siglo XIX crecientes y múltiples frenos al desarrollo del capital nacional, expresiones inequívocas de las limitaciones y de la quiebra del sistema post-independencia. Las posiciones se definen cada vez más entre la oligarquía agraria y la comercial y una burguesía en germen, o entre los mismos grupos terratenientes. Los antagonismos intra-oligárquicos se expresan a través de la crisis de hegemonía política. Las luchas por la conquista del poder se volvieron tan violentas que dieron lugar, al principio del siglo, a una crisis política sin precedente. Al mismo tiempo, la oligarquía, en sus dos componentes, se encuentra frente a un campesinado descontento que, pese a sus serias limitaciones, expresa la aspiración de las masas rurales y su lucha por más justicia social. Por su estructura y su modo de funcionamiento, el estado se revela como un serio obstáculo para el desarrollo de la nación. El país reclamaba una modernización del sistema para asegurar un nuevo equilibrio de las fuerzas sociales y resolver las agudas contradicciones socioeconómicas, políticas y sociales a las cuales se enfrentaba. La ocupación del país por el nuevo imperio del siglo XX, Estados Unidos, interrumpió con brutalidad la resolución de esa crisis de crecimiento de la sociedad tal como se presentó también en muchos países del continente. Estableció su orden y consolidó su sistema.

Haití consiguió demasiado temprano su independencia, insisten algunos analistas. Esta postura ideológica, muy peligrosa, sin fundamento alguno, esconde a menudo un profundo desprecio y racismo. Después de doscientos años Haití confronta una situación que lo coloca entre los países más pobres del mundo occidental, y se ha convertido en un crisol de problemas incontables. Sus 8 millones de habitantes, y más del millón de su diáspora, se han convertido en los condenados de la tierra.

La crisis no resuelta de principio del siglo XX fue ocultada por el sistema post-ocupación que entra en descomposición abierta con el duvalierismo. A la caída de esta dictadura de tres décadas, después de una primavera –corta como todas las primaveras– el país vuelve a una espiral de degradación con un gobierno ilegítimo y retrógrado, el de Jean Bertrand Aristide, que sistemáticamente destruye las instituciones, persigue el fortalecimiento de un poder totalitario y sueña con matar la rebelión. En esta perspectiva, una crisis ininterrumpida cubre todo el siglo XX, y la estamos arrastrando todavía en los albores del siglo XXI. De allí su profundidad y las dificultades para resolverla en las condiciones de un mundo de globalización implacable para los países chicos y pobres.

Sin embargo, tenemos un territorio pese a los tremendos problemas ecológicos; somos un país, un pueblo. Portamos en nuestra conciencia la memoria viva del ayer que no

está muerto, que late en cada uno de nosotros, y sobre todo tenemos esta cantera inagotable que somos los haitianos. Por ello, los tiempos que vivimos, pese a las tinieblas, son portadores de esperanzas. Hoy día, nuestros sueños van más allá que nuestro fracaso. La problemática del estado nacional y de la integración se nos está planteando con la misma urgencia que la problemática de la libertad e independencia en 1790.

En los momentos históricos decisivos, las elites políticas, culturales, religiosas y económicas sienten la necesidad de tomar sus responsabilidades enfrentándose a todas las dificultades, sufrimientos y sacrificios. Por ello, pese a las diferencias de opinión, de intereses, de generaciones, emerge una voluntad colectiva para evitar la bajada al infierno, llevar adelante el combate de la construcción, y conquistar la dignidad, la creatividad, la identidad, la libertad, la igualdad y la justicia. Así se encuentran, a través del tiempo, el ayer y el hoy. Tal como los próceres haitianos cuya epopeya recordamos, en contextos diferentes, la lucha de nuestros pueblos debe conquistar para todos, el derecho de vivir y de soñar.

Bibliografía

Ardouin, Beaubrun 1958 *Etude sur l'Histoire D'Haiti* (Port-au-Prince: Editions François Dalencour) Tome 5, 42.

Bosch, Juan 1981 *De Cristóbal Colon a Fidel Castro, el Caribe Frontera imperial* (La Habana: Casa de las Américas).

Carpentier, Alejo 1983 (1949) *El Reino de este Mundo* (México DF: Siglo XXI).

Carpentier, Alejo 1983 (1962) *El siglo de las luces* (México DF: Siglo XXI).

Césaire, Aimé 1960 *Toussaint Louverture. La Révolution française et le problème colonial* (Paris: Club Français du Livre).

Franco, José Luciano 1966 *Historia de la Revolución de Haití* (La Habana: Academia de Ciencias de Cuba).

James, C.R.L. 1949 *Les Jacobins noirs. Toussaint Louverture* (Paris: Gallimard).

Joachim, Benoît 1979 *Les racines du sous développement en Haïti* (Port-au-Prince: Editions Henri Deschamps) 54.

Trouillot, Michel-Rolph s/d "La Révolution haïtienne comme histoire impensable", en *Le Journal de l'Histoire Caraïbienne*, N° 25 (1 y 2) 81-85.

William, Eric 1976 *Capitalismo y esclavitud* (La Habana: Instituto Cubano del Libro).

Costa Rica

[cronología septiembre-diciembre 2003]

SEPTIEMBRE

VIERNES 5 La ministra de Economía, Industria y Comercio, Vilma Villalobos Carvajal, renuncia a su cargo aduciendo razones personales y negando que exista algún tipo de presión política. Será reemplazada por Gilberto Barrantes, quien ocupó ese cargo en la administración pasada.

MARTES 16 La Federación de Trabajadores Limonenses (FETRAL) convoca a los empleados de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) y de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) a una huelga por tiempo indefinido con bloqueos en toda la provincia. Demandan que el gobierno cumpla con varios acuerdos firmados anteriormente y exigen que se giren 3 millones de colones a JAPDEVA para solventar las pérdidas que afronta debido a que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aún no resuelve una solicitud de incremento en las tarifas portuarias. También reclaman fuertes inversiones en el sector y el pago de prestaciones para personal de grúa y carrier. Efectivos de la Fuerza Pública intervienen el puerto de Moín, la carretera a Limón y el acceso a las instalaciones de RECOPE con el fin de evitar que los manifestantes corten el tránsito, el traslado de mercancías y el suministro de combustibles. Reprimen a los manifestantes con gases lacrimógenos, dejando un saldo de varias personas heridas y 11 detenidas.

MIÉRCOLES 17 Continúan las marchas y bloqueos de los huelguistas en Limón. La policía los reprime deteniendo a 3 de ellos. Luego son liberados junto a los detenidos del día anterior.

JUEVES 18 El Juzgado de Trabajo de Limón notifica la ilegalidad de la huelga. Los trabajadores nuevamente marchan por el centro de la ciudad.

SÁBADO 20 Luego de intensas negociaciones llevadas a cabo durante 4 hs, el gobierno y la FETRAL firman un acuerdo de 21 puntos que pone fin a la huelga. Entre los compromisos más importantes se encuentra el pago de una indemnización extraordinaria para los operadores de grúas pórticas y portacontenedores, que dejaron de recibir horas extras a finales del año pasado por recorte

de presupuesto de JAPDEVA. El Poder Ejecutivo accede a solicitar a la Contraloría General de la República una modificación presupuestaria para que JAPDEVA pueda pagar los sueldos de los empleados suplentes que se requieran hasta el 31 de diciembre. No se pagarán los días sin laborar a los empleados que participaron de la huelga. El gobierno no girará los 3 millones de colones para reforzar las finanzas de JAPDEVA. Los manifestantes se concentran en las afueras de la casa del obispo católico, donde se desarrolla la reunión, a la espera de los resultados.

OCTUBRE

MIÉRCOLES 1 En el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Estados Unidos, el representante de Comercio Exterior de EE.UU. Robert Zoellick llega al país y se reúne con el primer mandatario Abel Pacheco, con diputados y empresarios, a quienes les informa que Costa Rica debe realizar algún tipo de apertura en telecomunicaciones si quiere participar del TLC.

MIÉRCOLES 8 Costa Rica deja el G20 que se conformó en la pasada ronda de la Organización Mundial de Comercio (OMC) realizada en Cancún, con el propósito de impulsar la eliminación de los subsidios agrícolas, debido a las presiones recibidas por EE.UU.

LUNES 13 Más de 1.000 trabajadores del Ministerio de Salud (MS), apoyados por el Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses (SITECO) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), marchan hasta la Asamblea Legislativa en reclamo de 550 millones de colones para paliar un déficit en el presupuesto de la cartera para 2004.

LUNES 20 Cerca de 4 mil personas convocadas por más de 40 organizaciones sindicales, sociales políticas y estudiantiles, entre otras, marchan desde distintos puntos de San José hasta la Asamblea Legislativa en contra del TLC entre EE.UU. y Centroamérica por considerar que el gobierno no ha sido transparente en las negociaciones. Rechazan la apertura en el tema de telecomunicaciones y aseguran que sectores privados como el textil, agrícola y ambiental están en peligro con la firma del acuerdo. Hoy comienza en Houston, Texas, la octava ronda de negociaciones. El gobierno anuncia que rebajará los salarios a todos aquellos que participen de las protestas.

NOVIEMBRE

LUNES 24 Unas 7 mil trabajadores de instituciones públicas, sindicales y agricultores, entre otros, marchan desde el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

en La Sabana hasta la Casa Presidencial para rechazar la firma del TLC con EE.UU. Le entregan al presidente Abel Pacheco un petitorio de 8 puntos entre los que se encuentran la defensa de las instituciones públicas, la seguridad social y la negativa a la imposición norteamericana relacionada con la propiedad intelectual.

MARTES 25 Los diputados aprueban en primer debate el presupuesto ordinario del Gobierno y de otras entidades estatales para 2004, cuyo monto total asciende a 2,1 billones de colones.

D I C I E M B R E

VIERNES 12 Al menos unos 2 mil empleados públicos de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), del Instituto Nacional de Seguros (INS) y la RECOPE, junto a varios trabajadores de municipalidades de San José, Tibás y Escazú, entre otras, marchan hasta la Sala IV del Poder Judicial en rechazo a la derogación de las convenciones colectivas. Estas son asociaciones que integran los sindicatos de las instituciones, las cuales les permiten negociar con sus patronos los aumentos salariales, el pago de vacaciones, horas extra, tope de cesantía y otras garantías laborales.

MARTES 16 El grupo negociador nacional decide posponer el cierre del TLC con EE.UU. y negociar de manera bilateral a partir de enero y al margen del resto de los países centroamericanos. No se ha alcanzado acuerdo alguno en relación a los plazos de desgravación de los productos agrícolas más sensibles como el azúcar, la leche, el pollo y la carne, entre otros; la ausencia de una resolución en el tema de telecomunicaciones, la agresiva propuesta norteamericana en el tema de seguros y los tópicos sobre propiedad intelectual pendientes.

GLOSARIO DE SIGLAS

ANEP	Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ARESEP	Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
CNFL	Compañía Nacional de Fuerza y Luz
FETRAL	Federación de Trabajadores Limonenses
ICE	Instituto Costarricense de Electricidad
INS	Instituto Nacional de Seguros
JAPDEVA	Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica
MS	Ministerio de Salud
OMC	Organización Mundial de Comercio
RECOPE	Refinadora Costarricense de Petróleo
SITECO	Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses
TLC	Tratado de Libre Comercio

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Florencia Ayala.
Fuentes: diarios Prensa Libre, La Nación y La República.*

El Salvador

[cronología septiembre-diciembre 2003]

SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 10 Diversas organizaciones de izquierda, estudiantes y trabajadores de la Universidad de El Salvador (UES) realizan distintas actividades, entre marchas y cortes de calles en varios puntos de San Salvador en protesta por el Tratado de Libre Comercio (TLC) que el gobierno pretende firmar con los Estados Unidos y en repudio a la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Cancún, México.

JUEVES 18 El Sindicato de Médicos y Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSE) y el Sindicato de Trabajadores de la misma institución (STISSE) realizan un acto en las puertas del hospital Oncológico para celebrar un año del inicio de la huelga en contra de la privatización de la salud. Representantes de los trabajadores expresan que la lucha continúa, puesto que todavía hay empleados que no han sido reincorporados.

VIERNES 19 El STISSE, el SIMETRISSE y diversas organizaciones sociales participan de la octava marcha blanca en contra de la privatización del sistema público de salud. Según los organizadores, la actividad tiene por objetivo remarcar el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno y la permanencia de la lucha contra las privatizaciones. En la marcha, se anuncia la conformación del Bloque Popular Social (BPS), espacio que aglutina a varias organizaciones quienes resisten la aplicación de las medidas económicas del actual gobierno.

LUNES 29 Integrantes de la Asociación de Trabajadores Municipales (ASTRAM) se manifiestan en las puertas del edificio municipal de Sonsonate para protestar por los malos tratos recibidos por parte del alcalde local.

OCTUBRE

JUEVES 9 Efectivos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) ocupan el mercado de Santa Tecla en el departamento de La Libertad impidiendo a los vendedores ambulantes instalar sus puestos de venta. Los trabajadores intentan

acceder al mercado y son reprimidos por los agentes del orden quienes dejan un saldo de 3 heridos de bala. Luego del enfrentamiento, los vendedores exigen a la Alcaldía Municipal que se les otorgue un predio para poder desarrollar sus actividades.

MIÉRCOLES 15 Vendedores Ambulantes del mercado de Santa Tecla y representantes de la Alcaldía Municipal firman un acuerdo por el que se les autoriza a los primeros a instalar, registro mediante, sus puestos de venta en el predio municipal del cual fueron desalojados.

LUNES 20 Diversas organizaciones sociales que integran el BPS se movilizan por el centro de San Salvador para protestar contra el TLC que el gobierno pretende firmar con EE.UU. El secretario general del STISSS expresa que las acciones se dan en conjunto con el resto de los países de la región. Una de las demandas del movimiento se basa, según el representante de la Corporación de Comunidades para la Cooperación y la Solidaridad (CORDECOM), en que los acuerdos comerciales deben dar protección al sector productivo agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria de todos los países implicados.

SÁBADO 25 La Red Ciudadana Frente al Comercio e Inversión, conformada por un conjunto de organizaciones sociales entre las que se encuentra la red Sinti Techan, inicia la junta de 10 mil firmas en contra de la concreción del TLC entre Centroamérica y EE.UU. El objetivo es presentarlas ante la Asamblea Legislativa para que dicho cuerpo se pronuncie en contra del acuerdo comercial.

MIÉRCOLES 29 Diversas organizaciones sociales se concentran frente al Hospital Zacamil, en Usulután, para exigir la eliminación de las cuotas voluntarias para recibir atención médica en los hospitales públicos de todo el país. Semanas atrás el presidente Francisco Flores vetó la eliminación de las cuotas por lo que prácticamente el 45% de la población se ve impedida de utilizar el sistema público de salud.

NOVIEMBRE

MARTES 4 Un grupo de 25 trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) se manifiesta en las puertas del Hospital de Rehabilitación en San Salvador para protestar contra el despido de 2 empleadas de la institución.

JUEVES 6 El presidente Flores anuncia la creación de tribunales especiales paralelos para juzgar a los pandilleros detenidos bajo la nueva ley, puesto que los jueces oficiales no aplican la legislación por considerarla anticonstitucional.

MIÉRCOLES 12 El STISSS realiza una protesta pacífica en las puertas del Hospital Primero de Mayo, en la ciudad de San Salvador, en demanda del cumplimiento de los acuerdos firmados con las autoridades de la institución y la definitiva reincorporación de todos los trabajadores que fueron despedidos por participar de la huelga contra la privatización de la salud.

DICIEMBRE

JUEVES 4 Habitantes de Tonacatepeque bloquean la principal carretera de la región y queman llantas para exigir al gobierno mejores condiciones en la provisión de los servicios básicos.

VIERNES 12 Miles de personas se movilizan por el centro de San Salvador para expresar su rechazo al TLC que se pretende firmar entre Centroamérica y EE.UU. La actividad, convocada por el Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre (MPR-12), cuenta con la presencia de estudiantes de la UES, campesinos y otros sectores quienes agregan demandas como el cambio de las políticas económicas, la reducción de costos de los servicios básicos y la reactivación del agro.

Alrededor de 50 estudiantes universitarios, integrantes del Frente Unido Roque Dalton (FURD) bloquean las calles de San Salvador en protesta por la posible firma de un TLC entre El Salvador y EE.UU. Al promediar la actividad, agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) reprimen a los manifestantes y detienen a 19 de ellos acusados de asociación ilícita y de ocasionar desórdenes públicos.

DOMINGO 14 El Juzgado 4° de Paz exonera de todos los cargos a los 19 estudiantes detenidos en las últimas horas luego de participar de una protesta en rechazo al TLC que se pretende firmar con EE.UU.

MIÉRCOLES 17 En la ciudad estadounidense de Washington concluye la novena y última ronda de negociaciones con la firma definitiva del TLC entre los EE.UU y el grupo denominado CA-4, integrado por Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

GLOSARIO DE SIGLAS

ASTRAM	Asociación de Trabajadores Municipales
BPS	Bloque Popular Social
CAM	Cuerpo de Agentes Metropolitanos
CORDECOM	Corporación de Comunidades para la Cooperación y la Solidaridad
FURD	Frente Unido Roque Dalton
ISSS	Instituto Salvadoreño del Seguro Social
MPR-12	Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre
OMC	Organización Mundial de Comercio
SIMETRISSS	Sindicato de Médicos y Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social
STISSS	Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social
TLC	Tratado de Libre Comercio
UES	Universidad de El Salvador
UMO	Unidad de Mantenimiento del Orden

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y Sistematización a cargo de Marcelo Perera.
Fuentes: diarios La Prensa, Colatino y El Diario de Hoy.*

Guatemala

[cronología septiembre-diciembre 2003]

SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 3 Trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) de varios departamentos del país se movilizan frente al Palacio Nacional y al Congreso, en las carreteras al Atlántico y a El Salvador, y en el Trébol y el Periférico, además de realizar protestas en Suchitepéquez, Escuintla, frontera de San Marcos, Zacapa y Jutiapa, para rechazar la privatización de la Salud y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y reclamar el cumplimiento del pacto colectivo de trabajo, entre otros puntos.

Comienza a implementarse en el país el programa militar impulsado por el gobierno de EE.UU. Jaguar Maya, que con el apoyo del gobierno guatemalteco pretende mejorar las tácticas de combate al narcotráfico y el crimen organizado.

OCTUBRE

LUNES 6 Varios grupos de pobladores de asentamientos y áreas marginales de la capital y Villa Nueva bloquean los accesos a la capital por las rutas al Atlántico, al Pacífico y El Salvador, en demanda de legalización de terrenos, subsidios de vivienda y la aprobación de una ley de política integral de vivienda. Son desalojados por la policía, luego de lo cual se movilizan hasta las instalaciones del Banco Nacional de la Vivienda (BANVI) donde negocian con la Comisión de Vivienda del Congreso que ésta agilizará el trámite de legalización de tierras y considerará el presupuesto para subsidios.

VIERNES 10 Miles de campesinos toman carreteras, paralizan distintos pasos fronterizos y realizan manifestaciones y plantones frente a diversas instancias gubernamentales en conmemoración por el Día de la Dignidad y la Resistencia Indígena y Campesina. Rechazan la firma de los Tratado de Libre Comercio (TLC), el Plan Puebla Panamá (PPP), el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y exigen un proceso de reforma agraria, el fin de los desalojos y una política de desarrollo rural, entre otros puntos.

- LUNES 20** Organizaciones sindicales, estudiantiles y populares, y los partidos Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y Alianza Nueva Nación (ANN) marchan por la 6ª Avenida de la capital, en conmemoración por los 59 años de la Revolución de 1944 y los 25 años del asesinato del dirigente estudiantil Oliverio Castañeda de León. Se manifiestan en contra de un TLC entre Centroamérica y EE.UU. y rechazan la candidatura a presidente del general Ríos Montt. En Quetzaltenango, Escuintla, Puerto Barrios, San Marcos y Santa Elena también se organizan mítines de conmemoración.
- DOMINGO 26** Cuatro periodistas del periódico *Prensa Libre* y un piloto de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) son tomados como rehenes en la región de La Libertad, Huehuetenango, por miles de ex integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) que indican que no los liberarán hasta que el gobierno los indemnice por su servicios durante el conflicto armado.
- MARTES 28** Los 4 periodistas y el piloto de la SAAS retenidos como rehenes por los ex PAC de Huehuetenango desde el domingo pasado son liberados tras un acuerdo con las autoridades, en el que se dispone que serán incluidos en la lista con derecho a pago de un resarcimiento.

NOVIEMBRE

- LUNES 3** Unos 15 mil campesinos organizados en la Plataforma Agraria (PA), provenientes de varios departamentos del país, marchan hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Congreso, para exigir al gobierno la solución de las problemáticas relacionadas con el desarrollo rural y oponerse al TLC que Centroamérica negocia con EE.UU., entre otros puntos.
- DOMINGO 9** Los guatemaltecos votan Presidente, diputados nacionales, intendentes y miembros del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Oscar Berger, candidato a Presidente de la Gran Alianza Nacional (GANAN) consigue el 36,35%, Álvaro Colom de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) el 26,48% y el ex dictador Ríos Montt el 19,22%, por lo que al no obtener ninguno de los candidatos más del 50% de los votos, los 2 primeros competirán en segunda vuelta electoral el 28 de diciembre próximo. En el Congreso de la República ningún partido consigue la mayoría absoluta. En El Quetzal, en San Marcos, y Cuyutenango, en Sacatepéquez, grupos de ex PAC quemaron las urnas, por lo que son suspendidas las votaciones.
- MARTES 11** Cientos de ex PAC toman las instalaciones de la comuna de San Miguel Uspantán, departamento del Quiché, exigiendo el pago ofrecido por el gobierno. Queman varios autos de la municipalidad y toman como rehenes al gobernador, al alcalde, a 25 policías y a 2 fiscales del Ministerio Público (MP).

MIÉRCOLES 12 Las ex PAC que mantienen tomadas las instalaciones de la comuna de San Miguel Uspantán, Quiché, con varios rehenes, son desalojadas por las Fuerzas Especiales de la Policía (FEP), que detiene a 46 personas y hieren a varios ex patrulleros.

Cientos de pobladores de San Pedro Ayampuc, Guatemala, bloquean el km 15 de la carretera a San Pedro de Ayampuc, de donde son desalojados por las FEP, exigiendo que se realicen nuevas elecciones en el lugar. En 20 municipios se organizan manifestaciones, en muchos casos con disturbios, protestando por los resultados de los comicios y por problemas en el padrón que impidieron votar a centenares de guatemaltecos.

VIERNES 14 El Tribunal Supremo Electoral (TSE) comunica que las elecciones para alcalde en Cuyotenango, Suchitepéquez; El Quetzal, San Marcos; La Gomera, Escuintla; San Juan Cotzal, Quiché, y Quesada, Jalapa se repetirán el 28 de diciembre.

LUNES 17 Los pobladores de los municipios de Siquinalá, Escuintla, y de Villa Nueva, San Pedro Ayampuc y Chinautla, en Guatemala, se manifiestan frente al TSE, exigiendo que se repitan las elecciones en sus localidades.

LUNES 24 Campesinos de la Unidad del Movimiento Campesino de Génova Flores (UMCAGEF) ocupan simultáneamente las fincas María de Lourdes y Hacienda Las Mercedes, ubicadas en Génova, Quetzaltenango, para exigir al gobierno que les adjudiquen una parte de las tierras de ambas fincas, debido a que les adeudan salarios desde hace 11 y 8 años, respectivamente.

MIÉRCOLES 26 Convocados por la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), alrededor de 20 mil campesinos de 17 organizaciones de todo el país marchan hasta la Plaza de la Constitución, donde entregan a los candidatos a presidente un pliego de demandas que incluye temas como los derechos de los pueblos indígenas y una reforma agraria integral.

JUEVES 27 Los diputados nacionales aprueban un acuerdo por el que al culminar sus mandatos recibirán una indemnización de más de 120 mil quetzales. Votan otro acuerdo por el cual ningún congresista podrá ganar menos que otros funcionarios electos por el Legislativo. De esta manera, sus sueldos pasarán de un promedio de 29 mil quetzales mensuales a uno de 50 mil.

El presidente Portillo firma un Acuerdo Gubernativo por medio del cual se incrementan en un 16% el salario mínimo para actividades no agrícolas y en un 21% para actividades agrícolas.

DOMINGO 30 Por falta de quórum se suspende la última sesión del período ordinario de sesiones del Congreso. En consecuencia, el Presupuesto 2004 no es aprobado, por lo que las dependencias del estado recibirán la misma asignación que tuvieron en 2003.

DICIEMBRE

- LUNES 1** Los choferes de transporte urbano de la capital bloquean el km 75 de la ruta al Atlántico, denunciando que los mareros (integrantes de pandillas juveniles) cobran entre 75 y 100 quetzales diarios de impuesto de circulación, tributo que si no es pagado implica la muerte del conductor.
- JUEVES 4** La Coordinadora Nacional Sindical y Popular (CNSP) encabeza una protesta frente al Congreso en oposición a la indemnización y los aumentos salariales que se autoconcedieron los diputados.
- MIÉRCOLES 10** En conmemoración por el Día Internacional de los Derechos Humanos, miles de campesinos provenientes del interior del país marchan hasta la Plaza de la Constitución, donde entregan a los candidatos presidenciales un pliego de peticiones en el que reclaman, entre otros puntos, cumplir con el resarcimiento a las víctimas del conflicto armado interno. Oscar Berger (GANA) y Álvaro Colom (UNE) firman un compromiso para declarar lesivo los pagos pendientes a las ex PAC.
- LUNES 15** La Coordinadora Nacional de ex PAC proclama que apoyará al candidato de la GANA, Oscar Berger, dado que prefieren la plata ofrecida como indemnización por este candidato y no los proyectos de desarrollo comunitario que les ofreció Álvaro Colom, de la UNE.
- MARTES 16** Diputados aprueba un decreto por el cual no recibirán indemnización al concluir el período para el que fueron electos, como lo habían aprobado el 28 de noviembre último.
- MIÉRCOLES 17** La Corte de Constitucionalidad (CC) suspende en forma provisional el pago al que el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) se comprometió con los ex PAC, argumentando que el presidente de la República no puede disponer de los fondos del presupuesto de la Nación sin que el legislativo haya resuelto previamente este tema.
- Los representantes de Comercio de EE.UU. y de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras anuncian en Washington que han llegado al final de las negociaciones de un TLC, conocido como CAFTA por sus siglas en inglés.
- DOMINGO 28** Los guatemaltecos concurren a la segunda vuelta electoral para elegir Presidente de la República. Triunfa Oscar Berger (GANA) con el 54,13% de los votos.

GLOSARIO DE SIGLAS

ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
ANN	Alianza Nueva Nación
BANVI	Banco Nacional de la Vivienda
CC	Corte de Constitucionalidad
CNSP	Coordinadora Nacional Sindical y Popular
CONIC	Coordinadora Nacional Indígena y Campesina
CSJ	Corte Suprema de Justicia
FEP	Fuerzas Especiales de la Policía
FRG	Frente Republicano Guatemalteco
GANAN	Gran Alianza Nacional
IGSS	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
MP	Ministerio Público
PA	Plataforma Agraria
PAC	Patrullas de Autodefensa Civil
PARLACEN	Parlamento Centroamericano
PPP	Plan Puebla Panamá
SAAS	Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad
SNTSG	Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala
TLC	Tratado de Libre Comercio
TSE	Tribunal Supremo Electoral
UMCAGEF	Unidad del Movimiento Campesino de Génova Flores
UNE	Unión Nacional de la Esperanza
URNG	Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca

Honduras

[cronología septiembre-diciembre 2003]

SEPTIEMBRE

- MIÉRCOLES 3** Centenares de menores que viven en las calles, albergados temporalmente por la ONG Casa Alianza, protestan en los bajos del palacio legislativo contra la impunidad que cubre la matanza de más de 2 mil niños y niñas.
- JUEVES 4** Más de 2 mil maestros de los departamentos de Cortés, Yoro y Santa Bárbara, agrupados en la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), desfilan por las calles de San Pedro Sula hasta la catedral donde le piden al presidente Ricardo Maduro que no envíe al Congreso el proyecto de la nueva Ley de Servicio Civil. Las manifestaciones docentes se repiten en Choluteca y en otros 10 departamentos del país.
- MIÉRCOLES 10** Centenares de miembros de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP) protestan frente a la Casa de Gobierno para exigir que se vete la Ley de Aguas y se libere a los 6 manifestantes que fueron encarcelados acusados de sedición luego de la Marcha por la Dignidad realizada el pasado 26 de agosto.
- JUEVES 11** Maestros pertenecientes al Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH) y a la FOMH realizan una marcha hasta la Casa Presidencial exigiendo al gobierno que no reforme las cláusulas económicas del Estatuto del Docente, y en contra de la aprobación de la nueva Ley de Servicio Civil. La protesta finaliza con una reunión entre ambas partes en la Casa de Gobierno donde el presidente Maduro se compromete a no enviar al congreso una ley que cercene sus derechos laborales, y los maestros se comprometen a incorporarse al Diálogo Nacional para analizar sus propuestas salariales. Por su parte, más de 3 mil maestros de Cortés realizan una marcha por las calles de San Pedro Sula en protesta por las reformas que pretende efectuar el gobierno.
- LUNES 22** Representantes de los patronatos de las colonias San Antonio, Panting y Suyapa, del sector Chamelecón, toman las instalaciones de Aguas de San Pedro para exigir calidad en el servicio de agua potable y evitar la instalación de medidores. La protesta finaliza con la firma de un convenio entre la

empresa y diferentes jefes de áreas, en el cual la primera se compromete a realizar limpiezas en las tuberías y a no instalar los medidores mientras no se aclare la duda sobre la calidad del agua.

OCTUBRE

- MIÉRCOLES 1** Más de 4 mil maestros de escuelas primarias y medias de los departamentos de Cortés, Yoro y Santa Bárbara, junto con miembros del Bloque Popular cortan durante 3 hs la carretera que une Puerto Cortés con el resto del país, en protesta contra el anteproyecto de Ley de Equidad Salarial que se discute en el Congreso Nacional, y los aumentos al agua, luz, teléfono y las pretendidas reformas a la Ley de Servicio Civil.
- JUEVES 2** Centenares de personas afiliadas a la CNRP, con el apoyo de militantes del partido Unificación Democrática (UD) y sindicatos y organizaciones comunales, se manifiestan frente a las instalaciones del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) en Comayagüela, para rechazar el aumento a las tarifas y exigir que se vete la recientemente aprobada Ley de Agua Potable y Saneamiento.
- MARTES 14** La CNRP realiza un plantón de 6 hs cerrando el paso de los bulevares Fuerzas Armadas y Comunidad Europea, en la colonia Las Brisas de Comayagüela, declarándose en desobediencia civil frente a la Ley de Agua Potable y Saneamiento, y en protesta por la Ley de Equidad Salarial, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. y la privatización de los servicios públicos, entre otras cosas.
- JUEVES 16** Estudiantes de institutos públicos de El Progreso, departamento de Yoro, toman durante 3 hs el puente La Democracia para protestar contra las autoridades de Educación que pretenden aumentar a 70% la nota para pasar de año. Consideran también que cancelar una de las recuperaciones y la implementación de la escuela de vacaciones para quienes reprueben las asignaturas, es el principio de la privatización de la educación. Una protesta similar se produce en Tegucigalpa frente al Congreso Nacional y el Banco Central de Honduras (BCH).
- LUNES 20** Durante una conferencia de prensa el presidente Maduro anuncia que se posterga la implementación de la medida que eleva a 70% la nota mínima para promocionar las asignaturas en las escuelas públicas.
- VIERNES 24** Los pobladores de la comunidad de Santa Lucía, en el municipio de La Labor en Ocotepeque, junto con unas 2 mil personas y 800 alumnos de las instituciones educativas de otros sectores del municipio, realizan una marcha para protestar por la concesión minera de 400 hectáreas a la compañía

canadiense Maderic, denunciando que la cesión se hizo sin consultarlos a ellos que protegen una reserva nacional donde se encuentra ubicada la mina El Higilio.

MARTES 28 La CNRP, médicos, maestros, alumnos, padres de familia y personas identificadas con el Bloque Popular toman las casetas de peaje, varios puentes y carreteras del país, aduciendo que el presidente Ricardo Maduro no escucha el clamor del pueblo. En las ciudades de San Pedro Sula, Tela, El Progreso, Tegucigalpa, La Lima, Santa Bárbara, La Ceiba, Choluteca y Puerto Cortés, entre otras, miles de personas protestan en contra de que se deroguen los estatutos del maestro y del médico y que se modifique la actual Ley de Servicio Civil, contra la privatización de la educación, el aumento de los servicios públicos y un tercer paquete de medidas económicas que el gobierno está preparando siguiendo instrucciones del Banco Mundial (BM) para poder firmar la carta de intenciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

NOVIEMBRE

LUNES 17 El 90% de los bomberos de La Ceiba deciden suspender todos los servicios comunitarios en la ciudad, salvo las emergencias, mientras no se les cancele por lo menos uno de los dos meses de salario que se les adeuda.

JUEVES 20 Unos 400 empleados de la Compañía Bananera Hondureña SA (COBAHSA) cortan la vía que comunica El Progreso, departamento de Yoro, con Tela, departamento de Atlántida, a la altura del puente Quebrada Seca, en protesta por una deuda de 4 meses de salario.

LUNES 24 Los productores de leche de los departamentos de Atlántida, Colón y Olancho toman todos los centros de recolección y comercialización de la leche pertenecientes a la empresa Lácteos de Honduras SA (LACTHOSA), en esa región, para protestar contra la medida de rebajarles desde el 10 de octubre pasado, 55 centavos por litro de leche producido en el corredor que va desde San Juan Pueblo, en Atlántida, hasta San Esteban, en Olancho. Los productores advierten que mantendrán la toma hasta que se les reintegren los 55 centavos.

MIÉRCOLES 26 El Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE) paraliza sus labores en todo el Litoral Atlántico porque no se ha cumplido con el aumento salarial pactado desde diciembre del año anterior. Además, exige un incremento salarial del 20% para aquellos que ganan menos de 20 mil lempiras mensuales.

JUEVES 27 Cerca de 600 empleados públicos marchan por las calles y avenidas de Comayagüela y Tegucigalpa hasta los bajos del Congreso Nacional, exigiendo

un ajuste salarial digno, estabilidad laboral y congelamiento de precios de los productos de la canasta básica.

VIERNES 28 Decenas de vendedores ambulantes se manifiestan frente al edificio del Ministerio Público en Tegucigalpa exigiendo la libertad de Julio Brígido Alvarado, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Economía Informal de Honduras, quien se encuentra detenido acusado de sedición durante la Marcha por la Dignidad realizada el pasado 26 de agosto.

DICIEMBRE

MARTES 2 Más de 400 enfermeras auxiliares del Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula paralizan sus labores durante 2 hs en protesta porque el Secretario de Salud, Elías Lizardo, aún no cumple con una serie de conquistas laborales.

LUNES 8 Unos 300 pobladores de los departamentos de Cortés, Yoro y Colón realizan por segunda vez un plantón en los bajos de la Cámara Legislativa para exigir la condonación de 9 millones de lempiras que adeudan a la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social, Urbana y Rural (FUNDEVI), logrando que el presidente del Congreso Nacional, Porfirio Lobo Sosa, les prometa que les condonará la deuda.

MARTES 16 Más de mil maestros afiliados al COPEMH realizan un plantón frente al Congreso Nacional para protestar contra el tercer ajuste económico que planea implementar el gobierno, en rechazo del congelamiento de los salarios, del decreto que pretende disminuir los derechos de los estatutos profesionales y contratos colectivos, y piden públicamente la renuncia del presidente Ricardo Maduro.

MIÉRCOLES 17 Finaliza en Washington, EE.UU., el proceso de negociación del TLC entre esa nación y los países de Centroamérica menos Costa Rica, que no firma el acuerdo y posterga las negociaciones hasta enero de 2004. Con este acuerdo, Honduras logra un 98% de acceso a los mercados con sus productos agrícolas y un 95% en los demás rubros.

VIERNES 19 En horas de la madrugada y con los votos de los diputados del Partido Nacional y de la Democracia Cristiana, el Congreso Nacional aprueba el tercer ajuste fiscal del gobierno del presidente Ricardo Maduro, que busca entre otras cosas, fusionar algunos entes estatales, reducir el presupuesto de 2004 en más de 890 millones de lempiras, gravar con el impuesto sobre las ventas a las empresas públicas y atar los aumentos salariales en la administración pública a las variaciones de la inflación y del crecimiento económico del país.

MARTES 30 El Congreso Nacional aprueba el presupuesto para el ejercicio fiscal 2004 con un recorte de 500 millones de lempiras respecto al del año 2003. Dicha quita afecta al Poder Judicial, al organismo electoral, las Secretarías de Educación y Salud y la Procuraduría.

GLOSARIO DE SIGLAS

ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
BCH	Banco Central de Honduras
BM	Banco Mundial
CNRP	Coordinadora Nacional de Resistencia Popular
COBAHSA	Compañía Bananera Hondureña SA
COPEMH	Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras
FMI	Fondo Monetario Internacional
FOMH	Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras
FUNDEVI	Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social, Urbana y Rural
LACTHOSA	Lácteos de Honduras SA
SANAA	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
STENEE	Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TLC	Tratado de Libre Comercio
UD	Unificación Democrática

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández.
Fuentes: diarios La Prensa, La Tribuna y Tiempo.*

[cronología septiembre-diciembre 2003]

SEPTIEMBRE

LUNES 1 Cerca de 6 mil personas marchan del Monumento a la Revolución hacia la Cámara de Diputados bajo una convocatoria de la Promotora por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo para manifestarse contra la política del gobierno de Fox, durante su tercer informe de gobierno ante el parlamento. El contingente –integrado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), campesinos de San Salvador Atenco y por militantes contra la mundialización neoliberal, entre otros– se expresa contra las reformas eléctrica y petrolera pretendida por el gobierno.

LUNES 8 Alrededor de 3 mil personas acuden en Cancún a reunirse en la Casa de la Cultura Cuxim Baxaal para dar inicio al Foro Internacional Campesino e Indígena que habrá de debatir con los planteamientos de la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que comenzará el próximo miércoles. Al encuentro asisten organizaciones de Argentina, Honduras, Cuba, Panamá e integrantes de Vía Campesina de varios países y representantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), del brasileño Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra, de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) –estas últimas miembros de El Campo no Aguanta Más. Unos 43 miembros de la Red de Acción Directa –compuesta, entre otros, por los Desobedientes– burlan el cercado policial instalado alrededor de la sede de la reunión conferencial en Cancún y escriben con sus cuerpos mensajes contra la OMC.

MIÉRCOLES 10 En el Centro de Convenciones de Cancún los ministros de Comercio y Economía de los 146 países miembros de la OMC dan inicio a su quinta ronda de negociaciones a fin de debatir la liberalización del mercado mundial agropecuario y de servicios, el uso de patentes y los aspectos ambientales de la economía globalizada, temas que planean resolverse en la reunión a realizarse en enero de 2005. Militantes altermundistas de 62 ONGs acreditadas –como Our World is not for Sale Coalition, Public Citizen, Focus on the Global South y Food First– interrumpen los discursos de presentación de Supachai Panitchpakdi, director general de la OMC, y de Luis Ernesto Derbez

calificando al organismo de antidemocrático y acorde a los intereses de las corporaciones globalizadas. Alrededor de 10 mil opositores a la globalización neoliberal convocados por la Red de los Movimientos Sociales –uno de cuyos miembros es la organización internacional Vía Campesina– marchan hasta el perímetro de seguridad que rodea al Centro de Convenciones. Un activista de la Federación Coreana de Granjeros Avanzados, Lee Kyung Hae, se inmoviliza al arribar al kilómetro cero luego de haberse movilizado portando un cartel en que responsabiliza a la OMC de la muerte del campesinado. Más de 50 personas resultan heridas en los enfrentamientos ocurridos entre los manifestantes y alrededor de 600 policías. Las organizaciones participantes del Foro Internacional Campesino Indígena clausuran sus sesiones emitiendo un comunicado en el que exigen a la OMC que deje de normar en materia de agricultura, alimentación, salud y educación; sostienen la necesidad de que la soberanía alimentaria de los pueblos sea un principio rector de las políticas internacionales en concordancia con la defensa de los recursos naturales y la biodiversidad; reclaman por programas y políticas de apoyo a los pequeños y medianos agricultores en competencia con las empresas transnacionales; manifiestan su oposición a la importación y el uso de alimentos y semillas transgénicas; rechazan cualquier tipo de acuerdo que pretenda la apropiación de los conocimientos y recursos genéticos de las semillas, tradiciones y tecnologías campesinas e indígenas y convocan a las fuerzas sociales del campo y la ciudad a construir un nuevo orden alimentario mundial fundado en la necesidad de combatir el hambre, lograr un vida digna y respetar la soberanía de los estados nacionales.

JUEVES 11 La Federación Coreana de Granjeros Avanzados realiza una ceremonia privada para despedir a Lee Kyung Hae. Los miembros del CNI presentes en Cancún convocan a un velatorio de carácter público al que asisten cerca de 3 mil opositores a la globalización. Vía Campesina organiza una procesión hacia el kilómetro cero a la que acuden dirigentes de la Confederación de Campesinos de Francia y de la Confederación Coreana de Sindicatos, quienes expresan que la OMC ha entregado la agricultura a las empresas multinacionales y que debe ser protegida la soberanía alimentaria nacional. Organizaciones de empresas comercializadoras de café nucleadas en Comercio Justo –como Equal Exchange– denuncian que la OMC se ocupa de facilitar los emprendimientos de las multinacionales del sector –las compañías Kraft, Procter & Gamble, Nestlé y Saralee– perjudicando a los productores medianos y pobres, vinculados a economías nacionales o de regiones pequeñas.

VIERNES 12 Activistas contra la mundialización neoliberal en curso realizan protestas dentro y fuera del recinto de convenciones donde sesionan los ministros de los países miembros de la OMC, por medio de acciones directas, mitines, bloqueos y protestas simbólicas en las que participan militantes altermundistas de EE.UU. y Europa, estudiantes, miembros de Vía Campesina, jóvenes anarquistas y otros

opositores de países como Argentina y Corea. A 5 km del predio se realiza el Foro Sindical Internacional a iniciativa de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y del Frente Sindical Mexicano (FSM), quienes reciben la visita de delegaciones extranjeras de la Federación Sindical Mundial, la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Textil, del Vestido, Cuero y Calzado, de la Central General de Trabajo francesa, la Central Unitaria de Trabajadores del Brasil, la interamericana Federación de Sindicatos de Servicios Públicos, el sindicato canadiense de los sectores de energía, papel y comunicaciones y otros enviados de Italia, Ecuador, Perú, Cuba, EE.UU. y España.

SÁBADO 13 Cerca de 10 mil altermundistas marchan en Cancún hacia el vallado que bordea el centro de convenciones. Entre ellos se encuentra Vía Campesina, la Liga Campesina de Corea, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la CNTE, trabajadores del Seguro Social, telefonistas y del Instituto Mexicano del Petróleo, los Teamsters de EE.UU., organizaciones de indígenas chiapanecos, International Noise Bridge, los Desobedientes, Resistencia Global, la Red Social para la Educación Pública en América, Women's Environment Development Organization, el Partido Verde italiano y estadounidense, darke-tos y miembros de la comunidad anarquista, lésbica y gay entre otros. La delegación coreana, la de Vía Campesina y los grupos de acción directa permanecen en el lugar hasta derribar la doble reja metálica de contención.

DOMINGO 14 El canciller mexicano y el director general de la OMC dan por concluida la quinta Reunión Ministerial en sendos discursos de cierre donde admiten que fracasaron los planes de los países dominantes –liderados por EE.UU., la Unión Europea y Japón– para consensuar la liberalización del mercado agropecuario internacional y de servicios, entre otros temas. Las negociaciones fueron trabadas al interior del centro de convenciones por la oposición de los grupos del tercer mundo al levantamiento de barreras arancelarias en materia agropecuaria sin un compromiso de eliminación de los subsidios a la producción en los países ricos. Tal postura fue sostenida por el Grupo de los 21 –encabezado por Brasil, India, China y Sudáfrica– y por el centenar de países representados en el Grupo de Asia, Caribe y el Pacífico. La OMC emite luego un comunicado en el que convoca a un encuentro del Consejo General antes del 15 de diciembre próximo en el cual reiniciar las conversaciones. Los militantes y activistas altermundistas realizan un acto ceremonial en el boulevard Kukulcán para festejar el fracaso de la cumbre y recordar a Lee Kyung Hae.

VIERNES 19 Estudiantes de la escuela normal de Mactumactzá, dirigentes de la CNTE, miembros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y alumnos de otros colegios rurales chiapanecos y oaxaqueños se manifiestan en el Distrito Federal (DF) frente a la Secretaría de Gobernación (SG) exigiendo la realización de conversaciones en las cuales plantean la necesidad de reabrir el plantel educativo, liberar a 24 estudiantes y que cesen los hostigamientos que sufre el movimiento.

SÁBADO 27 Miles de trabajadores se manifiestan en el zócalo capitalino bajo una convocatoria del FSM, de la UNT y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para protestar contra la apertura al capital privado del sector eléctrico.

MARTES 30 El secretario de Educación chiapaneco, el director de los servicios educativos del estado y los miembros de la comisión negociadora de Mactumactzá acuerdan en Tuxtla Gutiérrez el levantamiento de las medidas de protesta, el reinicio del año escolar, la liberación de 28 partícipes del movimiento y la suplantación del sistema de internado por otro individual de becas externas.

OCTUBRE

JUEVES 2 Alrededor de 17 mil personas marchan de la Plaza de las Tres Culturas hacia la de la Constitución para conmemorar un nuevo aniversario de la masacre de Tlatelolco y reclamar por el enjuiciamiento del ex presidente Luis Echeverría y de los ex titulares de la Dirección Federal de Seguridad Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno así como por el cese de la represión y ahogos presupuestarios sobre las normales rurales, por la reapertura de la escuela de Mactumactzá y la liberación de sus luchadores. El contingente juvenil –encabezado por el Comité 68 pro Libertades Democráticas e integrado además por el Comité Eureka, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de la Universidad Autónoma de Chapingo y por la FECSM, la CNTE, anarquistas, punks y darketos, entre otros grupos provenientes de 16 estados del país– realiza un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el cual piden por un fallo adverso a la prescripción de los delitos de la “guerra sucia” y proclama consignas contra la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado además de criticar la apertura de los sectores eléctrico y petrolero al capital foráneo. Miles de estudiantes y maestros también realizan medidas de fuerza en las urbes de Ciudad Juárez, Chilpancingo, Acapulco, Aguascalientes, Mérida y Querétaro.

VIERNES 10 Cerca de 10 mil afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) marchan desde varios puntos del DF junto a su dirigencia gremial y los delegados del cuadragésimo segundo Congreso Nacional hacia la sede central del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en demanda por el mantenimiento del sistema de jubilaciones y pensiones en vigencia. El instituto condicionó un aumento salarial de 5,25% a una reforma previsional que afecta el contrato colectivo actual.

DOMINGO 12 El candidato priísta en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se impone en las elecciones extraordinarias realizadas en San Salvador Atenco con un 50% de los sufragios en una jornada que cuenta con

un 50% de abstencionismo. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se mantiene en silencio y un cerco policial custodia las 36 casillas de votación y la Junta Municipal Electoral.

MARTES 14 Más de 40 mil afiliados al SNTSS marchan desde su sede central hacia la Cámara de Diputados en reclamo por su intermediación respecto de la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones que pretenden las autoridades del IMSS y un mayor presupuesto. La UNT y la Alianza de Tranviarios de México participan de la movilización. Más de 24 mil empleados públicos se manifiestan en las ciudades de Mérida, Puebla, San Luis Potosí, Monterrey, Guadalajara y Ciudad Victoria y en algunos municipios de Chihuahua.

MIÉRCOLES 15 Dirigentes del SNTSS y el director general del IMSS acuerdan un aumento de 5,25% y la revisión del sistema de jubilaciones y pensiones en marzo próximo.

JUEVES 16 Petróleos Mexicanos (PEMEX) otorga a la empresa petrolera española Repsol un Contrato de Servicios Múltiples mediante el cual la trasnacional habrá de realizar una inversión de 2.437 millones de dólares en un plazo de 20 años en el bloque Reynosa-Monterrey de la cuenca de Burgos –un área de 12.500 km cuadrados que cuenta con reservas potenciales por 4,5 millones de pies cúbicos en tierras de los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León– para la extracción de gas.

Alrededor de 10 mil personas marchan en Chilpancingo junto a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), el SME, el sindicato de trabajadores de la universidad del estado, el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, egresados de escuelas normales y otras organizaciones sociales, y realizan un mitin en la plaza cívica en protesta contra los recortes al presupuesto educativo y la reforma al código penal –sancionada por el congreso local– que prescribe penas a quienes bloqueen vías de circulación.

LUNES 27 Se inicia en el DF la Conferencia Especial sobre Seguridad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con la presencia de cancilleres, vicescancilleres y ministros de Defensa de sus 34 estados miembros, ante los que el secretario de Relaciones Exteriores mexicano sostiene que las amenazas a la seguridad continental deben ser atendidas respetando el derecho internacional y no desde una perspectiva político-militar. Miembros de la coalición No en Nuestro Nombre y de la Red Mexicana contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) realizan una protesta en la que sostienen que el encuentro pretende fortalecer los acuerdos para la militarización del continente.

MARTES 28 El documento Declaración sobre Seguridad de las Américas, que clausura la conferencia de la OEA, concibe al terrorismo como una amenaza grave a la

estabilidad al igual que la pobreza extrema y la exclusión social, y compromete a los países miembros a cooperar desde sus prioridades y estrategias respectivas en torno al mantenimiento del orden continental.

JUEVES 30 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco Mundial (BM) emiten un comunicado conjunto en el que exponen los planteamientos realizados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en una evaluación anual sobre la economía mexicana finalizada el 15 de octubre. El informe sostiene que el organismo de crédito calificó de desalentadora a la falta de acuerdos políticos referidos a las reformas fiscal, energética, laboral y judicial, y exhorta al gobierno nacional a reiniciar el saneamiento de las finanzas del estado.

PEMEX da a conocer la adjudicación del bloque Misión al grupo compuesto por la empresa mexicana Industrial Perforadora de Campeche y la argentina Tecpetrol bajo un Contrato de Servicios Múltiples que autoriza la inversión para explotación de gas natural por un monto de 1.035 millones de dólares.

NOVIEMBRE

SÁBADO 1 ONGs de EE.UU. y México –entre las que se encuentra el grupo Justicia para Nuestras Hijas, Amigos de las Mujeres de Juárez, Mujeres de Negro y Amnistía Internacional– realizan protestas en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, el puente internacional Santa Fe y en la plaza de armas de Ciudad Juárez pidiendo al presidente Fox y al gobernador de Chihuahua por el esclarecimiento de más de 100 asesinatos y centenas de desapariciones de mujeres ocurridas en la zona desde 1993. La convocatoria también consigue movilizar ciudadanos estadounidenses en Washington DC, Nueva York, Chicago, Miniápolis, Dalas, Houston, Austin, San Antonio, Alburquerque, Phoenix, Tucson, Los Ángeles, San Francisco y Portland, quienes se manifiestan frente a sedes de la OEA y a representaciones diplomáticas mexicanas.

MIÉRCOLES 5 La SCJN emite un dictamen en que declara que no prescribe la acción penal en caso de privación ilegal de la libertad si es que la víctima no aparece, lo que permite penalizar a Luis de la Barreda Moreno, a Miguel Nazar Haro y al agente judicial Ramos Cisneros por el secuestro de Jesús Piedra Ibarra el 18 de abril de 1975, durante el período de guerra sucia.

VIERNES 7 La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza una colocación de activos en bolsa por un valor de 2.600 millones de pesos, la cual es aprovechada por Administradoras de Fondos para el Retiro (AFOREs), fondos de inversión, compañías de seguros y fondos privados de pensiones.

JUEVES 20 PEMEX adjudica un Contrato de Servicios Múltiples al bloque Fronterizo, compuesto por Petrobras, la compañía japonesa Teikoku Oil y la mexicana

D&S, tras presentar el último una propuesta de inversión estimada en 265 millones de dólares para explotar la cuenca gasífera de Burgos, ubicada en Nuevo León.

MARTES 25 Con motivo del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres unas 2 mil personas marchan en el DF hacia Los Pinos junto a las organizaciones Nuestras Hijas de Regreso a Casa y Justicia para Nuestras Hijas acusando al presidente por la falta de resultados en las pericias e investigaciones en torno a las desapariciones en el estado de Chihuahua.

JUEVES 27 A iniciativa del FSM –liderado por el SME–, la UNT, El Barzón, el Consejo Agrario Permanente (CAP), El Campo no Aguanta Más, la Promotora Nacional contra el Neoliberalismo y legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el PRD, cuatro columnas de manifestantes acuden hacia la Plaza de la Constitución para expresar su repudio a las pretensiones oficialistas de modificar las regulaciones en materia eléctrica, petrolera, laboral y fiscal. Entre 80 y 200 mil personas participan del evento, según la policía y los organizadores respectivamente. El contingente incluye a la CNTE, trabajadores telefonistas, del seguro social, de la UNAM, sobrecargos, pilotos, tranviarios, a la Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Frente Auténtico del Trabajo, la Central Campesina Cardenista (CCC) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), entre otros. Un colectivo compuesto por la UNTA, la CCC, la Unión Campesina Democrática (UCD) y El Barzón protestan frente a las secretarías de Agricultura, Economía, Desarrollo Social, Gobernación y Reforma Agraria pidiendo apoyos a la cosecha. Decenas de miles de integrantes de organizaciones sindicales, indígenas, campesinas, estudiantiles y ciudadanas marchan en las urbes de Monterrey, Puebla, Guadalajara, Culiacán, Mérida, Cancún, La Paz y Jalapa.

DICIEMBRE

MARTES 2 Dirigentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN) exhortan al congreso para que éste apruebe las reformas fiscal y energética. Luego repiten el reclamo ante el secretario de Hacienda con la compañía del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

MIÉRCOLES 3 Unos 118 diputados del PRI sesionan en asamblea partidaria y votan la destitución de Elba Esther Gordillo –quien promueve un voto favorable a la reforma fiscal– como coordinadora del bloque parlamentario en una reunión hecha a pedido de Roberto Madrazo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Los legisladores eligen también a Emilio Chuayffet como su reemplazante.

- VIERNES 5** Una veintena de organizaciones de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), encabezada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del DF (SUTGDF), anuncia su rompimiento con la central sindical y la conformación de una nueva al mando del gremio magisterial, que tiene a Elba Esther Gordillo como una de sus líderes principales.
- SÁBADO 6** Funcionarios del gobierno de Hidalgo y miembros del Comité Estudiantil Izquierdista de El Mexe llegan a un acuerdo en el que se comprometen a recuperar el ciclo escolar de este año a cambio de la suspensión temporal del internado, la entrega de las instalaciones ocupadas a fines de agosto último y la devolución de cerca de 70 vehículos secuestrados durante el conflicto.
- MARTES 9** El senado aprueba por unanimidad un proyecto de ley que establece que PEMEX deberá cogenerar energía eléctrica con la CFE para alcanzar una producción de 4 mil megavatios –la cuarta parte de lo que consume el país– en un plazo de 8 años. La iniciativa implica que la compañía petrolera paraestatal cubra parte del incremento en la producción eléctrica que el oficialismo pretende lograr con el ingreso de capitales privados al sector.
- JUEVES 11** La cámara de diputados rechaza por 251 votos en contra y 234 a favor el proyecto de reforma fiscal impulsado por el gobierno foxista, el Partido Acción Nacional (PAN) y el sector priísta que responde a Elba Esther Gordillo apoyados por el PVEM. La negativa corrió por parte de 141 legisladores del PRI, 94 del PRD, 6 del Partido del Trabajo (PT), 5 de Convergencia, 4 del PVEM y una panista. La iniciativa pretendía ampliar el alcance del Impuesto al Valor Agregado a alimentos y medicinas –con una tasa de 8%– que actualmente se mantienen sin arancelar así como gravar las prestaciones con un tributo de 25% de Impuesto sobre la Renta. La mesa directiva de la cámara baja reconoce luego a Emilio Chuayffet como coordinador de la bancada priísta en San Lázaro.

GLOSARIO DE SIGLAS

AFORES	Administradoras de Fondos para el Retiro
ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
BM	Banco Mundial
CAP	Consejo Agrario Permanente
CCC	Central Campesina Cardenista
CCE	Consejo Coordinador Empresarial
CETEG	Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero
CFE	Comisión Federal de Electricidad
CIOAC	Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
CNI	Congreso Nacional Indígena

CNTE	Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
CONCAMIN	Confederación Nacional de Cámaras Industriales
COPARMEX	Confederación Patronal de la República Mexicana
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
DF	Distrito Federal
FECSM	Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México
FMI	Fondo Monetario Internacional
FPDT	Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
FSM	Frente Sindical Mexicano
FSTSE	Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
IPN	Instituto Politécnico Nacional
OEA	Organización de los Estados Americanos
OMC	Organización Mundial de Comercio
PAN	Partido Acción Nacional
PEMEX	Petróleos Mexicanos
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PRI	Partido Revolucionario Institucional
PT	Partido del Trabajo
PVEM	Partido Verde Ecologista de México
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
SG	Secretaría de Gobernación
SHCP	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SME	Sindicato Mexicano de Electricistas
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNTSS	Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
SUTGDF	Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del DF
UAM	Universidad Autónoma Metropolitana
UCD	Unión Campesina Democrática
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México
UNORCA	Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas
UNT	Unión Nacional de Trabajadores
UNTA	Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
 Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
 Fuentes: diarios La Jornada y El Universal y páginas web de Indymedia
 México y de la Red de los Movimientos Sociales.*

Nicaragua

[cronología septiembre-diciembre 2003]

SEPTIEMBRE

- SÁBADO 6** Los trabajadores de la empresa textil Knitwear SA, situada en la zona franca, realizan un paro contra el aumento de la producción impuesto por la empresa sin aumento salarial ni incremento del incentivo. La patronal les descuenta 75 córdobas de su sueldo en reprimenda por la medida de fuerza adoptada, a lo que éstos responden con una protesta que culmina con el despido de 29 trabajadores.
- MIÉRCOLES 10** Los trabajadores de la maquila Knitwear SA se presentan a trabajar y se encuentran con las puertas de la fábrica cerradas. El Ministerio de Trabajo (MITRAB) obliga a la gerencia a reincorporar a los 29 obreros despedidos por protestar.
- Cerca de 5 mil taxistas de Managua, Masaya y Carazo, agremiados a 13 cooperativas de taxis como la Central de Cooperativas de Transporte Independiente (CECOOTRAIN), entre otras, marchan hasta la Asamblea Nacional (AN), en la capital, para exigir a la Comisión de Transporte que modifique la ley que los obliga a pagar altas sumas de dinero por 3 tipos de seguros distintos.
- LUNES 15** Comienza en Managua la VII ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA).
- JUEVES 18** Más de 10 mil personas de diversos departamentos del país y delegaciones de Guatemala, Honduras y El Salvador, encabezados por diputados sandinistas, el Movimiento Social Nicaragüense y el Movimiento Comunal Nicaragüense, realizan una marcha en Managua contra la firma del CAFTA.
- VIERNES 19** Ante el fracaso de la reunión con miembros de la junta directiva de la Universidad Católica del Trópico Seco (UCATSE), de la fiscalía departamental, de la policía nacional y del Consejo Nacional de Universidades (CNU), los estudiantes de dicha universidad en lucha desde hace varias semanas toman las instalaciones de ese centro de estudios para exigir el reconocimiento de la legalidad de la Unión Nacional de Estudiantes de

Nicaragua (UNEN), la incorporación de estudiantes en el Consejo Superior, la reapertura del internado y la reactivación del programa de becas, entre otras cuestiones.

DOMINGO 21 Estudiantes de la UCATSE ocupan la catedral y la Iglesia El Calvario, en Estelí, e inician una huelga de hambre para exigir al obispo Mata, presidente del Consejo Superior de ese centro de estudios, que presione al rector para lograr una salida negociada al conflicto. El Comité de Padres de Familia y pobladores de la zona apoyan la protesta.

MIÉRCOLES 24 El Sindicato de Trabajadores del Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG FOR) realiza una huelga de brazos caídos en las sedes de Managua y León, para exigir la reactivación del subsidio alimenticio.

JUEVES 25 Cientos de estudiantes de Managua, León y otros departamentos marchan en Estelí en apoyo a la lucha de los universitarios de la UCATSE, para exigir el 6% del presupuesto para las universidades y contra la reforma de la ley de autonomía universitaria, entre otras cuestiones.

VIERNES 26 Diversas organizaciones de la Coordinadora Sindical de la Educación, integrada por la Confederación de Maestros, la Confederación de Maestros de Nicaragua, la Federación Nicaragüense de Educación y Cultura (FENITEC) y la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN), inician plantones y ayunos en Managua y otros departamentos del país, y hacen una multitudinaria marcha nacional para exigir al gobierno aumento salarial y más presupuesto.

Las autoridades de la UCATSE expresan estar dispuestas a negociar las demandas de los estudiantes, excepto el punto que exige la participación de representantes de la UNEN en el Consejo Superior.

OCTUBRE

VIERNES 3 Cientos de estudiantes de la UCATSE, con el apoyo de decenas de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) de León, intentan ocupar el obispado de Estelí para presionar a las autoridades de ese centro de estudios y al obispo de la diócesis para que reinicien las conversaciones. Desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense (RN) que mantienen custodiado el lugar y la policía nacional los reprimen dejando un saldo de 9 heridos.

LUNES 6 Más de 460 trabajadores de la alcaldía de León se declaran en huelga para exigir el cumplimiento del convenio colectivo, la entrega de las colillas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y contra el atraso en el pago de los salarios.

- MARTES 7** Los estudiantes de la UCATSE desalojan la iglesia El Calvario y la catedral de esta ciudad a fin de facilitar un proceso de negociación con las autoridades.
- Empleados de la alcaldía de Granada, convocados por la Central General de Trabajadores (CGT), la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN) y la Central Sandinista de Trabajadores (CST) realizan un paro contra la detención de dos líderes sindicales, uno de la CGT y otro de la CTN, perseguidos por denunciar actos de corrupción cometidos por el alcalde y otros funcionarios municipales.
- VIERNES 10** Cientos de pobladores y transportistas convocados por el Comité por un Boaco mejor, marchan por las calles de ese lugar hacia la carretera del empalme de Boaco, para exigir al gobierno la inmediata reparación de la misma. Además, los taxistas de la ciudad realizan un paro.
- MIÉRCOLES 15** Cientos de estudiantes y docentes convocados por el CNU y la UNEN realizan una marcha en Managua para exigir el 6% de presupuesto para las universidades.
- MARTES 21** El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresa su apoyo a la gestión económica del gobierno de Nicaragua y anuncia un desembolso de casi 40 millones de dólares.
- Los estudiantes de la UCATSE regresan a clases luego de acordar con las autoridades que no se tomarán represalias de ningún tipo contra los manifestantes, la suspensión del pago de aranceles por las tesis, realizar un proyecto de infraestructura para el internado y la entrega de becas de ayuda económica.
- MIÉRCOLES 22** Miles de estudiantes realizan una protesta en las inmediaciones a la Universidad Nacional Agraria (UNA), en Managua, para exigir el 6% de presupuesto para las universidades. Se producen enfrentamientos con la policía que dejan un saldo de 7 policías y 15 estudiantes heridos. Con el mismo reclamo, más de 3 mil estudiantes universitarios, trabajadores y sindicatos de la UNAN de León marchan hasta el empalme León-Managua, donde bloquean el tránsito. La policía reprime con gases lacrimógenos, produciéndose enfrentamientos. Además, estudiantes de Estelí marchan por esa ciudad y se enfrentan con las fuerzas de seguridad.
- MARTES 28** Cientos de estudiantes realizan una marcha por la avenida Universitaria y las inmediaciones a la UNA, en Managua, en reclamo del 6% de presupuesto. Se producen fuertes enfrentamientos con la policía que dejan un saldo de 9 jóvenes detenidos y varios heridos, entre ellos 5 policías.
- JUEVES 30** El presidente Bolaños responsabiliza a los dirigentes de la UNEN y a los rectores del CNU de manipular a los universitarios durante las protestas.

Maestros de centros escolares de Managua, Matagalpa, Carazo, Jinotega, Estelí, Nueva Segovia y Regiones Autónomas del Atlántico, entre otros, convocados por la ANDEN, realizan paros escalonados en demanda de un aumento salarial y mejoras en el convenio colectivo.

NOVIEMBRE

LUNES 3 Pobladores de Jalapa, El Jícaro, San Fernando, Mosonte, Dipilto y Santa María, convocados por el Movimiento Segoviano por la Dignidad, integrado por los alcaldes de Nueva Segovia, campesinos, miembros de la ANDEN, la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE), la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) y cooperativas, bloquean el puente Río Coco en demanda de la reparación de caminos, facilidades en el acceso de los productores a los programas manejados por instituciones públicas del sector agropecuario, la negociación de las deudas de los granos básicos, que se prolongue el proceso de reestructuración de las deudas a los pequeños y medianos cafetaleros, el cumplimiento de los acuerdos entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) y los sindicatos del magisterio, así como el 6% de presupuesto para las universidades, entre otras cuestiones.

En Managua, más de 7 mil estudiantes y docentes marchan para exigir a la AN el 6% de presupuesto para las universidades.

MIÉRCOLES 5 La AN aprueba la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que junto con la ley de Endeudamiento Público y el Presupuesto General de la República 2004, conforman las exigencias de los organismos internacionales para que Nicaragua ingrese a la Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC), con lo que dicho país obtendría la condonación del 80% de su deuda externa.

MIÉRCOLES 12 Más de 800 trabajadores de la maquiladora Hansae, situada en la zona franca, inician una huelga en demanda del cumplimiento del convenio colectivo, del pago del incentivo y de las horas extras y del reintegro de 6 trabajadoras despedidas por estar embarazadas.

VIERNES 14 Los trabajadores de la empresa Hansae levantan el paro iniciado el miércoles pasado, luego de firmar con la empresa un acta por la cual la patronal se compromete a mantener la estabilidad laboral de los obreros.

MIÉRCOLES 19 Pobladores y autoridades de los 6 municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) paralizan todas las instituciones estatales y suspenden los vuelos comerciales para exigir la reparación de la carretera que los comunica con otras regiones y denunciar el abandono en el que está sumergida dicha zona. Las

autoridades llaman a la desobediencia civil para no pagar ningún impuesto y demandan la presencia de una comisión de alto nivel, encabezada por el presidente de la república, para que dé respuesta a la crisis que afecta a la región. Algunos de los municipios exigen su independencia del resto de Nicaragua.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprueba un préstamo de 25 millones de dólares a Nicaragua.

DOMINGO 23 El gobierno se compromete a entregar 17,8 millones de córdobas para reparar la carretera de la RAAN.

LUNES 24 El gobierno de Nicaragua expresa su respaldo a la instalación de un Concejo de Gobierno provisional dirigido por EE.UU. en Irak.

MIÉRCOLES 26 El ex presidente Arnoldo Alemán es trasladado a su casa por orden judicial donde cumplirá prisión domiciliaria. El presidente Enrique Bolaños expresa su repudio a este fallo.

JUEVES 27 El gobierno de Nicaragua acepta destruir unos cuantos misiles SAM-7 para complacer a EE.UU. y otros países del istmo que exigen una reducción del armamento.

La AN aprueba la Ley de Endeudamiento Público.

DICIEMBRE

LUNES 1 El gobierno de EE.UU. decide suspender la ayuda técnica y financiera a la AN de Nicaragua, en repudio al pacto entre liberales y sandinistas por el cual fue trasladado a prisión domiciliaria el ex presidente Arnoldo Alemán, medida que podría afectar el ingreso de Nicaragua a la HIPC.

MIÉRCOLES 3 Cientos de estudiantes convocados por la UNEN y el CNU marchan desde la Avenida Universitaria hasta la AN para exigir a los parlamentarios el cumplimiento del 6% de presupuesto para las universidades.

JUEVES 4 La Comisión de Asuntos Económicos de la AN dictamina el proyecto de presupuesto 2004 e incorpora al mismo una reasignación presupuestaria para distintos sectores como los universitarios, los maestros, la policía y el ejército, entre otros.

VIERNES 5 El FMI logra que el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el gobierno hagan fracasar el dictamen que la AN aprobó ayer sobre la Ley de Presupuesto 2004 por lo que quedan anuladas las reasignaciones que hizo la comisión para incrementar el presupuesto a algunos sectores.

MARTES 9 Cientos de estudiantes se concentran en la avenida universitaria en protesta por la aprobación en la AN de la Ley de Presupuesto 2004, en base a un dictamen de minoría que cercenó las asignaciones complementarias al presupuesto que iban a ser destinadas a las universidades públicas. Se producen enfrentamientos con la policía que reprime con gases y balas de goma, dejando un saldo de 7 detenidos. Un funcionario de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) denuncia que la policía tiró bombas incendiarias a las oficinas académicas.

MIÉRCOLES 10 El gobierno nacional endurece su posición sobre el conflicto con las universidades y sostiene que no dará ni un centavo más para ese sector. Por otra parte, dos de los estudiantes detenidos en las protestas del día de ayer son acusados por supuestos "actos de terrorismo".

JUEVES 11 Cerca de 200 policías descargan granadas de combate e incendiarias, balas de corcho, gases lacrimógenos y mostaza sobre los estudiantes y los pobladores que se encuentran en los alrededores de la avenida universitaria e ingresan a la Universidad Centroamericana (UCA) violando la autonomía universitaria. Una persona pierde un ojo a causa del impacto de una bala de goma durante la persecución policial, mientras que un profesor recibe una herida en la cabeza por el impacto de una granada. Además, éstos provocan el incendio de la capilla de la UCA y de una oficina en la UNI. En total 3 personas resultan con quemaduras de primer grado, 6 tienen heridas de balas de goma, 12 resultan intoxicadas y una fracturada, mientras que 10 estudiantes son detenidos. El ministro de la gobernación declara que los estudiantes que participan en las protestas "deberían ir presos porque son terroristas lanza-morteros".

El presidente Bolaños anuncia que con la aprobación de la Ley del Presupuesto 2004, la de Deuda Pública, Servicio Civil y Carrera Administrativa, el gobierno dio el último paso exigido por EE.UU. para que Nicaragua acceda a la condonación de parte de su deuda externa, en el marco de la HIPC.

SÁBADO 13 En Managua sesiona el Foro de Sao Paulo, en el que dirigentes políticos de la izquierda mesoamericana, México, Centroamérica y Cuba, coinciden en la necesidad de frenar o posponer la firma de un acuerdo comercial entre EE.UU. y el istmo. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) participa del encuentro.

LUNES 15 Una fuente del FMI en Washington sostiene que el anuncio oficial de la reducción de la deuda externa de Nicaragua se producirá en enero de 2004 y no en los próximos días como se dijo durante casi todo el año.

MIÉRCOLES 17 Finalizan oficialmente las negociaciones del CAFTA con la firma de dicho tratado por parte de los países centroamericanos que venían negociando, a excepción de Costa Rica que abandona públicamente las negociaciones del mismo.

GLOSARIO DE SIGLAS

AMNLAE	Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza
AN	Asamblea Nacional
ANDEN	Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CAFTA	Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos
CECOOTRAIN	Central de Cooperativas de Transporte Independiente
CGT	Central General de Trabajadores
CNU	Consejo Nacional de Universidades
CST	Central Sandinista de Trabajadores
CTN	Central de Trabajadores de Nicaragua
FENITEC	Federación Nicaragüense de Educación y Cultura
FMI	Fondo Monetario Internacional
FSLN	Frente Sandinista de Liberación Nacional
HIPC	Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados
INSS	Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
MAG FOR	Ministerio Agropecuario y Forestal
MECD	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
MITRAB	Ministerio de Trabajo
PLC	Partido Liberal Constitucionalista
RAAN	Región Autónoma del Atlántico Norte
RN	Resistencia Nicaragüense
UCATSE	Universidad Católica del Trópico Seco
UCA	Universidad Centroamericana
UNAG	Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos
UNAN	Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
UNA	Universidad Nacional Agraria
UNEN	Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua
UNI	Universidad Nacional de Ingeniería

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diarios La Prensa y El Nuevo Diario.*

Panamá

[cronología septiembre-diciembre 2003]

SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 10 La presidenta Mireya Moscoso remueve de su cargo al director de la Caja de Seguro Social (CSS), Juan Jované, por incapacidad en el ejercicio de sus funciones y pone en su lugar a Ronaldo Villalaz. Mientras la Junta Directiva de la institución sesiona en el Edificio Bolívar, funcionarios y obreros de la institución se manifiestan en las inmediaciones en apoyo al director desplazado y se enfrentan con la policía. Jované tiene 30 días para presentar su descargo legal, mientras que el gobierno tiene 15 días para decidir si su remoción es definitiva.

JUEVES 11 En rechazo a la destitución del director de la CSS, se realizan protestas en todo el país con un saldo de varios heridos y 49 detenidos, entre ellos algunos dirigentes sociales. En la capital, trabajadores de la CSS bloquean la vía Simón Bolívar a la altura del Complejo Hospitalario Metropolitano y se enfrentan con la policía cuando ésta intenta desalojarlos. Luego, las fuerzas de seguridad ingresan al establecimiento, reprimen y detienen a 30 integrantes de CSS. La Asociación Nacional de Funcionarios de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) inicia un paro en rechazo a la aplicación de la fuerza y a la violación a la autonomía de la entidad. Además, obreros del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) bloquean la vía Israel, a la altura del centro comercial Multicentro de la avenida Balboa, produciéndose enfrentamientos con la policía. En Colón, funcionarios de la entidad bloquean las calles de las distintas sedes de la institución, apoyados por la Alianza de Desempleados, el SUNTRACS, jubilados, estudiantes del Centro Regional Universitario de Colón (CRUC); la policía reprime y arresta a 12 manifestantes. Miembros del SUNTRACS realizan protestas y se enfrentan con las unidades antimotines, en Chiriquí y en David, donde cierran la vía Interamericana y son reprimidos por la policía. En tanto, funcionarios de la CSS de las provincias de Chiriquí, Herrera, Coclé, Los Santos y Veraguas se unen al paro decretado por la ANFACSS. Por su parte, la presidenta Moscoso anuncia que serán detenidas las personas que cierran calles. Además, son suspendidas las clases en la capital y otros puntos del país.

VIERNES 12 Más de 40 mil personas –entre integrantes de la ANFACSS, del SUNTRACS, docentes, estudiantes, activistas de derechos humanos, representantes de la Iglesia Católica, trabajadores desocupados y representantes políticos de la oposición– marchan por Panamá, desde el Parque Porras hasta el Palacio de las Garzas, en rechazo a la destitución de Juan Jované, quien participa de la movilización, en repudio al gobierno de la presidenta Mireya Moscoso y para exigir la libertad de los detenidos durante las protestas de ayer. También se realizan protestas en las provincias de Veraguas, Herrera, Los Santos, Penonomé y Chiriquí, donde estudiantes y obreros se enfrentan con la policía con un saldo de 8 detenidos.

LUNES 15 Durante la jornada se suceden protestas en todo el país en rechazo a la destitución del director de la CSS. En la capital, centenares de manifestantes se congregan en las inmediaciones del Edificio Bolívar mientras la Junta Directiva de la entidad discute el presupuesto. La ANFACSS inicia un paro y se mantiene en asamblea general. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) cierran la vía Interamericana, y los del CRUC protestan frente a su centro de estudios. Mientras, estudiantes del Instituto Nacional (IN) cierran la Avenida de los Mártires se enfrentan con la policía, que reprime y detiene a 48 manifestantes, que son liberados horas más tarde. También, docentes de las provincias de Coclé, Veraguas y Colón inician paros. Por otra parte, la presidenta Moscoso ordena la destitución de todos los funcionarios de alto rango que ocupen puestos clave en la entidad.

JUEVES 18 Miles de personas –entre obreros de la construcción, empleados públicos, docentes, estudiantes, trabajadores de la salud, jubilados, activistas de derechos humanos y políticos de oposición– marchan desde el Parque Porras hasta la capitalina Plaza 5 de Mayo y realizan un acto encabezado por el ex director de la CSS para defender la autonomía de la entidad, rechazar su privatización y manifestar el repudio al gobierno de Moscoso. Por otra parte, el director provisorio de la CSS, Rolando Villalaz, anuncia que el presupuesto para la entidad, aprobado recientemente, será financiado con descuentos de los sueldos correspondientes al decimotercer mes. El presupuesto aprobado es rechazado por los representantes de los trabajadores.

Cientos de productores de Chiriquí realizan una caravana desde Cerro Punta hasta la sede del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en la ciudad de David, para exigir que se respeten las normas de importación contempladas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y solicitar la exclusión de sus productos en los futuros Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. Al finalizar la marcha regalan legumbres a los transeúntes.

MARTES 23 Convocada por el Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social –que agrupa a los principales gremios del país, como el Consejo Nacional

de Trabajadores Organizados (CONATO), la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), el SUNTRACS y sindicatos de la salud y la educación, entre otros– se lleva a cabo una huelga general de 24 hs en todo el país por el respeto a la autonomía de la CSS, la restitución de Juan Jované como director de la institución y para rechazar la privatización de la entidad. En la capital, el SUNTRACS realiza un acto en la Plaza Porras. También, luego de que un grupo de estudiantes cerrara durante 5 minutos la vía Interamericana en la capital, la policía los repliega hasta el campus universitario y cierra sus puertas con candados, encerrándolos. Las fuerzas de seguridad lanzan gases lacrimógenos y balas de goma contra el centro de estudios y los estudiantes responden con bombas molotov. Un grupo que logra salir, es detenido. En el interior del país el paro es acatado en la CSS y en las escuelas públicas. En Colón, estudiantes del CRUC y del SUNTRACS cierran calles luego de una marcha –de la que también participan la Federación Sindical de Trabajadores de Colón, funcionarios de la CSS, enfermeras y docentes–, se enfrentan con la policía y denuncian la presencia de infiltrados. También se realizan protestas en las provincias de Chiriquí, Coclé, Herrera, Veraguas y Bocas del Toro. El saldo de la jornada es de 13 personas detenidas.

MIÉRCOLES 24 Unos 30 mil docentes de escuelas de todo el país levantan el paro que iniciaron 6 días antes en rechazo a la privatización de la CSS y por el respeto a la autonomía de la entidad.

VIERNES 26 Luego de otra jornada de protestas en defensa de la CSS en el día de ayer, la ANFACSS y el director interino de la CSS llegan a un acuerdo que pone fin al paro que el gremio mantiene desde hace 12 días. El convenio incluye que no se lleven a cabo represalias contra los trabajadores que participaron del paro y el pago de salarios correspondientes a la segunda quincena del mes en curso; además, los trabajadores se comprometen a poner al día las labores afectadas por el paro.

OCTUBRE

JUEVES 9 Miles de trabajadores, profesores, estudiantes e indígenas de Chiriquí y Bocas del Toro, convocados por la Frente por la Defensa de la Seguridad Social, marchan por la capital, desde la Universidad de Panamá (UP) hasta la Plaza Independencia en defensa de la autonomía de la CSS y de la universidad. Durante el recorrido, vecinos golpean cacerolas desde los balcones en apoyo a los manifestantes. Luego, realizan un acto, del que es orador el ex director de la CSS.

DOMINGO 12 En el día en que se conmemora la llegada de los españoles a América y el genocidio indígena llevado a cabo por los colonizadores, cientos de cam-

pesinos e indígenas realizan protestas y repudian la construcción de proyectos hidroeléctricos. Por su parte, miembros del Movimiento Campesino para la Defensa del Río Cobre (MOCAMDERCO) se concentran en el puente que cruza el río Cobre, cerrando un paño de la vía Panamericana. En tanto, indígenas marchan desde el río Tabasará hasta el Vigúí –zona limítrofe entre Chiriquí y Veraguas– y realizan un mitin donde explican los perjuicios que conlleva la ejecución de los proyectos Tabasará I y II para las comunidades de la zona.

- LUNES 20** Luego de que días atrás fueran encontradas 5 osamentas en una tumba clandestina en las playas de Punta Barco, en San Carlos, familiares de desaparecidos durante la dictadura protestan frente al Ministerio de Gobierno para exigir un decreto que dé sustento legal a la Oficina de Seguimiento de la Comisión de la Verdad que investiga los crímenes durante el régimen de facto. La presidenta Mireya Moscoso, crea la Oficina de Seguimiento de la Comisión Institucional de la Verdad, que continuará con las investigaciones hasta el 31 de diciembre de 2004. La dependencia contará con un órgano consultivo integrado por 1 representante del Ministerio de Gobierno y Justicia, un miembro de un organismo de Derechos Humanos, el arzobispo de Panamá y 2 representantes de asociaciones de familiares de desaparecidos. En abril de 2002 la Comisión de la Verdad entregó su informe final, remitiendo al Ministerio Público unos 20 expedientes de personas asesinadas o desaparecidas durante el régimen militar y solicitando la continuación de las investigaciones sobre este tema.
- MARTES 21** El director de la Oficina de Seguimiento de la Comisión de la Verdad denuncia que el Ministerio Público (MP) no le permite el acceso al lugar donde se realizan las excavaciones de fosas clandestinas en Punta Barco, en el marco de la investigación sobre los crímenes de la dictadura. En tanto, la presidenta de la Comisión de Familiares de Desaparecidos de Panamá (COFADEPA) denuncia la falta de profesionalidad en los trabajos de excavación que se están realizando.
- MIÉRCOLES 22** El ex director de la CSS, Juan Jované, es destituido definitivamente por la presidenta Moscoso, desestimando los argumentos de defensa presentados por el ex funcionario.
- SÁBADO 25** El MP ordena el cierre de la fosa clandestina de Punta Barco. El presidente de la Oficina de Seguimiento de la Comisión de la Verdad anuncia que el próximo lunes continuará las excavaciones para asegurarse de que no existen más osamentas en el lugar.
- MARTES 28** Luego de 3 días de marcha desde las provincias de Coclé y Veraguas, unos 300 integrantes de Coordinadora Campesina Contra los Embalses (CCCE) llegan a la capital y recorren unos 12 kilómetros hasta el Tribunal Electoral

(TE), para exigir que se lleve a cabo un referéndum sobre la ampliación de la cuenca del Canal de Panamá, a la cual se oponen ya que supone la inundación de terrenos y el desalojo de agricultores. Allí entregan un documento con más de 6 mil firmas en apoyo a la consulta popular. La Constitución de la Nación establece que este tipo de reformas en el Canal deben ser aprobadas por el Órgano Ejecutivo y, luego, sometidas a un referéndum nacional.

JUEVES 30 Obreros del SUNTRACS, funcionarios de la CSS, estudiantes universitarios y gremios docentes de distintos puntos del país adhieren a la segunda huelga de 24 hs. convocada por el Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social en defensa de la autonomía de la CSS, la restitución de su ex director y en rechazo a la privatización de la entidad. El comercio, los hospitales, las escuelas y el transporte no apoyan la medida. En la capital, estudiantes universitarios cierran la Av. Bolívar a la altura de la UP, y miembros del SUNTRACS lo hacen en la Av. Balboa. También, se concentran en la Plaza 5 de Mayo junto a miembros del CONATO. Allí, tras ser atropellado un estudiante, se produce un incidente en el que un policía hiere de bala a una periodista. En el interior, el paro cuenta con poco acatamiento, aunque se registran diversas protestas. En Colón, estudiantes universitarios cierran calles frente al CRUC y se enfrentan con la policía; mientras, integrantes del SUNTRACS realizan un piquete y las escuelas y colegios permanecen vacíos. También se realizan protestas en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Coclé.

NOVIEMBRE

- LUNES 3** El Secretario de Estado de EE.UU. Colin Pawell participa junto a la presidenta Mireya Moscoso de los actos conmemorativos del Centenario de la República de Panamá.
- DOMINGO 9** Más de 500 personas –entre ambientalistas, estudiantes universitarios, sindicalistas e independientes– que se oponen a la construcción de la carretera Cerro Punta-Boquete intentan realizar una cadena humana para impedir la entrada de maquinarias de la empresa constructora al parque nacional Volcán Barú. Los productores de Cerro Punta y habitantes de Boquete que apoyan la construcción del camino, realizan un bloqueo a la altura del puente de Bajo Grande, en Cerro Punta, impidiéndoles el paso.
- MARTES 18** La presidenta Mireya Moscoso viaja a la ciudad de Miami, EE.UU., para participar de la cumbre ministerial del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Allí, el representante de Comercio Exterior de ese país anuncia que en el segundo trimestre de 2004 comenzarán las negociaciones para firmar un TLC con Panamá y que el mismo incluirá requerimientos anticorrupción.

SÁBADO 29 Más de 500 personas de todo el país –entre ecologistas, miembros del SUNTRACS, estudiantes de la Facción Biológica Revolucionaria– participan vestidos de verde de los desfiles conmemorativos de la independencia de España en Boquete, provincia de Chiriquí, donde manifiestan su rechazo a la construcción de la carretera Cerro Punta-Boquete y gritan consignas contra el gobierno denunciando los daños al medio ambiente que promueve.

DOMINGO 30 El Consejo de Gabinete otorga a la Junta Directiva de la CSS y a la administración de esa institución poderes ilimitados para que inviertan los fondos de los asegurados en el mercado de inversiones.

DICIEMBRE

MIÉRCOLES 3 Se inicia la primera fase de la construcción de la carretera Cerro Punta-Boquete.

VIERNES 5 La presidenta Mireya Moscoso y su par estadounidense George W. Bush acuerdan telefónicamente iniciar las negociaciones para un TLC bilateral en abril de 2004.

MIÉRCOLES 17 La empresa Los Estrechos SA suspende el inicio de ejecución del proyecto hidroeléctrico para el embalse del río Cobre, en los distritos de Las Palmas y La Mesa, provincia de Veraguas, argumentando no haber podido entablar un diálogo con los miembros del MOCAMDERCO, quien se opone a la realización del proyecto para evitar que sus tierras sean inundadas.

SÁBADO 20 En el día en que se cumplen 14 años de la invasión norteamericana al país, se realizan diversas protestas. El Movimiento Nacional por la Defensa de la Soberanía (MONADESO) realiza una marcha por la capital, desde el Parque Porras hasta la Plaza 5 de Mayo, donde intentan realizar un mitin frente a la embajada de EE.UU., pero la policía se los impide, produciéndose forcejeos. En tanto, integrantes del SUNTRACS, de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), de la ANFACSS y estudiantes protestan en las inmediaciones de la Policlínica de David, rechazando la posible privatización de la CSS.

GLOSARIO DE SIGLAS

ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
ANFACSS	Asociación Nacional de Funcionarios de la Caja de Seguro Social
CCCE	Coordinadora Campesina Contra los Embalses
COFADEPA	Comisión de Familiares de Desaparecidos de Panamá
CONATO	Consejo Nacional de Trabajadores Organizados
CONUSI	Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente

CRUC	Centro Regional Universitario de Colón
CSS	Caja de Seguro Social
FENASEP	Federación Nacional de Servidores Públicos
IN	Instituto Nacional
MIDA	Ministerio de Desarrollo Agropecuario
MOCAMDERCO	Movimiento Campesino para la Defensa del Río Cobre
MONADESO	Movimiento Nacional por la Defensa de la Soberanía
MP	Ministerio Público
OMC	Organización Mundial del Comercio
SUNTRACS	Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares
TE	Tribunal Electoral
TLC	Tratado de Libre Comercio
UNACHI	Universidad Autónoma de Chiriquí
UP	Universidad de Panamá

Puerto Rico

[cronología septiembre-diciembre 2003]

SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 3 Estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) intentan tomar la Rectoría en demanda de una solución a los robos y los problemas de seguridad en el multipisos, a los edificios en mal estado, el cierre del teatro, el museo y partes de la biblioteca, y la falta de cursos y profesores. Además rechazan la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y proponen la creación de un comité contra la privatización en todo el país. Se retiran sin que los reciba ninguna autoridad.

JUEVES 4 El gobierno presenta una nueva estrategia para frenar la ola criminal por la que atraviesa el país. Miles de policías recién graduados serán lanzados a las calles, los que se encuentran en actividad trabajarán 12 hs al día y activaran a cientos de cadetes para trabajar en áreas recreativas.

MARTES 9 Residentes del sector San Pedro de Macorís protestan en demanda de mayor seguridad frente a los 55 asesinatos registrados en la zona, en momentos en que la gobernadora Sila María Calderón participa de la inauguración de las obras de canalización del Río de Guayanilla.

Los miembros de la Federación Universitaria Pro Independencia (FUPI) toman el nuevo estacionamiento en el Recinto de Río Piedras de la UPR para protestar por el cobro y la privatización de la instalación. También rechazan el proceso de privatización de los servicios académicos que se planifica en el Recinto.

MARTES 16 Un grupo de estudiantes del Frente Universitario por la Desmilitarización y Educación (FUDE) del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la UPR levanta un campamento paralizando los trabajos de reconstrucción de uno de los antiguos edificios del programa universitario de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en demanda de que ese edificio se utilice para otros propósitos y que la plata destinada a ese proyecto se invierta en otras necesidades más urgentes.

MIÉRCOLES 24 Estudiantes y padres de al menos 4 escuelas públicas del país paralizan las clases por diversos problemas que van desde la falta de director y desbordamiento de aguas usadas hasta el hacinamiento en los salones y la inseguridad.

MARTES 30 Más de 50 habitantes de Ponce marchan por las calles del casco urbano en contra del alcalde del lugar por haberlos desalojado de sus viviendas. Reclaman que les permitan volver a sus casas o que les ofrezcan alguna alternativa.

OCTUBRE

DOMINGO 5 Miles de personas convocadas por el grupo Unidos por la Vida marchan por Hato Rey en reclamo de justicia y paz en medio de la ola de criminalidad por la que atraviesa el país.

MIÉRCOLES 8 Estudiantes, trabajadores y profesores de la UPR convocados por el Comité Universitario en Contra de la Privatización marchan desde la plaza Baldorioty de Castro hasta las oficinas administrativas universitarias en rechazo del proceso de privatización de la casa de estudios.

JUEVES 16 Unos 200 estudiantes y padres de la escuela intermedia urbana Manuel Bou Galí (Corozal) realizan un piquete frente al plantel en apoyo al maestro de estudios sociales Armando Pérez, es delegado de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) en la escuela, que fue suspendido sin goce de sueldo por un año por el secretario de Educación por instar a los demás maestros a participar de piquetes y desconocer la autoridad de la Directora escolar. La policía interviene la protesta dejando a 7 manifestantes heridos.

LUNES 20 Los comerciantes que proveen alimentos a los comedores escolares del Departamento de Educación de San Juan realizan un paro y una concentración frente a las oficinas de la agencia gubernamental en Hato Rey para exigir el pago de una deuda millonaria que el gobierno tiene con ellos.

MIÉRCOLES 22 La Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos (HIETEL) protesta frente a las oficinas centrales de la Puerto Rico Telephone (PRT) en demanda de la renovación del contrato colectivo de trabajo.

NOVIEMBRE

DOMINGO 9 Pedro Rosselló y Luis Fortuño del Partido Nuevo Progresista (PNP) se convierten en la dupla que enfrentará a Aníbal Acevedo Vilá y a Roberto Prats del Partido Popular Democrático (PPD) en las elecciones generales de 2004.

- MARTES 18** El Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques realiza una protesta frente a la sede Nacional de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. en Vieques para exigir una mayor participación en las discusiones que se llevan a cabo sobre el futuro de las tierras que fueron usadas para propósitos militares.
- MARTES 25** Un grupo de 15 estudiantes y 2 profesores del RUM de la UPR y pertenecientes al FUDE ocupan por 90 minutos la oficina del rector de esa institución como parte de la protesta en contra de la permanencia de un programa de ciencias militares.
- MIÉRCOLES 26** La Alianza Puertorriqueña por la Paz, junto a familiares de varios soldados, realiza una conferencia de prensa en la sede de la Federación Puertorriqueña de Trabajadores, en donde reclama el regreso de las tropas enviadas a Irak y anuncia el inicio de una intensa campaña en reclamo por la paz y la desmilitarización de Puerto Rico.

DICIEMBRE

- MIÉRCOLES 10** En San Juan se reúne la Conferencia Anual del Consejo de Legislaturas Estatales de la Región Este de EE.UU. (CSGERC) en la cual unos 40 legisladores aprueban de forma unánime una resolución para que Puerto Rico sea la sede de la Secretaría General del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
- DOMINGO 14** El Congreso Nacional Hostosiano (CNH) se opone a que Puerto Rico se convierta en la sede del ALCA porque constituye una seria amenaza a las economías de América Latina.
- LUNES 15** La Federación de Taxistas realiza una manifestación en el Aeropuerto Internacional de Isla Verde en protesta por una reducción en las tarifas, que disminuirían de un 30 a 40% sus ingresos. Por la tarde levantan la medida luego de alcanzar acuerdos temporales con la Compañía de Turismo (CT) que contempla el aumento de 10 pesos para las tarifas.

GLOSARIO DE SIGLAS

AEE	Autoridad de Energía Eléctrica
ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
CNH	Congreso Nacional Hostosiano
CSGERC	Conferencia Anual del Consejo de Legislaturas Estatales de la Región Este de EE.UU.
CT	Compañía de Turismo
FMPR	Federación de Maestros de Puerto Rico

FUDE	Federación Universitaria por la Desmilitarización y Educación
FUPI	Federación Universitaria Pro Independencia
HIETEL	Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos
PNP	Partido Nuevo Progresista
PPD	Partido Popular Democrático
PRT	Puerto Rico Telephone
RUM	Recinto Universitario de Mayagüez
UPR	Universidad de Puerto Rico

República Dominicana

[cronología septiembre-diciembre 2003]

SEPTIEMBRE

- MIÉRCOLES 3** La Unión Nacional de Choferes Sindicalizados Independientes (UNACHOSIN), la Confederación Nacional de Transportistas (CONATRA) y la Federación Nacional del Transporte la Nueva Opción (FENATRANO) de San Cristóbal, en paro desde el domingo pasado por la disputa de una ruta, incendiaban dos colectivos que prestan servicio pese a la medida. Son detenidos 29 choferes, entre ellos el dirigente Juan Hubieres.
- SÁBADO 6** El transporte de Santo Domingo comienza a normalizarse luego de varios días de conflicto.
- LUNES 8** La FENATRANO realiza un paro de 24 hs para reclamar la libertad de su dirigente, Juan Hubieres. Son detenidas unas 20 persona y Santo Domingo es militarizada. A la FENATRANO se le retira la asignación de la ruta Villa Mella-La Feria. El transporte interurbano también es afectado con la paralización de decenas de rutas desde las regiones Este, Norte y Sur del país. Son incautadas unas 400 unidades.
- JUEVES 11** El gobierno elimina el recargo cambiario del 5% a las exportaciones hacia Haití.
- MIÉRCOLES 17** El Colegio Médico Dominicano (CMD) paraliza los hospitales y centros asistenciales del Distrito Nacional (DN) y solo atienden los servicios de emergencia. Demandan que el gobierno abone los sueldos puntualmente y de un solo pago, entre otras cosas.
- JUEVES 18** El CMD levanta el paro tras lograr un acuerdo con el gobierno en el cual los huelguistas obtienen 11 de las 21 demandas presentadas, como la remodelación de las áreas de emergencia y el pago de los incentivos atrasados.
- LUNES 29** Los residentes del sector Nuevo Amanecer, Km 18 de la autopista Duarte, protestan con cortes de calles en rechazo a los apagones. La policía reprime y un joven resulta muerto.

MARTES 30 La Coordinadora de Organizaciones Populares, Sindicales y Choferiles paraliza las actividades educativas, comerciales y de transporte en Barahona, San Francisco de Macorís (SFM) y Santo Domingo, entre otras, en demanda del cese de los apagones, contra el alto costo de vida y la política económica del gobierno. Una mujer muere a causa de los gases lacrimógenos lanzados por la policía. Resultan 5 heridos, 2 de ellos policías y hay más de 20 detenidos.

OCTUBRE

MIÉRCOLES 1 El estado asume el control de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) y de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR). El contrato incluye un desembolso de 15 millones de dólares por parte del gobierno a UNION FENOSA. El gobierno asume 362 millones de dólares en deudas que tienen las empresas con otras entidades.

Los habitantes de distintos barrios, comunidades rurales y sectores populares de Moca, en Espaillat, protestan contra los apagones y el alto costo de vida, entre otras cosas. Las protestas son coordinadas por el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), el Movimiento Popular Mocano y la Coordinadora de Lucha Popular de la Provincia. Por la noche la policía patrulla la zona.

JUEVES 2 El CMD realiza una huelga por 48 hs en los hospitales de la Secretaría de Salud Pública y del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) en el DN. Demandan un alza salarial del 100%, el pago mensual a los médicos y la entrega de medicamentos y material descartable, entre otras cosas. También protestan en Cristo Rey, La Fe y Capotillo.

República Dominicana es incluida en el Tratado de Libre Comercio (TLC) que EE.UU. negocia con Centroamérica.

MARTES 7 Los docentes y administrativos integrantes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) paralizan sus tareas por 48 hs en todas las escuelas y liceos de SFM en demanda del pago de los incentivos y de un aumento de tanda horaria de los docentes que solo tienen una.

El senado aprueba el recargo del 2% a las importaciones.

MIÉRCOLES 8 El gobierno ajusta el impuesto a los combustibles en el mercado interno, por pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI), a causa de la inflación. Se percibe un aumento en el precio de los mismos.

MARTES 14 Decenas de personas obstruyen las calles de diversos barrios de SFM en protesta por los apagones. La policía dispara al aire en el barrio San Martín y los manifestantes continúan la protesta en la parte baja del barrio.

- DOMINGO 19** El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) realiza un plebiscito para establecer si sus miembros aceptan o no la reelección presidencial. Solo el 6% vota a favor.
- MIÉRCOLES 22** El senado aprueba en segunda lectura el proyecto de ley que dispone el cobro del 2% a las importaciones y que aumenta de 10 a 20 dólares el impuesto de salida del país.
- DOMINGO 26** El CMD firma un acuerdo con el gobierno por medio del cual el presidente Mejía se compromete a aumentar los sueldos del sector, entre otras cosas.
- MARTES 28** Los habitantes del norte de Santiago y del Municipio de Licey al Medio protestan en contra de los apagones y son paralizadas las actividades comerciales y de transporte. Se producen enfrentamientos con la policía, donde resultan 4 personas heridas.

NOVIEMBRE

- MARTES 4** El senado aprueba el proyecto de ley que establece la contribución solidaria transitoria de un 5% sobre las exportaciones de bienes y servicios nacionales.
- VIERNES 7** Los habitantes del ensanche de Espaillat, en Santo Domingo, Santo Domingo Este, el DN y otras provincias protestan en demanda de una mejoría en el suministro eléctrico. Se producen choques con la policía resultando 2 muertos y varios detenidos, entre ellos varios dirigentes de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) y del Colectivo de Organizaciones Populares.
- SÁBADO 8** En la Capital y otras ciudades del país se despliega un fuerte operativo policial para intimidar a quienes pretendan sumarse a la huelga del día 11 bajo el pretexto de buscar armas de fuego. Los organizadores del paro del próximo martes dicen que se ha incrementado la represión en su contra y denuncian la detención de al menos 10 de sus miembros.
- DOMINGO 9** Las fuerzas armadas apresan a unas 106 personas relacionadas con la protesta organizada para el día 11 por la Coordinadora para la Unidad y la Lucha.
- MARTES 11** La Coordinadora para la Unidad y la Lucha, que aglutina a 7 organizaciones populares, realiza un paro nacional por 24 hs quedando suspendidas las actividades comerciales, industriales, de transporte, docentes y administrativas, en rechazo a la política económica del gobierno. Exigen la rebaja y congelación de los precios de artículos básicos, la solución definitiva de los apagones, aumento salarial para empleados públicos y privados y la rebaja en el precio de los combustibles, entre otras cosas. La policía reprime las protestas resul-

tando 7 personas muertas, más de 50 heridos y más de 1.200 detenidos. Gran parte del país permanece sin energía eléctrica. Las calles son patrulladas por policías y las fuerzas armadas. La Coordinadora denuncia que la policía nacional realizó disparos, violentó el local donde estaban reunidos los miembros del comité organizador del paro y detuvo al dirigente de FALPO. Previamente se produjo un apagón en la zona.

MIÉRCOLES 12 El presidente Mejía dispone el pago de 30 millones de dólares para pagar la deuda contraída por el gobierno con las generadoras de electricidad para disminuir la frecuencia de los apagones.

MARTES 18 El senado aprueba en segunda lectura el proyecto de ley que establece una contribución solidaria transitoria de un 5% sobre ingresos brutos provenientes de las exportaciones de bienes y servicios nacionales.

MIÉRCOLES 19 El FMI suspendió la ejecución del acuerdo stand by hasta comprobar si lo firmado entre el gobierno dominicano con UNION FENOSA afecta o no los topes establecidos al endeudamiento público y al déficit fiscal del gobierno.

DICIEMBRE

LUNES 1 El gobierno se propone aplicar más impuestos en la economía para cumplir con las exigencias del FMI, entre los que figura la aplicación de la base del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS). El FMI no acepta negociar si el presupuesto nacional no está aprobado.

MARTES 2 La ADP inicia un paro por 48 hs en las escuelas y liceos públicos de Santiago en demanda de la reposición de varios maestros que han sido cancelados y el pago de sus sueldos a 150 docentes, entre otras cosas, y marcha hasta la Subsecretaría de Educación. La medida también afecta a los municipios de Licey, Tamboril y Navarrete.

VIERNES 12 El presidente Mejía anuncia la conclusión de las negociaciones con el FMI para la firma de un acuerdo, y el envío del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos, que incluye una proyección de ingresos presupuestario del año próximo y dos impuestos nuevos convenidos con el Fondo.

LUNES 15 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concede como parte del acuerdo con el FMI un préstamo de emergencia por 200 millones de dólares para contrarrestar los ajustes de la economía y para que el gobierno pague sus deudas con los generadores de electricidad. Es el cuarto préstamo que el BID realiza en el cuatrimestre.

- MARTES 16** El Consejo Nacional de Desarrollo aprueba el Presupuesto y Ley de Gastos Públicos por 120.927,5 millones de pesos dominicanos, el cual incluye la reducción de 9 mil millones de pesos en las partidas destinadas a los gastos. El nuevo acuerdo de estabilización económica, que ratifica las medidas impositivas vigentes desde mediados del año, aumenta el impuesto selectivo a las bebidas y al tabaco, entre otras cosas. La carta de intención se espera que sea aprobada en los próximos días.
- VIERNES 19** República Dominicana y Centroamérica acuerdan acelerar medidas para facilitar el TLC con EE.UU. y las negociaciones con la Unión Europea (UE).

GLOSARIO DE SIGLAS

ADP	Asociación Dominicana de Profesores
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CMD	Colegio Médico Dominicano
CNTU	Central Nacional de Transportistas Unificados
CONATRA	Confederación Nacional de Transportistas
DN	Distrito Nacional
EDENORTE	Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDESUR	Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur
FALPO	Frente Amplio de Lucha Popular
FENATRANO	Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción
FMI	Fondo Monetario Internacional
IDSS	Instituto Dominicano de Seguros Sociales
ITBIS	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios
PRD	Partido Revolucionario Dominicano
SFM	San Francisco de Macorís
TLC	Tratado de Libre Comercio
UE	Unión Europea
UNACHOSIN	Unión Nacional de Choferes Sindicalizados Independientes

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Fuentes: diarios Hoy, Listín y El Nacional.*

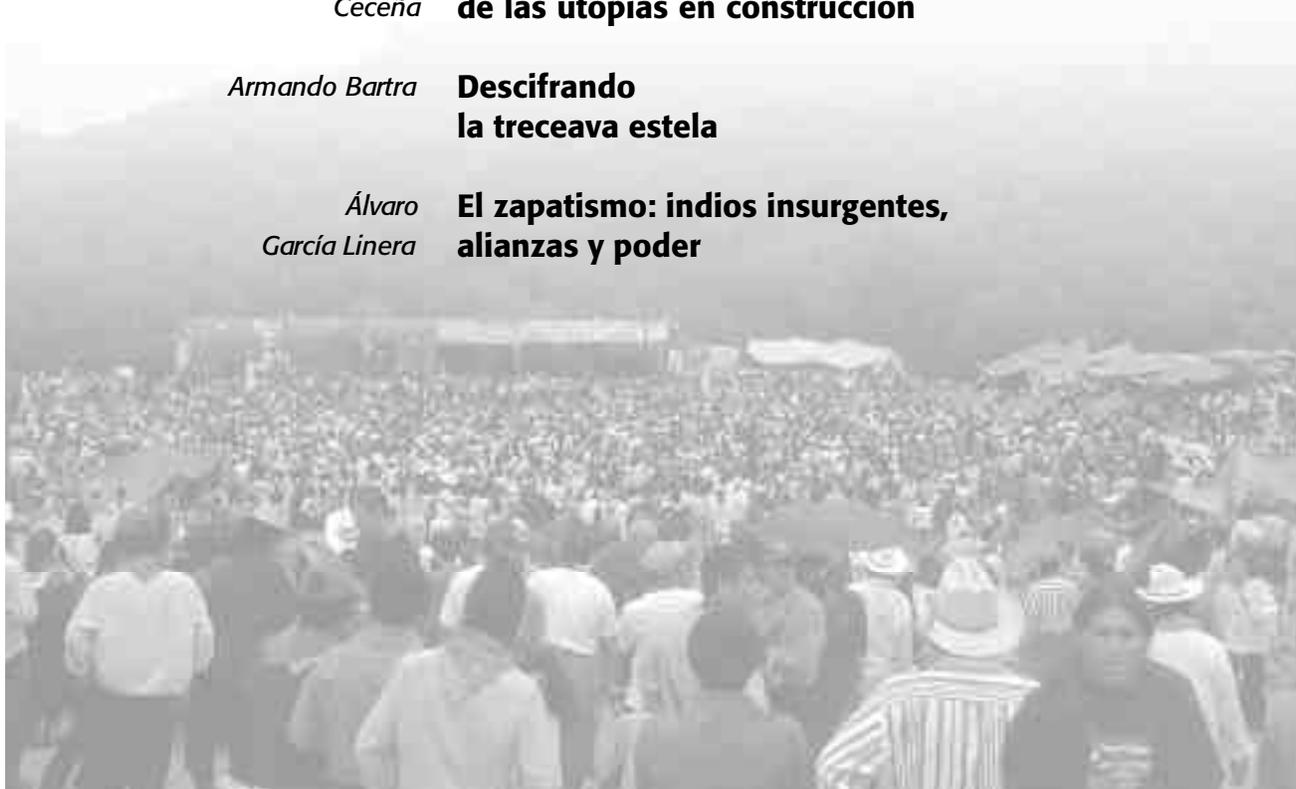
Debates

A diez años del levantamiento zapatista

*Ana Esther
Ceceña* **20, 10 y la historia infinita
de las utopías en construcción**

Armando Bartra **Descifrando
la treceava estela**

*Álvaro
García Linera* **El zapatismo: indios insurgentes,
alianzas y poder**



20, 10 y la historia infinita de las utopías en construcción

Ana Esther Ceceña*

* *Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Coordinadora del Grupo de Trabajo Hegemonías y Emancipaciones de CLACSO. Directora de la revista Chiapas.*

En la mañana del 1° de enero de 1994 aparecían en los noticieros de televisión unas extrañas escenas de indígenas encapuchados corriendo por las calles de San Cristóbal de Las Casas, en las montañas de Chiapas, para tomar el Palacio de gobierno y lanzar desde los balcones de la plaza central ni más ni menos que una declaración de guerra al gobierno mexicano. Estos extraños personajes, que salían inopinadamente de la larga noche del neoliberalismo, llamaban a los mexicanos a sumarse a su movimiento contra “los ricos y el Estado” porque “hace falta darle la pelea en todos los frentes de lucha”. Es decir, no llamaban a formar un único frente sino a confluir en la lucha.

¿Quiénes eran esos ilusos que osaban levantarse contra un ejército, un Estado y todos los poderes encubiertos detrás de ellos? Con un vocero que hablaba como intelectual en una reunión universitaria y no *arengaba a las masas*, que explicaba pausadamente

las causas de esta sorprendente rebelión que, a primera vista, parecía salida de otro tiempo y de otra historia.

Vivir por la patria o morir por la libertad, como lema de una rebelión en un mundo que disolvía fronteras y negaba los significados específicos, hacía pensar en un total anacronismo. Una impropiedad después de la caída del Muro de Berlín cuando todos los sueños transformadores parecían cancelados. Pero qué emocionante era sentir que nuestros cuerpos, lastimados por la individualización y soledad que el neoliberalismo derramaba, se henchían de alegría al ser interpelados por esa *ilógica e insensata* rebelión. Al ver esos aparentemente absurdos personajes, al ir sintiendo desde dentro de nosotros mismos cómo crecía esa fuerza libertaria adormecida –o debilitada– por el fin de la historia y su arrogante despliegue de certezas y disciplinas, empezamos a percibir que no estábamos solos y que no lo estaríamos nunca más.

Eso fue en un primer momento el levantamiento zapatista: un terremoto que volvió a su lugar las emociones y los sentidos de la realidad, a contramano de teorías y representaciones ilusorias construidas desde los medios de comunicación, las academias y las prácticas políticas.

Estábamos frente a un acontecimiento inusitado: el corazón del sistema se trasladaba desde las grandes fábricas y los sectores obreros en los centros industriales hacia sus extremos.

La fractura del sistema estaba encontrando otras rutas, otras explicaciones y nuevos horizontes. Nuestras utopías libertarias también: era la llamada de alerta para detener el proceso de destrucción en el que estábamos insertos y que ayudábamos, aun involuntariamente, a reproducir todos los días; era la llamada para iniciar la reconstrucción de la humanidad¹.

Como diría en ese momento Antonio García de León, "... en la medida en que proliferaban los comunicados rebeldes, nos fuimos percatando que la revuelta en realidad venía del fondo de nosotros mismos..." (García de León, 1994: 14).

Cuando se constituyó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en las montañas y selvas de Chiapas, el 17 de noviembre de 1983, México –y América Latina– estaba en pleno remate de su patrimonio: casi mil empresas estatales privatizadas (de 1.155), la mayoría en condiciones de buen rendimiento; rescate de las empresas privadas quebradas para sanearlas con presupuesto de la nación; cambio de legislaciones para propiciar la apropiación particular de recursos anteriormente considerados patrimonio colectivo, incluso estratégico. Aquí empezaba el fin de la historia: las mie-

**“Y fue así
como
los herederos
de Zapata,
invisibles,
empezaron
su tarea
de mestizaje,
politización,
organización
y crecimiento.
Mientras
el gobierno
privatizaba,
ellos
socializaban”**

les inalcanzables del capitalismo se convertían en discurso de verdad mientras las naciones y las miserias cotidianas no eran más que ficción. La década perdida que expropió gran parte del sustento material colectivo de los mexicanos fue el contexto en el cual los pueblos de Chiapas, junto con los integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional, entendieron que no había más camino. Que era necesario construir uno nuevo. Y fue así como los herederos de Zapata, invisibles, empezaron su tarea de mestizaje, politización, organización y crecimiento². Mientras el gobierno privatizaba, ellos *socializaban*.

Diez años en la oscuridad de las montañas y las selvas fueron el terreno de preparación de la rebelión y de creación de una nueva concepción de la lucha, de la vida y de las utopías. Diez años que culminaron con la toma de cinco ciudades del estado de Chiapas el 1° de enero de 1994 después de que en 1992, como para conmemorar los 500 años del despojo y las masacres perpetradas por los españoles y portugueses en tierras americanas, se aprobara una ley que negaba los derechos comunitarios y colectivos de los pueblos a la tierra³.

Una década más tarde el país ingresa a la OCDE, el club de los ricos, y firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte mediante el cual delega buena parte de su soberanía en el organismo trinacional comandado por Estados Unidos. Es entonces el momento de la verdad: los mexicanos mueren todos los días de enfermedades curables y el país se desangra por miles de caminos (Subcomandante Insurgente Marcos, 1994: 49-66). El Ejército Zapatista de Liberación Nacional decide lanzarse a la guerra por desesperación (Subcomandante Insurgente Marcos, 2003[b]) y detener, de una vez por todas, el saqueo de nuestras riquezas naturales (EZLN, 1994: 33-35). Y ahí es donde la historia comenzó a darse vuelta: no había tocado fin sino que era infinita y empezó a explotar por todos lados⁴. El neoliberalismo –¿y con él el capitalismo?– estaba tocando fondo.

Diez años más tarde, celebrando la constitución de las Juntas de Buen Gobierno como instancias de autogestión comunitaria, México se encuentra más comprometido que nunca, ya no con el neoliberalismo solamente, sino con la política neofascista emprendida por Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001. La integración norteamericana comprende la cesión de la seguridad regional a instancias estadounidenses, que son las que marcan las reglas y ejercen directamente la vigilancia y represión llamada anti-terrorista o antinarcóticos. Agentes de la DEA⁵ y del FBI⁶ actúan directamente en territorio mexicano subordinando a las instancias mexicanas correspondientes y las políticas regionales se diseñan en Estados Unidos. México se ha convertido en un país ocupado.

El gobierno cede terreno y jurisdicción y la Nación se desdibuja, no hay política de Estado porque el Estado está en un rápido proceso de disolución y la sociedad ha comenzado a entender que la única alternativa es la autogestión.

En este contexto, ya que “en la neo empresa ‘estado-nacional.com’ el arte de la política no sirve más” (Subcomandante Insurgente Marcos, 2003[c]), las comunidades zapatistas refuerzan su soberanía y detienen, con su lucha, el desmoronamiento de territorio, política y cultura por lo menos en las zonas bajo su jurisdicción. La autonomía en versión zapatista, ya en práctica desde 1994, adquiere figura institucional con la fundación de las Juntas de Buen Gobierno.

Inicia una nueva etapa de esta lenta construcción del nuevo mundo que hizo a los zapatistas organizarse hace 20 años, declarar una guerra hace diez y fundar sus instituciones de gobierno en agosto de 2003. A los innumerables desafíos que acompañan un proyecto de transformación tan profundo como el zapatista se agregan hoy nuevos retos. Diez años ha sido poco tiempo para madurar discusiones y perfilar alternativas, aunque hay sin duda muchas nuevas experiencias y reflexiones en este sentido. Sin embargo, si en el mundo no caben todos los mundos la idea zapatista de crear una nueva cultura política pierde sustento; es decir, hacer posible el sueño zapatista requiere zanjar discusiones, entre otros, con buena parte de la izquierda que tiene otras visiones y otras prácticas. La construcción del nuevo mundo es imposible en soledad; la humanidad toda deberá verse involucrada en este proceso. ¿Cuál es la mejor (o las mejores) manera de propiciar ese encuentro sin dejar de mantener diferencias y especificidades? ¿Cómo se podrá ir haciendo en el proceso ese nuevo mundo siempre en construcción? ¿Cuáles son las diferencias de visión que profundizan divergencias y desencuentros? Sólo la praxis de los movimientos, de los pensadores, de los tejedores comunitarios y del enfrentamiento con el sistema de poder vigente podrá ir desentrañando esos interrogantes, no obstante, pensando en los diez años por venir, vale la pena apuntar algunos que aparecen como obstáculos al entendimiento mutuo entre quienes aseguran luchar por la construcción de ese otro mundo o que resurgen a partir del cambio de tónica de la política mundial.



El cambio de rumbo –o por lo menos de tónica– en la política mundial parece estar indicando la transición a una nueva fase del capitalismo. El replanteamiento de las funciones de las fronteras políticas que fue indispensable para reorganizar los flujos de capital y rediseñar las relaciones de dominación sobre el mapa mundial parece haber resuelto, a través de la reconstitución del carácter de los mercados, los obstáculos a la competencia y apropiación de recursos. Las condiciones de valorización del capital, con capacidades incrementadas y diversificadas por la llamada revolución informática, se han reconstituido en escalas planetarias nunca antes alcanzadas. El capital transitó muy exitosamente del ámbito internacional al planetario y en términos de competencia logró restablecer las alianzas y las jerarquías hasta un punto que le permite garantizar una cierta estabilidad en ese campo.

Sin embargo, su redimensionamiento planetario y su capacidad de manejo del mercado mundial en los ámbitos locales han despertado resistencias y rechazos como nunca antes en su historia. La obtención de ganancias y el mantenimiento de la hegemonía saltaron el obstáculo de legislaciones proteccionistas y soberanías nacionales pero no logran doblegar a los pueblos. Más bien las resistencias se han fortalecido abriendo nuevas modalidades de lucha en las que se distancian de instituciones políticas anacrónicas y ajenas. Con todas las contradicciones existentes en la arena internacional, los Estados son disciplinables⁷. No así los movimientos, grupos, comunidades y pueblos dejados de lado por el sistema político y capaces de rebelarse mediante revueltas impredecibles para el poder.

Esto conduce a la necesidad de plantearse el restablecimiento de condiciones para la valorización del capital ya no por medios propios de la economía sino de la fuerza y explica gran parte del despliegue militar y policiaco-militar en todo el planeta.



En estas nuevas circunstancias parece necesario revisar las estrategias. Quizá para reafirmarlas pero con previsiones distintas. ¿Hasta dónde la autonomía en ejercicio puede constituir un freno a las nuevas fuerzas y estrategias del poder? ¿Hasta dónde la resistencia civil podrá ir vaciando al monstruo? ¿Qué tipo de resistencia civil y cómo puede ir construyendo, simultáneamente, ese otro mundo por el que lucha? ¿Será necesario enfrentar armas con armas? En ese caso, ¿cómo no convertirse en lo mismo que se repudia? ¿Cómo mantener la mira en ese horizonte de diálogo e intersubjetividad propuesto por el zapatismo?⁸

Una de las cuestiones más debatidas con respecto a la experiencia zapatista se refiere al carácter comunitario de sus poblaciones y al establecimiento de la autonomía, gobiernos colegiados y prácticas de construcción de consensos que, si bien son producto de una revisión crítica de la historia política y de una visión del mundo y de la revolución innovadora y profundamente democrática, lo son también de tradiciones y costumbres heredadas y recreadas en un ámbito específico, difíciles de reproducir universalmente. Esto es, si la propuesta es la autogestión, suponiendo un tejido comunitario previo o concomitante que la haga posible, ¿cómo puede pensarse la comunidad en espacios físicos, políticos y culturales completamente distintos a los zapatistas? O ¿es posible concebir la autogestión sin comunidad?

Como la respuesta a esta última pregunta parece ineludiblemente negativa, el punto sería ¿qué tipo de comunidades pueden crearse en ambientes urbanos? ¿Cuáles en dimensiones internacionales o intercontinentales? ¿Es la comunidad una figura local? ¿Será que cualquier tipo de comunidad es propicia para la autogestión? ¿Hasta dónde las comunidades creadas en ámbitos autoritarios son reproductoras del autoritarismo⁹? ¿Qué hace a una comunidad propicia para el establecimiento de autonomías? ¿Se

requiere asegurar la autosubsistencia o pensar en comunidades holísticas? ¿Es la auto-sustentabilidad lo que hace a una comunidad propicia para la autogestión? Y, en ese caso, ¿cómo replantarse las relaciones intercomunitarias?

La autonomía y las Juntas de Buen Gobierno instaladas por los zapatistas, de acuerdo con sus propuestas de construir gobiernos que manden obedeciendo, con cargos rotativos, no remunerados y no *profesionalizados*, constituyen un auténtico desafío que, por un lado permite ir experimentando esa nueva cultura política para gobernarse sin reproducir relaciones de poder y dominación y, por otro, permite darle la vuelta al posibilismo avanzando ya en la construcción de una sociedad distinta en vez de atorarse tratando de combinar epistemologías políticas que se repelen como el agua y el aceite.

La imagen de los caracoles expresa bien el doble trabajo que está implícito en esta nueva fase. El verdadero reto, más que resistir la dominación, es construir el nuevo mundo en el interior de las comunidades.

La generosidad de esas comunidades de indígenas pobres pero íntegros y dignos ha sido una de las mayores aportaciones que ha recibido la humanidad en un momento de mezquindades y competencia. La generosidad de una organización política que se atreve a situarse de lado para que todos puedan caber es algo que tendrá que valorarse a la distancia, todavía no suficiente, que nos aparte de genuinos o lastimosos compromisos con la coyuntura. Lo que es indudable es que esa generosidad, y la manera zapatista de entender el mundo y sus avatares, son herramientas fundamentales para desatar un nuevo horizonte para todos.

Que su caminar siga preguntando y abriendo rutas y puentes. Que nuestro andar siga al lado del suyo para "que la pluma sea también una espada, y que su filo corte el oscuro muro por el que habrá de colarse el mañana" (Subcomandante Insurgente Marcos, 2003[a]).

Bibliografía

- Ceceña, Ana Esther 1997 "Neoliberalismo e insubordinación", en *Chiapas* (México: ERA-IIEc) N° 4.
- EZLN 1994 "Declaración de la Selva Lacandona", en *EZLN Documentos y comunicados* (México: ERA) 33-35.
- García de León, Antonio 1994 "Prólogo", en *EZLN Documentos y comunicados* (México: ERA).
- Le Bot, Yvon 1997 *Subcomandante Marcos. El sueño zapatista* (México: Plaza y Janés).
- Lins, Paulo 2002 *Ciudad de Dios* (Barcelona: Tusquets).
- Muñoz Ramírez, Gloria 2003 *20 y 10 el fuego y la palabra* (México: Rebeldía-La Jornada).

Subcomandante Insurgente Marcos 2003[a] *Encuentro internacional En defensa de la humanidad*. Discurso videograbado. Se puede consultar en <http://www.jornada.unam.mx/007n1pol.php?printver=1&fly=1>

Subcomandante Insurgente Marcos 2003[b] "Hay un tiempo para pedir, otro para exigir y otro para ejercer", en Muñoz Ramírez, *Gloria 20 y 10 el fuego y la palabra* (México: Rebeldía-La Jornada).

Subcomandante Insurgente Marcos 2003[c] *La treceava estela* (Chiapas).

Subcomandante Insurgente Marcos 1997 "Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo", en EZLN *Documentos y comunicados* (México: ERA) N° 3.

Subcomandante Insurgente Marcos 1994 "Chiapas: el Sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía", en EZLN *Documentos y comunicados* (México: ERA) 49-66.

Notas

1 De ahí la invitación zapatista a luchar "por la humanidad y contra el neoliberalismo". No al revés. La prioridad es construirnos a nosotros mismos como seres diferentes, desfeti-chizarnos, rehacer nuestras relaciones intersubjetivas, reconstruir nuestras comunidades; ese es finalmente el sendero por el que vamos corroyendo al neoliberalismo y a todo el sistema de dominación (ver Subcomandante Insurgente Marcos, 1997 y Ceceña, 1997).

2 "A mí me reclutó un mi hermano [...] después me dijeron que fuera al campamento que se llama 'Fogón'. Ahí llegué y había sólo siete compañeros insurgentes, entre ellos el Mayor Moisés. En el campamento estuvimos siete días [...] Fuimos aprendiendo poco a poco. Los compas nos daban folletos y nos vamos dando cuenta de la explotación que nos hace el gobierno. Después, ya que entendimos de qué se trata, fuimos reclutando nosotros mismos a nuestro pueblo, poco a poco, hasta que todo el pueblo ya está reclutado y la tarea se hace más fácil". Compañero Raúl, representante regional de los pueblos zapatistas (Muñoz Ramírez, 2003: 28-29). "Empezamos primero a hacer contacto con esas comunidades indígenas, con estos jefes indígenas, y se logró una especie de acuerdo tácito de ayuda mutua, un pacto de convivencia entre el grupo armado y las comunidades, o estos jefes de comunidades [...] Una especie de intercambio: 'enseñennos a pelear y nosotros les ayudamos a obtener abastecimiento'" (Le Bot, 1997: 144).

3 Como prolegómeno a la implantación del TLCAN se modifica la ley sobre tenencia y uso de la tierra, que representaba una conquista revolucionaria lograda en 1914-17, omitiendo la regulación que amparaba las tenencias colectivas. Con el nuevo texto del artículo 27 de la Constitución, dadas las condiciones de empobrecimiento que el neoliberalismo había exacerbado notablemente, se empujaba hacia una desposesión paulatina de los campesinos y, por supuesto, también de los pueblos indios.

4 "... el avance que había tenido el neoliberalismo y la globalización en todo el mundo resultó una sorpresa, porque entonces detectamos no sólo que había avanzado el proceso de destrucción y reconstrucción [...] sino que también había avanzado el nacimiento y el mantenimiento de formas de resistencia y de lucha en todo el mundo [...] habían surgido focos de resistencia en varios lados y se estaban multiplicando. A eso se debe que el

alzamiento haya tenido receptividad en una parte importante de la comunidad internacional, en gente organizada o con ganas de organizarse" (Subcomandante Insurgente Marcos, 2003[b]: 286).

5 Agencia encargada de los asuntos relacionados con redes de narcotraficantes. Su actuación directa en suelo mexicano ocurre desde hace algunos años y comprende la detención de sospechosos que no son juzgados en México sino trasladados inmediatamente a Estados Unidos.

6 Como contraparte de un supuesto tratado de migración entre México y Estados Unidos desde el 1° de enero de 2004 agentes del FBI abiertamente se han hecho cargo de la supervisión de pasajeros en los puertos de salida de México. Revisan las pertenencias, clasifican a los pasajeros e incluso los detienen sin orden previa. Policías estadounidenses deteniendo aviones y pasajeros mexicanos en suelo mexicano, violando las normas constitucionales y de derechos humanos con total impunidad.

7 Entendiendo aquí al Estado en sentido amplio, es decir, como expresión del sistema político en su conjunto: aparatos partidarios, organizaciones gremiales o sociales oficiales, etcétera.

8 En este punto es muy interesante ver hacia qué tipo de respuestas llevan las conceptualizaciones implícitas en la discusión sobre el poder, sobre el imperialismo o el imperio, etc. Evidentemente la forma de concebir el problema indica líneas de acción sobre el mismo y las estrategias de los movimientos se trazan en consecuencia. Por eso es tan importante mantener espacios de discusión que permitan ir avanzando sobre estos temas.

9 Aquí habría que pensar en casos de fuerte cohesión social frente al exterior pero que reproducen, y en ocasiones de manera ampliada, las dinámicas del poder. En este caso se encontrarían grupos como los de las favelas brasileñas o los de colonias populares de asentados que comparten la necesidad de protegerse colectivamente frente a los embates de la policía, por ejemplo, pero que internamente compiten por liderazgos o medios de sobrevivencia (ver, entre otros, Lins, 2002).

Descifrando la treceava estela

Armando Bartra*

* *Director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya AC, miembro del Comité Editorial de la revista Chiapas.*

iCaracoles!

Por si las dudas, las comunidades zapatistas del sureste mostraron de nuevo que ahí la resistencia va para largo. Durante más de dos años y hasta mediados de 2003, del Chiapas rebelde llegaban principalmente noticias del acoso militar a los municipios autónomos y de conflictos entre zapatistas y no zapatistas, todo englobado en una contrainsurgencia que resultaba más ominosa a falta de cualquier otra cosa. La movilización del 1ro de enero en San Cristóbal, y la inauguración de los Caracoles, en agosto, documentaron el lado luminoso de las autonomías de hecho: la capacidad de los pueblos para organizar la vida toda, no en una comunidad, en un extenso territorio. Ámbito que se extiende sobre cerca de 600 comunidades de los Altos, la Selva y la zona Norte ubicadas en 35 de los municipios Constitucionales de Chiapas.

La noticia que puso al zapatismo de nuevo a la ofensiva fue que "los pueblos indígenas... organizados en el EZLN

han preparado una serie de cambios que se refieren a su comportamiento interno y a su relación con la sociedad civil” (Comunicado CCRI-CG EZLN, 19 de julio de 2003). Las mudanzas van en el sentido de consolidar la autogestión en escala regional a través de cinco Juntas de Buen Gobierno (JBG) encargadas de manejar la relación con las entidades fraternas y de supervisar a los consejos municipales. Esto significa que el acceso de la solidaridad a los municipios ya no será a través del EZLN, sino de las JBG, aunque las iniciativas políticas hacia afuera seguirán requiriendo autorización de la comandancia. Es decir, que con las JBG los municipios autónomos se autonomizan parcialmente del EZLN, pues ahora la instancia político-militar se limitará a “vigilar” las juntas y de ser necesario defender a la población; en lo demás, la instancia civil se mandará sola. En contraparte, todo hace pensar que el EZLN intensificará su activismo más allá de Chiapas y los pueblos indios.

Aunque trascendente, la reorganización interna no es en sí misma un viraje. Dijo bien el Congreso Nacional Indígena (CNI) en la inauguración del Caracol de Oventic: se trata de “consolidar y profundizar” un proceso autonómico de hecho que lleva rato. Los municipios zapatistas de las cañadas tienen más de siete años, mientras que la decisión de practicar los Acuerdos de San Andrés, desconociendo el adefesio legislativo del Senado y sin esperar a que la Ley Cocopa sea constitucional, fue tomada por el CNI desde mediados de 2001. En esta tesitura, en octubre del mismo año ocho comunidades indias del Distrito Federal y del Estado de México hicieron una Declaratoria de Bienes Comunales y de Autonomía, y siete de Michoacán firmaron un Decreto del Pueblo Purépecha, de mismo talante. Decisiones donde se prolonga una lucha por las autonomías, que tiene cuando menos un cuarto de siglo de impulsarse adrede y más de quince años de llamarse así. Pero la libre determinación no es exclusiva de los pueblos originarios; con diferentes nombres, ha sido reivindicada por diversos movimientos sociales.

En el México del siglo XX el Estado omnipresente y todopoderoso creó a la sociedad civil a su imagen y semejanza. En un país donde los gobiernos posrevolucionarios imprimían a las organizaciones sociales y ciudadanas un fuerte sesgo corporativo, la lucha por autodeterminarse fue siempre asunto de primera necesidad, y en la segunda mitad de la centuria pasada su ascenso coincidió con el progresivo descrédito del sistema político. De los ‘50 a los ‘70, la palabra “independiente” fue emblema de la oposición democrática: centrales campesinas “independientes”, movimientos por la “independencia” sindical, partidos que se definían por ser “independientes” del poder público, periódicos y revistas “independientes” que no cobraban en la Secretaría de Gobernación. Más tarde, en el último cuarto del siglo, la voz de orden es “autonomía”, que rechaza las servidumbres políticas –como el término “independencia”– pero alude también a la autogestión económica y social: los campesinos “autónomos” rechazan la tutoría estatal y se “apro-

***“Las autonomías
indias [...] radicalizan
aun más
el planteamiento:
porque implican
la libre
determinación
política pero también
porque al remitir
a la historia
su legitimidad [...] fundan su demanda
en un derecho
anterior al Estado
nacional vigente,
y en cierto sentido
exterior al sistema
social hegemónico”***

pian del proceso productivo”, mientras que barrios y comunidades se organizan en torno la dotación autogestionaria de servicios básicos. Las autonomías indias, que se reivindican expresamente desde fines de los '80, radicalizan aun más el planteamiento: en primer lugar porque implican la libre determinación política –el autogobierno–, pero también porque al remitir a la historia su legitimidad –se trata de pueblos originarios– fundan su demanda en un derecho anterior al Estado nacional vigente, y en cierto sentido exterior al sistema social hegemónico.

Al transitar de la independencia política a la autogestión socioeconómica, y de ahí al autogobierno, el concepto de autonomía robustece su sentido de alteridad. Si en un primer momento es un comportamiento sistémico, un modo insumiso de insertarse en el orden existente, en su forma más acabada es un comportamiento anti-sistémico: un modo de resistir, construyendo órdenes alternos desde abajo y a contrapelo. Así, de repeler visceralmente la política unánime, se pasa a la contra-política y de ahí a la anti-política, pero siempre en el modo del catalejo: la forma superior lo es en tanto que conserva, trascendiéndolas, las formas anteriores, sin gremios independientes que reivindiquen lo básico aquí y ahora, sin organizaciones autogestivas que operen producción y servicios populares lidiando cotidianamente con Estado y mercado, sin partidos institucionales capaces de impulsar programas alternativos desde la oposición o el gobierno y en todas las esferas. Sin ellos no sobrevivirán tampoco las experiencias autonómicas más radicales, laboratorios de altermundismo que miren al futuro pero con los pies bien puestos en el presente. Porque sin posibilismo no hay utopía. Porque es bueno ser realistas exigiendo lo imposible, pero también ser utópicos consiguiendo lo posible aquí y ahora.

La autogestión que resiste al autoritarismo es una consigna de prosapia en el siglo XX mexicano, pero en Chiapas adopta formas peculiares, que se describen en la quinta sección de la treceava estela. En primer lugar porque ahí se trata de las bases civiles de una organización militar

que se alzó contra el mal gobierno y formalmente sigue en guerra. En segundo lugar, porque al ser “territorio en rebeldía” no hay “apoyo institucional alguno”, y sí “persecución y hostigamiento”, siendo forzoso autoproverseer de educación, salud, vivienda y alimentación (servicios que en otros ámbitos pueden ser reclamados de las instancias públicas), resolver asuntos de tierra, de trabajo y de comercio, y administrar justicia, todo lo cual genera “constante fricción y enfrentamiento” con las comunidades no zapatistas que comparten el territorio, pues éstas participan a la vez de la vida institucional convencional y de la administración rebelde. En tercer lugar porque, para enfrentar la situación y poder seguir en lucha, el zapatismo cuenta con el apoyo solidario de “cientos de miles de personas” de la sociedad civil.

Ser operada por las bases no armadas de un ejército, en un territorio en rebeldía y con el apoyo de la sociedad civil, hace de la zapatista una autonomía excepcional, donde hasta el nombre de las nuevas instancias –Junta de Buen Gobierno– evidencia que ahí no se reconoce la administración del “Mal Gobierno”. Otras comunidades autogestivas –indígenas o mestizas, urbanas o rurales– resisten en circunstancias no más difíciles pero sí más enredadas, al moverse a la vez dentro y fuera del sistema, confrontando al gobierno pero negociando con él. El espíritu rebelde puede ser el mismo, pero el modo es otro.

La Cooperativa Tosepan Titataniske, de indios nahuatl de la sierra norte de Puebla, por ejemplo, promueve la conversión productiva sustentable y opera el procesamiento y comercialización de café, miel y pimienta orgánicos, pero también se ha ocupado de la infraestructura caminera y eléctrica de la región, así como de abasto, salud, educación y cultura, al tiempo que reivindica los derechos democráticos de la ciudadanía en su modalidad plebiscitaria propia de una zona indígena.

La Tosepan es pues un notable ejemplo de organización autogestionaria, que sin embargo demanda y opera programas públicos, interactuando cotidianamente con el gobierno local, estatal y federal.

Es también una organización económica de productores de café, y como tal forma parte de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOO), que es miembro del Movimiento “El campo no aguanta más” (MCAM), y en ese carácter marchó el 31 de enero en la ciudad de México, negoció con el gobierno federal el Acuerdo Nacional para el Campo, y lo firmó. Además forma parte, con el Congreso Agrario Permanente (CAP), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), El Barzón, y otras, del Frente Sindical Campesino y Social para impulsar la soberanía alimentaria, el empleo, la vida digna y el desarrollo sustentable en el campo y la ciudad, conformado en enero de este año; y después de encontrarse con organizaciones agrarias centroamericanas para debatir el Plan

Puebla-Panamá, impulsó la convergencia multinacional Movimiento Indígena Campesino Mesoamericano (Moicam), fundada en el mes de agosto en Tegucigalpa, Honduras. Recientemente la Tosepan inauguró con fiesta un centro de encuentro, educación, capacitación y cultura llamado Kaltaixpetaniloyan (La casa donde se abre el espíritu), que es una suerte de Caracol poblano, pese a que proviene de una vieja iniciativa propia y la sede se edificó con trabajo de los socios, pero también recursos públicos. Y así, no puras sino contaminadas, no monolíticas sino híbridas y entreveradas, son casi todas las autonomías realmente existentes; así y de muchas otras maneras resisten en rebeldía los que habitan sierras distintas de las chiapanecas. Porque el mundo que queremos y construimos es un mundo donde caben muchos mundos, un mundo donde lo diverso es virtuoso y la fuerza nace de las diferencias.

Por su forma –que no por su espíritu– las autonomías chiapanecas son excepcionales. Y también debieran ser transitorias, porque quienes demandamos una “paz digna en Chiapas” pretendemos que el EZLN pueda continuar su lucha sin necesidad de armas y también abolir definitivamente el cerco político-militar que aprisiona a sus bases civiles, que así podrían seguir resistiendo como las demás comunidades, con un hostigamiento menos extremo. La rebeldía zapatista es ejemplar, pero paradójicamente al apoyarla no buscamos que todas las regiones indígenas se mimeticen con el “comunismo de guerra” de Las Cañadas, sino que los municipios autónomos de Chiapas puedan salir del cruel estado de excepción donde los tiene la pasmada guerra del sureste, y luchar como los demás: con un pie en la institucionalidad sistémica y otro fuera.

Cambio de rumbo

La inauguración de Caracoles y Juntas de Buen Gobierno puede verse también como el revire zapatista a la torpeza del legislativo y a la derrota que sufrimos hace casi tres años las fuerzas democráticas y progresistas del país cuando creímos poder hacer constitucional la Ley Cocopa y reanudar las negociaciones para una paz justa en Chiapas, con movilización popular y una coyuntura donde Fox y su partido necesitaban inaugurar la gestión destrabando la guerra congelada, movimiento al que tendría que sumarse parte del priismo. No pensamos entonces que el PAN decidiera mostrarle a su presidente quién manda en el legislativo mediante una alianza coyuntural con el PRI, que además fue ideológica, pues ambos son racistas. Esto nos derrotó, no la “traición de la clase política” en general, ni menos de la ínfima bancada perredista del senado, cuyo voto a favor en lo general hundió en el descrédito a su partido, pero resultó tan irrelevante para los saldos duros como el voto en contra de la diputación del PRD. En esta batalla perdimos dos cosas: la plena constitucionalidad de los derechos indios, y la pronta pacificación de Chiapas.



Porque llevar a la constitución la Ley Cocopa tiene –o tenía– dos caras: el reconocimiento de un derecho indígena, y el cumplimiento de una de las tres señales demandadas por el EZLN para reanudar el diálogo de paz. Al frustrarse perdimos todos, pero en la primera vertiente perdieron directamente los pueblos originarios, mientras que en la segunda perdió el EZLN, forzado al pasamontañas y las cananas, y perdieron las comunidades en resistencia, condenadas al cerco y la penuria, a “sobrevivir en condiciones de persecución, hostigamiento y pobreza que pocas veces pueden encontrarse en la historia del mundo”, como escribió Marcos.

Respecto de lo primero, el reconocimiento como derecho, el CNI respondió desde hace más de dos años con la decisión de seguir demandando el cambio constitucional, al tiempo que las comunidades ejercen las autonomías de hecho, amparadas en los Acuerdos de San Andrés, pero también en el Convenio 169 de la OIT, del que México es firmante. En lo tocante a la segunda vertiente, el reconocimiento como signo de buena voluntad que abriría paso a una paz digna en Chiapas, el EZLN no ha retirado la demanda de “tres señales” para reanudar el diálogo, pero de hecho asume que las puertas están cerradas: “En nuestro país, la clase política mexicana (donde se incluyen todos los partidos políticos con registro y los tres Poderes de la Unión) traicionó la esperanza de millones y millones... de ver reconocidos constitucionalmente los derechos y la cultura de los pueblos indios”. Y saca las conclusiones pertinentes: “El EZLN decidió suspender totalmente cualquier contacto con el gobierno federal mexicano y los partidos políticos, y los pueblos zapatistas ratifican hacer de la resistencia su principal forma de lucha” (Comunicado del CCRI-CG EZLN, 19 de julio de 2003).

Cuando el EZLN condicionó reanudar el diálogo a que la Ley Cocopa se incorporara a la Constitución y Fox presentó la iniciativa pero el legislativo aprobó una caricatura, que la

Suprema Corte de Justicia de la Nación no invalidó, quedó entrapada la paz, pues a los integrantes de la cámara de origen les quedaban casi seis años, de modo que en el sexenio íntegro del presidente Fox no se cumplirá la principal de las “tres señales”. En estas condiciones, es lógico que dos años después el EZLN suspenda “cualquier contacto con el gobierno federal”, reivindique su “derecho a expresar solidaridad con las luchas justas” (es decir, a hacer política nacional y planetaria), y que las comunidades zapatistas se atrincheren para resistir el cerco por un buen rato. Pero las nuevas posiciones van más allá de un reacomodo táctico, constituyen una rectificación estratégica respecto de las sostenidas durante siete años.

Quienes con la Convención Nacional Democrática (CND) apostaron a las elecciones como vía a un “gobierno de transición, un nuevo constituyente y una nueva constitución”; quienes en los Diálogos de San Andrés iniciaron una negociación de amplio espectro con el gobierno; quienes emprendieron la Caravana de la Dignidad para que los legisladores incorporaran los derechos indios a la Constitución; el ejército que eligió la paz y la participación social como vía para impulsar reformas... hoy consideran que todas las “puertas” están cerradas. Los que en 1994 vieron en el voto una palanca democrática, en 1996 creyeron útil negociar los grandes problemas nacionales con el gobierno y en el 2001 confiaron en que los legisladores aprobarían los derechos indios, en el 2003 renuncian por completo a las vías e instancias institucionales, descreen del diálogo con el poder, decretan la obsolescencia de los partidos, pronostican el colapso del sistema político y se anclan en la resistencia rebelde. Es su derecho. Pero no pueden esperar que todos quienes los acompañaron durante los últimos nueve años se sumen, así nomás, a la nueva estrategia. En todo caso, ponderar la década y sacar conclusiones es tarea compartida, pues no sólo el EZLN protagonizó la lucha, también millones de ciudadanos sueltos y cientos de organizaciones sociales y políticas.

Fin de siglo

Mi balance de la década lo esboqué hace meses en un artículo publicado el 11 de enero de 2003 en el diario *La Jornada*, texto del que Marcos criticó mi defensa a la política que también se hace “desde arriba” y una inexistente apología del PRD, descartando el resto por “frívolo”. Un año después sigo pensando lo mismo, de modo que ofrezco una versión actualizada del texto, como aportación al debate sobre los destinos del zapatismo y de la nación.

El 2003 comenzó en tono mayor: en San Cristóbal de Las Casas veinte mil zapatistas ratificaban la vigencia de su causa, mientras en el puente internacional de Ciudad Juárez

el movimiento bautizado *El campo no aguanta más* repudiaba de nuevo el capítulo agropecuario del tratado comercial de América del Norte. Vamos para una década tanto del EZLN como del TLCAN, y los pendientes del país parecen los mismos. Pero en verdad los mexicanos somos otros. En este lapso la terquedad ciudadana sacó al PRI del gobierno, haciendo presidente a un Vicente Fox mimetizado con el cambio. Y esta misma ciudadanía hoy lo deserta paulatinamente. Paradójicamente, desde hace tres años estamos luchando contra los cambios del gobierno del cambio. La plena apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la inversión privada ha sido frenada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y otras organizaciones sociales que animan el Frente Nacional Contra las Privatizaciones; la reforma fiscal centrada en cargar el IVA a los básicos y las medicinas fue abuchada por la ciudadanía y detenida por los diputados de oposición; la nueva Ley Federal del Trabajo, impulsada por el secretario Abascal, el sindicalismo “charro” y los patrones, está siendo resistida por gremios independientes como los de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT); la política de desnacionalización económica y sumisión acrítica al TLCAN es repudiada por algunos empresarios grandes, todos los pequeños y lo que queda del campesinado; el Plan Puebla-Panamá, punta de lanza del ALCA, ha sido cuestionado por gremios, partidos, gobiernos locales, ONGs, académicos y periodistas; la alianza estratégica con el gobierno estadounidense choca con la proverbial y fundada desconfianza de los mexicanos en un poder que ambiciona nuestros energéticos, maltrata a los “mojados” y quiere embarcarnos en sus guerras.

Y con la resistencia se va delineando la propuesta: reformas al sistema energético en la línea de ponerlo al servicio de las prioridades nacionales, cambios fiscales progresivos que incrementen la captación y disminuyan la dependencia respecto de la renta petrolera, una ley del trabajo que tutele los derechos laborales propiciando la democracia e independencia de los sindicatos, estrategias de desarrollo nacional e integración regional socialmente comprometidas y atentas a nuestras prioridades, políticas agrarias filocampesinas que restablezcan la seguridad alimentaria. El conjunto de estos planteamientos alternos, esbozados por legisladores, partidos, uniones obreras, frentes campesinos, ONGs, y académicos, conforma el borrador de un proyecto de país donde la justicia económica y social sea soporte de la democracia política.

Al hacerse efectivo el sufragio, se comenzó también a desmontar el sistema autoritario. Pero que el PRI haya perdido la presidencia y se haya moderado el uso de la represión política no son los únicos avances libertarios. Otro gran paso es que los “chilangos” del Distrito Federal –casi diez millones de mexicanos hasta hace poco cívicamente minusválidos, pues el jefe del poder ejecutivo federal nombraba al regente de la Ciudad– conquistamos por fin nuestros derechos autonómicos. Y los inauguramos de manera ejemplar escogiendo como primer Jefe de Gobierno a Cuauhtémoc Cárdenas, emblema de

los nuevos combates por democratizar el orden político, y en la siguiente votación eligiendo a otro perredista, López Obrador, hoy por hoy el político mexicano mejor calificado por la opinión pública. En cambio, otros diez o quince millones de mexicanos siguen con sus libertades disminuidas: pese a que desde hace más de diez años la lucha indígena tiene al país



en vilo, aun no se han reconocido constitucionalmente sus derechos. Ascendentes desde los preparativos del 500 aniversario del proverbial encontronazo, las reivindicaciones étnicas son emblema del EZLN desde 1996, cuando encabezan la agenda de los Diálogos de San Andrés, y en el 2000 le dan contenido a la Caravana por la Dignidad Indígena, la más extensa e intensa campaña social por reformar el estado en la historia moderna de México, un inaudito esfuerzo ciudadano por la justicia y la paz. No ha sido en vano: las comunidades recuperaron autoestima, con frecuencia ejercen de facto la autonomía, y con ellas los mexicanos nos reconciamos con la mitad más profunda y lacerada de nuestra herencia. Pero los derechos aun no son constitucionales, y en Chiapas, la guerra, pasmada pero cruenta, continúa.

Durante los últimos nueve años la política mexicana está marcada por la presencia, estentórea o silenciosa, del EZLN: la última insurrección indígena del ciclo que arranca en el XIX y la primera revuelta anticapitalista de nuevo milenio. Pero los alzados de Las Cañadas son también –quizá hasta para ellos mismos– una incómoda paradoja: un ejército que eligió la paz, una fuerza política que rechaza la política, luchadores contra el mal gobierno que no quieren el gobierno, revolucionarios radicales impulsores de reformas: un persistente oximoron. A mi entender, el EZLN ha convocado tres campañas nacionales mayores, con apuestas fuertes y que contenían una vía de pacificación: en 1994, con la CND, buscó comprometer al candidato Cuauhtémoc Cárdenas y su corriente con una vía mexicana a la democracia y la justicia que pasaría por un gobierno de transición, un nuevo constituyente y una nueva constitución. Pero perdimos las elecciones y reventó la Convención. En 1995 y 1996 invitó a una incluyente convergencia social que, con base en la agenda del Diálogo de San Andrés, debía diseñar un proyecto libertario de país y paralelamente negociar las reformas con el poder ejecutivo federal en presencia coadyuvante del legislativo. El proyecto de Ley Indígena fue un enorme primer paso, pero sabotado por el presidente Zedillo, quien no conforme con incumplir lo acordado pateó

la mesa y a punto estuvo de reanudar la guerra. Finalmente, en el 2000, llamó al CNI y todas las fuerzas progresistas del país a una gran movilización por el reconocimiento constitucional de los derechos autonómicos. La caravana logró una enorme convocatoria, tanto social como mediática, y la voz de los indios se escuchó en el castillo legislativo de San Lázaro. Pero la mezquindad de senadores y diputados dio al traste con el intento y el CNI entró en una crisis, no atenuada por su anticlimática apelación al poder judicial (quien por fortuna decidió no intervenir, pues sería muy mal precedente el que un puñado de vetustos magistrados de la Suprema Corte, conservadores por naturaleza y que ocupan el puesto por designación, le enmendara la plana al legislativo –un poder después de todo electo y plural– en su calidad de constituyente permanente).

Impulsar la transición a la democracia y la equidad cuando Cárdenas y el pueblo ganaran las elecciones, sentar al gobierno a negociar la agenda de un México libertario y justiciero, convencer a senadores y diputados de que más les valía aprobar la Ley Indígena, fueron las sucesivas estrategias de tres poderosas y brillantes campañas por las causas más legítimas del pueblo mexicano. Despliegues de imaginación, de ideas y de personas, que conmovieron al país y lograron mucho, pero no sus propósitos expresos. Y al no alcanzarlos tampoco le permitieron al EZLN bajarse del caballo transformándose por vía negociada en fuerza social y política de pleno derecho. Tres intentos tres. Tres asaltos al cielo, tan generosos y estimulantes como frustrados en lo tocante a sus objetivos.

Para mí, el saldo más infausto de los tres tropiezos es el sufrimiento prolongado de las bases de apoyo zapatistas, comunidades laceradas de siempre que desde hace casi diez años resisten tanto el cerco militar, policiaco y paramilitar como el desarrollismo contrainsurgente; comuneros indoblegables que se rascan con sus propias uñas, entreverados con indígenas tan pobres como ellos pero que han decidido no rechazar los programas del gobierno. Y si la colindancia de territorios zapatistas y no zapatistas se antoja difícil, el entrecruzamiento –la íntima convivencia de credos y militancias diversos, a veces enconados– genera dolorosos conflictos que cruzan la milpa, la huerta, el potrero, la hamaca. Hay que hacer que se cumplan las tres condiciones del EZLN y se abra el camino de la paz. Es por las comunidades en resistencia, es por los pueblos indios, es por los mexicanos todos. Es por su dignidad y por la nuestra.

El mismo 1ro de enero que inspira este balance, Luiz Inácio Lula da Silva tomaba posesión como presidente de Brasil, habiendo ganado con el 61% de los votos gracias a una convergencia de gremios combativos, como la Central Unitaria de Trabajadores y el Movimiento de los Sin Tierra, con empresarios progresistas como el propio vicepresidente; de partidos populares, como el Partido de los Trabajadores, con institutos políticos centristas; de ONGs, intelectuales y artistas, con la iglesia católica libertaria. Fuerza poderosa cuanto variopinta imposible de construir sin el buen desempeño del PT en el

***“Durante
los últimos nueve
años la política
mexicana
está marcada
por la presencia,
estentórea
o silenciosa,
del EZLN:
la última
insurrección
indígena
del ciclo
que arranca
en el XIX
y la primera revuelta
anticapitalista
de nuevo milenio”***

legislativo y al frente de importantes gobiernos locales. Ya lo dijo Lula en su toma de posesión: esto no es producto de las elecciones sino de una larga lucha. Sería estúpido empezar a buscarles cara de Lula a nuestros políticos progresistas. No lo es, en cambio, mirarnos en el espejo de una izquierda con identidad pero incluyente, que a partir de sus propias bases y su propia definición política ha sabido sumar fuerzas y combinar métodos de lucha. Porque en México —está visto— no le abriremos paso a la paz en Chiapas mediante el reconocimiento constitucional de los derechos indios, si no es con un gran movimiento que englobe lo sustancial de los actores y demandas populares. Como tampoco los campesinos, si se quedan solos, lograrán la revisión fructífera del capítulo agropecuario del TLCAN y de la política rural; ni los obreros detendrán el proyecto regresivo de Ley Federal del Trabajo, y menos impulsarán uno avanzado, si no buscan apoyos en el resto de la sociedad; ni se conservará la soberanía sobre los recursos estratégicos del país, que no es asunto sólo del SME o del Frente contra las Privatizaciones, sino de todos los mexicanos.

Para rescatar de la derecha la mayoritaria voluntad de cambio, seguir frenando las contrarreformas e impulsar la transformación democrática y justiciera del país, es necesario trabajar desde abajo pero también desde arriba. Actuar a través de movimientos sociales y de partidos políticos, cuestionando al poder y ejerciéndolo dentro y fuera del gobierno, demandando reformas legales y legislando, resistiendo y proponiendo. Dos ejemplos: la Ley Cocopa y la Reforma Política de la Ciudad de México, que deben reconocer los plenos derechos ciudadanos de unos 25 millones de compatriotas entre indígenas y chilangos, una objetada por presuntamente balcanizadora y la otra por la supuesta incompatibilidad territorial de gobierno local y federal, toparon con pared en el legislativo, particularmente en el Senado. ¿Cuál es la lección? ¿Que el Congreso es incorregible y las leyes no sirven para nada o que necesitamos legisladores identificados con los intereses populares? Porque no podemos exigirle

a las cámaras que aprueben nuestras iniciativas de ley, que orienten el gasto público a los intereses nacionales, o que preserven la soberanía de nuestra política exterior, sin preocupamos también por llevar a ellas congresistas expresamente comprometidos con la agenda democrática y justiciera. Y éste no es asunto exclusivo de los partidos, sino de todos los mexicanos. Lo otro es retomar la consigna de los argentinos más desilusionados: ¡Que se vayan todos!... cuando de hecho en las muy concurridas elecciones que ganó Kirchner la gente votó porque regresaran algunos.

En 1994 el EZLN buscó la transición del país a la democracia y la justicia apoyándose en la campaña electoral cardenista y la izquierda plural pero inorgánica de la Convención. El sistema hizo trampa, pero también es verdad que el pueblo siguió votando por el PRI. En 1995 y 1996 el EZLN convocó a todos los actores democráticos a debatir la agenda nacional en unos Diálogos de San Andrés que a la postre fueron saboteados por la contraparte gubernamental. Por último, en el 2000 llamó a impulsar la reforma del Estado en lo tocante a los derechos indios, mediante el debate, la movilización popular y el llamado a la conciencia de unos legisladores que resultaron torpes y mezquinos. ¿Se cerraron para siempre esas puertas? No lo creo. Sin duda en el mundo de la globalización salvaje los estados nacionales están muy acotados, y en México el sistema político está en crisis. Aun así, creo que las reformas democráticas deben empujarse desde abajo y desde afuera, pero igualmente con presencia y acuerdos en el legislativo; considero que el programa del otro México posible demanda un incluyente debate con todos los actores sociales, pero debe ser retomado e impulsado también por los partidos políticos; y creo que la transición a un país más justo —que no la simple alternancia— es tarea pendiente que no empieza ni termina en las elecciones, pero sin duda pasa por ellas. Y para sacar adelante todo esto no hace falta encontrar culpables en nuestras propias filas o satanizar presuntos traidores, hace falta sumar.

Posdata

Doce meses después de haber escrito este balance, puedo decir que el 2003 comenzó, continuó y terminó en tono mayor.

La decena escasa de ateridos líderes agrarios que protestaba en el Puente internacional de Ciudad Juárez se transformó en menos de treinta días en un enorme movimiento nacional capaz de llenar el Zócalo de la capital con cien mil campesinos provenientes de toda la República; capaz de forzar la incorporación de todas los agrupamientos agrarios nacionales, priistas incluidos; capaz de formular y consensuar una propuesta de reforma rural integral, sostenible y para el largo plazo que constituye un programa campesino

estratégico; capaz de convocar la movilización solidaria de los gremios obreros más combativos; capaz de llevar el campo al horario AAA de las televisoras y al centro de la problemática nacional; capaz de imponer al gobierno la negociación de toda la agenda agraria y de obtener un limitado Acuerdo Nacional para el Campo que sin embargo reconoce la emergencia rural y nacional, proclama la soberanía alimentaria y plantea la necesidad de sacar del TLCAN el maíz blanco y el frijol.

La primera oleada del nuevo movimiento campesino mexicano terminó en abril. Pero de inmediato retomaron la estafeta los obreros, que en la segunda mitad del año intensificaron las movilizaciones contra la política anti-popular del presidente Fox, en particular la entrega del sector energético a las transnacionales mediante la privatización descarada o sigilosa de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, pero también del intento de aprobar una reforma patronal y anti-obrera a la Ley Federal del Trabajo, y la pretensión de imponer una reforma fiscal regresiva, que al reducir el ISR [Impuesto sobre la Renta] e incorporar al IVA alimentos y medicinas, aligera la contribución de los ricos y aumenta la de los pobres.

Las sucesivas movilizaciones culminan el 27 de octubre con una gigantesca marcha en la capital del país, con réplicas importantes en una decena de estados de la República, cuya importancia no está sólo en los más de cien mil manifestantes, sino en que supone la alianza de las convergencias sindicales más significativas, FSM [Frente Sindical Mexicano], UNT y algunos sectores disidentes del oficialista Congreso del Trabajo, con las más importantes agrupaciones campesinas, Movimiento El campo no aguanta más y El Barzón, además de numerosas organizaciones de otros sectores, entre las que destaca la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Actores que en su mayoría convergen en una gran Convención obrera, campesina y popular, inédita tanto por el número y representatividad de los participantes como porque la pluralidad de las posiciones no impide el acuerdo en lo fundamental: detener la política neoliberal del gobierno e impulsar reformas democráticas y justicieras, en la tesitura de la soberanía popular.

En diciembre, las insurgencias que nos tuvieron en vilo todo el año se condensaron en una lucha importante por lo que estaba en juego, y decisiva por lo que representaba políticamente: la definición en el legislativo de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos para el 2004. La propuesta de Fox, apoyada por el PAN y por la coordinadora de la bancada priista en la Cámara de Diputados, era la expresión más clara del reformismo neoliberal y sintetizaba en términos fiscales y presupuestales todo aquello por lo que obreros y campesinos protestan en las calles. Pero la decisión estaba en manos de la malhadada "clase política", es decir, las fuerzas partidistas representadas en el Congreso de la Unión. El 11 de diciembre, la propuesta que dramatizaba la debutante y

ominosa alianza entre el PAN y el PRI fue derrotada por una inesperada convergencia del PRD con una fracción mayoritaria de los diputados priistas que se negó a respaldar la política del gobierno. Más allá de la enconada lucha por el poder en el PRI, es evidente que el rechazo de la mayoría de sus diputados al IVA en alimentos y medicinas, como el rechazo de la mayoría de sus senadores a la privatización de la electricidad, responde a las multitudinarias insurgenias populares, que evidencian el ingente costo que para cualquier partido significa respaldar la política de Fox. Así, el 11 de diciembre no sólo ganó el PRD –consistentemente opuesto a la política foxista– y ganó la corriente priista que circunstancialmente rompió la alianza con el PAN; ganaron también los miles de obreros, campesinos, maestros, colonos y estudiantes, que esperaban el desenlace en la calle; ganó la Convención obrera campesina y popular, cuya persistente insurgenia se ha transformado en referente imprescindible de todas las fuerzas políticas del país.

El mitin a las afueras del bunker legislativo con que los manifestantes recibieron a los 30 diputados del PRD que salieron a informarles el desenlace es emblemático de una realidad política emergente e inédita entre nosotros: la acción concertada de los gremios y los partidos, la convergencia del movimiento social y la acción política institucional, de la lucha en las calles y el combate parlamentario, de la resistencia abajo y arriba, fuera y dentro.

Los combates sociales y políticos de los últimos meses son inéditos por su intensidad y trascendencia, pues en ellos no se juegan las reivindicaciones de un sector sino los grandes intereses nacionales. No es una batalla de ángeles contra demonios –que no existen– sino de los pecadores e imperfectos protagonistas realmente existentes. Pero no es una lucha que se pueda soslayar, pues en ella se juega el destino del país. Resulta preocupante, entonces, que mientras esto sucede en calles y campos, el zapatismo esté enfrascado en la celebración de los diez años del estallido y veinte de que se fueron a la selva. Una jubilosa exaltación de la lucha libertaria y justiciera, que resultaría más plausible si no fuera acompañada por un persistente silencio respecto de realidades políticas que no pasan por Las Cañadas.

El zapatismo: indios insurgentes, alianzas y poder

Álvaro García Linera*

* *Matemático e investigador social. Docente de la carrera de Sociología y de la Maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia.*

Hay momentos en la historia que un determinado acontecimiento logra sintetizar los problemas fundamentales que caracterizarán una nueva época que está despuntando. En estos casos, el acontecimiento es la señal más lúcida de un largo período de procesos históricos que tendrán en el acontecimiento inaugural un punto recurrente de referencia, independientemente de la continuidad, el éxito o fracaso de esa experiencia iniciadora. El movimiento zapatista de México es precisamente ese tipo de acción colectiva que ha tenido la virtud de condensar el nuevo rostro de los antiguos, y las características de los nuevos problemas que las luchas emancipatorias están confrontando en este período histórico de renovada expansión planetarizada de capital y de fracaso de las alternativas estatistas de los "socialismos reales".

La rebelión de los indios zapatistas iniciada hace 10 años no sólo ha sido capaz de cuestionar el triunfalismo de una globalización financiera desenfrenada, sino que también

ha desplegado un tipo de crítica práctica a varios de los límites de algunos de los antiguos modelos con los que se intentó dirigir y entender las luchas sociales. Con todo hay un hecho sintomático del accionar zapatista y es que ha partido de una ubicación geoestratégicamente paradójica: el Chiapas mexicano que, por una parte, es una región colindante al centro territorial de la hegemonía mundial y articulada a las estrategias de seguridad estatal norteamericana, pero, por otro lado, es también una zona indígena marginada de los procesos de modernización económica y homogeneización cultural resultantes de este dominio civilizatorio del capital. Esto quizá explique esa extraordinaria mezcla entre tradición y modernidad, entre acción comunicativa y acción normativa, entre el pasado y el porvenir con la que continuamente los zapatistas dialogan con el mundo y consigo mismos.

El regreso de los indios

No es pues casual que el zapatismo, y su repercusión mundial, provengan del mundo indígena ya que es en ese sujeto producido por la realidad colonial de la historia moderna que se aglomeran los momentos primigenios del capitalismo y los límites de su utopía universalista. ¿No son acaso los indios quienes generaron el excedente económico de la acumulación originaria europea, que es el punto de arranque de todos los capitalismo posteriores y de todas las medidas geopolíticas de la expansión de la lógica industrial? El propio desarrollo capitalista en nuestro continente fue posible mediante la proletarianización de los indios, allí donde fue posible, o de su extinción, allí donde fue necesario para la territorialización de la lógica empresarial. Pero, ¿no son también los indios los sujetos donde se renuevan y perseveran las tendencias comunitaristas, tanto en la política como en la economía, susceptibles de proyectarse como fuerzas alternativas a la valorización del capital?

Se puede decir por tanto que la indianidad está estructuralmente ligada a la dinámica mundial del capitalismo, a sus fuentes, a sus fines y a sus límites contemporáneos. De ahí su desgracia y su poder pues el engranaje de la civilización industrial ha sido cimentado sobre los restos de las civilizaciones indígenas de todos los continentes, pero a la vez es esa misma dinámica del capital que tiene en los restos de las civilizaciones indias algo en lo que no se puede identificar, algo que no es su prolongación ni su reflejo, tal como el trabajo vivo que es directamente no-capital o el obrero que se valoriza a sí mismo al momento en que no se desea como capital variable.

Es este poder generalizante de la indianidad que el zapatismo ha sabido entender y proyectar como fuerza moral y práctica de resistencia y emancipación social. Y en ese sentido, se puede hablar de una contribución y una continuidad del zapatismo insur-

“Entre los aportes principales del zapatismo está el haber mostrado [...] la existencia de una lógica organizativa de la toma de decisiones, la democracia comunitaria, fundada en una ética de la participación y el compromiso con la cosa pública capaz de impedir la suplantación y la expropiación de las decisiones sociales por parte de los “profesionales de la política”, tan común en las democracias liberales”

gente con los ciclos de luchas indias, de décadas y de siglos atrás.

En sentido estricto el zapatismo no inaugura la época de las rebeliones indias del continente; estas venían produciéndose con mayor o menor intensidad en Guatemala, Ecuador, Bolivia o Chile desde años antes de la emergencia pública del zapatismo y, de hecho, hay muchas de esas experiencias recogidas a su modo por los insurgentes indígenas del sudeste mexicano. En cierta medida se puede afirmar que desde los años '70 del siglo XX, hay un notorio regreso de indios, o una reinención del indio como sujeto político con proyecto propio de reforma de la sociedad. Pero los zapatistas son unos continuadores dignos y enriquecedores de esta iniciativa transnacional de renovación de las esperanzas de modos de vida sustitutivos al orden civilizatorio del capital. De hecho, no hay movimiento indígena, anterior o posterior al zapatismo, que no reconozca la contribución que el zapatismo ha hecho a la revalorización de las culturas indígenas y al reposicionamiento del sujeto indio como portador de un horizonte descolonizador y emancipatorio complementario al de los otros sujetos colectivos de la subalternidad planetaria.

Entre los aportes principales del zapatismo a la causa indígena está el haber mostrado a otros lugares del mundo donde anteriormente no llegaban los movimientos indios, la existencia de una lógica organizativa de la toma de decisiones, la democracia comunitaria, fundada en una ética de la participación y el compromiso con la cosa pública capaz de impedir la suplantación y la expropiación de las decisiones sociales por parte de los “profesionales de la política”, tan común en las democracias liberales.

Otro aporte es el de haber enriquecido el debate entorno a las formas de reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indios. Es sabido que los estados latinoamericanos, desde su fundación, se han caracterizado por una tajante mono-culturalidad promotora de procesos de

exclusión y racismo hacia los pueblos y naciones indígenas. La historia republicana de los estados latinoamericanos ha estado marcada por una deliberada política de desindianización de las sociedades, ya sea por medio del genocidio o múltiples variantes del indigenismo estatal cuyo objetivo era reeducar a los indios para una transculturalización pausada hacia los moldes mestizo castellano-hablantes estatalmente legitimados.

Los movimientos indígenas modernos desde décadas atrás han buscado promover, en algunos casos, reformas estatales para incorporar distintos reconocimientos y derechos culturales de sus pueblos y, en otros, donde los indígenas son mayoría social, han desplegado luchas con objetivos más radicales como la constitución de gobiernos indígenas. En este debate, las reivindicaciones político-territoriales bajo la forma de autonomías indígenas promovida por el zapatismo, se presentan como una opción intermedia entre el "reformismo" y el "radicalismo" indianista, cuya virtud reside en promover cambios en el orden de los derechos político-culturales de las sociedades pero sobre la base del ejercicio práctico de esos derechos y al despliegue autónomo de las lógicas organizativas comunitarias indígenas no subsumidas al orden estatal.

Pero donde quizá es más posible apreciar el aporte del zapatismo a los movimientos sociales indígenas en particular y a los movimientos sociales en general es en su capacidad de irradiación, de diálogo y renovación de los canales de articulación horizontal con otros sectores sociales no indígenas y subalternos de la sociedad.

Alianzas. Los indios como espejo de la subalternidad

La condición contemporánea tanto de la exclusión como de la explotación del mundo indígena a manos de las políticas etnocidas de los estados nacionales latinoamericanos permite ubicar a los indios no sólo como una excepcionalidad de algunas zonas deprimidas del continente, sino ante todo como la realidad y la metáfora viva de la subalternidad en general, cualquiera sea ésta, obrera, emigrante, campesina, desocupada, artesanal, etc. Ellos son parte de la energía social expropiada con la que se ha construido el capital y la vigencia de lo que aún se resiste a ser capital y, por tanto, son también un espejo donde todas y todos que se resisten a ser capital pueden verse. El zapatismo ha tenido precisamente la capacidad de habilitar unos repertorios simbólicos y discursivos desde la indianidad armada que ha permitido a los no indios de México y el mundo que resisten a mirarse a sí mismos, en sus fuerzas y debilidades, a través del rostro y la historia de los indios.

El lenguaje de la dignidad tan fuerte en el discurso zapatista, más que una apelación moral de rebeldía es una politización universalizada de la resistencia india que permite a los múltiples sujetos subalternos reconocerse en la lucha indígena, sin por ello perder

su personalidad, su autonomía y sus diferencias radicales. Esto ha inaugurado un tipo de articulación social de la resistencia no hegemónica, pues no se postula a ninguna nueva vanguardia social en torno a la cual todas otras colectividades deberían subordinar sus luchas. Lo que ha hecho el zapatismo es visibilizar a un sujeto social, los indios, que desde allá del



© Andrés Thomás Conteris

subsuelo de la historia y la modernidad es capaz de ofrecer sus experiencias y sus luchas como un asidero más de las luchas y las esperanzas de aquellos que se oponen a la imperialización del mercado y la cultura.

Con ello, a su modo, el zapatismo ha invitado a reinventar los modos de vinculación y colaboración descentralizada de los movimientos sociales, de las clases desposeídas y de los activistas, rompiendo el tradicional aislamiento rural de los movimientos indígenas del continente y ayudando a construir un tipo de "sociedad civil" que, por encima de los estados, es capaz de comunicar y comprometerse con luchas sociales en distintas partes del planeta.

Esta nueva forma de irradiación social zapatista capaz de interconectar por períodos y de manera puntual a los otros segmentos sociales urbano-rurales no indígenas ha tenido en la palabra a un medio privilegiado de promoción. Pero no se trata de cualquier palabra, ni mucho menos de la clásica arenga izquierdista de clasificación, valoración y mando. En el zapatismo, la metáfora y la narrativa de la subjetividad productiva han dado nacimiento a un modo de comunicación que más que apelar a la fuerza de la fe transformadora, ha recurrido a la razón de la esperanza histórica como convocatoria a la acción y el compromiso. Así, el zapatismo ha logrado sustituir los justificativos de la lucha, anteriormente anclados en un destino ineluctable de las "leyes de la historia", por las razones poetizadas y politizadas de la creatividad cotidiana de los excluidos.

Esta fuerza innovadora del discurso susceptible de tender puentes dialogantes inter-clasistas en México e inter-nacionales con movimientos sociales del mundo, ha contribuido notablemente a erosionar el predominio autoritario de la vulgata liberal planetaria; sin embargo, ello no debe hacernos olvidar la propia especificidad histórica del zapatismo que ha ayudado a consolidar esta influencia. Se trata de un discurso y de una acción colectiva de

lo que se podría calificar, en el contexto de las ideas contestatarias al orden liberal vigentes en ámbitos académicos, sindicales y de solidaridad externa, de una "minoría virtuosa" por su ubicación y proyección social. El zapatismo ha surgido al interior de una minoría cultural históricamente excluida (los indios) capaz de evocar la solidaridad inmediata; lo suficientemente radical como para polarizar posiciones (insurgencia armada) frente al orden institucional dominante, pero dispuesta a cambiar los métodos de lucha (iniciativas de paz); cercana a las estructuras de poder planetarios (EE.UU.), pero sin riesgo de desestabilizar radicalmente las estructuras de poder internas y externas. Esta extraordinaria ubicación entre la insurgencia radical y la limitación estructural de la presencia indígena mexicana ha permitido al zapatismo un conjunto de lazos, simpatías sociales y apoyos internos como externos que, bajo otras circunstancias hubieran sido más difíciles de lograr. Esto también posiblemente ayude a explicar algunas de las reflexiones que el zapatismo, y algunos intelectuales cercanos a ellos, han promovido en torno al tema del poder.

La potencia e impotencia del poder

¿Cómo escapar a lo que parecería ser un fatalismo de las luchas revolucionarias contemporáneas de enfrentarse a las estructuras de dominación política para, una vez desplazadas las antiguas elites del poder, reconstruir nuevas relaciones de dominación a la cabeza de las antiguas vanguardias insurgentes? Este es quizá el síndrome de la generación de fin de siglo que vio como es que, independientemente de la vía, armada o electoral, los partidos contestatarios y las guerrillas con base popular que se enfrentaban a los esquemas de poder prevalecientes, una vez en funciones de gobierno reconstituían, en aras de la "defensa de la revolución", la oligarquización de las decisiones políticas mediante el reforzamiento de la vieja maquinaria estatal que usurpaba la toma de decisiones a manos de la sociedad por la voluntad del "partido", de los "comandantes" o los "dirigentes" que venían así a cambiar simplemente los rostros de las burocracias estatales reconstituidas en y por la "revolución".

La consigna de la "toma del poder" ha sido el enunciado que ha resumido esta paradoja histórica: por un lado, la necesidad de los movimientos revolucionarios de apuntar sus energías de confrontación y resistencia hacia los mecanismos de dominación política centralizada (el Estado), a fin de arrebatar a las fuerzas conservadoras el control de los aparatos que monopolizan la direccionalidad de las relaciones sociales de dominación que atraviesan toda la sociedad, más allá y más acá del propio Estado, pero a su vez, el riesgo de que ese aparato estatal conquistado por los revolucionarios, los atrape en una lógica de la dominación que los llevara a que ellos hagan exactamente todo lo que anteriormente habían combatido de la antigua elite gubernamental desplazada. Claro, ¿cómo desmontar una estructura de dominación política por medio de la misma estructura?

Este fue ya un tema inicialmente estudiado por Marx en su teoría de la subsunción del trabajo bajo el capital, al mostrar cómo era que las técnicas productivas, al momento de la subsunción real, quedaban amalgamadas a una "intencionalidad social" capitalista que se adhería y formaba la propia materialidad de las cosas. Con mucha más razón en el Estado cuya materialidad es específicamente social.

Posteriormente al evaluar el significado de la comuna de París como "forma política descubierta" de la emancipación social, vio que la comuna era una "revolución contra el Estado" que permitió el proceso de producción de una "nueva máquina gubernamental" capaz de restituir a la sociedad las funciones expropiadas por el Estado parasitario. En Marx, el poder Estado se presenta como una dualidad entre un componente maquinal de funciones, jerarquías, conocimientos, normas y un componente relacional de monopolios, tolerancias, actitudes y comportamientos que consagran la apropiación de decisiones político-administrativas por unos profesionales del poder que dan lugar al Estado. La emancipación por tanto, es también un problema relacional y maquinal que al manifestarse no disuelve las relaciones de poder sino que las diluye y reduce a relaciones de gobierno en las que la sociedad comienza a darse sus propios fines. De ahí también la importancia que Gramsci le asignó a la construcción social de la hegemonía, de la reforma moral e intelectual como modos relacionales de un tipo de energía política capaz de permitir la sustitución de la vieja máquina estatal por una que, a decir de Engels, "no es ya un Estado en sentido estricto".

Sin embargo, las nuevas revoluciones sociales lanzadas a "la toma del poder" a la larga darán mas "Estados" que comunas y más tomas de las antiguas máquinas estatales que nuevas máquinas de gobierno capaz de restituir en la sociedad las funciones gubernamentales privatizadas por una casta de funcionarios profesionalizados. El zapatismo toma nota de este entrapamiento de la historia de las luchas revolucionarias del último siglo y postulará de manera tanto práctica como teórica, la necesidad de transformar el mundo sin aspirar a tomar el poder, como un modo de superar la desdicha de vanguardias conversas en burócratas de un nuevo estado de dominación.

Independientemente de las posibilidades de superar este fatalismo histórico mediante esta vía, el zapatismo ha puesto en tela de discusión crítico-práctica el tema de los modos de realización de la emancipación social que, tal como fueron desplegados durante el siglo XX, han mostrado limitaciones y fracasos. En el fondo, con un nuevo lenguaje y las experiencias fallidas de 130 años, los zapatistas vuelven a plantear el problema central de toda revolución: el poder. ¿Es posible cambiar el orden relacional y maquinal de la dominación estatal apoyándose en esa misma estructura estatal? O, si se prefiere, en el viejo lenguaje de Marx, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de "destrucción del poder del Estado"?



El cambiar el mundo sin tomar el poder propuesto por el zapatismo, abre una vía crítico-práctica de involucramiento con esta temática central de cualquier intento de emancipación social. El que este nudo histórico de las luchas sociales haya podido ser planteado de manera tan aguda por el zapatismo, ha dependido de varias circunstancias específicas. La primera, que la insurgencia zapatista tanto en el plano

discursivo, como en el organizativo y militar ha estado sustentada en una maquilalidad social, la indígena, histórica y materialmente diferenciada de las redes estatales. La lógica organizativa que ha sostenido logística y políticamente la sublevación tiene unas características comunitaristas que permiten visualizar un régimen de toma de decisiones y de gestión de lo social no estatal. En ese sentido, el “cambiar el mundo” que invocan los zapatistas tiene una materialidad social comunitaria estrictamente no estatal que la hace verificable en el ámbito zonal y regional. En qué medida esto podría irradiarse nacionalmente a otros sectores sociales cuyas condiciones de vida están subsumidas técnicamente en la lógica industrial y estatal, es algo que todavía está por verse.

De igual manera el hecho de que la fuerza indígena del zapatismo socialmente sea relativamente minoritaria en la sociedad mexicana, hoy por hoy convertida junto con Brasil en las ciudadelas obreras del continente, imposibilita un triunfo estrictamente indígena. En tal sentido, la renuncia a la toma del poder, mas no a cambiar el mundo, tiene que ver entre muchas otras cosas, con los hechos prácticos de la propia cualidad de los repertorios indígenas de la sublevación, pero también con la propia limitación histórica de una rebelión india en medio de una sociedad mayoritariamente mestiza. Con todo, como no había sucedido en las últimas décadas, el zapatismo ha permitido plantear con una actualidad sorprendente las condiciones de posibilidad y necesidad de ir mas allá del legado revolucionario del siglo XX en cuanto a hallar las maneras y vías de acción colectiva capaces de viabilizar la reapropiación por parte de la sociedad laboriosa de todas aquellas funciones públicas expropiadas por el Estado. En esto, el zapatismo es una de las experiencias contemporáneas más lúcidas para trabajar esa esperanza.

Documentos

Fragmentos de Chiapas, la treceava estela

En el número anterior del *OSAL* publicamos la sexta parte de la llamada “treceava estela” donde el zapatismo, a través de la palabra del Subcomandante Marcos, daba cuenta del nacimiento de las Juntas de Buen Gobierno (JBG) y los Caracoles así como del sentido y las primeras disposiciones adoptadas por éstas. Complementando ese documento acompañamos en esta ocasión una selección de fragmentos de la segunda y quinta parte de la referida “estela” donde a partir del relato del proceso de conformación y desarrollo de los municipios autónomos zapatistas y de los Aguascalientes se señalan algunas de las razones que inspiraron la creación y lanzamiento de las JBG y los Caracoles en agosto de 2003. La versión completa de la “treceava estela” puede consultarse, entre otros sitios, en <<http://www.ezlnaldf.org>>

Segunda parte: una muerte

Desde las montañas del sureste mexicano Subcomandante Insurgente Marcos Julio de 2003

Hace unos días, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional decidió la muerte de los llamados *Aguascalientes* de La Realidad, Oventik, La Garrucha, Morelia y Roberto Barrios, situados todos ellos en territorio rebelde. La decisión de desaparecer los *Aguascalientes* fue tomada después de un largo proceso de reflexión. [...]

El día 8 de agosto de 1994, en la sesión de la Convención Nacional Democrática celebrada en Guadalupe Tepeyac, el *comandante Tacho*, a nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, inauguró, frente a unas 6 mil personas procedentes de diversas partes de México y del mundo, el llamado *Aguascalientes* y lo entregó a la sociedad civil nacional e internacional. [...]

Muchos no conocieron ese primer *Aguascalientes*, sea porque no pudieron ir, sea porque eran muy jóvenes en aquel año (si usted tiene ahora 24 años, o sea que entró en 25, en ese entonces tenía 14 años, o sea que estaba entrando en 15), pero era un navío formidable.

El proceso para llegar hasta la construcción de ese que fue el primer *Aguascalientes* fue accidentado... y doloroso. [...]

Nosotros, después de habernos preparado por 10 años para matar y morir, para manipular y disparar armas de todo tipo, fabricar explosivos, ejecutar maniobras militares estratégicas y tácticas, en fin, para hacer la guerra, después de los primeros días de combates nos habíamos visto invadidos por un auténtico ejército, primero de periodistas, pero después de hombres y mujeres de las más diversas procedencias sociales, culturales y nacionales. Fue después de aquellos "diálogos de catedral", entre febrero y marzo de 1994. Los periodistas siguieron apareciendo intermitentemente, pero eso que nosotros llamamos "la sociedad civil", para diferenciarla de la clase política y para no encasillarla en clases sociales, fue siempre constante.

Nosotros estábamos aprendiendo y, me imagino, esa sociedad civil también. [...]

¿Cuánto tiempo tardamos en darnos cuenta de que teníamos que aprender a escuchar y, después, a hablar? No estoy seguro, han pasado ya no pocas lunas, pero yo calculo unos dos años al menos. Es decir, lo que en 1984 era una guerrilla revolucionaria de corte clásico (levantamiento armado de las masas, toma del poder, instauración del socialismo desde arriba, muchas estatuas y nombres de héroes y mártires por doquier, purgas, etcétera, en fin,

un mundo perfecto), para 1986 ya era un grupo armado, abrumadoramente indígena, escuchando con atención y balbuceando apenas sus primeras palabras con un nuevo maestro: los pueblos indios. [...]

Con esto quiero decir que el principal acto fundamental del EZLN fue el aprender a escuchar y a hablar. [...]

Llegó un momento, no podría precisar bien cuándo mero, en que ya no estaba el EZLN por un lado y las comunidades por el otro, sino que todos éramos, simplemente, zapatistas. [...]

Acorralados, salimos esa madrugada de 1994 con sólo dos certezas: una era que nos iban a hacer pedazos; la otra que el acto atraería la atención de personas buenas hacia un crimen que, no por silencioso y alejado de los medios de comunicación, era menos sangriento: el genocidio de miles de familias de indígenas mexicanos. [...]

[...] pensábamos que podíamos estar equivocados en eso de que nos iban a hacer pedazos, que tal vez se levantara el pueblo de México entero. Pero nuestra duda, debo ser sincero, no alcanzaba a ser tan grande como para suponer que podría pasar lo que en realidad pasó.

Y eso que pasó fue, precisamente, lo que dio origen al primer *Aguascalientes* y, luego, a los que le siguieron. [...]

Así que hagan un esfuerzo y pónganse en nuestro lugar: años enteros preparándose para disparar un arma, y resulta que lo que hay que disparar son palabras. [...]

Y aprendimos, por ejemplo, que éramos diferentes, y que había muchos diferentes a nosotros, pero también diferentes entre ellos mismos. [...]

Así que pensamos en una especie de escuela donde nosotros fuéramos los alumnos y el “desmadre” el maestro. Para esto ya estábamos en junio de 1994 (o sea que no somos muy rápidos para darnos cuenta de que tenemos que aprender) y estábamos por hacer pública la nombrada “segunda Declaración de la selva Lacandona” que llamaba a formar la Convención Nacional Democrática (CND). [...]

Acordamos entonces construir el espacio y nombrarlo *Aguascalientes*, puesto que sería la sede de la CND (rememorando la Convención de las fuerzas revolucionarias mexicanas en la segunda década del siglo XX). Pero la idea del *Aguascalientes* iba más allá. Nosotros queríamos un espacio para el diálogo con la sociedad civil. Y “diálogo” quiere decir también aprender a escuchar al otro y aprender a hablarle.

Sin embargo, el espacio *Aguascalientes* había nacido ligado a una iniciativa política coyuntural y muchos supusieron que, agotada esa iniciativa, el *Aguascalientes* perdía sentido. Pocos, muy pocos regresaron al de Guadalupe Tepeyac. Después vino la traición zedillista del 9 de febrero de 1995 y el *Aguascalientes* fue destruido casi totalmente por el ejército federal. Incluso ahí se erigió un cuartel militar.

Pero si algo caracteriza a los zapatistas es la tenacidad (“será la necesidad”, pensará más de uno). Así que no había pasado un año cuando nuevos *Aguascalientes* surgían en diversos puntos del territorio rebelde. Oventik, La Realidad, La Garrucha, Roberto Barrios, Morelia. Entonces sí, los *Aguascalientes* fueron lo que debían ser: espacios para el encuentro y el diálogo con la sociedad civil nacional e internacional. [...]

Con no pocas personas hemos insistido en que la resistencia de las comunidades zapatistas no es para provocar lástima, sino respeto. Acá, ahora, la pobreza es un arma que ha sido elegida por nuestros pueblos para dos cosas: para evidenciar que no es asistencialismo lo que buscamos, y para demostrar, con el ejemplo propio, que es posible gobernar y gobernarse sin el parásito que se dice gobernante. [...]

Con los *Aguascalientes* mueren también el “síndrome de Cenicienta” de algunas “sociedades civiles” y el paternalismo de algunas ONG nacionales e internacionales. Cuando menos mueren para las comunidades zapatistas que, desde ahora, ya no recibirán sobras ni permitirán la imposición de proyectos.

Por todo esto, y por otras cosas que se verán después, el próximo 8 de agosto de 2003, aniversario del primer *Aguascalientes*, se decretará la muerte bien “morida” de los *Aguascalientes*. [...]

Quinta parte: una historia

Desde las montañas del sureste mexicano Subcomandante Insurgente Marcos Julio de 2003

La historia de los municipios autónomos rebeldes zapatistas es relativamente joven, tiene siete años cumplidos y entrada en ocho. Aunque fueron declarados en ocasión de la ruptura del cerco de diciembre de 1994, los municipios autónomos rebeldes zapatistas (los Marez) tardaron todavía un tiempo en concretarse.

Hoy, el ejercicio de la autonomía indígena es una realidad en tierras zapatistas, y tenemos el orgullo de decir que ha sido conducido por las propias comunidades. En este proceso el EZLN se ha dedicado únicamente a acompañar, y

a intervenir cuando hay conflictos o desviaciones. Por eso es que la vocería del EZLN no coincidía con la de los municipios autónomos. Estos expresaban directamente denuncias, solicitudes, aclaraciones, acuerdos, hermanamientos (no son pocos los municipios autónomos rebeldes zapatistas que sostienen relaciones con municipios de otros países, principalmente de Italia). [...]

Los problemas de las autoridades autónomas, en el período ya pasado, se pueden agrupar en dos tipos: los que se refieren a su relación con la sociedad civil nacional e internacional; y los que se refieren a su autogobierno, es decir, a las relaciones con las comunidades zapatistas y no zapatistas.

En su relación con la sociedad civil nacional e internacional, el problema principal es que hay un desarrollo desequilibrado de los municipios autónomos, de las comunidades que se encuentran dentro de ellos e, incluso, de las familias de zapatistas que viven ahí. Es decir, los municipios autónomos más conocidos (como los que son sedes de los ya extintos *Aguascalientes*) o más a la mano (más cercanos a los centros urbanos o con acceso por carretera), reciben más proyectos y más apoyo. Lo mismo ocurre con las comunidades. Las más conocidas y las que se encuentran a borde de carretera reciben más atención de las “sociedades civiles”. [...]

En lo que se refiere a la relación con las comunidades zapatistas, el “mandar obedeciendo” se ha aplicado sin distinción. Las autoridades deben ver que se cumplan los acuerdos de las comunidades, sus decisiones deben informarse regularmente, y el “peso” del colectivo, junto con el “pasa la voz” que funciona en todas las comunidades, se convierten en un vigilante difícil de evadir. Aun así, se dan casos de quien se da la maña para burlar esto y corromperse, pero no llega muy lejos. [...]

En cuanto la autoridad se desvía, se corrompe o, para usar un término de acá, “está de haragán”, es removida del cargo y una nueva autoridad la sustituye. En las comunidades zapatistas el cargo de autoridad no tiene remuneración alguna (durante el tiempo en que la persona es autoridad, la comunidad le ayuda en su manutención), es concebido como un trabajo en beneficio del colectivo y es rotativo. [...]

Esta “forma” de autogobierno (que aquí resumo en extremo) no es invención o aportación del EZLN. Viene de más lejos y, cuando nació el EZLN, ya tenía un buen rato que esto funcionaba, aunque sólo a nivel de cada comunidad. [...]

[...] el EZLN vio que, de forma natural, quienes no cumplían con los trabajos eran suplidos por otros. Aunque aquí, puesto que se trataba de una organización político-militar, el mando tomaba la decisión final. [...]

Con esto quiero decir que la estructura militar del EZLN “contaminaba” de alguna forma una tradición de democracia y autogobierno. El EZLN era, por así decirlo, uno de los elementos “antidemocráticos” en una relación de democracia directa comunitaria (otro elemento antidemocrático es la Iglesia, pero es asunto de otro escrito).

Cuando los municipios autónomos se echan a andar, el autogobierno no sólo pasa de lo local a lo regional, también se desprende (siempre de modo tendencial) de la “sombra” de la estructura militar. En la designación o destitución de las autoridades autónomas el EZLN no interviene para nada, y sólo se ha limitado a señalar que, puesto que el EZLN, por sus principios, no lucha por la toma del poder, ninguno de los mandos militares o miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena puede ocupar cargos de autoridad en la comunidad o en los municipios autónomos. [...]

El “mandar obedeciendo” en los territorios zapatistas es una tendencia, y no está exenta de sube-y-bajas, contradicciones y desviaciones, pero es una tendencia dominante. De que ha resultado en beneficio de las comunidades habla el haber logrado sobrevivir en condiciones de persecución, hostigamiento y pobreza que pocas veces pueden encontrarse en la historia del mundo. [...]

Encargados de gobernar un territorio en rebeldía, es decir, sin apoyo institucional alguno y bajo la persecución y el hostigamiento, los consejos autónomos enfocaron sus baterías a dos aspectos fundamentales: la salud y la educación. [...]

En la salud no se limitaron a construir clínicas y farmacias (siempre apoyados por las “sociedades civiles”, no hay que olvidarlo), también formaron agentes de salud y mantienen campañas permanentes de higiene comunitaria y de prevención de enfermedades. [...]

En la educación, en tierras en las que no había ni escuelas, mucho menos maestros, los Consejos Autónomos (con el apoyo de las “sociedades civiles”, no me cansaré de repetirlo) construyeron escuelas, capacitaron promotores de educación y, en algunos casos, hasta crearon sus propios contenidos educativos y pedagógicos. [...]

Siguiendo con la educación, en algunas partes las bases zapatistas han hecho acuerdos con maestros de la sección democrática del sindicato del magisterio (o sea los que no están con la Gordillo) para que no hagan labor de contrainsurgencia y respeten los contenidos recomendados por los Consejos Autónomos Zapatistas como son de por sí, estos maestros democráticos aceptaron el acuerdo y han cumplido a cabalidad. [...]

Ni los servicios de salud ni los educativos abarcan todas las comunidades zapatistas, es cierto, pero buena parte de ellas, la mayoría, ya tiene modo de conseguir una medicina, atenderse de una enfermedad y de que haya un vehículo para llevarlo a la ciudad en caso de enfermedad o accidente graves. La alfabetización y la primaria están generalizándose apenas, pero una región ya cuenta con una secundaria autónoma que, por cierto, en estos días, “gradúa” a una nueva generación compuesta por hombres y, ojo, mujeres indígenas. [...]

Además de educación y salud, los Consejos Autónomos ven los problemas de tierras, trabajo y de comercio, donde avanzan un poco. Ven también asuntos de vivienda y alimentación, donde estamos en pañales. Donde se está un poco bien es en cultura e información. En cultura se promueven, sobre todo, la defensa de la lengua y las tradiciones culturales. En información, a través de las diversas estaciones de radio zapatista, se transmiten noticiarios en lengua. [...]

Los Consejos Autónomos también administran la justicia. Los resultados son irregulares. En algunos lados (por ejemplo, en San Andrés Sakamchén de los Pobres) hasta los priistas acuden a la autoridad autónoma porque, dicen, “ellos sí atienden y resuelven ‘la’ problema”. En otros, como explicaré ahora, se presentan problemas.

Si la relación de los Consejos Autónomos con las comunidades zapatistas está llena de contradicciones, la relación con comunidades no zapatistas ha sido de constante fricción y enfrentamiento. [...]

En fin, que no son pocos los problemas que enfrenta la autonomía indígena en territorios zapatistas. Para tratar de solucionar algunos de ellos se han realizado cambios importantes en su estructura y funcionamiento. [...]

Esta larga explicación se debe a que la construcción de esta autonomía indígena no ha sido sólo obra de los zapatistas. Si la conducción del proceso ha sido exclusiva de las comunidades, la realización ha contado con el apoyo de muchos y muchas más.

Si el alzamiento del 1º de enero de 1994 fue posible por la complicidad conspirativa de decenas de miles de indígenas, la construcción de la autonomía en territorio rebelde es posible por la complicidad de cientos de miles de personas de diferentes colores, diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes lenguas, en fin, de mundos diferentes.

Ellos y ellas, con su apoyo, han hecho posible (en lo bueno, porque lo malo es sólo responsabilidad nuestra) no que se solucionen las demandas de los

indígenas rebeldes zapatistas, pero sí que mejoren un poco sus condiciones de vida y, sobre todo, que hayan sobrevivido y hecho crecer una más, acaso la más pequeña, de las alternativas frente a un mundo que excluye a todos los “otros”, es decir, a indígenas, jóvenes, mujeres, niños, migrantes, trabajadores, maestros, campesinos, taxistas, comerciantes, desempleados, homosexuales, lesbianas, transexuales, religiosos comprometidos y honestos, artistas e intelectuales progresistas, y _____ (agregue usted lo que falte). [...]



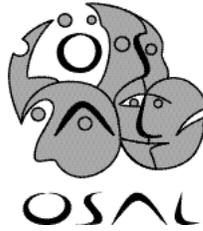
CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

LEA ATENTAMENTE LAS INDICACIONES DEL DORSO, COMPLETE Y ENVIÉ EL SIGUIENTE CUPÓN (utilice letra impresa mayúscula):
 Deseo suscribirme a la revista OSAL, para recibir en la dirección detallada más abajo, los 3 (tres) próximos ejemplares.

NOMBRE Y APELLIDO			
INSTITUCIÓN			
DOMICILIO DE ENVÍO: CALLE			
Nº	PISO	DEPTO.	CÓDIGO POSTAL
Ciudad	PROVINCIA, ESTADO, REGIÓN		
PAIS	TELÉFONO ()		
FAX ()	OTRO ()		
E-MAIL (o información)			
OTRO DATO RELEVANTE			
REGIÓN	SUSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL	SUSCRIPCIÓN INDIVIDUAL	SUSCRIPCIÓN ESTUDIANTE*
AMÉRICA LATINA Y CARIBE	<input type="checkbox"/> u\$s 75,-	<input type="checkbox"/> u\$s 60,-	<input type="checkbox"/> u\$s 45,-
EUROPA, EE.UU. Y CANADÁ	<input type="checkbox"/> u\$s 90,-	<input type="checkbox"/> u\$s 70,-	<input type="checkbox"/> u\$s 60,-
ÁFRICA, ASIA Y OCEANÍA	<input type="checkbox"/> u\$s 100,-	<input type="checkbox"/> u\$s 80,-	<input type="checkbox"/> u\$s 70,-
ARGENTINA	<input type="checkbox"/> \$ 90,-	<input type="checkbox"/> \$ 70,-	<input type="checkbox"/> \$ 55,-

La suscripción incluye los gastos de envío. En el caso de los No Residentes en Argentina el envío se realiza sólo aéreo a través del sistema paqueta a pedido de FedEx.

* Los estudiantes deberán enviar, además, una acreditación fehaciente de su condición.



SUSCRIPCIÓN A 3 NÚMEROS DEL OSAL

Para enviar el presente cupón

Por correo:

CLACSO
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Av. Callao 875, piso 3, C1023AAB
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina

Por fax:

(54 11) 4812-8459

Si desea enviar la información por mail puede hacerlo transcribiendo los datos solicitados en el cupón bajo el *subject* **suscripción** a **osal@clacso.edu.ar**

MODO DE PAGO

Para los NO radicados en la República Argentina

Enviar un cheque por correo certificado a nombre del "Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales". Sobre banco y plaza de EE.UU. expresado en dólares estadounidenses, a la dirección indicada arriba.

Por otra forma de pago comunicarse vía mail a **osal@clacso.edu.ar** o bien con la señora Cristina Camilleri a **crisca@clacso.edu.ar** indicando en el *subject* **pago OSAL**.

Para los radicados en la República Argentina

Podrán optar por abonar en nuestras oficinas o bien enviarnos un cheque por correo certificado a nombre del "Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales", sobre cualquier plaza de Argentina a la dirección indicada arriba.

También puede abonar a través de un giro postal; en tal caso, puede enviar un mail a **osal@clacso.edu.ar** indicando en el *subject* **pago de suscripción** o comunicándose con la señora Ivana Brighenti llamando a los teléfonos **(011) 4811-6588 ó (011) 4814-2301**